

# ESTUDIOS CRÍTICOS DEL DESARROLLO

VOLUMEN XI, NÚMERO 21, SEGUNDO SEMESTRE DE 2021  
ISSN: 2594-0899

Décimo aniversario





*Estudios Críticos del Desarrollo*, volumen XI, número 21,  
segundo semestre 2021, es una publicación semestral editada  
por la Universidad Autónoma de Zacatecas «Francisco García  
Salinas», a través de la Unidad Académica de Estudios  
del Desarrollo, Jardín Juárez 147, colonia Centro, 98000  
Zacatecas, Zacatecas, *Teléfono*: (01) 492 92 291 09,  
[www.uaz.edu.mx](http://www.uaz.edu.mx), [www.estudiosdeldesarrollo.mx](http://www.estudiosdeldesarrollo.mx),  
[revistaecd@uaz.edu.mx](mailto:revistaecd@uaz.edu.mx)

*Editor responsable*: Humberto Márquez Covarrubias  
Reserva de derechos al uso exclusivo vía red cómputo  
número 04-2015-060212193100-203, *ISSN*: 2594-0899,  
otorgados ambos por el Instituto Nacional del Derecho de Autor

*Responsable de última actualización*: Israel David Piña García

*Fecha de la última modificación*: diciembre de 2021

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente  
reflejan la postura de los editores de la publicación.

Todos los textos aquí incluidos se encuentran bajo la licencia

Creative Commons 4.0

Atribución/No comercial/No derivadas 



Impreso en México

*Printed in Mexico*



# Contenido

## Editorial

---

- 7 Cuello de botella en el capital global:  
pandemia, crisis inducida y reconversión capitalista  
*Humberto Márquez Covarrubias*

## Artículos

---

- 27 Antinomias de la modernidad capitalista  
en los albores del siglo XXI  
*Francisco Javier Caballero Anguiano*  
*Raúl Delgado Wise*
- 63 Dieta neoliberal: ¿cuestión cultural o económica?  
*Gerardo Otero*
- 101 Prácticas materiales de cuidado de la agrobiodiversidad  
como marco simbólico para la gobernanza ambiental  
en el sur de Tolima, Colombia  
*Megan Dwyer Baumann*
- 165 Conflictos por el agua en Morelos: el caso del Proyecto  
Integral Morelos y la destrucción del sistema hídrico estatal  
*Josemanuel Luna-Nemecio*
- 199 Violencia paramilitar en sectores económicos clave  
en Honduras: el brazo violento del «desarrollo»  
*Jasmin Hristov*  
*Karen Spring*

## Debate

---

- 247 Las cuatro tesis centrales del neodesarrollismo.  
Una crítica a sus supuestos  
*Ricardo Vega Ruiz*
- 
- 275 Mutaciones en la economía política mundial:  
pandemia, capitalización y estatalismo  
*Humberto Márquez Covarrubias*



## Cuello de botella en el capital global: pandemia, crisis inducida y reconversión capitalista

Humberto Márquez Covarrubias

### *Una peor que la otra*

Cuando menos desde finales de la Segunda Guerra Mundial, la crisis del capitalismo global verificada en 2008-2009 se había distinguido por ser la más profunda y la más extendida. Entonces, la producción mundial medida por el producto interno bruto (PIB) cayó -1.3% en 2009, lo que significó la desaceleración económica más pronunciada desde la Gran Depresión de 1929. Sin embargo, la crisis de 2020, detonada por la pandemia de covid-19, resultó mucho más profunda, cuando la producción global se desplomó -3.4% (BM, 2021).

No se trata de fenómenos aislados, sino de una concatenación de crisis recurrentes, lo que resulta más evidente entre las crisis de 2008-2009 y la de 2020-2021. La primera crisis expresó el patrón clásico de una crisis de sobreproducción y de sobreacumulación.<sup>1</sup> El epicentro se localizó nada menos que en el hegemon de la economía mundial, Estados Unidos, desde donde se propagó al resto del mundo a través de los circuitos financieros y productivos. El centro neurálgico del cataclismo económico fueron los sectores concomitantes de la construcción y el inmobiliario, que se habían distinguido por ser de los más dinámicos de la economía estadounidense, inclusive

<sup>1</sup>En el capitalismo, las crisis más frecuentes son las derivadas de la sobreproducción. A lo largo de la historia del desarrollo capitalista, las crisis de este tipo más ilustrativas se ubican en 1847-1848, 1873, 1930 y 1974-1975.

después del bache recesivo de 2001 contribuyeron a impulsar un periodo de auge económico hasta desencadenar una contumaz espiral de sobreproducción que permitió la acumulación de ingentes cantidades de dinero, que al final de cuentas quedaron sin posibilidades efectivas de ser canalizadas como flujos de inversión renovada en la esfera productiva, lo cual ocasionó un cortocircuito en el ciclo del capital. El gran detonador del colapso fue la propagación desbordada del crédito, y dada la interconexión mundial del capital financiero, los circuitos dinerarios fungieron como correas de transmisión para la expansión de la crisis a los demás sectores económicos de Estados Unidos y, como efecto dominó, al resto de la economía mundial. Desde la lógica de valorización del capital, la clave explicativa reside en la emergencia de un severo problema de realización, toda vez que la producción se despliega de manera incontenible y arroja al mercado un enorme volumen de mercancías que no puede ser consumido y en consecuencia ocurre la obstrucción de la valorización esperada y se frustra la expectativa del retorno del dinero acrecentado por la generación de plusvalor.<sup>2</sup>

Si se atiende a sus causas, la crisis detonada por la pandemia de covid-19 en 2020-2021 no tuvo como origen propiamente un problema de realización, aunque a final de cuentas se expresó como tal. Es evidente que, debido a la gran reclusión, la cancelación de actividades productivas, los estropicios de la distribución y el cierre de establecimientos comerciales, se propició un severo problema de realización de mercancías, y en consecuencia sectores completos y numerosos países se precipitaron en una grave recesión económica. Desde el punto de vista del ciclo capitalista, la crisis fue inducida o

<sup>2</sup> Como es sabido, desde la perspectiva del circuito de capital representado por la fórmula D-M-D' (dinero-mercancía-dinero acrecentado), la crisis de sobreproducción cunde con el desencuentro entre la producción y la realización del valor producido (M-D').

forzada por decisiones en la esfera política y sanitaria, a partir de la propagación de una virosis transformada en pandemia global que puso en jaque a la salud pública. Evidentemente, fue la declaratoria emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la emergencia epidemiológica debido a la propagación del SARS-CoV-2 y su efecto pandémico, con la consecuente cancelación de actividades económicas «no esenciales» y el confinamiento de millones de personas en el mundo, lo que ejerció un golpe contundente en el proceso productivo que tiene una armazón mundial y en consecuencia desarticuló el nexo crítico entre producción y realización, es decir, súbitamente se canceló el proceso productivo de una gran cantidad de sectores que operan en el mundo y se trastocó la «normalidad» del circuito capitalista. En la medida en que se inmovilizó una enorme cantidad de trabajadores por razones sanitarias, el conjunto de fuerzas productivas quedó paralizado, salvo en algunos sectores que no pararon o que lo hicieron por un periodo más corto, aun cuando se potenciaron esquemas logísticos y de distribución con procesos de automatización y operación digital. A grandes trazos, se observó que el producto social dejó de circular con fluidez y, por tanto, se generó un desplome global de la producción.

Pero el despliegue incontenible de la crisis no sólo dislocó a la esfera de la producción, sino que también afectó a la del consumo. El desplome del consumo obedece a las políticas impuestas por los gobiernos y autoridades sanitarias que cancelaron actividades que suelen movilizar grandes contingentes de personas y dinero, como los viajes, el turismo, los espectáculos y demás. También los trabajadores fueron afectados en su capacidad de consumo debido a la brutal caída de sus ingresos, particularmente de los que fueron desempleados por el cierre de actividades o porque sus salarios se redujeron a la mitad sino es que más, colocándose en niveles peligrosos de infrasubsistencia.

Inexorablemente, las crisis capitalistas se distinguen por su alcance global derivado de que los circuitos de producción, distribución y consumo están entrelazados a escala mundial a través de una división internacional del trabajo y de un tejido extenso de redes globales de producción que explotan a los trabajadores a escala mundial. De tal suerte que el desplome de la producción y los efectos en la distribución y el consumo tienden a generalizarse. Si se obstruyen los eslabones de las cadenas productivas globalizadas el efecto se amplifica inevitablemente. La internacionalización de la producción cobró importancia desde los 1970 derivado de la expansión de los procesos productivos con las redes globales de producción y la incorporación de países periféricos, provistos de recursos naturales desregulados y fuerza de trabajo barata, donde se instalaron eslabones productivos que abastecían al mercado mundial. Es así como la interconexión sincronizada de los diversos eslabones de la producción cimbra la economía mundial capitalista cuando ocurren estas crisis en el epicentro.

La crisis pandémica propinó un impacto decisivo en la economía mundial al fracturar el ciclo capitalista en sus dos dimensiones cruciales: la realización y la reinversión de capital. Por un lado, con la cancelación generalizada de los procesos productivos a escala global emergieron graves problemas en la esfera de la realización del valor (M-D') y, por otro lado, se obstruyó la esperada renovación del ciclo del capital (D-M). En conjunto, se genera un círculo vicioso descendente que imposibilita la consecución del ciclo del capital representado por la fórmula general de acumulación D-M-D'. Entonces se produce una falla estructural que imposibilita la reanudación del ciclo económico y se obstruye el incentivo para reinvertir el dinero acrecentado en medios de producción y contratación de trabajadores.

### *Dinámica de la crisis*

A diferencia de la reciente crisis de 2008-2009, la crisis capitalista pandémica no se generó por un colapso en el sector financiero, vinculado al quebranto inmobiliario, que luego irradiaría los circuitos globales, como anticipaban muchos analistas. Tampoco se registraron quiebras de grandes bancos. De hecho, después de aquellos años críticos, el sector bancario contaba con balances contables muy restablecidos, y muchos de ellos habían mejorado sus niveles de capitalización. La banca central había adoptado la política de bajar las tasas de interés, además de comprar activos financieros. De manera sintomática, en esta ocasión el sector bancario logró superar, sin mayores sobresaltos, la recesión ocasionada por la pandemia, tan es así que las tasas de insolvencia del sector son mínimas, y más bien hay acumulación de ganancias.

En las principales economías del mundo, los gobiernos intervinieron con programas de ayuda fiscal que representaron más de 10% del PIB. Estas medidas incluían la transferencia de dinero a las familias, como el ingreso básico de emergencia o los seguros de desempleo, y contribuyeron a subsanar el desplome generalizado de los ingresos salariales.

### *Estrangulamiento*

La reproducción del capital productivo ha sido ralentizada u obstruida. Diversos factores, como el incremento de las cotizaciones de los insumos básicos, estrangulan las cadenas de abastecimiento industrial y abaten los niveles de producción esperados.

La anarquía de las fuerzas del mercado y la lógica compulsiva de las ganancias se han manifestado en sectores como el energético, donde ha

sido por demás evidente la dinámica extremadamente inestable a escala internacional de los niveles de producción, demanda y precios del petróleo. Las cotizaciones del crudo han sido completamente erráticas en el mercado mundial: en abril de 2020, el precio del barril se había desplomado a 16 dólares, pero luego se recuperó hasta rebasar los 80 dólares; en noviembre el Brent se cotizaba en 82 dólares y el pronóstico al alza es reservado. Tendencialmente, se estima que la demanda supere a la oferta en un millón de barriles de petróleo diarios. Debido al agotamiento de los yacimientos petroleros, que representan alrededor de 3 millones de barriles diarios, se necesita su reemplazo en un contexto donde la demanda está en constante aumento, además de que para la generación de electricidad se está promoviendo la sustitución del gas por el petróleo. En conjunto, la industria petrolera requiere de manera permanente de inyecciones de grandes flujos de inversión. Sin embargo, antes de la pandemia la inversión en el sector no era vigorosa, según la International Energy Agency (IEA).

Sectores emblemáticos del capital global, como la industria automotriz, la electrónica y electrodomésticos, han colapsado estrepitosamente por la súbita escasez mundial de semiconductores (*chips*) debido a que las operaciones de las fábricas y puertos de Asia fueron suspendidas por la pandemia a finales de 2020. Como resultado de la reapertura de actividades productivas en momentos sucesivos de la gestión de la pandemia, merced a la vacunación y el levantamiento paulatino de las restricciones epidemiológicas, aunado a la proliferación de las formas de trabajo a distancia y el uso masivo de productos digitales, sin olvidar el uso generalizado de aparatos y dispositivos tecnológicos, la demanda de semiconductores se acrecentó notablemente, sobre todo en la producción de vehículos y de artefactos tecnológicos que se montaron en la oleada digital catapultada por la pandemia:

teléfonos celulares, computadoras, videojuegos, pantallas y otros productos. Por si fuera poco, los semiconductores son altamente demandados por sectores desarrolladores de tecnologías de punta, como la inteligencia artificial, la red 5G y la robótica, es decir, el sector de la denominada cuarta revolución industrial, que en conjunto está captando grandes flujos de inversión y es uno de los sectores más beneficiados con la crisis pandémica, al ser propulsado y reconocido como la vanguardia tecnológica.

Resulta un síntoma de la época el hecho de que la industria automotriz, precisamente la que venía impulsando la forma protagónica de la fábrica global en el capitalismo durante las últimas décadas, resultó ser una de las más afectadas. Al respecto, considérese que los automóviles nuevos incluyen más de 100 microprocesadores (Kelion, 2021), por lo que, debido al desabasto mundial, una gran cantidad de empresas redujeron sus planes de producción. El sector automotor dejará de producir 7.7 millones de vehículos y resentirá un costo de 210 mil millones de dólares en 2021 según lo previsto (Forbes, 2021). Tan sólo Toyota reducirá la producción global de automóviles en 40%. Pero otras corporaciones beneficiadas también tuvieron dificultades en los suministros, como Apple que experimentó trabas para producir los iPhone, Mac e iPad; en el mismo sentido padecieron dificultades corporaciones como Dell y HP.

A fin de que la oferta pueda alcanzar a la demanda, que se ha venido incrementando, es necesario realizar grandes inversiones, aumentar el número de empresas productoras y disponer de un margen de tiempo para desplegar todo el proceso. Algunas estimaciones indican que para incrementar la capacidad de producción de semiconductores en 10% se necesita una inversión de 40 mil millones de dólares y es necesario un año para la expansión de las plantas de suministro existentes o tres años para nuevas

plantas (Garduño, 2021). La instalación de una planta de semiconductores puede significar una inversión de entre 12 mil y 20 mil millones de dólares y entre dos y cuatro años para instalarla. Tan sólo una máquina de alta precisión con tecnología de litografía ultravioleta extrema (EUV, por sus siglas en inglés) de la empresa holandesa ASML, con capacidad para desarrollar chips de un tamaño de menos de 10 nanómetros (10 mil veces más delgado que un cabello humano), tiene un costo de unos 200 millones de dólares (Padilla, 2021). En Europa, para disminuir la dependencia respecto de la proveeduría de Asia, se ha propuesto construir sus propias empresas de chips, como también se ha sugerido para el caso de México, no obstante, el elevado monto de la inversión y la tardanza en la instalación y puesta en operación puede revertir esa alternativa.

La parálisis relativa en las cadenas de suministro tiene un importante cuello de botella en el plano logístico, es decir, en el encadenamiento del almacenamiento, transporte y distribución. La sobredemanda combinada con la escasez relativa de insumos y mercancías han estresado el tráfico de mercancías que abastecen a las industrias, comercios y consumidores finales; han hipertrofiado las rutas de navegación con su red de puertos, carga aérea, el manejo de contenedores, el transporte por carretera y ferrocarril; además de que han entorpecido el sistema de almacenamiento y distribución de productos. Las demoras en los planes de entregas están a la orden del día, en tanto que se incrementa sensiblemente el costo de transporte de carga.

En la esfera de la producción se resiente la dislocación de la circulación mercantil porque las grandes empresas operan con procesos basados en la premisa del «justo a tiempo» o «inventario cero», es decir, el manejo de pocos *stocks* (como lo han llevado hasta el paroxismo las corporaciones de distribución que operan con procesos automatizados y plataformas digitales),

con objeto de reducir el periodo de rotación de capital constante circulante (materiales de producción) e incrementar los márgenes de utilidad de las corporaciones. La presencia inaudita de bloqueos y demoras en el proceso de suministro redundan de manera negativa en los distintos emplazamientos del encadenamiento de la producción, distribución y consumo.

El sector de transporte de carga ha sido rebasado por las exigencias acrecentadas de la demanda global y los mayores requerimientos de los sistemas de distribución automatizados y el acortamiento de los plazos de entrega. Uno de los sectores más baratos para el transporte masivo de mercancías es, indudablemente, el transporte marítimo internacional, el cual cubre más de 90% del comercio mundial de bienes, pero el tráfico de mercancías no sólo se hace en barcos, sino que articula las vías marítimas y terrestres para combinar el traslado de grandes contenedores de las embarcaciones con el transporte ferroviario y carretero. Sin embargo, durante la crisis pandémica este sistema afronta una incapacidad para cubrir sus compromisos en tiempo y forma. Ha estado en el ojo del huracán porque enfrenta largas demoras en las entregas, las cuales no se han podido superar con el aumento de la capacidad de los portacontenedores debido a que la infraestructura instalada tiene poca capacidad para recibir y movilizar grandes buques. La crisis lo tomó por sorpresa, si se considera que no se han realizado grandes inversiones para construir barcos y mejorar la infraestructura para la operación de carga y descarga, evidencia de que amerita actualizarse y modernizarse. Con la reapertura de actividades, se están demandando más barcos de carga, mejores operaciones logísticas y la implementación de estrategias como el transporte multimodal.

### *El costo humano*

El descalabro productivo en 2020 afectó directamente a los trabajadores activos y amplió el sector de los desocupados. En ese año se habrían perdido unos 255 millones de empleos a tiempo completo (semana laboral de 48 horas), que equivalen a 8.8% de las horas de trabajo a escala mundial, cuatro veces mayor que la crisis de 2009 (OIT, 2021). La mitad de esta pérdida se debió a la reducción de las horas de trabajo de quienes lograron permanecer como empleados y la otra mitad se trata de trabajadores que fueron despedidos. Frente a 2019, el empleo disminuyó en 114 millones de trabajadores (81 millones se retiraron de la fuerza laboral).

El aumento del subempleo y desempleo ocasionó un desplome del ingreso global de los trabajadores. Sin considerar los programas de ayuda de los gobiernos, se registró una caída de 3.7 billones de dólares de los ingresos salariales, es decir, de 8.3% o 4.4% del PIB mundial (OIT, 2021). La caída en los ingresos de los trabajadores se tradujo en una contracción del consumo y, en consecuencia, se afectaron negativamente las inversiones en las ramas que cerraron actividades o que fueron afectadas por el declive de la demanda.

Si se considera que la economía está regida por la ley de la oferta y la demanda, se puede asumir que la caída de la producción repercutió tanto por el lado de la oferta, por una menor capacidad de producción y distribución, como por el de la demanda, debido a los menores ingresos y la caída en el consumo.

La pandemia fue un gran detonador de la crisis, independientemente de que la economía capitalista estaba padeciendo procesos recesivos y no había logrado superar los estragos de la crisis inmediata anterior.

A escala global se recrudecieron fenómenos lacerantes como el hambre o la subalimentación, es decir, la alimentación considerada insuficiente para consumir niveles de energía para una vida normal, sana y activa. La cantidad de personas con problemas de hambre en 2020 era entre 720 y 811 millones, o sea, cerca de la décima parte de la población mundial (9.9%), unos 118 millones más que en 2019 (FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF, 2021). Además, prevalece la malnutrición con su estela de sobrepeso y emaciación infantil, anemia en mujeres en edad reproductiva y sobrepeso en los adultos. Casi 150 millones de niños sufrieron retraso de crecimiento en 2020 y habría aumentado el número de personas que no acceden a una dieta saludable, de los cuales en 2019 eran, a escala mundial, 3 mil millones.

La pandemia vino a desnudar las desigualdades de los sistemas agroalimentarios y la precarización de los mercados laborales. El alto costo de las dietas saludables para las personas pobres, la precarización del empleo y el aumento de la pobreza impidieron que unos 3 mil millones de personas pudieran acceder a una alimentación nutritiva en 2019, sobre todo en Asia, África, América Latina y regiones de América del Norte y Europa (ONU, 2020). La meta de «Hambre Cero para 2030» en el mundo, que de por sí era una fantasía de los organismos internacionales, fue inexorablemente sepultada por la pandemia.

La crisis pandémica ha desatado un aumento inusitado de la pobreza a escala mundial, derivado del cierre de actividades, el desempleo generalizado, la caída de los ingresos de los trabajadores y el incremento de gastos catastróficos por enfermedades desatendidas por los esquemas de salud. Según estimaciones del Banco Mundial, la pandemia ha propiciado un aumento en la tasa mundial de pobreza al pasar de 7.8% a 9.1% derivado de un descenso en el nivel de ingresos, por lo cual alrededor de 97 millones de

personas se suman al rango de pobreza que se coloca por debajo del umbral de 1.9 dólares al día (Sánchez, Hill, Mahler, Narayan y Yonzan, 2021). Para América Latina, se estima que, en un contexto donde la región afrontó una caída de -7.7% del PIB, la pobreza alcanzó una tasa de 33.7% en 2020 y la de la pobreza extrema de 12.5% para el mismo año, ambos indicadores no se habían sobresaltado en las últimas dos décadas, por lo que la región atraviesa por un periodo de regresión social (Cepal, 2021).

Aun cuando hay gran optimismo sobre la proximidad del término de la pandemia, por el avance en el proceso de vacunación y la eventual inmunización de la mayoría de la población —sea por contagio o sea por el suministro del biológico—, hay signos de que la pandemia no está del todo superada, y se advierten nuevas oleadas por las variantes detectadas en diversos países y la desigual vacunación de la población mundial. Aunque se han producido decenas de vacunas e implementado programas de vacunación masiva, sobre todo en los países desarrollados y de mediano desarrollo, el hecho es que centenares de millones de personas no han sido inoculados. Sin tomar en cuenta que existe la posibilidad de que el coronavirus mute hacia variantes más peligrosas y contagiosas que pongan en predicamento la vida de millones de personas o de que se generen otras pandemias. Amén de que se incrementan los desastres naturales debidos al fenómeno global del cambio climático y el modo sociotécnico de producción que degrada los ríos, mares, tierras y ecosistemas. En tanto que el quebranto socioambiental funge como base de las enfermedades zoonóticas, como ha sido el covid-19.

*Expectativas erráticas*

La expectativa de que la economía mundial se recupere no significa que se superen los problemas estructurales y los enormes obstáculos o cuellos de botella en su funcionamiento global. Inclusive, los organismos internacionales no están muy seguros de que la recuperación sea inminente. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional (FMI, 2021) bajó la previsión de crecimiento de la economía global a 5.9% para 2021 y 4.9% en 2022 debido a los problemas de suministro en las economías desarrolladas y los estragos en las economías subdesarrolladas, en tanto que advierte que las primeras recuperarán su nivel previo a la pandemia en 2022 y las segundas tardarán más años en hacerlo.

La actividad económica ha comenzado a recuperarse en la medida en que avanzaba el proceso de vacunación —aunque no sin sobresaltos, como lo testifican las guerras comerciales entre las marcas y países productores y el desabasto para países pobres— y en que se fueron abriendo actividades previamente declaradas como «no esenciales» y por ello fuertemente castigadas con el cierre obligatorio. Además, para el tercer semestre, cuando el confinamiento se distendió en el seno de los hogares en muchos países, el consumo de las familias se fue restableciendo y, en consecuencia, se observó una liberación de la liquidez que había sido contenida para la compra de determinados bienes de consumo que no habían tenido mucha circulación, como los equipos electrónicos y los automóviles. No obstante, el desatamiento de la demanda ocasionaría un efecto contraproducente al colapsar la capacidad de respuesta en la cadena de suministro de estos bienes, la detonación de problemas logísticos y de distribución, y en consecuencia la generalización del desabasto de mercancías.

Uno de los sectores que prácticamente había desaparecido de la faz del mercado merced a la pandemia, el turismo y los servicios asociados, ha comenzado a levantar cabeza conforme se abren los destinos de gran turismo, las líneas aéreas reactivan sus servicios, se levantan las restricciones al tráfico internacional y se reactivan los servicios de restaurantes, cafeterías y centros nocturnos. Esto no obsta para que continúe la competencia entre empresas convencionales y la habilitación de plataformas digitales que erosionan a las agencias de viaje, la hotelería y el servicio de taxi.

En el escenario de contención de la pandemia y ante la expectativa de un escenario pospandémico, las grandes corporaciones empresariales, apuntaladas por los gobiernos afines, comienzan a presentar señales de mejoría en sus balances contables y en su situación crediticia, luego del descalabro de capitales que desaparecieron o entraron en fase crítica, y de otros que lograron sobrellevar el vendaval, inclusive de sectores privilegiados que lograron capitalizar favorablemente la crisis. En el centro capitalista mundial, las acciones empresariales de capitales basados en Estados Unidos, Europa y Japón comienzan a registrar subidas estimuladas por los datos positivos en las ganancias corporativas; entonces, la razón entre ganancia y acciones se eleva más que la registrada antes de la pandemia. El escenario parece favorable para las altas finanzas y las grandes corporaciones, toda vez que se estimula la subida en el precio de las acciones, se mantiene bajo control la moratoria o incumplimiento de pagos en bonos especulativos y se disminuye el margen en el precio de compraventa del crédito. El escenario mundial parece ser favorable a la reactivación de los flujos internacionales de capitales, no obstante que se estima que la inversión extranjera a escala mundial es 60% inferior en 2021 a los niveles previos a la pandemia. El sector inmobiliario, que fuera el epicentro de la

crisis financiera anterior, parece estar bajo control en diversos países desarrollados en la medida en que los créditos hipotecarios morosos se han logrado aminorar y de que el precio de las viviendas está al alza. En consecuencia, la relación crítica entre la deuda de las familias y su patrimonio se ha rebajado, y con ello se contienen los mayores descalabros sociales.

### *Balance provisorio*

En lo inmediato, los indicadores económicos registran, paso a paso, una recuperación de la economía mundial derivada de la apertura de actividades productivas y la reactivación de sectores que movilizan a grandes contingentes, como el educativo, el transporte, el entretenimiento, entre otros más. Sin embargo, conviene tener en consideración la serie de grandes cambios detonados por la crisis de la pandemia y descifrar sus repercusiones presentes y futuras.

En lo profundo de la crisis económica y pandémica, se registró un nuevo episodio de aumento de la deuda externa de los países periféricos, subdesarrollados y dependientes. Antes de la pandemia, para 2019 la deuda externa de los países en desarrollo alcanzaba la cantidad de 10 billones de dólares, lo cual ya suponía un récord que duplicaba la cifra de 2009 y cuadruplicaba la de 2000 (ONU, 2020). En consecuencia, estos países han estado condenados a transferir mayores recursos nacionales para sufragar la carga de la deuda, en detrimento de sus posibilidades de acumulación, de por sí menguadas. La mayor parte de los gobiernos del mundo respondieron a la crisis de covid-19 con programas de estímulos fiscales, monetarios y financieros. La recurrencia a la deuda se tradujo en un incremento de su carga en los países subdesarrollados de bajos y medianos ingresos, la cual

para 2020 llegó al nivel récord de 860 mil millones de dólares. En estos países, el incremento de la deuda fue superior al incremento de las exportaciones y del producto nacional bruto (PNB). La relación entre deuda y PNB, sin considerar a China, aumentó de 37% en 2019 a 42% en 2020 y la relación deuda y exportaciones pasó de 126% en 2019 a 154% en 2020 (BM, 11 de octubre de 2021).

En este contexto, se han prendido los focos de alarma en la economía china, particularmente en el sector financiero e hipotecario, donde la constructora Evergrande, que representa 25% del sistema financiero chino, está en peligro de caer en situación de impago, y se ubica en la punta de una posible crisis hipotecaria. Además de que existen fondeadoras no bancarias de créditos hipotecarios que operan al margen de la regulación financiera y otorgan créditos apalancados en deuda, es decir, operan como banca en la sombra. Esto es importante porque China funge como la locomotora de la economía mundial y la infraestructura hipotecaria ha sido considerada uno de los grandes motores del crecimiento económico chino. Por otra parte, en los países centrales de la economía mundial se han implementado programas masivos de respuesta mediante el aumento del gasto y las políticas monetarias para contrarrestar los cuellos de botella, el cierre de empresas y el desempleo; no obstante, estas medidas posiblemente han contribuido a producir un efecto de sobrevaloración de las acciones y demás activos financieros.

Un efecto colateral de la expansión y profundización de la pandemia en la esfera del capital y el trabajo ha sido la ampliación de las formas de comercio electrónico mediante el uso de plataformas digitales por internet, la ampliación de la logística concomitante en la distribución de mercancías y el uso de trabajo supeditado a esas actividades, además de la activación

del trabajo en casa y la educación a distancia. Ello ha significado que de manera inmediata se sustituya capital social fijo (instalaciones, infraestructura), se implemente de forma masiva mecanismos automatizados y digitalizados, además de que se profundice la precarización del trabajo.

La crisis también ha significado la destrucción de capitales, trabajo e infraestructura, debido al estrangulamiento por el paro forzado y la insolencia de empresas ahogadas en deudas, obligadas a pagar rentas y comprometidas a sufragar salarios, pero sin recibir liquidez, salvo en los casos que los gobiernos ofrecieron apoyos fiscales. En tanto que los grandes capitales que resultaron beneficiados lograron acumular grandes ganancias empresariales y subir sus acciones, además de concentrar capitales para adquirir posiciones monopólicas. Esta circunstancia plantea interrogantes acerca de la posible disminución de gastos improductivos en las empresas, la depuración de la organización del trabajo, el uso de procesos automatizados y la sustitución de trabajo vivo, aunado a los efectos favorables en el incremento de las ganancias y valores accionarios de las empresas de la industria sanitaria global y de las corporaciones que gestionaron o se sumaron a la ola digital, en contraste con las que fueron marginadas y están en riesgo de desaparecer, sino es que ya lo han hecho. La modalidad de trabajo a distancia ha representado un ejercicio masivo para disminuir gastos improductivos, pero también para que el capital ejerza mayor presión sobre los trabajadores, al intensificar los horarios de trabajo, los ritmos de producción, despedir personal y disminuir los salarios.

## Referencias

- Banco Mundial (BM) (11 de octubre de 2021). «La deuda de los países de ingreso bajo aumenta hasta una cifra récord de USD 860 000 millones en 2020». Recuperado de <https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2021/10/11/low-income-country-debt-rises-to-record-860-billion-in-2020>
- Banco Mundial (BM) (s/f). «Crecimiento del PIB (% anual)». Recuperado de <https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?view=chart>
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) (2021). *Panorama social de América Latina 2020*. Santiago: Cepal.
- Kelion, L. (10 febrero 2021). «Escasez de microchips: por qué hay una crisis de semiconductores y cómo puede afectarte». *BBC*. Recuperado de <https://www.bbc.com/mundo/noticias-55955119>
- Forbes Staff (23 de septiembre de 2021). «Escasez de microchips le costará 210 000 mdd al sector automotriz». *Forbes*. Recuperado de <https://www.forbes.com.mx/negocios-escasez-microchips-costara-210000-mdd-sector-automotriz/>
- Fondo Monetario Internacional (FMI) (2021). «La recuperación en tiempos de pandemia. Preocupaciones sanitarias, trastornos del suministro y presiones de precios». *FMI*. Recuperado de <https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2021/10/12/world-economic-outlook-october-2021>
- Organización Internacional del Trabajo (OIT) (25 de enero de 2021). «Observatorio de la OIT: la covid-19 y el mundo del trabajo». Recuperado de [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms\\_767045.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_767045.pdf)
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Organización Mundial de la Salud (OMS), Programa Mundial de Alimentos (PMA) y Fondo

de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) (2021). *El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2021. Transformación de los sistemas alimentarios en aras de la seguridad alimentaria, una mejor nutrición y dietas asequibles y saludables para todos*. Roma: FAO.

Organización de las Naciones Unidas (ONU) (13 de julio de 2020). «Cerca de 50 millones de personas sufren hambre en América Latina y el Caribe». *Noticias ONU*. Recuperado de <https://news.un.org/es/story/2020/07/1477361>

Organización de las Naciones Unidas (ONU) (2020). «Sostenibilidad de la deuda externa y desarrollo». Recuperado de [https://unctad.org/system/files/official-document/a75d281\\_es\\_1.pdf](https://unctad.org/system/files/official-document/a75d281_es_1.pdf)

*El Financiero* (11 de octubre de 2021). «Desabasto mundial de chips «enriquece» a estas ciudades mexicanas». *El Financiero*. Recuperado de <https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/10/11/desabasto-de-chips-eleva-demanda-de-naves-industriales-en-el-pais-por-covid/>

Padilla, R. (17 de octubre de 2021). «El gran ganador de la escasez de chips en el mundo». *El País*. Recuperado de <https://elpais.com/economia/negocios/2021-10-18/el-gran-ganador-de-la-escasez-de-chips-en-el-mundo.html>

Sánchez, C., Hill, R., Mahler, D., Narayan, A. y Yonzan, N. (2021). «La pandemia de covid-19 (coronavirus) deja como consecuencia un aumento de la pobreza y la desigualdad». *Voces*. Recuperado de <https://blogs.worldbank.org/es/voices/la-pandemia-de-covid-19-coronavirus-deja-como-consecuencia-un-aumento-de-la-pobreza-y-la>



Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional



## Antinomias de la modernidad capitalista en los albores del siglo XXI

Francisco Javier Caballero Anguiano\*

Raúl Delgado Wise\*\*

*Resumen.* Analizar el sistema imperial que articula las contradicciones de la modernidad capitalista es el propósito de este trabajo. A diferencia de los estudios centrados en la tecnología, producción o finanzas, se enfatiza la dimensión político-institucional que posibilita determinadas condiciones de excepción. La tendencia a la concentración y centralización de capitales marca el derrotero del capitalismo mundial, en tanto que el sistema imperial capitalista integra los componentes tecnológico, productivo, comercial, financiero y político en una totalidad dialéctica. Las fuerzas productivas sociales generan una dinámica expansiva que es frenada por las normas jurídicas que resguardan la propiedad intelectual. Entre los setenta y los noventa del siglo XX, la reestructuración del capitalismo se consolida con la internacionalización de la producción, la financiarización y la informatización; pero en el primer cuarto del siglo XXI se profundiza con las tecnociencias y el control del trabajo intelectual complejo. La ciencia es subordinada al capital y funge como la principal modalidad en la generación de ganancias. El sistema imperial de innovación conjuga un entramado estatal, monopolista y de gobernanza, que impulsa el conocimiento social y el desarrollo de las fuerzas productiva, pero también lo acotan y privatizan mediante mecanismos legales, como las patentes. La monopolización de todos los ámbitos de la vida es el sello distintivo del capitalismo actual.

*Palabras clave:* modernidad capitalista, sistema imperial capitalista, sistema imperial de innovación, fuerzas productivas, trabajo intelectual complejo.

\*Doctor en Estudios del Desarrollo, Universidad Autónoma Zacatecas, México.

\*\*Doctor en Ciencias Sociales. Docente investigador de la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo, Universidad Autónoma de Zacatecas, México.

## Antimonies of capitalist modernity at the dawning of the XXI Century

*Abstract.* The analysis of the imperial system that extends the contradictions of capitalist modernity is the aim of this article. In a departure from those studies that focus on technology, production, or finance, we emphasize the political-institutional dimension that enabled certain exceptional conditions to exist. The tendency toward the concentration and centralization of different kinds of capital defines the course of global capitalism, such that the capitalist imperial system integrates technological, productive, commercial, financial and political components within a dialectic totality. From the 1970s to the 1990s, the restructuring of capitalism was cemented with the internationalization of production, financialization and informatization; but in the first quarter of the XXI Century, the techno-sciences and control of complex intellectual labor has deepened. Science is subordinated to capital and serves as the core modality in the generation of profit. The imperial innovation system combines a framework that is monopolist, includes the state and encompasses governance, which drives social knowledge and the development of the productive forces, but it is also limited and privatized through legal mechanisms, such as patents. The monopolization of all spheres of life is the hallmark of today's capitalism.

*Keywords:* capitalist modernity, capitalist imperial system, imperial innovation system, productive forces, complex intellectual labor.

## Introducción

El sistema imperial, en tanto modalidad de funcionamiento y expresión de la inexorable tendencia del capitalismo hacia la concentración y centralización del capital, constituye el sello distintivo del capitalismo contemporáneo. Su vertiginoso ascenso inicia con la reestructuración del capitalismo en la década de 1970, se consolida con la expansión de la financiarización y la informatización en los 1990, y adquiere mayor profundidad en el primer cuarto del siglo XXI con las tecnociencias y el control de su principal insumo, el trabajo intelectual complejo,<sup>1</sup> y con el agresivo sistema imperial de innovación. La expresión estructural de este proceso se manifiesta en un sistema imperial que opera *articuladamente* en las dimensiones económica y política; supone la presencia de un sistema imperial monopolista, de un Estado imperial, de un sistema de gobernanza mundial, del sistema imperial de innovación y de la propiedad intelectual. Este conglomerado está comandado por Estados Unidos, en alianza con otras economías centrales. La organización monopolista en redes de cobertura y alcance mundial, por su parte, impulsa la expansión del conocimiento social, del *general intellect*,<sup>2</sup> y,

<sup>1</sup> En lo sucesivo se utilizarán las expresiones *trabajo inmaterial* y *trabajo intelectual complejo* como sinónimos. Si bien se parte de la premisa de que no existe como tal el trabajo inmaterial ni los productos inmateriales, el concepto de trabajo inmaterial es ampliamente utilizado para denotar al trabajo que alimenta a las tecnociencias (i. e., biotecnología, nanotecnologías y tecnologías de las ciencias cognitivas). El trabajo intelectual complejo se refiere, precisamente, al trabajo científico-tecnológico como modalidad de creciente importancia en la generación de conocimientos de los sectores productivos de mayor rentabilidad, además de objeto de privatización por la vía de las patentes.

<sup>2</sup> «El desarrollo del capital *fixe* revela hasta qué punto el conocimiento o *knowledge* social general se ha convertido en *fuerza productiva inmediata*, y, por lo tanto, hasta qué punto las condiciones del proceso de vida social han entrado bajo los controles del *general intellect* y

a la vez, lo acotan y privatizan a través de mecanismos legales fundamentalmente por la vía de las patentes, lo que genera un proceso dialéctico que involucra el creciente acicate para la expansión de las fuerzas productivas que se apoyan en el conocimiento social y, como contraparte, su cercamiento y privatización. Este trabajo se propone describir los rasgos principales del sistema imperial que evidencian en grados superlativos las contradicciones que encierra la modernidad capitalista.<sup>3</sup>

### Prolegómenos de la monopolización generalizada

La monopolización de todos los ámbitos de la vida económica es el sello distintivo del capitalismo actual. De origen, resulta consecuencia de los procesos de concentración y centralización del capital, inmanentes al proceso de acumulación capitalista. Su estudio ha tenido diversos grados de profundidad dependiendo de los alcances de las prácticas monopólicas.

Si bien desde la segunda mitad del siglo XIX se constataba la incipiente existencia de grandes corporaciones y de prácticas monopólicas, se trataba de formas diferentes a las que se consolidaron a principios del siglo XX, cuando la revolución de las energías, los transportes y la química se había diseminado en los países capitalistas centrales. La incipiente existencia de empresas monopólicas, cuando Marx escribió *El capital*, hace más de 150

remodeladas conforme al mismo. Hasta qué punto las fuerzas productivas sociales son producidas no sólo en la forma del conocimiento, sino como órganos inmediatos de la práctica social, del proceso vital real» (Marx, 1982:230).

<sup>3</sup> «La modernidad se entiende como una etapa histórica —no como un periodo de la historia universal— que tiene como particularidad el ser una modernidad: capitalista, que es un sistema dictatorial, colonial y excluyente» (Echeverría, 2011:17).

años, derivó en el hecho de que su análisis ocupó un lugar poco relevante, en especial porque el propósito del estudio era examinar la formación de una tasa media de ganancia en un sistema competitivo no gobernado enteramente, como ahora, por esta fracción del capital. La caracterización más conocida del capital monopolista<sup>4</sup> se hizo en los 1960 por Baran y Sweezy (1982), sobre la base del análisis del capital monopolista en Estados Unidos, en una época de consolidación del imperialismo estadounidense.

Dado que cuentan con diferenciales tecnológicos que les permiten obtener mayores tasas de ganancia y están en condiciones de vincularse inicialmente con el sistema bancario (Hilferding, 1973), se han insertado en todos los sectores económicos, a través de la financiarización, lo que acelera la rotación del capital y con ello obtienen una tasa de ganancia superior a la media social. El constante incremento de la productividad en los sectores monopólicos impulsó la sobreproducción de mercancías. La salida a esta situación se logró mediante la apertura de nuevos mercados y la utilización de fuerza de trabajo más barata. Este proceso se consolidó en la década de 1970, cuando se presenció la mutación del sistema capitalista desde la organización fordista de la producción, con un carácter organizativo basado en estructuras verticales, hacia modalidades más flexibles con creciente intensidad en conocimientos científico-tecnológicos.

<sup>4</sup> Paul Baran y Paul Sweezy establecen la caracterización clásica de los monopolios: «La empresa en gran escala que produce una parte importante del producto de una industria, o de varias industrias y que es capaz de controlar el precio, el volumen de la producción y los tipos y cantidades de sus inversiones» (1982:10). Desde una perspectiva marxista, complementa lo escueto de los desarrollos que Marx realizó al respecto, ya que no consideraba a los monopolios como un aspecto central de la producción capitalista, aunque los procesos de concentración y centralización del capital —que son fundamentales en la ley general de la acumulación capitalista (Marx, 1981)— finalmente concluyeran en la consolidación de esa modalidad de organización.

Si bien el punto de inflexión de las nuevas formas de organización de la producción es plenamente visible después de los 1970, su génesis se encuentra desde el desarrollo de la industria militar en plena Segunda Guerra Mundial y el relevante papel del capital monopolista estadounidense. El crecimiento de empresas monopólicas de Estados Unidos fue la punta de lanza de la condición hegemónica de ese país y el soporte de la expansión imperial. El incremento de los beneficios obtenidos en el periodo de la posguerra tuvo dos consecuencias esenciales: por una parte, generó los excedentes que permitieron alimentar los circuitos financieros internacionales y sentó las bases para la existencia y operación de los mercados financieros especulativos; y, por la otra, reforzó la tendencia hacia la crisis debido a la producción de mercancías a una velocidad que no podía ser absorbida por el mercado.

La posibilidad de obtener ganancias extraordinarias por diferentes vías —productiva, rentista, comercial y financiera—, profundizó los procesos de concentración y, en especial, de centralización de capital en sectores como las industrias petrolera, química y petroquímica, lo cual generó nuevas fusiones y adquisiciones que dotaron al capital monopolista de una creciente fortaleza tecnológica, productiva y financiera,<sup>5</sup> acompañándose, a partir de la década de 1990, de un sistema imperial de gobernanza de la inversión, el comercio y las finanzas mucho más activo y articulado que en la inmediata posguerra, hecho que permitió además la apertura de condiciones favorables para la instalación de filiales de las grandes corporaciones, prácticamente sin restricciones, en el mundo. La gobernanza imperial, por definición supranacional, facilitó la apertura comercial de

<sup>5</sup>Samir Amin (2001) da cuenta de este proceso desde finales del siglo XIX, aunque es importante anotar que se daba en los «centros», en tanto que en el siglo XX se disemina hacia la periferia.

los países periféricos para recibir los flujos de inversión —física y financiera— cobijada por las medidas de corte neoliberal, derivadas del Consenso de Washington (Cypher y Dietz, 2009). Se logró abrir y ampliar los mercados, pero al incidir en la desarticulación y desmantelamiento del aparato productivo doméstico y profundizar la brecha salarial respecto a los países centrales y al interior de los propios países periféricos, frenó el proceso de crecimiento, aceleró el intercambio desigual (Emmanuel, 1972) e intensificó la crisis.

El sistema imperial capitalista integra los componentes tecnológico, productivo, comercial, financiero y político en una totalidad dialéctica. En cada uno operan una o varias fracciones monopólicas que en su conjunto hacen uso de esa condición para generar una ganancia monopólica mundial. No se trata de una ruptura con la ley que determina la formación de una tasa media de ganancia, sino de un mecanismo que opera dentro y fuera del mercado a fin de actuar como contratendencia de la caída de la tasa de ganancia. En cada uno de sus componentes actúan corporaciones que disfrutan de una condición de excepción, ya sea en lo tecnológico, en lo financiero, en lo especulativo o en el acceso a recursos naturales en el mundo, en ocasiones imbricadas simultáneamente en varios de esos espacios. A diferencia de las propuestas de interpretación que se cifran únicamente en la dimensión tecnológica, productiva o financiera, la propuesta que aquí se plantea otorga especial énfasis a la dimensión político-institucional que hace posible la preservación de esas condiciones de excepción, que en lo fundamental se cifran en las nuevas reglas del juego jurídico-legal *impuestas* por el sistema imperial y ofrecen nuevas vías para la concentración y centralización del capital. Así, las fuerzas productivas *sociales* que generan una dinámica expansiva son frenadas por las relaciones jurídicas que las acotan.

## Articulación y resquebrajamiento de los eslabonamientos monopolistas

Nos encontramos actualmente en una de las fases más agudas y aceleradas de concentración y centralización de capital, en una de las más radicales formas de exacerbación de las contradicciones del capitalismo, expresadas en la profundización de la marginación y la pauperización (Bellamy, McChesney y Jonna, 2011) y el agotamiento de los recursos naturales a tal grado que estamos en el tránsito hacia una crisis civilizatoria. Es de tal magnitud su importancia que Samir Amin define la época actual como la de los monopolios generalizados (Amin, 2001). Pero más allá de esta nueva configuración, es necesario entender su interconexión en los espacios geográficos, productivos, tecnológicos y financieros, que resultan en una estructura mundializada.

Samir Amin establece cinco niveles analíticos para describir los alcances de los monopolios generalizados en el imperialismo contemporáneo, aunque para efectos de este trabajo se distinguen en productivos, tecnológicos, financieros y de orden político, y se delimitan en torno al análisis de la generación y apropiación de ganancias extraordinarias a partir de la subordinación del trabajo general<sup>6</sup> o *general intellect* (Marx, 1982). Todo el conocimiento social, históricamente acumulado, es decir, la riqueza común de la humanidad se privatiza y apropia a través de los mecanismos señalados que operan articuladamente en el *sistema imperial capitalista*. La distinción fundamental con

<sup>6</sup> El trabajo general es todo conocimiento científico, tecnológico e invención, que es la síntesis del conocimiento social acumulado, conocimiento común. La transición hacia modalidades monopólicas que aquí se estudian implican el desplazamiento del trabajo inmediato como fuente de valor, pero también la subordinación del trabajo general al capital.

la propuesta de Samir Amin se refiere a que más allá de la forma monopólica de la organización capitalista actúa un mecanismo supranacional y ubicuo, de orden político mundial, que integra y da dirección a la expansión del capital; ello abre espacios a lo productivo, tecnológico y financiero, aunque acota los alcances de la potencial diseminación del conocimiento social, además de que precariza y polariza la situación salarial y laboral.

El sistema monopolista imperial ha generado un proceso de cambio mundial de una magnitud que ninguna esfera escapa a su influencia. No se trata de un simple cambio cuantitativo, sino de una profunda transformación cualitativa en las formas de organización y dominio del capital monopolista basadas en la *financiarización* y las ventajas comparativas derivadas del *arbitraje laboral global*, es decir, la persistencia de significativos diferenciales salariales entre países y regiones (Delgado y Martín, 2015), sin perder de vista las nuevas y brutales modalidades de saqueo de recursos naturales y devastación ambiental que se han implantado a lo largo y ancho del planeta (Delgado, 2017).

Estas nuevas modalidades de organización y dominio les otorga una permanente ganancia extraordinaria que a su vez tiene varias fuentes: *a)* La posesión de la capacidad productiva que permite *incidir en la formación y regulación de los precios* en función de la innovación tecnológica, derivada de la articulación con las redes de producción y distribución, así como de ciencia y tecnología, cuya agenda dirigen. *b)* La capacidad financiera que provee los recursos para soportar la concentración y centralización del capital y realizar los procesos de fusiones y adquisiciones entre los más diversos sectores, aunque también para financiar la especulación y el riesgo que otros actores asumen en los procesos de innovación. *c)* La articulación en el ámbito político con los Estados que facilitan la adopción de mecanismos legales

—en especial para la protección de la propiedad intelectual— que acotan eventuales innovaciones y generan un efecto anticompetitivo que permite redistribuir la plusvalía social, a partir de lo que podemos denotar como la *renta imperial*, la cual consiste en la extracción de plusvalía y riqueza de otros países y sectores económicos a partir de la propiedad de los medios de financiamiento, del control de la innovación y las patentes, de la propiedad o usufructo de los recursos naturales del planeta mediante el imperialismo extractivista (Veltmeyer, 2013) y del control y gestión de las cadenas globales de valor (Gereffi y Sturgeon, 2013), por lo cual saca provecho de los diferenciales salariales imperantes en el horizonte Norte-Sur. En cada uno de esos espacios se genera una renta o tributo para el imperio de los monopolios.

Esta dinámica se aceleró a partir de la década de 1990 a través de la utilización extensiva de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC),<sup>7</sup> que literalmente rompieron las barreras físicas, al mundializar la producción, el comercio y las finanzas, así como la organización de la producción a través de un esquema de funcionamiento parcializado y por medio de la gestión horizontal (OECD, 2014), o cadenas de valor, ello sobre la base de mecanismos ficticios que amparan la riqueza (i. e., los títulos bursátiles, la propiedad de patentes que no se convertirán en innovaciones, los productos derivados).

Estos procesos tienen tras de sí a la revolución de las TIC. De acuerdo con Castells: «Nuestra era, [es] un periodo histórico caracterizado por la revolución tecnológica en la información y las comunicaciones, el auge de

<sup>7</sup> Castells señala que las tecnologías de la información incluyen: «El conjunto convergente de tecnologías de la microelectrónica, de la informática (máquina y software), las telecomunicaciones/televisión/radio y optoelectrónica, además (...) la ingeniería genética y su conjunto de desarrollos y aplicaciones en expansión» (1996:60).

una forma de organización social conectada en redes y la interdependencia global de las economías y las sociedades» (1996:21). La transformación operada por el capitalismo después de la crisis de los 1970 constituye el parteaguas del que emerge esta nueva revolución e inaugura una nueva modalidad de organización productiva y del trabajo.

Las relaciones técnicas de producción se han transformado profundamente al haberse desplazado desde un modelo industrial de desarrollo (basado en las nuevas formas de generación y distribución de energía y una producción masiva controlada verticalmente como forma de organización) hacia un nuevo paradigma sociotécnico representado por la modalidad informacional del desarrollo, por lo que la nueva forma del capitalismo es financiero-informacional (Castells, 1996).

Desde esta perspectiva, el informacionalismo significa la amplia utilización de información digital y tecnologías de comunicación basadas en la microelectrónica que hacen posible la difusión de formas de organización en red en todos los dominios de la vida económica y social (Castells, 1996). El funcionamiento en red, como la transformación organizacional que caracteriza el informacionalismo, ha inducido una flexibilidad y una eficiencia sin precedentes en los procesos de gestión, producción, distribución e intercambio. En consecuencia, se produjo un incremento de la productividad desde mediados de la década de 1990, proceso al que se denominó «la nueva economía», cuyo fin llegó con la crisis de 2008, ocasionada por la desahorada especulación del capitalismo financiero. No obstante, es evidente la relevancia que adquieren los sectores vinculados con las tecnologías de la información y las comunicaciones. Entre las cinco principales empresas con mayor nivel de capitalización bursátil, cuatro se encuentran en este

sector.<sup>8</sup> Se trata de empresas cuyos activos generalmente no tienen vínculo con el nivel de sus ganancias, es decir, tienen beneficios asociados con su posición tecnológicamente dominante en el mercado, pero altamente vulnerables a la especulación. Su principal ventaja en el mercado radica en la propiedad de patentes para el uso de *software* y de códigos para el uso y manejo de la información. Estos sectores son representativos del alcance real de la economía del conocimiento. *A contrario sensu* del acceso irrestricto que prometía la «era de la información» (Castells, 1996:27), los usuarios de la tecnología de la información se convierten en observadores pasivos, sometidos al fetiche de los artefactos tecnológicos, de los que obtienen, inclusive, identidad. Este sector también es emblemático de los procesos de compras y fusiones monopólicas, en especial al fortalecer la hegemonía de Estados Unidos.

Las TIC tienen importancia *per se* y por lo que representan como herramienta tecnológica para otros sectores, ya que son el medio para la utilización del trabajo intelectual complejo para poner al *general intellect* al servicio del capital. Derivan de las aplicaciones civiles de las innovaciones en la industria militar y resultan —desde la óptica de su aplicación en las tecnologías (Echeverría, 2003) o tecnologías convergentes—<sup>9</sup> en una verdadera revolución tecnológica. Como se anotó, a diferencia de lo que sucede en otros sectores monopólicos, donde participan empresas de Estados Unidos

<sup>8</sup> La primera es Apple, seguida de Alphabet (Google), Microsoft y Facebook, todas ellas con sede en Estados Unidos. Véase <https://www.bbc.com/mundo/noticias-42327754>

<sup>9</sup> No obstante que existen diferencias en los alcances analíticos de ambos conceptos, los dos se refieren a las mismas tecnologías (nanotecnologías, biotecnologías, tecnologías de la información y tecnologías cognitivas) como ejes del crecimiento económico en el primer cuarto del siglo XXI. En ese sentido, se considerarán como sinónimos y se utilizarán indistintamente (Roco y Sims, 2003).

y Europa, en especial las farmacéuticas y las de la cadena agroalimentaria,<sup>10</sup> en las TIC la supremacía de Estados Unidos es absoluta.

La expansión monopólica ha modificado la organización del capitalismo desde la raíz, al mundializar los procesos productivos a través de redes, aunque manteniendo y aun profundizando los diferenciales salariales por la vía del arbitraje laboral global (Delgado y Martín, 2015). De igual manera, han transformado el proceso de formación de la tasa de ganancia por la vía de los componentes tecnológico y financiero-especulativo, al profundizar la tendencia a la disminución de la tasa media, aunque en el caso de las corporaciones monopólicas la magnitud de sus ganancias puede inclusive incrementarse en razón de los esquemas tecnológicos y legales de apropiación del conocimiento social que les permiten interferir a su favor y por distintas vías en los procesos de distribución del plusvalor a escala planetaria.<sup>11</sup> La concentración y centralización de capital ha adquirido una dimensión sin precedentes: se trata de megafusiones y alianzas estratégicas que les permiten poseer 75% de las ganancias mundiales (McKinsey Global Institute, 2015); las 500 empresas multinacionales más grandes poseen ingresos equivalentes a 1.5 veces el Producto Nacional Bruto (PNB) de Estados Unidos,<sup>12</sup> principal economía en el mundo. Cabe mencionar que los sectores monopolistas

<sup>10</sup> «En el frente de fusiones y adquisiciones, DowDuPont hizo su aparición inaugural en el #122 después de la fusión de Dow Chemical y DuPont en septiembre de 2017. El mes pasado, la compañía ocupó el lugar 26 en nuestra lista de las empresas públicas más grandes de Estados Unidos, con ganancias de mil 600 mdd. También es nuevo en la lista la compañía canadiense de fertilizantes Nutrien (# 884), que se formó cuando Agrium y Potash Corporation of Saskatchewan se fusionaron en enero». Véase <https://www.forbes.com.mx/global-2000-las-empresas-mas-grandes-del-mundo-de-2018/>

<sup>11</sup> De acuerdo con el índice de S&P Global 1200, las ganancias bursátiles se incrementaron casi 10% anual durante los pasados 10 años. Véase <https://espanol.spindices.com/indices/equity/sp-global-1200>

<sup>12</sup> Véase <https://asian-links.com/es/empresas-mas-rentables-del-mundo>

más importantes ya no son los que elaboran productos manufactureros. En 2018, las 10 empresas más rentables del mundo se encontraban en el sistema financiero.<sup>13</sup> Las dos primeras son bancos de China, es decir, la hegemonía productiva y tecnológica de Estados Unidos no se replica en lo financiero.

La contradicción fundamental del capitalismo no desaparece, pues no obstante el impulso innovador y la profundización de la financiarización en la clase capitalista (Bellamy, 2010), que hacen las veces de motores, la ampliación de la pobreza y la pauperización del Sur opera como freno a la capacidad de consumo global y, en consecuencia, a la realización del capital. Si la realización del capital, es decir, el cierre del ciclo producción-circulación no se efectúa, la tasa de ganancia se reduce; por sí mismas las corporaciones monopólicas no estarían en condiciones de transformar las instituciones políticas y sociales sin encarar resistencias frontales. Así, el correlato de este proceso de alcances inéditos se encuentra en la existencia de una institucionalidad *ad hoc*.

## El Estado Imperial

Un componente central del sistema imperial que cobija a las grandes corporaciones multinacionales es el Estado imperial. Se trata de un ente que alimenta al gran capital, que tiene una influencia política (Petras, 2006) de alcances ilimitados y que se expresa mediante la hegemonía geoestratégica real (Rush, 2003), y no es simplemente de carácter virtual como señalan Hardt y Negri (2005). Se trata de grupos de poder con sede en Estados

<sup>13</sup> Véase <https://www.forbes.com.mx/global-2000-las-empresas-mas-grandes-del-mundo-de-2018/>

Unidos, cuyos propósitos se articulan, aunque no necesariamente coinciden, con los objetivos netamente económicos de las multinacionales. Dichos grupos interactúan con las clases dirigentes de los países en los que opera el capital monopolista.

Puesto que la actividad imperial-expansionista requiere de instancias institucionales que promuevan los intereses de los grupos de poder del Estado imperial, sus actividades se dirigen a través de los departamentos administrativo-legales-militares de Estados Unidos, como el Departamento de Estado, del Tesoro, la Reserva Federal y el Pentágono. Los movimientos de resistencia a la expansión del capitalismo —sea por las vías productiva, comercial, medioambiental—, la desviación de las políticas económicas ortodoxas, e inclusive el eventual manejo libre de la información y las comunicaciones son actividades que representan un riesgo y desde el Estado imperial se dirige su desactivación y eliminación. En realidad, se trata de grupos de raigambre ultraconservadora para los que ningún tipo de ley es de observancia obligatoria, salvo que así convenga a sus intereses. Su potencial militar pende como una amenaza latente, con precarios equilibrios que son aceptados por las economías centrales y presenta una dualidad contradictoria. Por un lado, opera como ente estabilizador frente a eventuales movimientos sociales, políticos y militares de los países opositores a la expansión del capitalismo depredador; por el otro, genera el riesgo de un eventual enfrentamiento militar cuyos alcances, en el contexto de la existencia de armas de destrucción masiva, serían devastadores para la sobrevivencia de la humanidad. Más allá de la innegable existencia de este Estado imperial, su papel más importante radica en el acompañamiento de las corporaciones monopólicas y en la reconfiguración de las relaciones entre el centro y la periferia sobre la base de una condición de hegemonía

política que rompe con cualquier tipo de soberanía. Su soporte visible se encuentra en el sistema de gobernanza imperial que se fortalece en la década de 1990.

### *El sistema de gobernanza imperial*

La organización del capitalismo se enfrentó, en la posguerra, al imperativo de buscar nuevas modalidades y espacios para la acumulación de capital, en un contexto en el que el desarrollo de las fuerzas productivas encontraba barreras en razón de la existencia de un espacio política y geográficamente acotado por las fronteras de los Estados nación. Así, el principal objetivo para la potencia hegemónica en la posguerra consistió en eliminar las barreras para facilitar la expansión mundial del capitalismo a través de las empresas monopólicas, detentadoras de la capacidad técnica y financiera para la innovación, y de los organismos multinacionales que legitimaban ese proceso.

La creación de organismos de carácter multilateral como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), resultantes de los Acuerdos de Bretton Woods en 1944; la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1945, y el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) en 1947,<sup>14</sup> facilitó la transición

<sup>14</sup> «El GATT de 1947 es un tratado internacional extinto anterior al Acuerdo sobre la OMC. Inicialmente, el GATT de 1947 debía formar parte de la Carta de La Habana para una Organización Internacional de Comercio negociada durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Empleo celebrada en Cuba del 21 de noviembre de 1947 al 24 de marzo de 1948. A partir del 1 de enero de 1948, el GATT de 1947 se aplicó mediante un Protocolo de Aplicación Provisional. Como la Carta de La Habana nunca entró en vigor, el GATT de 1947 permaneció en vigor provisionalmente hasta que sus disposiciones pasaron a formar parte del GATT de 1994, que a su vez es uno de los componentes del Acuerdo sobre la OMC». Véase [https://www.wto.org/spanish/tratop\\_s/gatt\\_s/gatt\\_s.htm](https://www.wto.org/spanish/tratop_s/gatt_s/gatt_s.htm)

del capitalismo a formas de intervención institucional que permitieron, en ese momento, mundializar las modalidades de producción fordista y el traslado de los procesos productivos que podían ser realizados fuera de las fronteras de Estados Unidos (el caso emblemático es el del sector automotor) por medio de la utilización del dólar como moneda mundial y la implantación de medidas para liberar el comercio de mercancías. Dicho sistema tuvo una importancia relativa alrededor de 25 años, hasta que las crisis del petróleo, del dólar y de los generalizados déficits públicos fueron las señales del fin de la bonanza de la posguerra.

Si bien sus objetivos generales poco cambiaron en los siguientes 40 años, la década de 1990 marcó un cambio radical en su operación. El FMI se dedicó a dirigir y supervisar los programas de ajuste estructural y el BM a orientar la aplicación de los programas de combate a la pobreza, ambos mecanismos en realidad fungieron como garantes de la adopción de las medidas de cambio institucional dentro de los países para vigilar la adecuada apertura-inserción a la dinámica de las corporaciones monopólicas. El GATT se convirtió en la Organización Mundial de Comercio (OMC), de la que es imposible evadirse si se quiere tener algún vínculo comercial, financiero o de inversión con alguno de los casi 200 países miembros. La nueva institucionalidad dejó de utilizar los canales de las «recomendaciones» y transitó hacia modalidades coercitivas y punitivas, lo que trastocó la institucionalidad multilateral para convertirla en supranacional.

A la par de estas transformaciones de orden institucional, la década de 1990 presencié la diseminación más profunda de la ideología neoliberal, que pasó de lo económico a lo institucional entre los 1980 y los 1990, y rápidamente permitió trasladar los costos del agotamiento de la fase expansiva a la periferia por la vía de la deuda: después de los frecuentes y profundos

fracasos de los programas de ajuste, se inició la etapa de las reformas jurídico-legales para acelerar y profundizar los procesos de apertura económica, comercial y financiera, que sería el antecedente de la inserción a las modalidades de «cooperación» comercial, mediante la incorporación forzosa a los acuerdos comerciales, que integraron mecanismos de protección de las inversiones y de la propiedad intelectual.

A partir de la segunda mitad de la década de 1990 la nueva institucionalidad se centró en configurar un sistema supranacional de soporte al capital monopolista que hace las veces de su principal promotor. Le dio nueva vida a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que suscribió un acuerdo con la OMC en 1995 para impulsar la incorporación de los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdos ADPIC) a través del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (TCP), al ampliar la capacidad de control de las grandes corporaciones multinacionales.

La OMPI es una institución internacional creada en 1967,<sup>15</sup> con el mandato expreso de «estimular la actividad creadora [y] promover en todo el mundo la protección de la propiedad intelectual». Constituye el mecanismo para administrar el sistema de patentes y se integra como uno de los principales componentes de los acuerdos de comercio e inversión en todo el mundo: «Las empresas necesitan ahora nuevas reglas internacionales para garantizar su actividad. Entre ellas, la regulación internacional de los derechos de propiedad intelectual» (Vidaurreta, 2013).

La nueva institucionalidad también desarticuló las modalidades de los Estados nación, hecho que diluyó las fronteras y minimizó el ámbito de

<sup>15</sup> El instrumento fundacional es el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, firmado en Estocolmo (Suecia), que fue enmendado en septiembre de 1979.

influencia de los gobiernos en las decisiones de política pública más elementales. El nuevo capitalismo, además de monopolístico e imperial, se reconfiguró institucionalmente. Luego de abiertas las fronteras y adoptadas las políticas de apertura a la inversión de las corporaciones monopolísticas, otros sectores fueron incorporados a esta dinámica imperialista: el uso intensivo de los recursos naturales, la explotación de la riqueza del subsuelo y el acicate a la migración, en particular la altamente calificada, resultan ser las formas en que el imperialismo monopolista amplía los espacios para la valorización del capital.

### *El sistema imperial de innovación*

Las empresas monopolísticas de los principales países capitalistas, acompañadas por el poder de sus Estados y con un marco legal supranacional con capacidad coercitiva —que en su conjunto configuran al sistema imperial de innovación— (Delgado, 2017), estuvieron en condiciones de tener bajo su control la agenda de la ciencia y la tecnología, por medio de la administración de las patentes, es decir, la gestión de un mercado de bienes intangibles que pueden ser vendidos como cualquier otra mercancía y al mismo tiempo adquirir la forma de riqueza para las empresas que las poseen. Este proceso de cambio institucional se manifestó en la simbiosis entre empresas, gobierno y universidades. Dicho esquema resultó exitoso durante la guerra y fue el modelo a replicar, y el *boom* de las patentes en los países capitalistas avanzados en la década de 1990 da cuenta de sus alcances. Como sistema nacional de innovación, en los países de la periferia ha sido un verdadero fracaso porque los modelos como el triángulo de sábato o la triple hélice (Etzkowitz y Leydesdorff, 2000) prescinden del hecho de que sus tres entes deben tener

un mismo propósito: la ganancia, lo que implica un trabajo articulado en el papel de las empresas, los gobiernos y las universidades; en tanto que lo social y el conocimiento quedan como resultados marginales de esta «alianza». El acuerdo social que otorgaba a las universidades el reconocimiento como generadoras y transmisoras del conocimiento científico para el beneficio social ha sido invalidado, lo mismo que la función del gobierno como proveedor de recursos para la ejecución de las políticas sociales. Ambos ingresaron abiertamente como instrumentos del capital y compiten por la obtención de ganancias (Sanz y Félix, 2011).

En términos del proceso de innovación se observa una serie de cambios dirigidos por las grandes corporaciones multinacionales que establecen los nuevos parámetros bajo los que se desarrolla el trabajo científico-tecnológico a escala mundial. Es probable que el caso emblemático de Silicon Valley aglutine analíticamente las principales modalidades bajo las que opera el sistema imperial de innovación.

En primer término, se encuentra la diseminación internacional y segmentación de la investigación y el desarrollo para las nuevas tecnologías. Estas actividades se realizan fuera de las corporaciones multinacionales, por medio de formas de organización en red (Castells, 2016) para la generación e intercambio de conocimientos, mediante lo que se conoce como innovación abierta (*open innovation*), y entrañan la participación de universidades, centros de investigación públicos, capital de riesgo, bufetes de abogados especializados en la protección de la propiedad intelectual y, de manera muy significativa, inventores independientes (*start-ups*), que en su conjunto dotan al sistema de innovación de los mecanismos para acelerarla y también para acotarla. Junto con ello, la participación de la inversión de los gobiernos de las principales economías centrales resulta un ente propulsor: en 2012

65% del gasto total en investigación y desarrollo lo hicieron Estados Unidos (42%), Japón (14%) y Alemania (9%) (OECD, 2014).

En segundo término, se encuentra la réplica y diseminación del modelo de Silicon Valley en lo que a la organización del trabajo se refiere. Se trata de modalidades flexibles de trabajo y colaboración que utilizan a los científicos y tecnólogos de los países de la periferia para integrarse a la red de innovación que acelera dicho proceso al integrar a los generadores y desarrolladores de ideas que pueden traducirse en nuevos productos o procesos. Esta modalidad tiene la ventaja de mantener bajos costos salariales y transferir el costo de la educación de mano de obra altamente calificada a los países de origen.

Un tercer componente se asocia con la intervención de las corporaciones multinacionales en las áreas de ciencia y tecnología estratégicas para la acumulación de capital, que define la agenda de la ciencia y la tecnología, es decir, se financian las actividades de investigación y desarrollo y posteriormente se adquieren los resultados y se patentan. Los creadores de las ideas y los desarrolladores de las mismas, *start-ups*, se sujetan a las condiciones de los compradores, se establece un «mercado de ideas», que prioriza a las que son de interés para los monopolios multinacionales. La cadena global en la generación de conocimientos se enlaza desde los gobiernos y las universidades hacia los sectores monopolistas, pasa por los mecanismos financieros y legales, induce la competencia entre países y sus científicos, y se acota a través del sistema de protección de la propiedad intelectual. La importancia de la cadena global de conocimientos, inclusive, ha reducido la relevancia de las cadenas de valor en la producción:

El resultado es que las cadenas de valor productoras de bienes se han vuelto menos intensivas en el comercio, incluso a medida que los servicios transfronterizos

están creciendo a buen ritmo y generan más valor económico (...). El comercio basado en el arbitraje de costos laborales ha disminuido y ahora representa sólo 20% del comercio de bienes. Las cadenas de valor globales son cada vez más intensivas en conocimiento y dependen de mano de obra altamente cualificada. Finalmente, las cadenas de valor productoras de bienes (en particular las automotrices, computadoras y electrónica) se están concentrando más a nivel regional, a medida que las empresas establecen cada vez más la producción en la proximidad de la demanda (Bughin y Woetzel, s/f).

El cuarto componente se asocia con la participación creciente de la fuerza de trabajo altamente calificada de los países periféricos en estas redes, al incrementar el número de patentes que se originan por inventores originarios del Sur, pero en virtud del control de los mecanismos de patentamiento y también de los costos de este trámite legal, la mayor parte del registro de patentes acaba siendo apropiado por las multinacionales. Sin duda esta es otra modalidad de la renta imperial que, por la vía del abaratamiento de la principal mercancía, la fuerza de trabajo altamente calificada contribuye al intercambio desigual (Arrighi, 1972).

En este contexto, Estados Unidos, con Silicon Valley al frente, se coloca en el punto medular de la reestructuración de los sistemas de innovación a escala global. Estados Unidos figura como el país que registró el primer lugar de patentes otorgadas en el mundo, con un total de casi 3 millones de patentes en el periodo 2010-2019.<sup>16</sup> El ritmo de patentamiento

<sup>16</sup> Pese a la hegemonía que mantiene Estados Unidos, de 2010 a 2019, China ha incrementado significativamente sus solicitudes de patentes, y actualmente ocupa el segundo lugar con 2 millones 85 mil 367 patentes vigentes, aunque el número de solicitudes de patentes supera ligeramente los tres millones. Estimación de SIMDE-UAZ con datos de la WIPO, 2010-2019.

en ese país ha sido de tal magnitud que en los últimos 20 años se registraron más patentes que en 200 años de historia previa (Smith, 2012). Su hegemonía es evidente: 36 de 100 principales empresas innovadoras del mundo tienen su matriz en Estados Unidos (Reuters, 2018) y 46 de las 100 universidades más innovadoras son estadounidenses.

La participación de la mano de obra de los trabajadores altamente calificados provenientes de otros países es un componente central del sistema de innovación de Estados Unidos, la tasa de patentamiento de extranjeros en ese país se incrementó de 18% en 1963 a 52% en 2019 (U.S. Patent and Trademark Office, 2019). Sin duda, las agresivas políticas públicas para afianzar su hegemonía científica y tecnológica a escala mundial explican ese comportamiento.

Esta caracterización del sistema imperial de innovación debe complementarse con un quinto componente, que corre paralelo con el modelo innovador de Silicon Valley y que se asocia con los acelerados cambios tecnológicos y las exigencias que impone a los participantes de esta modalidad de producción de innovaciones. De acuerdo con Saxenian, 80% de los nuevos emprendimientos en Silicon Valley financiados con capital de riesgo fracasan:

Cada año, entre 1996 y 2012, han iniciado actividades entre 10 mil y 25 mil empresas nuevas. En el mismo lapso se cerraron entre 5 mil y 15 mil (...). Los nuevos emprendimientos de la Bay Area recibieron regularmente durante la década pasada de 30 a 40% de todo el capital de riesgo de Estados Unidos y 20% del total de inversiones de capital de riesgo (Saxenian, 2016).

Esto es, la carrera para patentar guarda una estrecha relación con el capital de riesgo y sus consecuencias en la ciudad más innovadora por

autonomasia; sin embargo, la rentabilidad y la participación de las empresas de financiamiento se ha incrementado, lo que da cuenta de que finalmente el riesgo es asumido por los «emprendedores» y *startups*, y que los casos exitosos compensan las eventuales pérdidas de los fracasos. De hecho, el fracaso es consustancial al éxito en el ámbito de la innovación. Lo que opera es una mejor distribución del riesgo que multiplica las posibilidades de éxito a favor del gran capital y, por ende, acelera aún más las dinámicas de concentración y centralización del capital. El rápido crecimiento de las empresas instaladas en Silicon Valley también se ha expresado en el nacimiento y cierre de grandes empresas: «Ocho de las mayores 20 empresas en 1982 ya no existían en 2002. Hacia 2010 Apple se había unido a las cuatro mayores, empresas como Google y eBay estaban por primera vez entre las 10 mayores» (Saxenian, 2016:53).

La rápida difusión del conocimiento provoca que las ventajas que genera la innovación sean relativamente de corta duración e, inclusive, que ni siquiera logren salir al mercado, ya que el patentamiento acelerado ocasiona que nuevos desarrollos científicos y tecnológicos se traslapen con lo que ya está patentado, pero no se encuentra en el mercado materializado en un nuevo producto. En el mundo de las ideas, la capacidad de adaptación a los cambios es más importante que la especialización vertical, como lo denota el caso de Silicon Valley; no obstante, Saxenian afirma que «el proceso de especialización y recombinación aceleró el ritmo de la innovación en Silicon Valley y dio a las empresas de la región una ventaja decisiva sobre sus competidores más altamente integrados localizados en otras partes (...) del mundo» (Saxenian, 2016:54).

Acompañando a la notable proporción de fracasos de los nuevos emprendimientos en Silicon Valley se encuentra su contraparte y verdadera

medida de éxito: el inusitado número de registro de patentes. En 2011, 15% de las patentes de Estados Unidos provenían de ese enclave tecnológico, cifra que se incrementó 20% anual entre 2012 y 2015. Sin duda, Silicon Valley se convirtió en el modelo a seguir y sus réplicas se encuentran en otros enclaves tecnológicos semejantes, aunque subordinados a la dinámica de las grandes corporaciones monopólicas del sector de la información y las comunicaciones, todas ellas estadounidenses. Más allá de la concentración tecnológica y la acelerada producción de patentes, destaca el hecho de que el sector que individualmente tiene más relevancia en el área de la Bahía es el financiero. En 2010 los servicios financieros contribuían con 20.2% del PIB del área donde se ubica Silicon Valley, cifra idéntica a la que conjuntamente generaban los sectores de la información (8.2%) y los servicios profesionales científicos y técnicos (12%). Dado el considerable porcentaje de fracasos empresariales, el elevado número de registro de patentes y de propiedad de patentes, da la impresión de que el éxito del modelo de Silicon Valley se vincula estrechamente con la posibilidad de financiamiento basado en el riesgo, que compensa con creces los eventuales fracasos en el proceso de innovación. Los sistemas nacionales de innovación prescinden de este cuarto elemento cuando se plantea que la unión de gobierno, empresas y universidades abre, automáticamente, la puerta a la innovación.

Al especializarse en los procesos de mayor intensidad de conocimientos y desplazar continuamente a la fuerza de trabajo altamente calificada, se crearon nuevos enclaves subsidiarios de las empresas monopólicas que se alimentan de las innovaciones que se realizan en toda la red. Las TIC cumplen un papel dialéctico en este proceso, puesto que, por medio de ellas, la velocidad de las innovaciones y el patentamiento se acelera, pero a la par abre canales de intercambio de ideas que no pueden acotarse. El

conocimiento social, el *general intellect*, el trabajo general, entra en una carrera entre la expansión y el acotamiento. El financiamiento da soporte a la creación de nuevas ideas a través de las TIC, éstas son orientadas por la agenda científico-tecnológica de las grandes corporaciones monopólicas y ejecutadas por las universidades que tienen el poder de filtrar todas aquellas ideas con potencial de patentamiento, aunque el sistema de patentes se encarga de que sólo se utilicen aquellas que garanticen un beneficio por su propiedad y no necesariamente por su aplicación.

### La monopolización de las patentes

La gran paradoja de este proceso inédito de apropiación y privatización del conocimiento social se encuentra en el hecho de que las patentes no se traducen en innovaciones, que es su propósito final. Las patentes representan la expresión legal de un producto o proceso novedoso que debería llegar al mercado; si no lo hace la patente no se cristaliza, no se objetiva en algo nuevo, y por sí misma sólo representa parte de un activo intangible para su poseedor. El propietario por lo general no es el creador de la idea que le da origen, es decir, no premia la inventiva, ni estimula el desarrollo de nuevas innovaciones. La capacidad coercitiva y punitiva de los organismos encargados de la protección de la propiedad intelectual hacen que sea menos riesgoso licenciar una patente que incurrir en un proceso de investigación y desarrollo científico que pudiera confluir con el contenido de una patente registrada. El efecto final del sistema imperial de innovación es inhibirla. Para los usuarios de las patentes, el costo representa un componente adicional que se debe agregar al precio final de la mercancía:

una parte de sus beneficios se va a cubrir una renta que llega a manos del propietario de la patente, pero de ninguna manera llega a la sociedad, la verdadera depositaria del trabajo general, del conocimiento social que le pertenece y por el que no se paga nada por parte del dueño de la patente.

No importa que el creador de la idea sea o no el propietario de la patente, ya que la patente adquiere una función *propia* en el sistema capitalista. El otrora creador-innovador se escinde en dos: el creador vende la idea, su trabajo mental; el propietario de la patente puede llevar a la práctica la idea o conservarla en un instrumento jurídico. Los resultados de cada opción también son distintos en forma y contenido. Si se convierte en innovación hay algo nuevo en el mercado, un valor que se adiciona al conocimiento y a la riqueza social acumulados; sin embargo, su uso y beneficio son privados. Si permanece como patente, como instrumento jurídico que ampara la propiedad de una idea, adquiere un precio porque forma parte del acervo de riqueza ficticia de la empresa, si bien no existe valor adicional en el mercado.

La patente es una expresión jurídica que ampara la propiedad de una idea; como instrumento legal no tiene ningún valor, porque sólo es la expresión formal de la realización y concreción de un proceso previo de investigación y desarrollo. Como todo conocimiento científico, sintetiza la acumulación histórica de conocimientos, pues no es producto de la generación espontánea de algo nuevo. La parte del conocimiento que no es novedoso pertenece a la sociedad, es propiedad común que se privatiza. Y tanto mayor es el trabajo incorporado en las innovaciones, mayor es el componente del trabajo social que valoriza al capital.

*La subordinación indirecta del trabajo intelectual*

La ciencia se subordina de manera absoluta al capital y adquiere un sentido totalmente distinto al que había tenido en las revoluciones científico-tecnológicas precedentes, estableciéndose como la modalidad primordial para la generación de ganancias; su premisa es la utilización del intelecto colectivo, del *general intellect*, de la inteligencia humana traducida en conocimientos históricamente acumulados, que es propiedad social, colectiva. El trabajo también observa una poderosa mutación y adquiere una forma no material, la forma de las ideas, de la información, de los conocimientos transmitidos entre redes de personas, que pueden trascender la propiedad del capital y las relaciones sociales bajo su tutela. El capitalismo cognitivo (Blondeau *et al.*, 2004) da cuenta de este proceso de «puesta a trabajar» de saberes y conocimientos, cuya dinámica expansiva no puede ser acotada, por su origen en las TIC. El trabajo inmaterial<sup>17</sup> es la forma que adquiere relevancia en el capitalismo monopolístico imperial del siglo XXI. Se trata de una modalidad que trasciende al trabajo inmediato, tanto en su forma —no directamente vinculada a un espacio ni atada a una máquina, ni bajo la supervisión del capitalista— como en su contenido, puesto que se trata de trabajo general. El trabajador se asume como libre, aunque en realidad es un proletario intelectual (Lazzarato, 1996).

El trabajo inmaterial o trabajo intelectual complejo tiene dos implicaciones analíticas relevantes. En primer lugar, es un trabajo que al no estar

<sup>17</sup> El trabajo inmaterial o trabajo intelectual complejo se refiere al trabajo que no se cristaliza en un producto. Se trata de ideas que preceden o que forman parte del desarrollo científico y tecnológico en la era de las tecnologías de la información. El resultado puede adquirir la forma de información, de datos o de fórmulas que pueden o no materializarse en una innovación, pero que son protegidas por derechos de propiedad, es decir, por patentes y por un sistema supranacional *ad hoc*.

acotado a un espacio físico ni a la supervisión y control directo, no puede ser subordinado realmente por el capital; es apropiado, pero no subordinado. A pesar de que el trabajador intelectual se vale de las TIC, tiene necesariamente que contar con los conocimientos y las habilidades que están incorporadas en su propia calificación, no es un apéndice de la máquina. Sin su conocimiento especializado no habría creación de ideas ni de conocimientos patentables. A mayor intensidad tecnológica, mayor es la necesidad del trabajador intelectual. La segmentación de los procesos de innovación y la localización no acotada a un espacio han permitido que este trabajo de igual modo se desvalorice a partir de la lógica del arbitraje laboral global mencionado. En segundo lugar, pese a no estar sujetos a un espacio físico ni a la supervisión directa, este trabajo no escapa al circuito del capital, porque se trata de trabajo que potencialmente valoriza al capital. El trabajador intelectual, imbuido en el discurso de ser un trabajador libre, se encuentra subordinado al capital ubicuo, que son los monopolios generalizados, como cualquier otro trabajador.

### Epílogo: la modernidad capitalista en la encrucijada

En términos del desarrollo tecnológico, este sistema ha fortalecido a los sectores altamente tecnologizados de las economías centrales. La concentración de capital en las áreas de tecnologías de la información, salud, biotecnología y nanotecnologías hace imposible la competencia y garantiza ganancias extraordinarias en virtud del sistema imperial de patentes. La innovación, desde esta perspectiva, no es sino parte de un discurso en la lógica neoliberal, de que cada país está en condiciones de garantizar la obtención de riqueza si

estimula la ciencia y la tecnología. El verdadero resultado es la apropiación por las grandes corporaciones multinacionales del gasto social de cada país para la formación de sus científicos y tecnólogos. El fetiche de la innovación, esto es, el dotar a una actividad económica de la capacidad intrínseca para modificar las condiciones productivas y sociales de los países, alcanza a sus productos. Los aparatos que se asocian, en el espacio de los consumidores, con ventajas para acceder a la información, los conocimientos y la comunicación adquieren este carácter fetichista. Es tal su poder mágico, que dota de identidad a los usuarios, la identidad con la inmediatez y la banalización de la vida, así como la pérdida de sentido del riesgo civilizatorio que subyace en el sistema imperial capitalista.

La modernidad adquirió carta de naturalización en el capitalismo al llevar a la ciencia y tecnología a convertirse no en los medios para el progreso sino en el progreso mismo. La modernidad que ejemplificó la antítesis de la barbarie —la antinomia de la razón y la sinrazón— hoy se ha convertido en su opuesto porque el otro se ha convertido no en alguien sino en una cosa, y es prescindible. La crisis actual del capitalismo es epocal (Arizmendi, 2016) porque marca la culminación de un largo periodo para transitar a otra modalidad de producción radicalmente distinta, alternativa, que descansará sobre el espacio de posibilidades (Echeverría, 2003) de sobrevivencia de la civilización (Bartra, 2009; Harvey, 2013). La pregunta obligada para cuestionar al «progresismo» de la tecnología, de las nuevas y asombrosas tecnociencias que trabajan y manipulan la vida y la materia, consiste en saber a quiénes servirán, quiénes podrán disfrutar de sus beneficios, de su valor de uso. Hay respuestas que son evidentes: no serán los trabajadores en activo que son una tercera parte del ejército industrial de reserva; no son los trabajadores que apuestan sus ahorros y sus vidas para

descubrir algo que ya está patentado; no será el medio ambiente porque el cambio climático acaba con la vida. El ciclo vital del capitalismo monopolista de naturaleza imperial gira en torno a un círculo concéntrico que se depreda a sí mismo y a lo que lo rodea: hace implosión; la expansión capitalista sólo es una figura retórica. La promesa de la modernidad capitalista, de la Razón, se ha vuelto contra sí misma, es una aporía,<sup>18</sup> es la barbarie misma.

## Referencias

- Amin, S. (2001). «Capitalismo, imperialismo, mundialización». En Seoane, J., Taddei, E.H., Amín, S., Borón, A. y Houtart, F. (eds.), *Resistencias mundiales: de Seattle a Porto Alegre*. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Recuperado de <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/se/20100726091549/2amin.pdf>
- Arizmendi, L. (2016). *El capital ante la crisis epocal del capitalismo*. México: Instituto Politécnico Nacional.
- Bartra, A. (mayo-agosto de 2009). «La gran crisis». *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, 15(2), pp. 191-202.
- Bellamy Foster, J. (2010). «The financialization of the capitalist class: monopoly-finance capital and the new contradictory relations of ruling class power». En Veltmeyer, H. (ed.), *Imperialism, crisis and class struggle: the enduring verities and contemporary face of capitalism*. Leiden: Brill Publishers.

<sup>18</sup> En una teoría, una aporía es la afirmación que contradice el fundamento de dicha teoría.

- Bellamy Foster, J. (2013). «The epochal crisis». *Monthly Review*, 65(5). Recuperado de <https://monthlyreview.org/2013/10/01/epochal-crisis/>
- Bellamy Foster, J., McChesney, R.W. y Jonna, J. (2011). «The global reserve army of labour and the new imperialism». *Monthly Review*, 63(6), pp. 1-15.
- Blondeau, N. *et al.* (2004). *Capitalismo cognitivo, propiedad intelectual y creación colectiva*. Madrid: Traficantes de Sueños.
- Bughin, J. y Woetzel, J. (s/f). «Global trends are creating ever-larger winners and losers». *McKinsey & Co.* Recuperado de <https://www.mckinsey.com/featured-insights/innovation-and-growth/navigating-a-world-of-disruption>
- Castells, M. (1996). *La era de la información: economía, sociedad y cultura*. Madrid: Nueva Alianza.
- Castells, M. (2016). *Reconceptualización del desarrollo en la era global de la información*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Cypher, J. y Dietz, J.L. (2009). *The process of economic development*. Londres y Nueva York: Routledge.
- Delgado Wise, R. y Martin, D. (2015). «The political economy of global labor arbitrage». En Van der Pijl, K. (ed.), *The international political economy of production* (pp. 59-75). Cheltenham: Edward Elgar.
- Delgado Wise, R. (2017). «Claves para descifrar el sistema imperial de innovación comandado por Estados Unidos». *Estudios Críticos del Desarrollo*, 7(12). DOI: 10.35533/ecd.0712.rdw
- Delgado Wise, R. (2017a). *La cuestión de la innovación en la era de los monopolios generalizados*. México: Universidad Autónoma de Zacatecas. Recuperado de [https://www.researchgate.net/publication/314926373\\_La\\_cuestion\\_de\\_la\\_innovacion\\_en\\_la\\_era\\_de\\_los\\_monopolios\\_generalizados](https://www.researchgate.net/publication/314926373_La_cuestion_de_la_innovacion_en_la_era_de_los_monopolios_generalizados)
- Echeverría, B. (2011). *Antología, crítica de la modernidad capitalista*. Bolivia: Presidencia de la Asamblea Legislativa Nacional/Oxfam.

- Echeverría, J. (2003). *La revolución tecnocientífica*. España: Fondo de Cultura Económica.
- Emmanuel, A. (1972). *El intercambio desigual: ensayo sobre los antagonismos en las relaciones económicas internacionales*. México: Siglo XXI.
- Etzkowitz, H. y Leydesdorff, L. (2000). «The dynamics of innovation: from National Systems and «Mode 2» to a Triple Helix of university-industry-government relations». *Research Policy*, 29.
- Ewalt, D. (2018). «Reuters top 100: the world's most innovative universities-2018». Recuperado de <https://www.reuters.com/article/us-amers-reuters-ranking-innovative-univ/reuters-top-100-the-worlds-most-innovative-universities-2018-idUSKCN1ML0AZ>
- Gereffi, G. y Sturgeon, T. (2013). «Global value chain-oriented industrial policy: the role of emerging economies». En Elms, D.K. y Low, P. (eds.), *Global value chains in a changing world* (pp. 329-360). Geneva: World Trade Organization.
- Hart, M. y Negri, A. (2005). *Imperio*. Buenos Aires: Paidós.
- Harvey, D. (2004). *El nuevo imperialismo*. Akal: Madrid.
- Hilferding, R. (1973). *El capital financiero*. México: Ediciones el Caballito.
- Lazzarato, M. (1996). «Immaterial labor. Radical thought in Italy: a potential politics». Recuperado de <http://www.generation-online.org/c/fcimmateriallabour3.htm>
- Marx, K. (1982). *Elementos fundamentales para la crítica de la economía política 1857-1858 (Grundrisse)* (tomo II). México: Siglo XXI.
- Marx, K. (1981). *El capital, capítulo VI (inédito)*. México: Siglo XXI.
- McKinsey Global Institute (2015). *Playing to win: the new global competition for corporate profits*. McKinsey & Co.
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) (2014). *Factbook, 2014*. Recuperado de [https://read.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-factbook-2014\\_factbook-2014-en#page5](https://read.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-factbook-2014_factbook-2014-en#page5)

- Ornelas, R. (coord.) (2013). *Crisis civilizatoria y superación del capitalismo*. México: Instituto de Investigaciones Económicas-Universidad Nacional Autónoma de México.
- Petras, J. (2006). «Estado imperial, imperialismo e imperio». *Aporrera*. Recuperado de <https://www.aporrea.org/tiburon/a24963.html>
- Roco, M. y Sims, W. (eds.) (2003). *Converging Technologies for Improving Human Performance Nanotechnology, Biotechnology, Information Technology and Cognitive Science*. Estados Unidos: National Science Foundation/Kluwer Academic Publishers (currently Springer). Recuperado de [http://www.wtec.org/ConvergingTechnologies/Report/NBIC\\_report.pdf](http://www.wtec.org/ConvergingTechnologies/Report/NBIC_report.pdf)
- Rush, A. (2003). «La teoría posmoderna del Imperio». En *Controversias sobre civilización, imperio y ciudadanía*. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
- Sanz, L. y de Moya, F. (2011). «Una nueva industria: la calificación de las universidades en las ciencias sociales». En *Unesco. Informe sobre las ciencias sociales en mundo*. Recuperado de [http://www.foroconsultivo.org.mx/libros\\_editados/informe\\_sobre\\_las\\_ciencias\\_sociales\\_en\\_el\\_mundo.pdf](http://www.foroconsultivo.org.mx/libros_editados/informe_sobre_las_ciencias_sociales_en_el_mundo.pdf)
- Saxenian, A. (2016). «El modelo Silicon Valley: dinamismo económico, exclusión social». En Castells, M. (ed.), *Reconceptualización del desarrollo en la era global de la información* (pp. 47-69). México: Fondo de Cultura Económica.
- Smith, G. (2012). «Can the U.S. patent system be saved?» *Computer World*. Recuperado de <http://www.computerworld.com/article/2505817/it-management/can-the-u-s-patent-system-be-saved-.htm>
- Thomson Reuters (2018). «The top 100 Global Technology Leaders». Recuperado de <https://www.thomsonreuters.com/content/dam/ewp-m/documents/thomsonreuters/en/pdf/reports/thomson-reuters-top-100-global-tech-leaders-report.pdf>

- U.S. Patent and Trademark Office (2019). «U.S. Patent Statistics Chart Calendar Years 1963-2020». Recuperado de [https://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/us\\_stat.htm](https://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/us_stat.htm)
- Veltmeyer, H. (2013). «The political economy of natural resource extraction: a new model or extractive imperialism?» *Canadian Journal of Development Studies*, 34(1), pp. 79-95.
- Vidaurreta, G. (2013). «Los fundamentos del derecho de patentes». *Serie Breviario en Relaciones Internacionales*, (28), pp. 1-14.
- Organización Mundial del Comercio (OMC) (1995). «Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio». Recuperado de [https://www.wto.org/spanish/docs\\_s/legal\\_s/27-trips.pdf](https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf)



Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons  
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional



## Dieta neoliberal: ¿cuestión cultural o económica?

Gerardo Otero\*

*Resumen.* En este capítulo se considera si el paquete alimentario que predomina en México es algo determinado por la cultura o más bien por factores económicos. El argumento principal es que, si bien el país disfrutó de las posibilidades de tener su propia dieta tradicional hasta los 1980, la apertura comercial y la desigualdad económica han causado una modificación sustancial de la dieta a favor de alimentos densos en contenido energético y con menor valor nutritivo. La creciente exportación de frutas y verduras las hizo cada vez más caras dentro del país, por lo cual la cocina tradicional se hizo más inviable. Al respecto, se presenta una conceptualización del régimen alimentario neoliberal y su dieta. En ese marco, se propone que esta dieta ha sido la raíz principal de las comorbilidades que han estado asociadas a la pandemia de covid-19: sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, etcétera. Es decir, lo que se denomina «dieta neoliberal» ha convertido a los mexicanos en una población más vulnerable. Recuperar la salud en México pasa por recuperar también la soberanía alimentaria mediante la regeneración del campo y sus campesinos. Dadas las urgencias del cambio climático, dicha regeneración pasa también por el empleo de métodos de producción agroecológicos.

*Palabras clave:* régimen alimentario neoliberal, dieta neoliberal, covid-19, diferenciación clasista, México.

\* Mexicano. Profesor de estudios internacionales en Simon Fraser University, Vancouver, Canadá. Presidente de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA).

## The neoliberal diet: ¿a cultural or economic question?

*Abstract.* This article considers whether the typical food basket in Mexico is something determined by culture or by economic factors. The key argument is that as the country had the opportunity to embrace its own traditional diet since the 1980s, the commercial opening and economic inequality have led to a substantial modification in the diet in favor of calorie-dense foodstuffs with less nutritive value. The growing export of fruits and vegetables has led to their ever-increasing prices within the country, leaving the traditional kitchen less viable. To that effect, the study presents a conceptualization of the neoliberal food regime and its diet. Within this framework, it suggests that this diet has been the principal reason for comorbidities that have been associated with the covid-19 pandemic: overweight, obesity, diabetes, hypertension, etcetera. What is termed the «neoliberal diet» has made Mexicans as a population more at-risk. To regain health in Mexico requires regaining food sovereignty as well through the recovery of the farm and its farmers. Given the urgency of climate change, that recovery must involve the use of agro-ecological production methods.

*Keywords:* neoliberal food regime, neoliberal diet, covid-19, class divide, Mexico.

## Introducción

La pandemia de la covid-19 ha puesto de relieve varias comorbilidades que pueden hacer que esta enfermedad sea más severa o letal. Las comorbilidades más conocidas son sobrepeso, obesidad, diabetes e hipertensión. Resulta que en México hay muchas personas que padecen de estas comorbilidades debido a una dieta que, con la apertura comercial, se ha venido instalando desde los 1980. Por una parte, podríamos decir que el tipo de alimentación o la dieta que prevalece en un país tiene fuertes raíces y determinantes culturales. A cada uno de nosotros nos encanta comer de la forma como nos acostumbraron desde niños. Ya sean los platillos favoritos de la mamá o de la abuelita, éstos siempre causan añoranza. Y no es casual que la comida mexicana haya alcanzado una gran popularidad a escala internacional. De hecho, se podría decir que la cocina mexicana es de las más populares y apreciadas en el mundo, tanto por su gran sabor como por su valor nutricional (Pilcher, 1998; Galvez, 2018).

Por otra parte, sin embargo, debemos preguntarnos en qué medida la dieta tradicional mexicana sigue siendo accesible para la mayoría de la población en el siglo XXI. Por lo menos hasta los 1970, las agriculturas del mundo constituían casi el único sector cerrado de las economías, es decir, enfocadas en su mercado interno. Este hecho determinaba que las culturas culinarias de cada país estuviesen fuertemente enraizadas en aquellos cultivos que mejor se podían producir en ellos. Desde los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, organizaciones y acuerdos internacionales como el Acuerdo General sobre Tarifas y Aranceles (GATT, por sus siglas en inglés) se habían encargado de liberalizar el resto de los sectores económicos, sobre todo

el industrial. Pero la agricultura siguió estando enfocada en las economías domésticas y, por tanto, las dietas consideradas tradicionales en cada país seguían siendo viables.

La hipótesis que defiende en este trabajo es que, muy a pesar del determinante cultural, hay dos elementos que convierten al factor económico en el de mayor peso para conformar las dietas en los países. Me refiero concretamente a, por una parte, la apertura comercial a partir de los 1980 y, por otra parte, a la profundización de la desigualdad socioeconómica en México. Tanto la apertura comercial, es decir, la inserción de México en la economía mundial, como el agravamiento de la desigualdad son producto del modelo neoliberal de desarrollo introducido a mediados de los 1980. Si bien la apertura comercial se inició formalmente en México con su ingreso al GATT, lo que afirmó su vuelco neoliberal fue el ingreso al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Estos factores económicos, liberalización comercial y desigualdad, han dificultado cada vez más el acceso de la mayoría de los mexicanos a las frutas y verduras. Puesto que éstas constituían los ingredientes fundamentales de lo que aquí llamo vagamente la comida tradicional mexicana, ésta dejó de ser viable para las clases trabajadoras.

Para ilustrar cómo se ha modificado la dieta en México, basta decir que en 1961 74% de las proteínas ingeridas por los mexicanos, en promedio, provenía de productos vegetales. Esa cifra bajó a 54% para 2013 (FAO, 2021). La contraparte de esto, claro está, ha sido un aumento casi proporcional en la ingestión de productos animales, sobre todo la carne de pollo. El considerable aumento en la exportación de frutas y verduras desde los 1980 hizo que estos productos se encarecieran cada vez más en el mercado mexicano. Y la profundización de la desigualdad ha resultado en que las frutas y verduras se hayan convertido en lo que podríamos llamar alimentos de lujo:

cada vez son más inaccesibles para una mayoría de la población. Un efecto de esto es que la mayoría de los mexicanos está consumiendo alimentos cada vez más procesados —muchos ultraprocesados— y densos en contenidos energético (Monteiro *et al.*, 2004). Alimentos tales como las harinas refinadas, los azúcares (de caña o de jarabe de maíz de alta fructosa) y los aceites vegetales son ahora elementos ubicuos en muchos de los alimentos procesados. Estos comestibles carecen de las propiedades nutritivas que tienen las frutas y verduras. Y les llamo «comestibles» porque se pueden comer, pero no porque alimenten: proporcionan calorías muy pobres en contenido nutricional.

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares de 2018, hecha por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) con un alto nivel de confiabilidad, revela que la medida de inseguridad alimentaria que viven las familias mexicanas es muy considerable. Tal situación se convierte en un factor de riesgo de exposición a la dieta neoliberal. Unos cuantos datos sobre inseguridad son los siguientes: más de 41% de los hogares entrevistados tenía la preocupación de que se les iba a acabar la comida. Asimismo, casi 32% de los hogares considera que tuvo muy poca variedad de alimentos. Casi 47% tuvo dificultades para satisfacer sus necesidades alimentarias. Por último, en 31% de los hogares hubo algún adulto que sintió hambre, pero no comió y en más de 23% de las familias algún adulto comió una vez al día o dejó de comer todo un día (INEGI, 2019). Todos estos datos son desgarradores y nos dan una idea de las enormes dificultades que tiene casi la mitad de la población mexicana para procurarse la alimentación, no digamos para escoger lo más saludable.

Además de alimentos densos en energía, la dieta neoliberal está compuesta también por productos cárnicos, centralmente la carne de pollo.

Yo clasifico los alimentos en básicos y de lujo. La carne en general estaría de lado de los alimentos de lujo, denominados así no necesariamente porque sean mejores o más saludables, sino porque son menos accesibles. En Estados Unidos, por ejemplo, la carne de res llegó a ser un alimento básico para muchos trabajadores de ingresos medios hasta los 1970. A partir de esa década, fue más barato producir carne de pollo que carne de res. Por lo tanto, la carne de res se convirtió cada vez más en un alimento de lujo, mientras que la de pollo se convirtió en un alimento básico. A partir de los 1990, la carne de pollo es la que más ha aumentado a escala mundial y es decididamente la carne más vendida en México (Mendoza, 2021).

Algo similar ocurre con las bebidas alcohólicas: el vino sería la bebida de lujo, mientras que la cerveza sería la básica. En países con una tradición vinatera, como España, Francia e Italia, sin embargo, podemos decir que el vino es una bebida básica. Pero existe todo un rango de precios en los vinos que van desde los muy baratos y por tanto básicos, hasta los muy caros y por tanto de lujo. Así también pasa con la cerveza, sobre todo en la escala de ventas en los restaurantes. Por lo menos en Estados Unidos y en Canadá, donde cada vez se encuentran más marcas de microcervecías tipo *boutique* (*microbreweries*). Éstas son un poco más caras que las marcas de producción en masa. Pero la realidad en el mercado de cerveza es que existe un oligopolio consistente en dos marcas que controlan 70% de la cerveza que se distribuye en el mercado mundial. Por tanto, la cerveza es muy claramente la bebida alcohólica básica en el mundo. En los países que no tienen una tradición vinatera, el vino es la bebida de lujo.

En la primera parte de este trabajo describo brevemente cuáles son las morbilidades de la covid-19 y cómo están fuertemente asociadas a lo que llamo la dieta neoliberal. En la segunda sección discuto en qué consiste el

régimen alimentario neoliberal en su aspecto agrícola y cuáles son sus elementos dinámicos que lo determinan. La tercera sección cubre el meollo de este trabajo: la diferenciación clasista en las dietas. En esta parte demuestro que la desigualdad económica resulta en niveles diferenciados en el consumo de alimentos «básicos» y «de lujo», los cuales pueden ser más o menos saludables. Es decir, tanto los alimentos básicos como los de lujo pueden ser saludables o no. La diferencia principal es su carestía, si son accesibles o no para la mayoría de la población. Veremos cómo las clases trabajadoras de ingresos bajos o medios son las que están más expuestas a consumir la parte de la dieta neoliberal que consiste en alimentos densos en energía, pero carentes en nutrición. Por último, en conclusiones revisito los argumentos cultural y económico. El argumento cultural supone que cada persona es libre para elegir lo que come y por tanto tiene también la responsabilidad de si lo que come es dañino o saludable. Mi argumento económico, sin embargo, enfatiza que se trata más bien de determinantes estructurales los que definen cómo se alimentan los mexicanos. No se trata de que cada quien escoge su dieta, sino de que cada quien come lo que puede, dependiendo de sus bolsillos. Por lo tanto, tenemos que apelar a un actor con la capacidad de incidir en la sociedad en su conjunto, como el Estado, para que intervenga decididamente en el cambio de la dieta. El Estado tiene que propiciar, por una parte, un cambio en el sistema de producción agroalimentario; y, por otra parte, debe tomar las medidas necesarias para reducir drásticamente la desigualdad económica. Sólo de esta manera los mexicanos podrán tener acceso a una alimentación más saludable.

## Dieta neoliberal y comorbilidades de la covid-19

Una exploración de decenas de artículos en revistas científicas de medicina revela de inmediato cuáles han sido las principales comorbilidades de la covid-19. Ya se trate de artículos sobre China, Estados Unidos o México, todos los estudios demuestran que el sobrepeso, la obesidad, la diabetes y la hipertensión, entre otros, son comorbilidades claramente relacionadas con una covid-19 más severa o letal. Desde luego, hay importantes variaciones en el grado de comorbilidad. El sobrepeso y la obesidad son comorbilidades que pueden causar otras más como la diabetes e hipertensión. Se miden con el índice de masa corporal (IMC). El IMC se calcula dividiendo el peso en kilogramos de una persona por el cuadrado de su estatura en metros ( $IMC = \text{peso [kg]} / \text{estatura [m}^2\text{]}$ ). Se estima que un IMC de 19 y hasta 24 puntos implica un peso saludable. Entre 25 y 29 se considera que la persona tiene sobrepeso. La obesidad se inicia con un IMC de 30 puntos o mayor. Un IMC mayor de 30 puede llevar a una mayor incidencia de muerte por covid-19. A partir de un IMC mayor a 40 se considera que la persona padece de una obesidad mórbida. En este caso, y agregándole la covid-19, a la persona le aumenta cuatro veces la probabilidad de letalidad de la enfermedad comparada con una persona con IMC de 19-24.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que agrupa a 35 de las economías más importantes del mundo, Estados Unidos sería el país con la más alta tasa de obesidad: 38.2% de su población mayor de 15 años. En México, ese dato le correspondía a 32.4% de la población en 2018. Es decir, México sería el segundo país más obeso del mundo, seguido por Nueva Zelanda con 30.7% de obesidad en ese año (*BBC News*, 2018). Por esta sola razón, tanto el pueblo mexicano como

el estadounidense tienen una mayor probabilidad de que muchas de sus personas contraigan una covid-19 severa o mortal. Si a esto le añadimos que México cuenta con una infraestructura sanitaria con muchas deficiencias y poco financiamiento para gastos operativos, entonces no es de sorprender su alta tasa de contagios y de mortalidad durante la pandemia que azotó en 2020-2021. Según las cifras oficiales, a mediados de febrero de 2021 se registraban más de dos millones de contagios y más de 180 mil muertos por covid-19.

La pregunta relevante para nosotros en este texto es: ¿qué tiene que ver la covid-19 con la dieta neoliberal? Podemos decir que tiene muchísimo que ver. Hay una enorme correlación, posiblemente causalidad, entre la dieta neoliberal y el sobrepeso y la obesidad. Por tanto, las comorbilidades que agravan la covid-19 o la hacen letal están causadas directamente por dicha dieta, misma que se ha ido instalando en el país a partir de los 1980. En el caso de Estados Unidos, ha quedado muy claro que los más afectados por la covid-19 han sido miembros de minorías con menores privilegios que la población blanca. Por si esto fuera poco, los negros y los latinos son los trabajadores que ocupan los puestos con mayores riesgos de contraer la covid-19; por ejemplo, los trabajadores de los rastros donde el contacto con otras personas es demasiado próximo.

Otra pregunta implicada en el título de este artículo se refiere a la cuestión cultural: ¿en qué medida tienen los individuos la libertad, y por tanto la responsabilidad, para elegir sus alimentos? Pues resulta que la respuesta dada por la mayoría de los estudiosos de nutrición y alimentos, incluidos los pensadores críticos, es que los individuos tenemos mucha discrecionalidad para elegir qué comemos. Si así fuera el asunto, entonces bastaría con implementar campañas educativas para que la gente coma de

manera más saludable. O bastaría con que el gobierno impusiera, como ya lo ha hecho en 2020, la obligatoriedad de que la industria alimentaria introduzca etiquetas que mejor informen al público sobre los contenidos de azúcar, grasas, etcétera, en sus productos. Estas conclusiones suponen que, efectivamente, los individuos tenemos la plena libertad de elección sobre qué comer. Algunos de los más destacados académicos como Michael Pollan (2008) o Marion Nestle (2013), por ejemplo, exhortan a sus lectores a «votar con sus tenedores» eligiendo las comidas más saludables.

Lamentablemente, el asunto es más complicado, pues no toda la gente tiene la misma capacidad de compra. De poco sirve que la gente pueda leer las etiquetas con advertencias o que tenga una mejor información sobre lo que es y no es saludable, si en sus bolsillos o cuentas bancarias no hay suficientes fondos para comprar los alimentos nutritivos. Si el asunto de elegir la comida no está fundado en la cultura o la libertad individual, entonces tenemos que estudiar cuáles son los factores estructurales que conforman la producción de alimentos.

### Régimen alimentario neoliberal: elementos dinámicos

La pregunta central de esta sección es: ¿cómo se ha conformado el régimen alimentario neoliberal y cuáles son los elementos dinámicos que lo mueven? Esta investigación se inserta en la perspectiva de los regímenes alimentarios que propusieron Harriet Friedmann y Philip McMichael en su artículo seminal de 1989. Adoptando una mirada de gran escala —el sistema mundo— y largo alcance (desde 1870 hasta los 1980), ellos proponían que habían existido por lo menos dos regímenes claramente definidos y un

tercero emergente. Cada régimen alimentario está regulado por algunas reglas escritas y otras no escritas, por algún país dominante y otros subordinados, y por algunos cultivos predominantes. Tal regulación determina la forma de acumulación de capital en la agricultura, cuáles son los cultivos principales y las tecnologías asociadas con ellos, y el país dominante o hegemónico. El primer régimen alimentario habría estado dominado por Gran Bretaña hasta que entró en crisis con el inicio de la Primera Guerra Mundial. Ese régimen estaba basado en *extender* la frontera agrícola. Es decir, para aumentar la producción se necesitaba incorporar más tierra bajo explotación, puesto que no hubo innovaciones tecnológicas importantes. Fue así como Australia y Canadá se convirtieron en importantes exportadores de trigo y otros granos hacia la metrópolis imperial para alimentar ahí a su clase obrera. Mientras tanto, Gran Bretaña se especializaba en la producción de manufacturas para el mundo.

El segundo régimen alimentario inició después de un periodo de transición entre las guerras, con un carácter *intensivo* gracias a nuevas tecnologías agrícolas. Estados Unidos surgió como la nueva potencia dominante a partir de los 1940. Este régimen, que se extendió hasta los 1980, desarrolló una serie de innovaciones tecnológicas que incluían la irrigación, nueva maquinaria agrícola, semillas mejoradas, fertilizantes y otros agroquímicos. Al ser exportadas al tercer mundo, este paquete tecnológico adoptó el nombre de revolución verde, misma que se inició precisamente en México para el mejoramiento del trigo y el maíz. Por el carácter intensivo de su agricultura, Estados Unidos producía muchos más alimentos que los que podía absorber su mercado interno. El desafío para el Estado, por tanto, era determinar cómo canalizar los excedentes que no se podían consumir en su país. Entre otras medidas para el control de la oferta, como incentivos

para descansar algunas tierras, el Estado pasó la Ley Pública 540, mediante la cual se vendían grandes cantidades de granos con préstamos subsidiados. Las ventas se hacían en parte con criterios geopolíticos, por ejemplo, favoreciendo a Chile después del golpe de Estado de Augusto Pinochet en 1973; o para Egipto cuando Anwar Sadat se acercó a Israel en 1977 (tras la Guerra de los Seis Días en 1967).

No es mi intención presentar aquí una síntesis del enfoque sobre el régimen alimentario, que he ofrecido en otro lado (Otero, 2018). Sólo quiero destacar que Philip McMichael elaboró el principal perfil de lo que llamó el tercer régimen como «régimen empresarial» (*corporate regime* en inglés), el cual estaría guiado por el principio del mercado y dominado por Estados Unidos, al igual que el segundo régimen. Yo le di otro sentido a esta perspectiva porque le resta importancia al papel del Estado, por una parte, y por otra resalta el papel de las empresas de una forma equivocada. Tengo dos problemas principales con su conceptualización del Estado. En primer lugar, lo trata como unidad de análisis en el sistema mundo. En segundo lugar, si bien el Estado ha cambiado su papel en el tercer régimen alimentario, para mí sigue teniendo un papel central. Para McMichael, en cambio, la «desregulación» sería un concepto central en su conceptualización del régimen alimentario empresarial.

Mi propuesta para caracterizar al tercer régimen alimentario está contenida en el título que le doy: régimen alimentario neoliberal. Los factores dinámicos que he identificado son cuatro en particular. Si bien muchos analistas se confundieron destacando a la «desregulación» como característica fundamental de la globalización neoliberal, yo propuse el concepto de *neorregulación*. No se trata simplemente de un cambio lingüístico, sino conceptual. Neorregulación implica que, si bien el Estado ha cambiado

su función en el modelo neoliberal, al disminuir su presencia directa en la producción, sigue siendo central al establecer el marco normativo en el cual operan las agroempresas multinacionales. Pero su papel central se ha transferido al ámbito legislativo. Por ejemplo, el Estado ha introducido una fuerte protección legal a la propiedad intelectual, la cual ha desempeñado un papel indispensable para el desarrollo de la biotecnología agrícola.

Este contexto legislativo —de neorregulación— ha sido de vital importancia para promover ese segundo elemento dinámico: la biotecnología como la forma tecnológica central del régimen alimentario neoliberal. Resulta que el maíz y la soya han sido los cultivos principales de este régimen. No se trata de cultivos para el consumo directo de los humanos. Se trata más bien de cultivos para alimentar al ganado y las aves como los pollos. A partir de 1996, el maíz y la soya han sido productos de la *biotecnología*, es decir, cultivos genéticamente modificados o transgénicos. En esto hay excepciones, como México, donde se impuso una moratoria del cultivo del maíz después de una fuerte lucha por parte de grupos campesinos y ecologistas. Se trataba de proteger la biodiversidad de este cultivo en la región de origen biológico del maíz. El 31 de diciembre de 2020, el presidente de México publicó un decreto por el cual se establece un plazo para eliminar tanto el maíz transgénico importado para consumo humano, como la utilización del glifosato, el herbicida carcinógeno que se vende junto con los principales cultivos transgénicos. La mayoría de estos cultivos (más de 80%) se ha diseñado precisamente para resistir el glifosato. Éste tendrá que salir del mercado mexicano a más tardar el 31 de diciembre de 2024.

Con esta configuración de factores dinámicos, el Estado a su favor y la posibilidad de dominar la biotecnología, el régimen alimentario neoliberal ha estado dominado por *agroempresas multinacionales*, el tercer factor.

Dichas empresas han estado en el centro de la producción de la biotecnología, las semillas, los agroquímicos y otros insumos para la agricultura.

Por último, como cuarto factor dinámico, los *supermercados* han sido los principales agentes para distribuir los alimentos. En México, donde Walmart no existía antes de 1992, para 2021 esa empresa controlaba ya 67.8% del mercado, seguido por Soriana con 16.3%, Grupo Comercial Chedraui con 13.6% y Grupo La Comer con apenas 2.3% (Mendoza, 2021). Con esta estructura del mercado, podemos estar seguros de que Walmart está en la mejor posición para fijar los precios y las condiciones de la competencia con sus rivales. Lo que no podemos ver en estas cifras, sin embargo, es cómo se desplazaron los mercados regionales en lo que los pequeños productores campesinos encontraban sus canales de distribución. La falta de mercados regionales será un gran desafío para el gobierno de la llamada cuarta transformación (2018-2024) en su intento de recuperar la soberanía alimentaria con base en el campesinado. Pero esto sería tema de otro estudio. Habiendo planteado cuáles son los factores dinámicos del régimen alimentario neoliberal, pasemos ahora a explorar cómo se traduce a la alimentación de un país con fuertes desigualdades sociales.

### Cambios alimentarios y diferenciación clasista de las dietas

La emergencia y consolidación del régimen alimentario neoliberal ha significado, entre otras cosas, el desplazamiento de cientos de miles de pequeños campesinos parcelarios. Ellos producían los principales cultivos básicos en México hasta la apertura comercial (Otero, 2011). Ha significado también que la diversidad de los alimentos que producían se ha reducido, a la vez

que la diversidad de los alimentos que se consumen ha crecido a partir de las importaciones. México importaba en 2021 más de 60% de sus alimentos básicos. Esto es algo paradójico pero real y, de hecho, muy consistente con la liberalización mercantil. Es decir, la lógica de liberalización tenía como premisa que cada país se iba a especializar en aquellos productos que pudiese producir de la manera más eficiente. Los demás los debería importar. Esto es en lo que consisten las famosas «ventajas comparativas». Pero se puso a competir a los campesinos mexicanos con los granjeros estadounidenses, quienes cuentan con fuertes subsidios estatales. La bancarrota de los campesinos mexicanos aseguró algo que la tecnocracia mexicana buscaba: inundar el mercado de trabajo con mano de obra barata para atraer la inversión extranjera. Y lo lograron: en unas décadas se ha vaciado el campo de México. A fin de cuentas, con el intercambio comercial, se esperaba que todos los países estuvieran mejor, o sea con mayores niveles de bienestar. Con lo que no se contaba era que algunos agentes económicos estaban dotados de enormes ventajas competitivas, sobre todo aquellos que detentan posiciones monopólicas u oligopólicas en el mercado. Este es el caso para las principales empresas de la agricultura. Por el lado de la producción de insumos y por el del procesamiento de los alimentos, las empresas dominantes operan en estructuras de mercado oligopólicas, donde las cuatro empresas principales concentran más de 60% del mercado. Y el empresariado agrícola mexicano, lejos de interesarse por surtir el mercado doméstico, ha preferido expandir su presencia en los mercados de exportación. Con esto, los mexicanos han visto un notable crecimiento en los precios de las frutas y las verduras que ahora, en su mayoría, se exportan.

Ante una estructura mercantil con las características descritas, es muy difícil imaginar que los consumidores tenemos plena libertad para elegir

lo que comemos. Más bien debe quedar claro que nuestras opciones están muy acotadas por quienes producen y distribuyen los alimentos. Esta es una de las grandes limitaciones sobre la supuesta libertad de elección de los alimentos. La otra gran limitación es la que vamos a discutir en seguida y consiste en la desigualdad en el acceso a los alimentos.

Desde 1994, México se ha venido integrado económicamente a sus vecinos del norte a través de lo que, hasta 2019, fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Ese tratado fue revisado, sobre todo para la producción en el sector automotor, y adoptó el nombre de Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) a partir de 2019. Por las fechas de los datos que manejo, me voy a referir solamente al TLCAN, que sigue funcionando básicamente igual en lo que respecta a la agricultura y los alimentos. Está por verse si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador será capaz de implementar la soberanía alimentaria que prometió en su campaña.

La pregunta principal que se hacían los economistas a principios de los 1990 era si una asociación de México con dos países desarrollados iba a resultar en una convergencia hacia arriba, o en una convergencia hacia abajo. Si la convergencia se daba hacia arriba, se entiende que sería hacia los niveles de vida de Estados Unidos. Si fuera hacia abajo, entonces se trataría de una convergencia hacia el más bajo estándar de vida de México. Aquí me voy a enfocar en cuál ha sido el desempeño de los tres países de Norteamérica en cuanto a los alimentos, pero empiezo contextualizando con algunos datos generales sobre el producto interno bruto (PIB) y cómo se distribuye entre el trabajo y el capital.

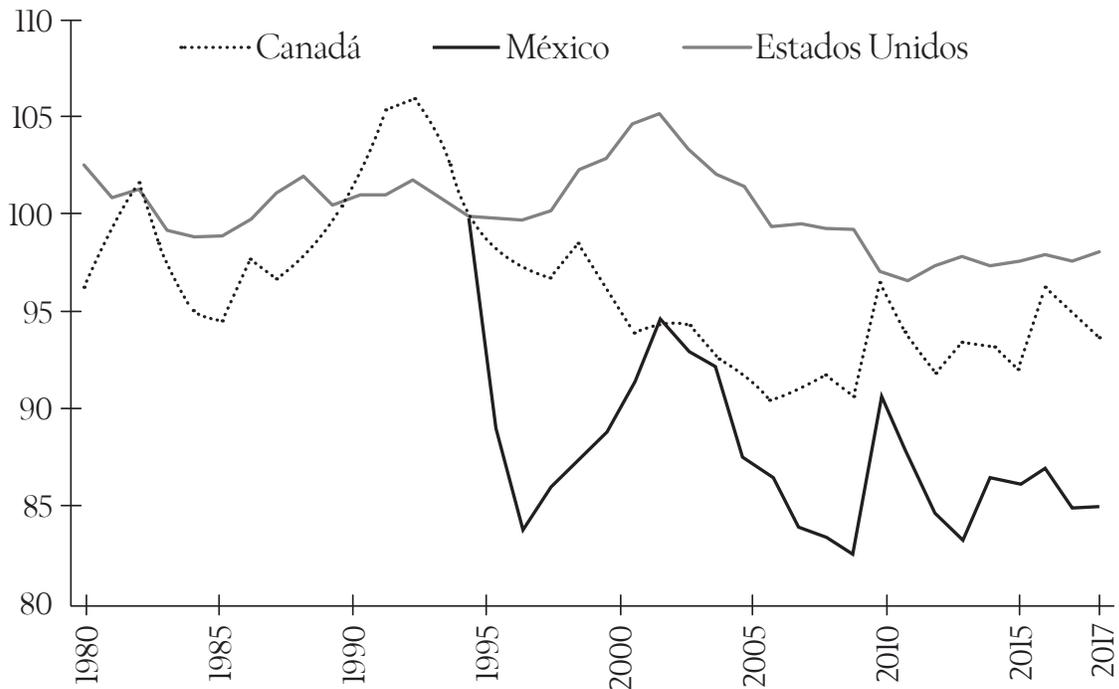
Según mediciones del PIB real per cápita del Banco de Reserva Federal de los Estados Unidos, este país y Canadá han experimentado una convergencia ascendente: Canadá se ha acercado más a Estados Unidos desde

el inicio del TLCAN. En 1993, estos países tenían un PIB per cápita real de unos 37 mil dólares y para 2015 esa cifra andaba por los 50 mil, con Estados Unidos estando un poco arriba de Canadá. Nótese que estas son cifras en dólares constantes, es decir, directamente comparables porque toman en cuenta la inflación. En contraste con los países ricos de la región, México ha permanecido con un nivel de PIB real per cápita básicamente estancado: de ser unos 8 mil 500 dólares en 1993, llegó a apenas 9 mil 500 en 2015. Esto es, mientras que en Estados Unidos y Canadá se dio un aumento de unos 13 mil dólares per cápita reales de 1993 a 2015, en México ese aumento fue de apenas mil dólares en esos 22 años (World Bank/FRED, 2021).

Si bien estas cifras nos permiten hacer una buena comparación entre el desempeño general de los países, no dejan de ofrecernos simples promedios de sociedades muy desiguales internamente. Para desagregar los datos del PIB y enterarse de cómo les ha ido a los trabajadores, habría que preguntarse cuál ha sido el desempeño de su tajada de los ingresos en los tres países de Norteamérica. El Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos (FRED, por sus siglas en inglés) tiene una base de datos económicos de libre acceso que permite identificar precisamente cuál ha sido la porción del PIB que ha correspondido a los trabajadores en el periodo bajo discusión. Entonces, una parte del PIB fluye hacia el capital y la otra hacia el trabajo. Este desglose de los datos es muy importante en situaciones de alta concentración de la riqueza y del ingreso (Piketty, 2014), porque se puede tener un aumento del PIB sin que se beneficien de manera equitativa los trabajadores. Esto es precisamente lo que ha venido ocurriendo en América del Norte desde 1993, si bien ha ocurrido de manera diferenciada en cada país, como se muestra en la gráfica 1.

GRÁFICA 1

Parte del PIB pagado a los trabajadores (índice 1994=100)



Fuente: elaborado con datos de FRED (s/f).

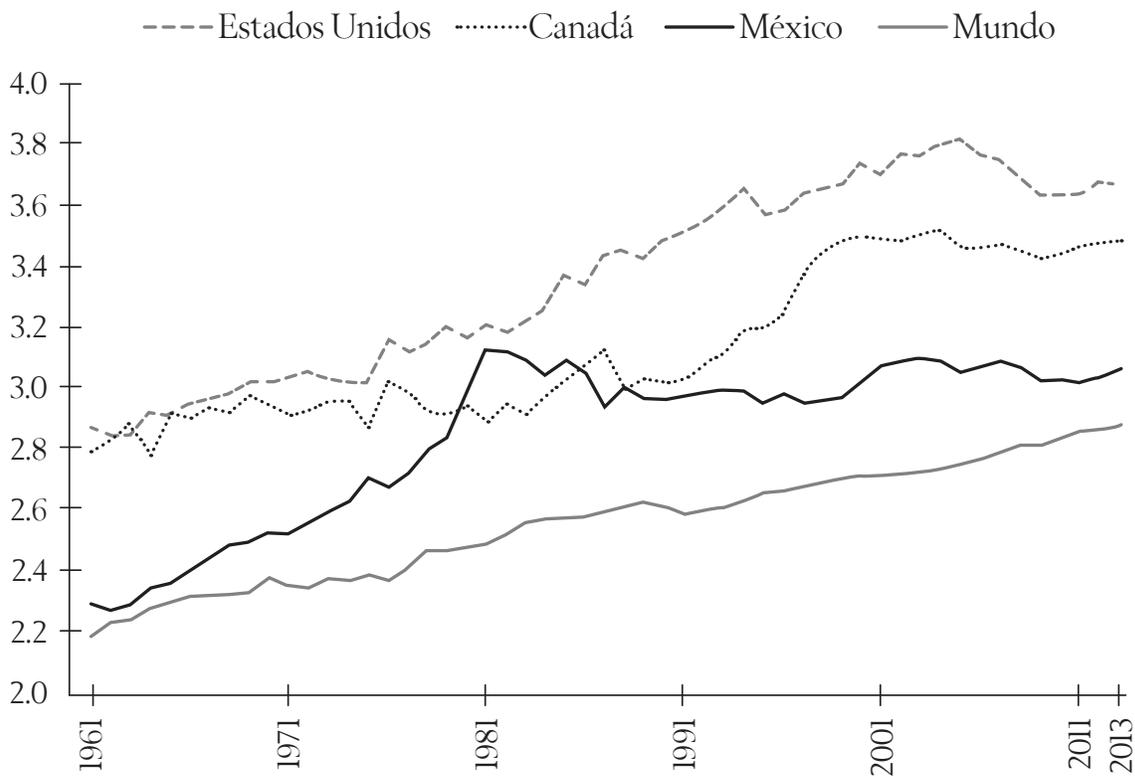
Lo que observamos en la gráfica 1 son tres cosas principales: 1. Los trabajadores estadounidenses experimentaron un leve aumento de su porción del PIB en los 1990, que coincide con la presidencia de Bill Clinton y un fuerte crecimiento económico. 2. Pero en los tres países los trabajadores terminaron con una menor porción del PIB que con la que iniciaron el periodo en 1994. 3. De los tres países de la región, los trabajadores mexicanos son los que perdieron la mayor tajada del PIB, en comparación con su porción inicial en 1994. En conclusión, se puede decir que los trabajadores de Norteamérica han sido perdedores netos con el TLCAN. No sorprende tanto entonces que dichos trabajadores han tenido cada vez una menor posibilidad de comprar alimentos saludables.

Y adelanto mi conclusión general sobre la diferenciación de clases en las dietas para que no haya misterios: hemos tenido una convergencia diferencial dependiendo de la clase social a la que se pertenezca. Las clases más afluentes han convergido hacia arriba, hacia un consumo de más alimentos de lujo, incluidas las frutas y verduras, las cuales han sido más variadas por el intercambio comercial. Pero las clases trabajadoras de ingresos bajos y medios han convergido hacia abajo, hacia un mayor consumo de alimentos básicos, densos en contenido energético; es decir, muchas calorías, pero poca nutrición. También ha aumentado, sin embargo, el consumo de carne de pollo, la cual llamo la carne neoliberal por el hecho de que ha alcanzado a las clases trabajadoras de ingresos medios. Al pollo se le puede considerar como un alimento básico en la época neoliberal. De hecho, este es el tipo de carne más consumido en México.

Antes de describir la forma como se han diferenciado las dietas por clase social, voy a presentar algunos datos globales sobre el desempeño alimentario promedio en los tres países del TLCAN en comparación con el promedio mundial. En primer término, voy a presentar cómo ha evolucionado el consumo calórico per cápita en cada uno de los tres países de 1961 a 2013, que es el último año para el que hay datos en la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas (FAO, por sus siglas en inglés). He preferido utilizar la base de datos de ese organismo denominada FAOSTAT, porque presenta las estadísticas de una manera homogénea, directamente comparable, aunque todos los datos básicos provienen de las fuentes oficiales de cada país. Lo más importante de los datos son las tendencias a través de las décadas. La gráfica 2 muestra cómo ha evolucionado el consumo calórico per cápita en los tres países y en el mundo. Lo que más sorprende es que en México aumentó el consumo calórico a fines de

los 1970, casi hasta alcanzar el promedio de Estados Unidos y sobrepasando a Canadá. Esto coincidió con el Sistema Alimentario Mexicano (SAM), un programa implementado bajo la administración de José López Portillo. Se dio en buena medida gracias a los recursos provenientes del descubrimiento de nuevos yacimientos petroleros, que permitieron la contratación de nueva deuda externa (que luego causaría la moratoria de pagos en 1982). Estaba enfocado en recuperar la autosuficiencia alimentaria, sobre todo en la producción de maíz.

GRÁFICA 2  
Norteamérica y el mundo: oferta de alimentos,  
miles de kilocalorías per cápita por día



Fuente: elaborada con datos de FAOSTAT (2021).

La gráfica 2 muestra por lo menos cuatro grandes tendencias. En primer lugar, se ve muy claramente cómo México casi llegó a igualar la ingesta calórica de Estados Unidos hacia 1980. Seguramente eso está relacionado con el SAM, que logró aumentar significativamente la oferta de comida en el país. En segundo lugar, se observa cómo Canadá y Estados Unidos vieron crecer su ingesta calórica a través del periodo, sobre todo a partir de los 1980. En el caso de Canadá, está muy claro que los mayores aumentos en su consumo alimentario se dieron después de su ingreso al TLCAN, y seguro que mucho de eso se debió a importaciones desde México. Por último, vemos que la ingesta calórica promedio en el mundo, a diferencia de la mexicana que se estancó, vio una tendencia ascendente. Si bien México en un principio divergió del promedio mundial, aumentando su consumo de alimentos hasta 1981, primero cayó por la crisis de la deuda de 1982 y luego se estabilizó sin crecimiento significativo. Ni al final del periodo México llegó al nivel de consumo que logró con el SAM en 1981. En cuarto lugar, se puede observar que en Estados Unidos el promedio de la ingesta calórica declinó a partir de la gran crisis financiera de 2007 y apenas empezó a recuperarse en 2010. Tal declinación fue muy leve en Canadá, pero más pronunciada en México dentro de su tendencia secular al estancamiento en el consumo calórico desde 1982.

A partir de estas tendencias surge un gran enigma sobre el caso mexicano: ¿cómo es posible que, con una ingesta calórica básicamente estancada y que no ha llegado al máximo alcanzado en 1981, haya crecido en el mismo periodo el porcentaje de la población con sobrepeso y obesidad en México? Este misterio sólo lo podemos resolver con un análisis no cuantitativo sino cualitativo sobre cómo han evolucionado las calorías específicas que se han venido consumiendo en nuestro país. El problema es que no todas las

calorías están hechas de igual forma. Es decir, hay calorías que vienen solas, sin nutrimentos, como el azúcar; y otras calorías que sí vienen acompañadas de elementos nutritivos como vitaminas, proteínas y minerales, como las frutas y legumbres. Las nueces y los pistachos son alimentos densos en contenido energético, pero acompañados de grasas benéficas para el cuerpo humano. El problema de ingerir un exceso de calorías que ni siquiera vienen acompañadas de elementos nutritivos es que el cuerpo las convierte en colesterol.

Aquí voy a ofrecer algunas cifras muy generales que describen la recomposición del consumo alimentario en México desde 1961 hasta 2013, que son los años para los que tenemos datos consistentes de la FAO. Como mencioné antes, el porcentaje de proteínas vegetales, en comparación con la ingesta total de proteínas, incluyendo las provenientes de los animales, sufrió un cambio dramático en México. De ser 74% en 1961, las proteínas vegetales pasaron a contribuir con tan sólo 54% en 2013. Cabe hacer notar que el promedio mundial también bajó, pero no tanto como en México: de 68 a 60%. Nótese que México inició el periodo en un nivel de casi 9% más alto que el promedio mundial. Tanto Canadá como Estados Unidos ingieren la mayor parte de sus proteínas de productos animales. Pero, al contrario de México, esos países aumentaron su consumo de proteínas vegetales, aunque lo hizo mucho más Canadá que Estados Unidos. En aquel país el aumento fue de 36% a 48%, mientras que en Estados Unidos el aumento fue de 34 a 36%, apenas perceptible.

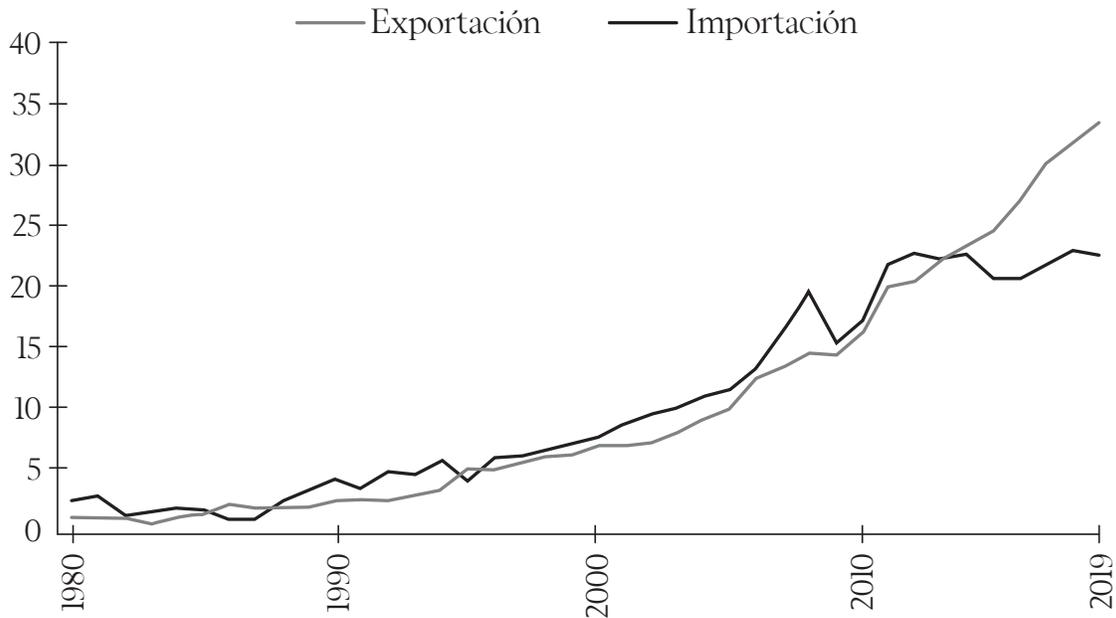
La contraparte de haber reducido tanto la ingesta de proteínas de origen animal en México es que ha aumentado notablemente la ingesta de carne, sobre todo la de pollo, como se mencionó. En 1961, la proteína animal proporcionaba apenas 13.44% de las proteínas totales consumidas en México, mientras que esa cifra fue de 22.83% en 2013. En los dos vecinos del norte, el

consumo de proteínas animales permaneció bastante estable, o por lo menos terminó el periodo con una muy leve variación. En Estados Unidos subió de 31.12% de ingesta en 1961 a 34.84% en 2013, mientras que en Canadá fue de 29.12% en 1961 y subió apenas a 29.28% en 2013. Cabe hacer notar que en Canadá este porcentaje creció bastante en los años intermedios, para llegar a un punto máximo de 35.48 en 1975, superando ese único año a su vecino del sur. Ya mencionamos que Canadá es el país que más ha aumentado el consumo de proteínas vegetales, sobre todo a partir del TLCAN.

Pasando una leve mirada sobre la importación y exportación de frutas y verduras en México, tenemos que estos fenómenos eran datos muy menores hasta mediados de los 1980. Recuérdese que la apertura comercial unilateral se dio en el país antes de ingresar al TLCAN, desde 1988. Para 1990, México ya exportaba casi mil 500 millones de dólares de estos alimentos, mientras que sólo importaba 670.66 millones. Para el final del periodo, y en el rubro de intercambio internacional sí tenemos más datos. Resulta que en 2018 ya se exportaban más de 15 mil millones de dólares en frutas y verduras, mientras que se importaban apenas 4 mil 483 millones. Es irónico, sin embargo, que estos ingresos de divisas no han sido suficientes para cubrir las importaciones totales de productos alimentarios en México en una porción importante del periodo bajo consideración. Como lo muestra la gráfica 3, hasta 2012 México tenía un déficit en la balanza comercial alimentaria. Las importaciones mexicanas habían seguido muy de cerca las mayores exportaciones de alimentos. Pero algo cambió en 2012, año a partir del cual las importaciones mexicanas se estancaron al grado de que su balanza alimentaria pasó a un superávit significativo. Este superávit, sin embargo, no compensa el mucho mayor déficit comercial que tiene México en el comercio internacional total de mercancías (FAOSTAT, 2021).

## GRÁFICA 3

México: comercio internacional de alimentos (excepto pescado)  
(miles de millones de dólares)



Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT (2021).

Pasemos a discutir cómo afecta la desigualdad socioeconómica al consumo de alimentos. Lo primero que hay que entender es que, en promedio, las familias mexicanas gastan un porcentaje mucho mayor que las canadienses o las estadounidenses en alimentos y bebidas. Antes de los 1990, mientras que los hogares mexicanos gastaban 43% de su ingreso en comida, en Canadá esa cifra era apenas 25% y en Estados Unidos 18%. Para 2006, antes de la crisis mundial de inflación en los precios de los alimentos, esas cifras cambiaron de la siguiente manera: México 26%, Canadá 17.5% y Estados Unidos 13.7%. Ya en plena crisis, en el 2008, las cifras se modificaron con un aumento significativo en el gasto alimentario promedio de los mexicanos: de 26 pasó a 29.2%; mientras que en Canadá siguió en 17.5%

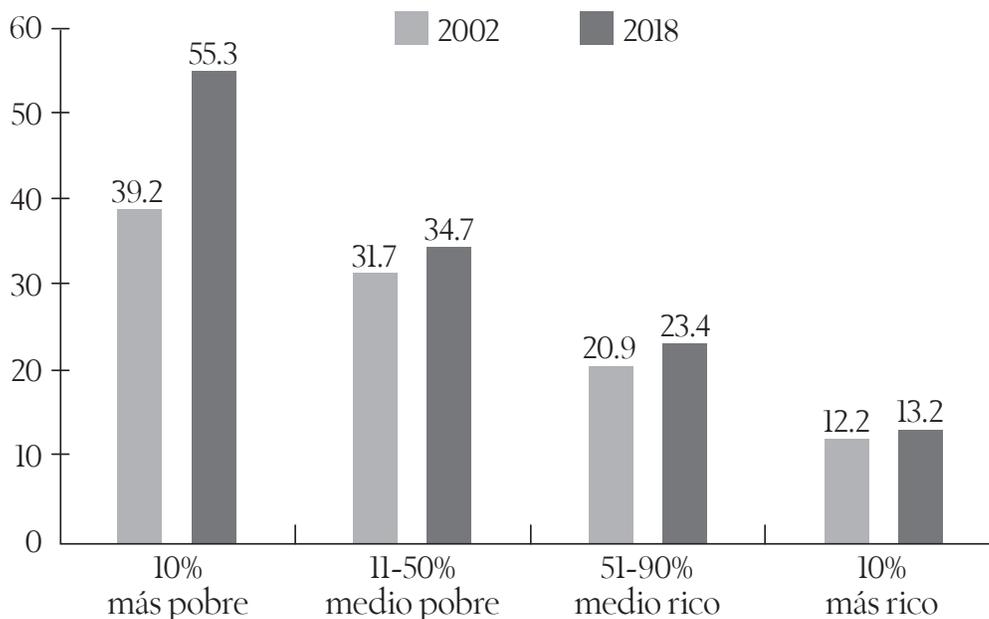
y en Estados Unidos bajó levemente a 13.6%. La razón de que en Canadá y Estados Unidos se dio una inflación imperceptible en los alimentos es que ambos países son potencias agroexportadoras mundiales. Lo que más afectó a esos países fue más bien la crisis financiera de 2008 que se empalmó con la alimentaria. Por eso cayó en Estados Unidos el consumo de algunos productos que antes eran básicos como la carne.

De este análisis en promedio de los gastos familiares para todo el país, se desglosa la desigualdad al interior de México y Estados Unidos. Así podemos hacernos una imagen más específica de lo que significa la desigualdad respecto al acceso a la compra de alimentos. A partir de datos del INEGI he calculado la porción del ingreso que gastan las familias mexicanas según el quintil de ingresos al que pertenecen. Un quintil se refiere a la quinta parte de la población. Si dividimos la población total en cinco quintiles según su nivel de ingresos, desde los más pobres hasta los más ricos, entonces podemos observar una imagen de la división de clases en México. Evidentemente no se trata de una división precisa de las clases sociales, para lo cual necesitaríamos datos más refinados. Pero la división en quintiles nos da una buena aproximación de cómo viven los mexicanos, por lo menos en lo que a los alimentos se refiere. En mi investigación exploratoria, he producido una gran cantidad de datos sobre la desigualdad en el consumo de alimentos, pero aquí sólo voy a presentar una muestra de lo que con anterioridad he llamado alimentos básicos y de lujo. Empezamos primero presentando el panorama general de cuánto gastan las familias mexicanas y las estadounidenses en alimentos, según el grupo de ingresos al que pertenecen. Las gráficas 4 y 5 presentan los datos de manera visual. Nótese que para el caso mexicano estamos usando una reclasificación de los grupos de ingreso a partir de la información que ofrece el

INEGI en deciles. Para el caso de Estados Unidos, sin embargo, los datos vienen en la forma de quintiles (grupos de ingreso, cada uno de los cuales representa 20% de la población, de menores a mayores ingresos).

Gráfica 4

México: porcentaje de ingreso familiar total gastado en alimentos



Fuente: elaborado con datos del INEGI (2002; 2018).

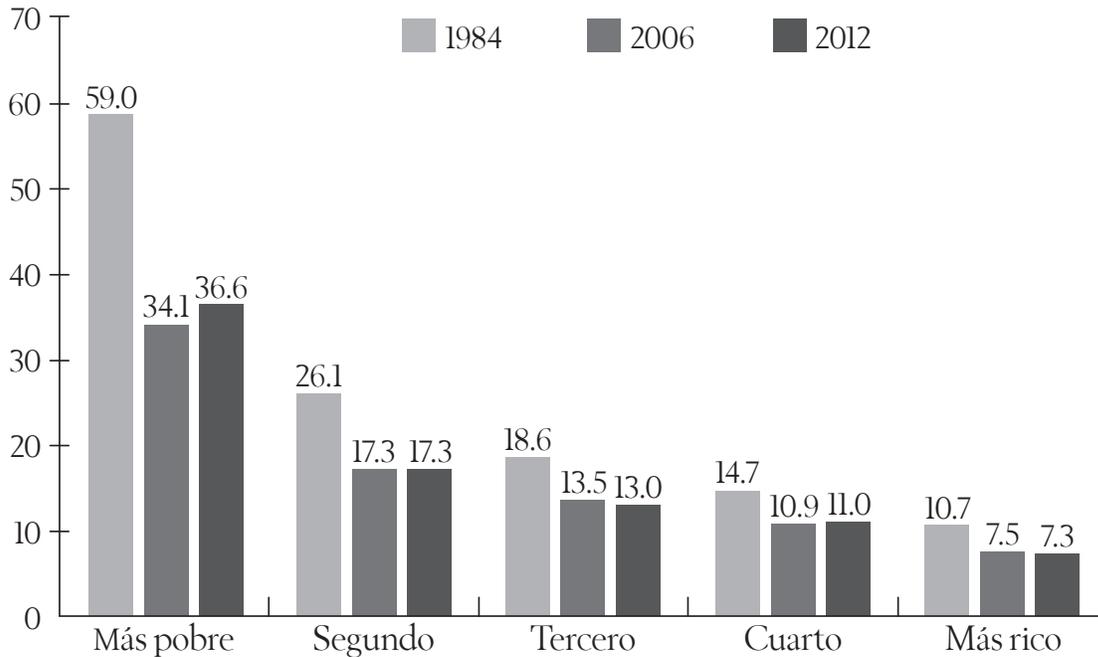
Lo más notable que presenta la gráfica 4 es que de 2002 a 2018 en todos los grupos de ingresos las familias mexicanas gastaron una porción mayor de sus presupuestos en comida. Seguramente esto es todavía una secuela del impacto que tuvo la crisis de inflación en los productos alimentarios de 2007, que se continuó hasta 2011. Si no fuera por ese aumento, entonces México se ajustaría al patrón que vemos en Estados Unidos, en el sentido de que las familias gastan cada vez una menor parte de su presupuesto en alimentos

(véase gráfica 5). Pero como México es un país con una fuerte dependencia de la importación de alimentos, entonces sus familias son más vulnerables a la inflación de los precios. Lo más trágico que nos muestra esta gráfica es que las familias en 10% más pobre de los grupos de ingresos tuvieron que gastar 41% adicional del monto que gastaban en 1984 para sobrevivir.

La imagen que presenta la gráfica 5 es muy diferente a la anterior. Por una parte, sorprende lo elevado del gasto alimentario de las familias ubicadas en el quintil más pobre, sobre todo en 1984. Por otra parte, si comparamos lo que gastan las familias de los quintiles segundo al más rico, entonces vemos lo que significa vivir en un país desarrollado: la mayoría de las familias tiene que gastar porciones menores de su ingreso en los alimentos, menores por lo menos en comparación con lo que gastan las familias de México. Para 2012, las familias estadounidenses de 80% más afluente gastaban menos de 20% en alimentos. Es fundamental destacar que los porcentajes que corresponden a cada quintil se refieren a montos absolutos muy diferentes. Es decir, 10% del quintil más rico refleja una cantidad monetaria mucho más alta que 10% del ingreso del quintil más pobre. Por eso es necesario hacer un análisis complementario en el que comparemos cuánto gastan las familias más pobres en comparación con el gasto absoluto de los más ricos. Como se mencionó para el caso de México, el INEGI construye datos que presentan una división de los grupos de ingresos familiares por deciles. La población está dividida en diez grupos de ingresos llamados deciles. Si convertimos el total del gasto de 10% más rico en 100% y luego comparamos los montos de los grupos más pobres con esa cantidad, podemos tener una idea más clara de lo que significa la desigualdad en cuanto al acceso a los alimentos. Este análisis lo presento en las siguientes gráficas.

Gráfica 5

Estados Unidos: porcentaje de gasto familiar total en alimentos



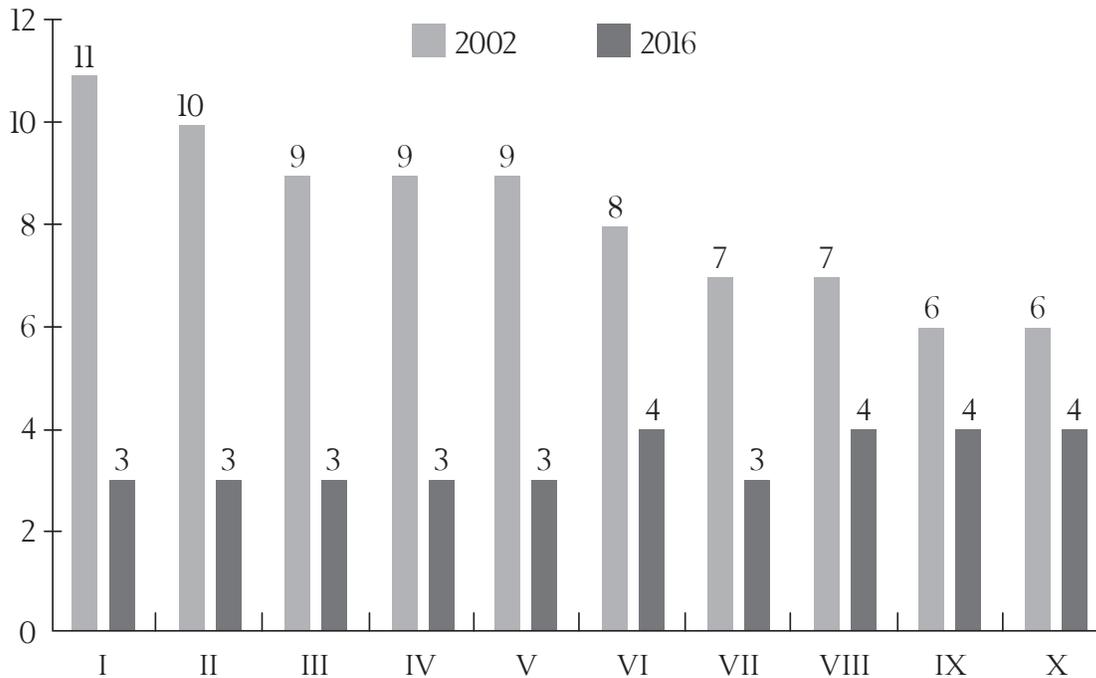
Fuente: elaborado con datos de Consumer Expenditure Survey, U.S. Bureau of Labor Statistics, publicados en 1985, 2007, 2013, respectivamente.

La gráfica 6 muestra el porcentaje de gasto alimentario total familiar en fruta, por deciles. Las frutas son un ejemplo de los alimentos de lujo por tener en general precios más altos que los alimentos densos en energía como las tortillas. Cada decil representa 10% de los hogares mexicanos, según su ingreso respectivo, desde los más pobres (I) hasta los más ricos (X). Resulta que, concentrándonos por un momento en 2016 en esta gráfica, entre más ricas eran las familias podían dedicar una mayor parte de su presupuesto alimentario en frutas. Por el contrario, las familias de los deciles más pobres difícilmente se podían dar ese lujo; dedican la mayor parte de su gasto a comprar los alimentos básicos más accesibles. Sin embargo, esos porcentajes

eran muy diferentes en 2002. En este año, las familias de los hogares más pobres, de los deciles I al IX, dedicaban porciones más altas que el decil más rico al gasto en frutas. Ahora bien, tenemos que relativizar todos estos datos: debe quedar claro que 4% del gasto por parte del decil más rico representa una cantidad en pesos corrientes mucho mayor que porcentajes similares para deciles más pobres, pues cada proporción tiene una base numérica diferente. En pesos corrientes, en 2016, el decil más rico gastaba mil 136 por trimestre en fruta, mientras que el más pobre gastaba apenas 305. Es decir, en la gráfica 6 los porcentajes son relativos a los montos que gastaban los hogares dentro de sus muy diferenciadas posibilidades. Conviene, entonces, hacer un análisis adicional para formarnos una idea de la desigualdad de clases y las diferencias que tienen las familias en cuanto al acceso a la compra de alimentos comparándolo con el gasto del decil más rico. En las gráficas 7-10 he igualado el gasto total en alimentos del decil más rico a 100%. Luego se calcula qué porcentaje de ese monto de dinero en pesos corrientes fue gastado por los hogares de los demás deciles reordenados por grupos de ingresos. Estos grupos van desde el decil más pobre, pasando por la suma de los deciles II al V, o sea 11-50% «medio pobre», luego la suma de los deciles VI al IX, o sea de 51-90% «medio rico», hasta el décimo decil (X) más rico. El décimo decil aparece siempre como 100% de referencia contra el cual se comparan los gastos de los demás grupos de ingresos.

Gráfica 6

México: porcentaje del gasto alimentario total en frutas, por deciles

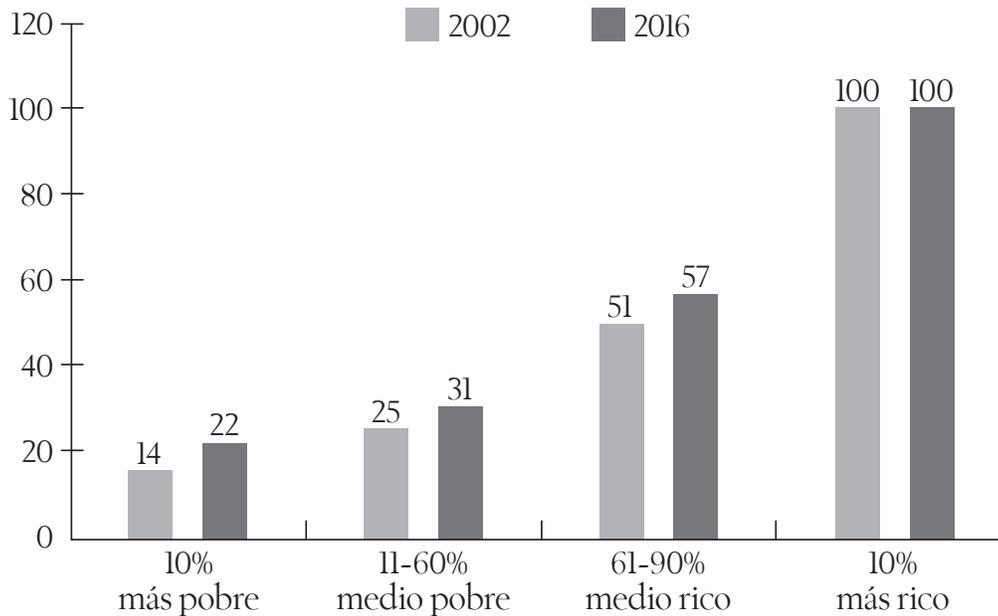


Fuente: elaborado con datos del INEGI (2002; 2016).

En la gráfica 7 se constata que entre más pobres sean las familias en general pueden gastar un monto de pesos corrientes menor comparado con el que gastan las familias del decil más rico. La tendencia general es que en cada grupo de ingreso los hogares gastan porciones levemente superiores con el paso del tiempo, de 2002 a 2016 —lo inverso de la tendencia en Estados Unidos. Esto se debe a la desigualdad interestatal, entre México y Estados Unidos. En términos más concretos, tal tendencia está relacionada con el hecho de que México se ha convertido en un gran exportador de frutas y verduras, lo cual ha redundado en su encarecimiento en el mercado interno (Otero, 2011; 2018).

Gráfica 7

México: porcentaje del gasto total en alimentos (decil más rico = 100%)



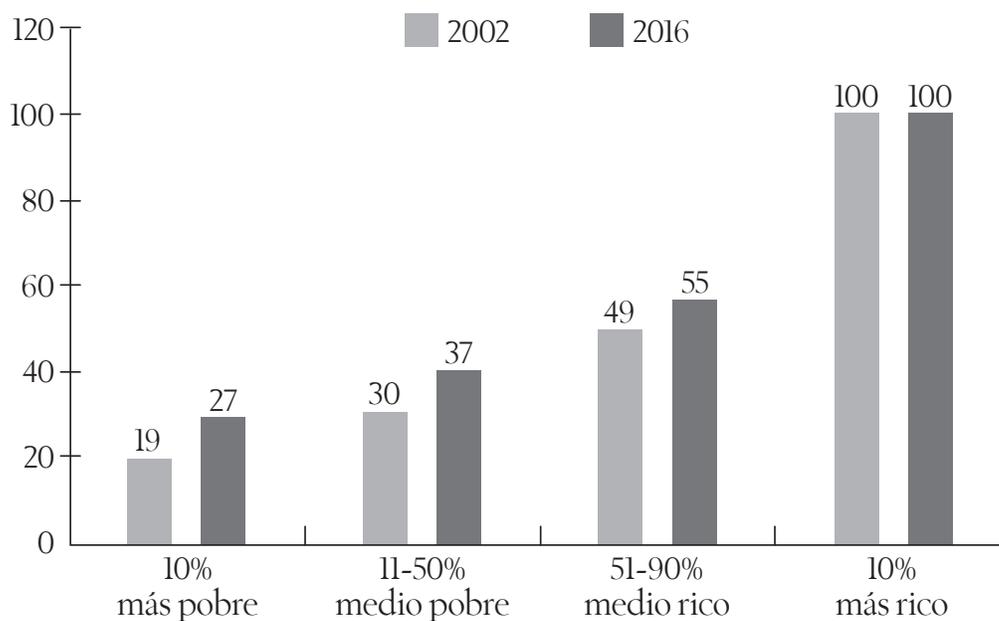
Fuente: elaborado con datos del INEGI (2002; 2016).

La gráfica 8 deja muy claro que, en general, comparados con el decil más rico, los grupos de ingresos menos afluentes siempre gastan un porcentaje menor de dinero en alimentos en general y en frutas en particular. Revisando los gastos en un alimento de lujo, como las frutas, por ejemplo, el acceso diferencial entre ricos y pobres queda completamente de manifiesto: entre más ricas sean las familias, más gastan en frutas —porque pueden hacerlo. El contraste más fuerte entre alimentos de lujo y alimentos básicos lo podemos observar con el ejemplo de la tortilla en la gráfica 9: ya para 2016, todos los grupos de ingresos menos afluentes gastaban un monto absoluto mayor en tortillas que el decil más rico. Evidentemente, esto se debe a que las tortillas, por más que su precio ha aumentado continuamente desde 2006, en términos relativos siguen siendo más baratas que otros alimentos, especialmente

los de lujo como las carnes, las frutas y verduras, las bebidas alcohólicas y el pescado. Tenemos entonces que el gasto en alimentos básicos muestra una tendencia contraria al gasto en comida de lujo: los hogares de los deciles más pobres gastan una mayor cantidad de dinero en estos productos, aunque en términos absolutos dichos montos sean menores en la mayoría de los casos de lo que gasta el decil más rico —la excepción, como lo muestra la gráfica 9, es el caso de las tortillas. Es evidente que los alimentos básicos, sean o no saludables, cuestan más baratos que los alimentos de lujo. Por tanto, el sobrepeso y la obesidad son fuertes riesgos para las clases trabajadoras de ingresos bajos y medios, lo cual incluye a cerca de 90% de la población. Los ricos tienen la opción de hacer un consumo alimentario saludable, mientras que a los más pobres no les alcanza ni siquiera para una dieta densa en calorías.

Gráfica 8

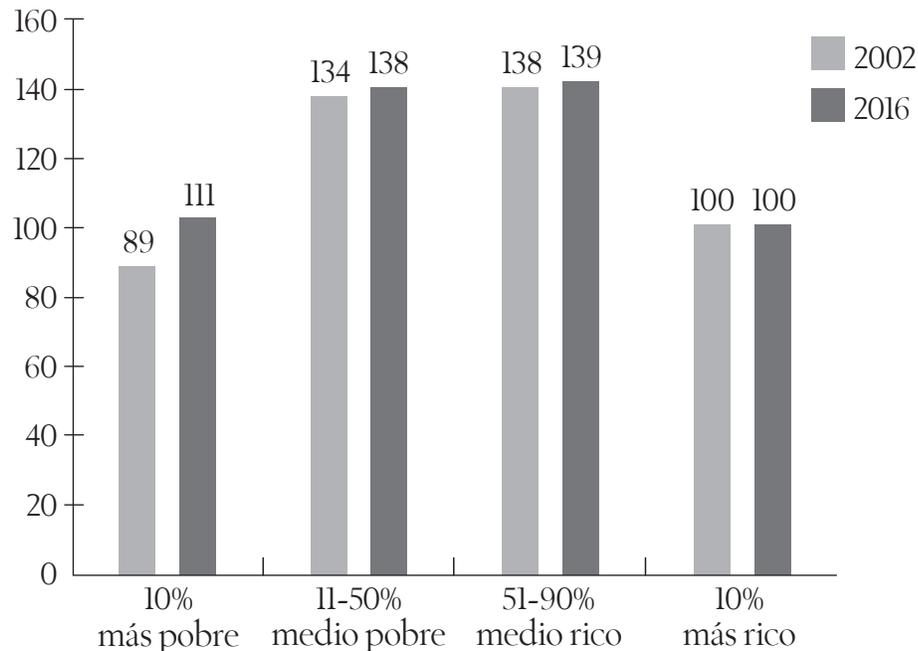
México: porcentaje del gasto en frutas (decil más rico = 100%)



Fuente: elaborado con datos del INEGI (2002, 2016).

Gráfica 9

México: porcentaje del gasto en tortillas (decil más rico = 100%)



Fuente: elaborado con datos del INEGI (2002, 2016).

## Conclusión

Puesto que ya había adelantado la conclusión de este trabajo, aquí solamente la reitero: más que un asunto cultural, el acceso a los alimentos es una cuestión fundamentalmente económica condicionada por dos formas fundamentales de desigualdad: la que existe entre los Estados nación y la que existe entre las clases sociales. Aquí ofrecí algunos datos sobre el desempeño del producto doméstico per cápita de los tres países de Norteamérica y se mostró que México sigue siendo un país tan rezagado como lo era en 1994. Respecto a la segunda gran desigualdad —existen otras—

ofrecí un análisis sobre el acceso a los alimentos por parte de diversos grupos de ingresos. Fue necesario este tipo de análisis como representación de un análisis estrictamente sobre las clases sociales en sí. Aquí hemos utilizado datos sobre los grupos de ingresos por deciles, desde los más bajos hasta los más altos. La gente que tiene mayores ingresos tendrá la posibilidad de comprar alimentos más nutritivos que la gente de ingresos bajos o medios. Esta es una obviedad que parece escapárseles a quienes argumentan que los problemas del sobrepeso y la obesidad se podrían resolver si la gente supiera escoger su comida. Se podría decir que la gente más rica sí tiene el libre albedrío para comprar los alimentos que guste, incluidos los llamados alimentos chatarra. Pero la gente de ingresos más bajos está muy limitada en sus opciones a lo que sus presupuestos les permiten comprar.

Tenemos entonces que las dietas, son dietas de clase. Entre más rica sea la gente, más puede comprar alimentos nutritivos. Por el contrario, las familias de ingresos medios y bajos sólo tienen la opción de comprar los alimentos más baratos y probablemente densos en contenido calórico y bajos en nutrición. Los más pobres ni siquiera tienen un acceso calórico suficiente. Nadie puede negar que los alimentos densos en contenido calórico pueden ser bastante sabrosos. Por eso el anuncio de Sabritas retaba al consumidor: «a que no puedes comer sólo una». De hecho, las compañías agroalimentarias invierten fuertes sumas de dinero en contratar científicos que diseñen las recetas que mejor combinen grasas, azúcares y sales para dar el mayor efecto en sabor. En inglés a esto se le llama lograr el *bliss point*, que se puede traducir como el «punto de la dicha».

En resumen, aquí he enfatizado dos factores principales que dan cuenta de la dieta neoliberal. El primer factor se refiere a la liberalización económica por la que ha pasado México y que ha profundizado su dependencia

económica de Estados Unidos. A esto le podemos llamar la desigualdad interestatal. El segundo tipo de desigualdad es la creciente disparidad económica entre las clases al interior del país. Un tercer factor que se podría apuntar es la consecuencia principal de los primeros dos factores: el colapso de la economía campesina en México, que a su vez profundizó la desigualdad entre las clases sociales, arrojando a una gran cantidad de campesinos a los mercados de trabajo urbanos e internacionales. Y también hizo al país más dependiente de la importación de más de 60% de los alimentos básicos de Estados Unidos. Con la bancarrota de los campesinos, México perdió su capacidad para seguir teniendo una cocina tradicional que fuese accesible para las grandes mayorías de la población. Por el contrario, la comida mexicana se convirtió en algo muy apreciado en el exterior (Gálvez, 2018), pero inaccesible dentro del país. Ahora lo que más abunda es la comida ultraprocesada, densa en contenido calórico, y los restaurantes de comida estadounidense. Basta recorrer alguno de los nuevos centros comerciales en Monterrey, por ejemplo, para ver lo difícil que es conseguir un restaurante de comida mexicana. Casi todos los restaurantes en dichos centros son franquicias de los estadounidenses.

El cambio tan significativo que ha tenido la dieta mexicana se llevó unas cuatro décadas para instalarse, desde los 1980. Por tanto, llevará tiempo recuperar la soberanía alimentaria. Uno de los desafíos que tendrá el gobierno de la llamada cuarta transformación para encaminarse en esa dirección será la obligación de ajustarse al T-MEC, lo cual obliga al país a continuar en su relación de dependencia alimentaria de las importaciones. Pero también existen fuerzas sociales que van a oponer una gran resistencia. Me refiero a la burguesía agraria mexicana y a las grandes agroempresas multinacionales para las cuales ha sido muy redituable el nuevo modelo

que resultó en la dieta neoliberal. Aún dentro de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) del gobierno de México están reflejadas las fuerzas del cambio y las de resistencia. Su secretario, Víctor Villalobos, es un representante del sector agroindustrial. Por otra parte, el subsecretario Víctor Suarez sí proviene del movimiento campesino. Dada la jerarquía institucional, es difícil ver cómo una opción campesina y agroecológica se pueda impulsar exitosamente en este contexto. El gobierno tendría que hacer mayores esfuerzos por consolidar la vía campesina y agroecológica.

## Referencias

- BBC News* (2018). «Sugar tax: are Mexicans the fattest people in the world?» *BBC News*. Recuperado de <https://www.bbc.com/news/world-43668927>
- Economic Research (s/f). «Federal Reserve Bank of St. Louis». Recuperado de <https://fred.stlouisfed.org/>
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAOSTAT) (2020). «Mexico». Recuperado de <http://www.fao.org/faostat/en/#country/138>
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAOSTAT) (s/f). «Commodity Balances (non-food)». Recuperado de <http://www.fao.org/faostat/en/#data/cc>
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAOSTAT) (s/f). «Crops and livestock products». Recuperado de <http://www.fao.org/faostat/en/#data/TP>
- Gálvez, A. (2018). *Eating NAFTA: trade, food policies, and the destruction of Mexico*. Oakland: University of California Press.

- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (2019). «Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2018. Nueva serie». Recuperado de <https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2018/#Tabulados>
- Mendoza, J. (2021). «Supermarkets in Mexico: statistics & facts». *Statista*. Recuperado de <https://www.statista.com/topics/5761/supermarkets-in-mexico/>
- Monteiro, C., Moura, E., Conde, W. y Popkin, B. (2004). «Socioeconomic status and obesity in adult populations of developing countries: a review». *Bulletin of the World Health Organization*, 82 (12), pp. 940-946.
- Otero, G. (2011). «Neoliberal globalization, NAFTA and migration: Mexico's loss of food and labor sovereignty». *Journal of Poverty*, 15(4), pp. 384-402.
- Otero, G. (2018). *The neoliberal diet: healthy profits, unhealthy people*. Austin: University of Texas Press.
- Pilcher, J.M. (1998). *Que vivan los tamales: food and the making of Mexican identity*. Albuquerque: University of New Mexico Press.



Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons  
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional



## Prácticas materiales de cuidado de la agrobiodiversidad como marco simbólico para la gobernanza ambiental en el sur de Tolima, Colombia

Megan Dwyer Baumann\*

*Resumen.* La literatura en agrobiodiversidad examina de manera general las interacciones entre plantas y humanos en paisajes agrícolas y con frecuencia se interesa por la gobernanza de las semillas como recurso genético. Este artículo desvía la atención de la agrobiodiversidad como un conjunto de recursos genéticos gobernables para examinar cómo los aspectos relacionales de la agrobiodiversidad simbolizan una visión futura de gobernanza ambiental. Al recurrir a planteamientos informados en la ecología política sobre la gobernanza ambiental y la ética feminista del cuidado, los resultados ilustran que las prácticas materiales de «cuidado pleno» de la agrobiodiversidad, en particular los intercambios de semillas, huertas caseras y cocinas, se volvieron un marco simbólico para la gobernanza ambiental en el cual el acceso a la tierra, comida y cohesión comunitaria son garantizados y protegidos.

*Palabras clave:* agrobiodiversidad, gobernanza ambiental, ética feminista del cuidado, desarrollo rural, Colombia.

\* Departamento de Geografía, Pennsylvania State University. Correo-e: [mdbaumann@gmail.com](mailto:mdbaumann@gmail.com)

Practices of care agrobiodiversity  
as a symbolic framework for environmental governance  
in the southern region of Tolima, Colombia

*Abstract.* The literature on agrobiodiversity examines in a broad way the interactions between plants and humans in farming biomes, and often includes the study of the governance of seeds as a genetic resource. This article turns its attention to agrobiodiversity as a mesh of manageable genetic resources in order to examine how the characteristics of agrobiodiversity symbolize a vision of future environmental governance. First reviewing the existing perspectives in political ecology on environmental governance and feminist ethics of care, the results of this study reveal that the established practices of «total care» of agrobiodiversity, in particular the exchange of seeds, vegetable gardens and kitchens, have become a symbolic framework for environmental governance in which Access to land, food and community cohesion are guaranteed and protected.

*Keywords:* agrobiodiversity, environmental governance, feminist ethics of care, rural development, Colombia.

## Introducción

La agrobiodiversidad, o la biodiversidad de los ecosistemas agrícolas, incluye no sólo los aspectos biológicos de las interacciones entre humanos y plantas, sino que también consiste en factores sociales y bioculturales (Leclerc y d'Eckenbrugge, 2012; Nemogá, 2016; Zimmerer *et al.*, 2019). Los aspectos relacionales de la agrobiodiversidad incluyen acciones como los intercambios de semillas, los productos culinarios o artesanales ligados a variedades específicas, o prácticas comunitarias de cultivo, entre otros ejemplos (Abizaid *et al.*, 2016; Chambers y Momsen, 2007; Delêtre *et al.*, 2011). Las prácticas relacionales centradas en la agrobiodiversidad contribuyen a delinear las dinámicas comunitarias, incluyendo su ontología, identidad, roles de género y sus economías (Aistara, 2011; Kerr, 2014; Schöley y Padmanabhan, 2017). Más que un número de variedades de plantas para ser gobernadas, la agrobiodiversidad, como un conjunto de prácticas relacionales, con frecuencia se centra en las variedades de semillas y material vegetal (Zimmerer *et al.*, 2019b). Las prácticas materiales en torno a las semillas crean «paisajes de cuidado» (Graddy-Lovelace, 2020), en los que prácticas culturales, tradiciones y conocimiento ambiental local invisten las semillas de significado (Aistara, 2019; Moreno, 2016; Reyes-García *et al.*, 2009). Adicionalmente, estudios recientes resaltan la forma en que cualidades emergentes de las interacciones entre plantas y humanos pueden desencadenar cambios relacionales positivos en las interacciones humano-ambientales. Por ejemplo, las prácticas agrícolas basadas en sistemas diversos pueden inspirar redes agroecológicas (Sherwood *et al.*, 2017), inspirar movimientos sociales para resistir las regulaciones estatales (Silva y Gutiérrez, 2020), o formar la base para

transformaciones en el sistema alimentario en respuesta a abruptas crisis o cambios (Abizaid, Panduro y Egusquiza, 2020; Zimmerer *et al.*, 2020). Respondiendo a la necesidad de prestar más atención a las funciones relacionales de la agrobiodiversidad (Visser *et al.*, 2019), hago uso de planteamientos de la ética feminista del cuidado y la gobernanza ambiental para analizar cómo las prácticas de cuidado de la agrobiodiversidad producen un marco simbólico para la gobernanza de las relaciones humano-ambientales. Esto lo hago examinando en conjunto las prácticas relacionales de agrobiodiversidad y las visiones enfrentadas de gobernanza ambiental en una región de posconflicto en el Tolima, en Colombia.

Los resultados presentados integran datos cualitativos de entrevistas y observación participante con datos cuantitativos de una encuesta por hogares, que provienen de una investigación conducida en el curso de 12 meses en dos municipios del sur del Tolima. Durante el conflicto interno colombiano de casi 80 años, los habitantes del sur del Tolima experimentaron olas de violencia y ocupación por grupos armados, quienes los desplazaban de sus tierras y los desconectaban de sus vecinos y familias. Después del Acuerdo de Paz de 2016 entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), las comunidades en posconflicto están en el proceso de reparar y reconectar sus relaciones mutuas y con la tierra. En la medida en que la región se cura del pasado, también negocia futuras relaciones humano-ambientales. Un megaproyecto de irrigación suspendido en la región ha estado sin regulación o financiación estatal desde 2015, lo que ha creado tensiones en torno al futuro de la tierra y el acceso al agua. De manera importante, los reclamos sobre el agua y los recursos de la tierra despiertan memorias de la violencia y desplazamiento pasados, entretejiendo así los procesos de reparación del

posconflicto con la gobernanza ambiental presente y futura sobre el agua y la tierra. Al reflexionar a través de los marcos de la ética feminista del cuidado y la gobernanza ambiental, sugiero que las prácticas materiales de la agrobiodiversidad entre las comunidades del sur del Tolima realizan un trabajo reconectivo para curar pasadas relaciones humano-ambientales y, en respuesta a cambios de desarrollo presentes, volverse un marco simbólico para una gobernanza futura de los recursos. Empleo la palabra «marco» para indicar un mapa de ruta o marco teórico para las visiones de la administración y orden social de las relaciones humano-ambientales, visiones que son a la vez ideológicas y prácticas materiales.

Empleo la literatura sobre agrobiodiversidad para entender mejor cómo los valores y prácticas de los habitantes del Tolima, centrados en diversas variedades de semillas y sistemas agrícolas diversificados, se traducen en una visión simbólica de gobernanza de uso de recursos. Investigadores han ilustrado cómo las interacciones con semillas pueden crear lazos relacionales fuertes entre humanos, y entre humanos y el ambiente (Aistara, 2019; Carney, 2009). En un marcado contraste con esas relaciones conectivas, el conflicto armado corta y desplaza las relaciones humano-ambientales (Ingalls y Mansfield, 2017; Suarez *et al.*, 2018; Tamariz, 2020; Wrathall *et al.*, 2020). Aunque los académicos han sugerido el potencial trabajo reparativo de las semillas en áreas de posconflicto (Zimmerer, 2017), ha habido algunos estudios sobre cómo las prácticas de agrobiodiversidad pueden funcionar para (re)conectar las relaciones humano-ambientales (para excepciones ver Hernández *et al.*, 2020; Moreno, 2016). Utilizo literatura sobre la ética feminista del cuidado para entender cómo los trabajos diarios de cuidado conducen a reimaginar las relaciones socioambientales más amplias, y específicamente los sistemas agrícolas, que priorizan un acceso equitativo a los recursos y

la interdependencia humano-ambiental (Lawson, 2007; Whyte y Cuomo, 2019). Los resultados de esta investigación sugieren que las prácticas materiales de cuidado de la agrobiodiversidad restablecen y crean cohesión social y oportunidades de sustento en medio de un uso del suelo y dinámicas comunitarias cambiantes. Además, tales prácticas de cuidado centradas en intercambios de semillas, jardines y cocinas se manifiestan todas juntas como un marco simbólico de una gobernanza ambiental más cuidadosa que promueve un uso equitativo de los recursos, acceso a comida y mantenimiento de tradiciones culturales e identidades sociales.

Esta investigación hace dos contribuciones principales a los estudios de agrobiodiversidad relacional. Primero, al traer planteamientos de la ética feminista del cuidado a la agrobiodiversidad, argumento que las prácticas materiales y las labores de la agrobiodiversidad crean conexiones «cuidado-pleno»<sup>1</sup> (Bauhardt *et al.*, 2019) tanto entre los humanos como entre los humanos y el medio ambiente. La aproximación teórica de la ética feminista del cuidado provee un puente analítico a través del cual entender cómo las prácticas de cuidado se vuelven una visión de gobernanza ambiental, constituyendo así una alternativa al estilo neoliberal de la revolución verde del desarrollo rural que con frecuencia acompaña el desarrollo de riego a gran escala. Por lo tanto, mi investigación hace una segunda contribución al sugerir que la agrobiodiversidad no es simplemente un conjunto de relaciones y materiales vegetales para ser gobernados, sino que también tiene una función simbólica fuerte que influencia la gobernanza socioambiental más amplia.

<sup>1</sup> N. del T. *Care-full* es el original en inglés de esta expresión. La autora se apoya en la similitud con el adjetivo *careful* (su lectura es idéntica), y al añadirle la terminación *full* hace énfasis en lo pleno de cuidado de estas prácticas. Aunque una traducción más correcta en español sería *cuidadosas*, la expresión *cuidado-pleno* resulta más precisa para el argumento. De aquí en adelante, la versión en inglés acompañará la traducción.

## Marco teórico: integrando agrobiodiversidad, gobernanza ambiental y ética feminista del cuidado

### *Agrobiodiversidad*

La agrobiodiversidad se entiende como un conjunto amplio de relaciones e interacciones entre humanos y plantas a través de escalas, y centra el papel activo de los humanos en conservar, fomentar e interactuar con una diversidad de especies en contextos agrícolas (Zimmerer *et al.*, 2019). Estudios en agrobiodiversidad emplean los aspectos bióticos de las especies de plantas, paisajes y genes, adicionalmente a preguntas sobre historia, cultura e identidad (Leclerc y d'Eeckenbrugge, 2012; Schöley y Padmanabhan, 2017). Un cuerpo significativo de investigación sobre la agrobiodiversidad hace énfasis en la conservación *in situ* y los intercambios geográficos de semillas y material vegetal (Coomes, 2010; Van Etten y De Bruin, 2007; Zimmerer, 2003). En este artículo uso «semillas» para referirme e incluir tanto las semillas como otro material de siembra (tubérculos, rizomas, plántulas y esquejes). Un cuerpo paralelo de investigación y política pública examina y critica la agrobiodiversidad *ex situ*, o la conservación de material de semillas en bancos de semillas para futura modificación o emergencias (Pautasso *et al.*, 2013; Sperling y McGuire, 2012). En la literatura interesada en la conservación *ex situ* de la agrobiodiversidad, las estructuras de gobernanza desempeñan funciones destacadas en la medida en que las semillas se entienden como «instrumentales» (Visser *et al.*, 2019:284) para los paisajes, sistemas de comida y agronegocios. Tanto en los estudios sobre *ex* como *in situ*, la agrobiodiversidad se vuelve un objeto o un conjunto de relaciones para ser gobernadas, manifestada tanto por regulaciones nacionales como internacionales de las interacciones entre

humanos y el material vegetal (Graddy-Lovelace, 2017; Montenegro de Wit, 2016; 2018). En esas literaturas, el término agrobiodiversidad se refiere de manera general a conceptos agronómicos de sistemas agrícolas diversificados y a la conservación del material genético de las semillas.

Un cuerpo asociado de literatura examina la agrobiodiversidad a través de marcos más relacionales, examinando con frecuencia el sector informal de las semillas (Almekinders y Louwaars, 2002; Coomes *et al.*, 2015) donde las semillas están imbuidas de significado y circulan a través de prácticas cotidianas, lo que Turnhout, Waterton, Neves y Buizer (2013:158) llaman «vivir con» la agrobiodiversidad. Las semillas asumen diferentes significados dependiendo de los usuarios, estando los significados generalmente ligados a ontologías tradicionales o indígenas (Graddy, 2013; Nemogá, 2018; Nemogá, 2016). Las relaciones sociales pueden centrarse alrededor de prácticas de agrobiodiversidad, creando «redes de relacionamiento» (Aistara, 2011:492) que unen a las comunidades para colaborar en prácticas culturales de cultivo (Meinzen-Dick y Eyzaguirre, 2009). Por ejemplo, Isakson (2009) y Schmook, Van Vliet, Radel, Manzón-Che y McCandless (2013) muestran cómo la creciente tradición de la *milpa* (un policultivo de subsistencia familiar basado en maíz y otras especies domesticadas y semidomesticadas) era tan importante para la identidad cultural de campesinos guatemaltecos y mexicanos, respectivamente, que los productores aseguraban un espacio en la finca y los recursos económicos para sostener la práctica de la *milpa*, incluso si en las casas tenían otros cultivos para el mercado o trabajadores migrantes. En este artículo, mi uso del término agrobiodiversidad se refiere a las relaciones humano-ambientales producidas a través de prácticas materiales, muchas de las cuales cargan importantes significados para los usuarios.

Es a través de prácticas como la *milpa* o el intercambio de semillas que la agrobiodiversidad contribuye a hacer lugar,<sup>2</sup> un proyecto fundamentalmente relacional, cultural y político iniciado con frecuencia en reacción a amenazas contra la identidad y la confianza colectiva (Aistara, 2019). La acción de hacer lugar, a través de la cual los humanos se conectan y encuentran significado en sus interacciones con las plantas y el ambiente, se basa en elementos afectivos como la memoria (Nazarea, 2006). Las tradiciones culinarias son una parte crítica de las prácticas de agrobiodiversidad, en cuanto el sentido del gusto, especialmente, desencadena recuerdos vívidos, haciendo que las semillas, sus frutos y recetas preparadas sean particularmente importantes para la acción conectiva de hacer lugar (Aistara, 2014; Jordan, 2015). Las cocinas y las huertas caseras son entonces lugares importantes en los que las relaciones de agrobiodiversidad son formadas (Abizaid *et al.*, 2016; Camacho, 2013; Chambers y Momsen, 2007; Galluzzi *et al.*, 2010). Principalmente, las cocinas, huertas y ciertos cultivos son tradicionalmente espacios *generizados* que revelan el papel particularmente importante de las mujeres como consumidoras, conservacionistas y promotoras de la agrobiodiversidad (Carney, 2008; Padmanabhan, 2007; Sachs, 1996). A través de prácticas materiales como la cocina, intercambios de semillas y sistemas de cultivo culturalmente importantes, la agrobiodiversidad se vuelve un conjunto de interacciones conectivas humano-ambientales que trabajan hacia el bienestar social, económico y nutritivo de la casa y la comunidad (Jones *et al.*, 2018; Kerr, 2014).

Los significados relacionales instilados en las semillas y producidos a través de prácticas materiales también pueden ser movilizados en acciones sociales en esferas más públicas. También retomo planteamientos

<sup>2</sup> N. del T. Hace referencia a un concepto originalmente en inglés, *placemaking*.

de recientes investigaciones sobre las cualidades emergentes de la agrobiodiversidad producidas tanto a través de relaciones afectivas como de conexiones entre prácticas de diversidad de semillas y cambios globales relacionados (Zimmerer *et al.*, 2020). Las «potencialidades» de la agrobiodiversidad, por ejemplo, pueden ser definidas por la visión del mundo de los usuarios y significar formas de agricultura más sostenibles o interconectadas (Visser *et al.*, 2019). Los colaboradores del volumen editado por Sherwood, Arce y Paredes (2017) ilustran cómo las interacciones entre plantas y personas pueden provocar movimientos sociales, conciencia política u organización comunitaria. De manera similar, Mullaney (2014) llama la atención sobre el acto político intencional de los productores mexicanos en sembrar variedades nativas o «criollas» de maíz para resistir la promoción que hace el gobierno de monocultivos de maíz genéticamente modificados. Silva y Gutiérrez (2020) demuestran que las prácticas de semillas en las regiones colombianas informan protestas contra leyes y regulaciones nacionales de semillas que privilegian la agroindustria. En muchas comunidades, tanto en Colombia como globalmente, las visiones del mundo valoran los elementos más que humanos de las plantas y suelos, y tales perspectivas guían la gobernanza de las relaciones humano-ambientales (Graddy, 2013; Lyons, 2020; Toro, 2009). Las conexiones entre las prácticas materiales de agrobiodiversidad y sus manifestaciones políticas discursivas merecen más atención académica. Conecto estos espacios examinando cómo las prácticas materiales y relacionales de la agrobiodiversidad en contextos más íntimos y, con frecuencia, *generizados*, se traducen en un marco simbólico para la gobernanza ambiental que se moviliza en la esfera pública.

*Ética feminista del cuidado*

Para comprender las (re)conexiones hechas a través de prácticas relacionales en torno a las semillas agrobiológicas y su movilización en un marco de gobernanza, aprovecho las ideas de la ética feminista del cuidado (de aquí en adelante, ética del cuidado). Basada en una «ontología social de conexión» (Lawson, 2007:3), la ética del cuidado pone en primer plano la interdependencia y mutualidad de las relaciones humanas a través de escalas (Held, 2006; Williams, 2018). El énfasis de la ética del cuidado en la visión relacional del yo y la importancia de la diferencia interpersonal desplaza la comprensión de justicia lejos de la autonomía, los derechos y la imparcialidad (Noddings, 1986; Young, 2008). Esencial a la delimitación de este artículo, los académicos han teorizado la ética del cuidado a través de las prácticas materiales de la labor de cuidado (Hekman, 1995; Kittay, 2020; Noddings, 1986). Si bien la ética del cuidado les presta atención a las labores de cuidado generalmente asociadas con funciones y espacios tradicional y simbólicamente pensados como espacios de mujeres, la investigación también enfatiza que las prácticas de cuidado son a la vez desempeñadas por y para el beneficio de personas de todos los géneros (Elliott, 2016; Jordan, 2020). Académicos feministas muestran que una ética del cuidado fomenta un sentido de responsabilidad no sólo con las relaciones íntimas o familiares, sino también de justicia y equidad para con extraños en la sociedad más amplia (Cash *et al.*, 2006; Massey, 2004; Miller, 2011).

A través de atención empírica a lo que ofrecen las prácticas materiales en forma de significado, la ética del cuidado abre un espacio analítico en el cual teorizar formas alternativas de estructurar las relaciones humano-ambientales (Dowler y Ranjbar, 2018; Lawson, 2007). Académicos

de la ecología política feminista y la economía política en particular han mostrado cómo las prácticas materiales de cuidado posibilitan reimaginar economías y ecologías más «cuidado-pleno» (*care-full*) (Bauhardt *et al.*, 2019; Gibson-Graham, 2005). Específicamente para las relaciones humano-ambientales, el interés académico en marcos relacionales y más que humanos han ligado la ética del cuidado a temas de preocupación ecológica (Puig de la Bellacasa, 2017; 2010). Aquí, la definición amplia de trabajo de cuidado de Fisher y Tronto ha sido fundacional: «[El trabajo de cuidado es] una *actividad de especie que incluye todo lo que hacemos para mantener, continuar y reparar nuestro «mundo» para que podamos vivir en él lo mejor posible. Ese mundo incluye nuestros cuerpos, nuestros seres y nuestro ambiente*» (1990:40, énfasis en el original). Hago hincapié en el planteamiento de Fisher y Tronto sobre «mantener, continuar y reparar» para enfatizar las actividades históricas, en curso y futuras de trabajo de cuidado que puedan curar, aspirar o que ya produzcan modos alternativos de relacionamiento. Asimismo, ampliando los estudios de Fisher y Tronto, Jarosz argumenta que el trabajo de cuidado incluye ambos, «compromiso relacional y acción» (2011:319) que va más allá de las relaciones interpersonales íntimas o con su propia huerta para crear economías alternativas o modos más sostenibles de interactuar con el ambiente. De manera similar, el marco teórico de los «paisajes de cuidado» de Graddy-Lovelace usa la ética del cuidado para criticar la devaluación de la experticia *generizada* en las «habilidades de cuidado agrícola» en manos de las tecnologías neoliberales de reproducción de plantas y empieza a pensar en oportunidades para revalorar el cuidado inherente a las prácticas de agrobiodiversidad. Importante para este artículo es que la ética feminista de cuidado permite la teorización de las prácticas materiales en contextos relacionales más

íntimos, tales como los intercambios comunitarios de semillas, huertas caseras y cocinas, que también pueden promover visiones alternativas para las relaciones socioecológicas. Mi investigación se basa específicamente en estudios de geógrafos que han juntado la ética del cuidado con prácticas agrícolas y trabajo (Graddy-Lovelace, 2020; Jarosz, 2011) y expande tal conceptualización al considerar cómo las prácticas de cuidado de la agrobiodiversidad pueden funcionar como un símbolo alrededor del cual organizar relaciones socioambientales.

### *Gobernanza ambiental*

Los ecólogos políticos han mostrado cómo las prácticas materiales del uso de los recursos ambientales pueden funcionar como una forma de gobernanza. La gobernanza ambiental sirve en mi análisis como un lente teórico a través del cual entender la agrobiodiversidad como un marco simbólico para el futuro ordenamiento deseado de las relaciones humano-ambientales en la región del estudio de caso. Con frecuencia un «elemento coemergente» (Zimmerer, 2010:1079) entre otros asuntos socioambientales, la gobernanza ambiental es ampliamente definida como el ordenamiento de las relaciones humano-ambientales a través de la administración de los recursos naturales. Al producir un orden socioambiental, la gobernanza ambiental está formada por fuerzas económicas y políticas (Bridge y Perreault, 2011), así como por significados relacionales, prácticas y conocimiento, o las «relaciones subjetivas de las personas entre sí y con el ambiente» (Lemos y Agrawal, 2006:304; Carse, 2015). De manera importante, los ecólogos políticos extienden la gobernanza para hacer referencia también a prácticas y reglas para el uso de los recursos al interior de las comunidades o casas

que no están formalmente ordenadas por un cuerpo de gobierno, un grupo de usuarios de riego u otra estructura (Bridge y Perreault, 2011; Ribot y Peluso, 2009). Una aproximación a la gobernanza ambiental basada en la ecología política se interesa en las relaciones de poder, y le presta atención al papel de las ontologías relacionales y las identidades sociales en las formulaciones de gobernanza de los recursos (Perreault, 2008; Zimmerer, 2015), corrientes con frecuencia subestimadas en investigación sobre gobernanza institucional. Los estudios sobre gobernanza ambiental basados en la ecología política son especialmente útiles en llamar la atención a la forma en que las prácticas materiales cotidianas informan y son coproducidas con y a través de marcos discursivos de gobernanza (Ribot y Peluso, 2009; Robbins, 2012). Por ejemplo, Hausermann (2012) muestra cómo los cultivos y las prácticas de uso del suelo crean una estructura de gobernanza alternativa a las estipulaciones del gobierno mexicano para tenencia y uso de la tierra. De manera importante, Hausermann argumenta que los «momentos transformativos» (2012:1002) de gobernanza ambiental existen con frecuencia más allá de los arreglos institucionales en las prácticas materiales cotidianas de los campesinos.

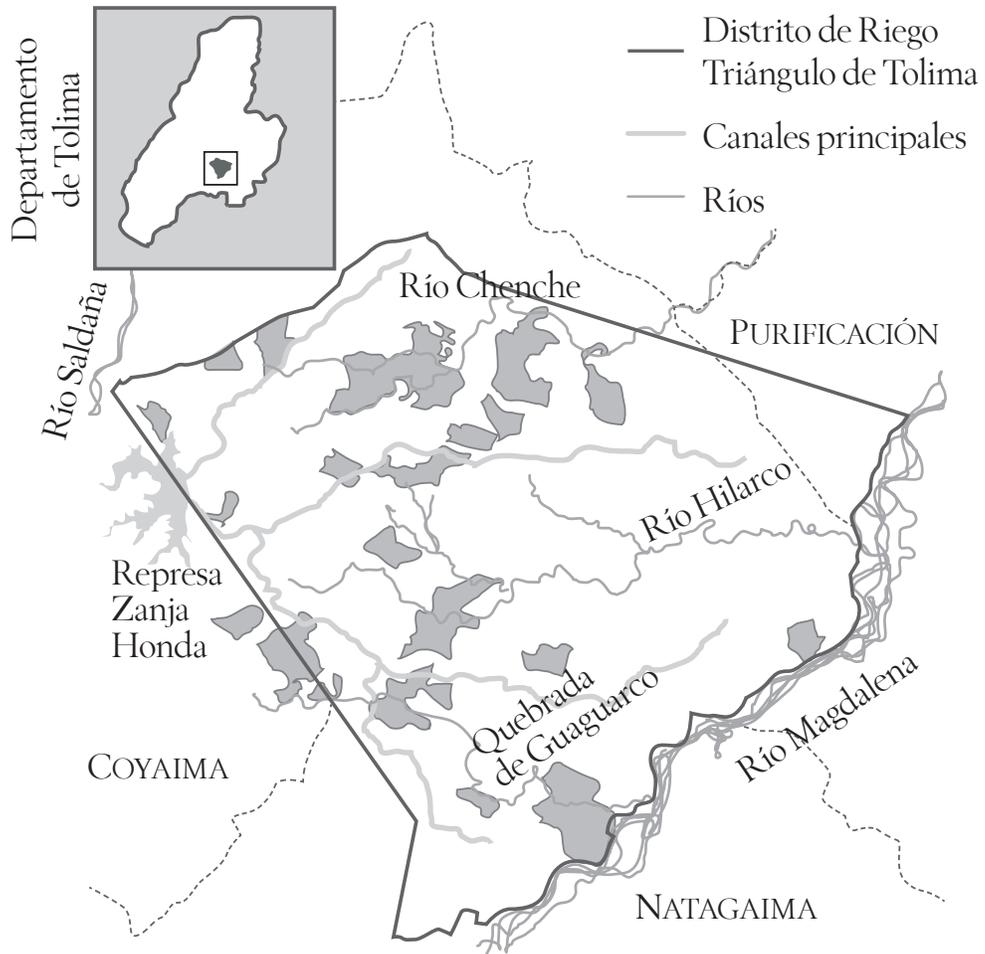
Recurro a los planteamientos de la literatura sobre gobernanza ambiental y ética del cuidado para aportar a la literatura sobre agrobiodiversidad relacional. Tanto el marco de la ética del cuidado como el de la gobernanza ambiental proveen puentes analíticos para vincular cada interacción relacional cotidiana entre humanos y humano-ambiental con escalas más amplias de organización social y política. Basándome en esta literatura, en las siguientes secciones examino cómo las prácticas materiales de la agrobiodiversidad (re)conectan comunidades entre sí y con la tierra, y al hacerlo crean un marco simbólico para futuras relaciones humano-ambientales.

## Estudio de caso y contexto

Llevé a cabo mi investigación en los municipios de Coyaima y Natagaima en Tolima, un departamento en las estribaciones de los Andes colombianos. Con una altitud de 300-400 metros, las comunidades agrícolas experimentan estaciones secas severas (junio-septiembre), que son características de las estaciones lluviosas bimodales en el ecosistema de bosque tropical seco. Las comunidades de Natagaima y Coyaima son conocidas por sus altos niveles de diversidad de cultivos, especialmente por variedades de semillas de maíz, las cuales son cultivadas por pequeños agricultores campesinos e indígenas tanto para el consumo del hogar como para los mercados. Adicionalmente a la diversidad de cultivos, tres características marcan la región: *a)* altas y persistentes tasas de pobreza y malnutrición, *b)* una larga historia de violencia, y *c)* el megaproyecto suspendido de irrigación del Distrito de Riego del Triángulo del Tolima (de aquí en adelante, el Triángulo del Tolima). Desde comienzos de los 2000, el gobierno colombiano ha invertido dinero para el desarrollo en la región en salud, adaptación al cambio climático y programas de reparación de víctimas para abordar las vulnerabilidades soportadas tras décadas de violencia, sequía y pobreza persistente. El acceso a alimentos y salud es un problema de preocupación central, con tasas de malnutrición infantil de 23% y tasas de pobreza en áreas rurales y urbanas de 39% y 58%, respectivamente (El Concejo Municipal de Coyaima, 2016). Aun así, el más notable proyecto de desarrollo es el Triángulo del Tolima (figura 1). El megaproyecto de irrigación les promete agua a más de 19 mil individuos a través de más de 20 mil hectáreas de tierra semiárida para promover el desarrollo agrícola (Acevedo-Osorio, 2013) (cuadro 1).

Figura 1

Mapa del área de influencia del Distrito de Riego del Triángulo del Tolima. Embalse, cuatro canales principales y ríos circundantes. Localizado en el departamento del Tolima, Colombia



Fuente: elaboración propia.

## Cuadro 1

Detalles del plan del gobierno colombiano para el proyecto  
del Distrito de Riego del Triángulo del Tolima

<i>34 143 ha incorporadas dentro del plan del distrito</i>	<i>Porcentaje de área del megaproyecto en cada uno de los tres municipios</i>	<i>Población total en cada municipio en 2019</i>
20 402 ha de las 34 143 ha (60%) son aptas para riego	Coyaima: 85.8%	Coyaima: 18 999
19 995 personas van a recibir agua	Natagaima: 9.6%	Natagaima: 14 292
17 502 de los beneficiarios (88%) se identifican como indígenas pijao	Purificación: 4.6%	Purificación: 22 682

Fuente: Corpoica, 2012.

La pobreza y el estrés climático se entremezclan con la diversidad étnica y social y con largas historias de violencia para crear un complejo panorama cultural. Aproximadamente 88% de los beneficiarios del Triángulo del Tolima se identifica como descendientes de indígenas pijao. Más de 100 organizaciones y resguardos pijao (esto es, tierra adjudicada a indígenas por el gobierno) están dentro de los municipios de Natagaima (47) y Coyaima (61) (Ministerio del Interior, 2015). Los beneficiarios restantes son campesinos y un pequeño número de productores agroindustriales. Durante conversaciones, los residentes se referían con frecuencia a los periodos más intensos de violencia en la región: La Violencia de los 1940, las ocupaciones de las FARC en los 1960 y de nuevo en los 1990, y finalmente

la ocupación por el grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a comienzos de los 2000.<sup>3</sup>

Los usos de la tierra más destacados en el sur del Tolima incluyen pastos para ganadería, cultivos para el mercado y cultivos de subsistencia como maíz y frijol. La producción de hoja de cachaco u hojas de plátano cosechadas para los tamales colombianos, así como la producción de cítricos, se encuentran en áreas concentradas a través de la región (Acevedo, 2016). Para muchas familias campesinas e indígenas, los cultivos de pancoger ocupan terrenos más cercanos a sus hogares y constituyen la base de la soberanía alimentaria de la familia. En Colombia, pancoger es la palabra usada para describir sistemas tradicionales de cultivos básicos de subsistencia. Los cultivos de pancoger son regional y climáticamente dependientes. En el Tolima, pancoger por lo general incluye plátano, yuca, frijol y maíz. Con frecuencia, las frutas también son parte del pancoger, en especial las limas, la papaya y el mango (cuadro 3). Terrenos más grandes son usados para alimentar ganado o producir cultivos en hilera y, más recientemente, para la producción de arroz paddy.

El megaproyecto del Triángulo del Tolima se ubica a menos de 20 km al sur de otros dos megaproyectos de irrigación, que le proveen agua al corazón de la producción de arroz de Colombia. Procesado exclusivamente para mercados nacionales, el cultivo de arroz lidera las economías de los pueblos de la región. Productores grandes, medianos y pequeños cultivan

<sup>3</sup> Aunque la región está oficialmente en «posconflicto», en 2018, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reportaron actividad paramilitar en curso. En julio de 2019, los entrevistados reportaron rumores de la presencia cercana del grupo guerrillero Ejército Nacional de Liberación (ELN). Por lo tanto, aunque oficialmente el sur del Tolima está marcado como «posconflicto», la paz es frágil en la medida en que los residentes continúan experimentando amenazas de violencia o interrupción de la vida por parte de grupos armados.

arroz en los cultivos del norte, pero tarifas costosas de agua, los precios de arrendamiento de la tierra y los costos de los insumos agroquímicos ejercen presión económica sobre los productores. Esto es contextualmente importante en la medida en que transiciones polémicas en el uso de la tierra y la gobernanza de los recursos en el Triángulo del Tolima ocurren a la sombra de esos dos distritos del norte.<sup>4</sup>

Entre los residentes del Tolima algunos usan la palabra más académica de agrobiodiversidad, mientras que otros simplemente hacen referencia a sistemas agrícolas diversificados con relación a cultivos rotatorios para el mercado o pancoger. Agronómicamente, los sistemas agrodiversos en el sur del Tolima se refieren a pequeñas parcelas intercaladas, constituidas por un campo de árboles frutales interplantados o un campo a través del cual las familias rotan cultivos de pancoger. Desde comienzos de los años 2000, los esfuerzos de organizaciones de base y no gubernamentales han fomentado prácticas sostenibles de manejo agrícola a través de los principios de la agroecología y la multifuncionalidad para fortalecer la soberanía alimentaria en una región que durante mucho tiempo ha sufrido factores de estrés socioeconómicos y ambientales (Moreno, 2016). Para las comunidades del Tolima participantes en esta investigación, la soberanía alimentaria significa acceder a los recursos y a la capacidad de nutrirse de manera sostenible a sí mismos, su familia y su comunidad sin depender económicamente de semillas convencionales ni insumos agrícolas sintéticos. En ambos municipios, los pasillos de los mercados locales son las fuentes principales de alimento. Con opciones limitadas para la compra de comida, y generalmente con bajos ingresos en el hogar, la producción de pancoger y la salvaguarda de las

<sup>4</sup> Para más detalles, véase Pachón-Gantiva, 2020.

semillas nativas, prácticas clave de la agrobiodiversidad, tienen significado económico y nutricional para muchas familias. Además, la conservación de variedades nativas de maíz es de un valor especialmente alto con relación tanto a la identidad cultural como a las tradiciones culinarias. En este artículo uso el concepto y la literatura de agrobiodiversidad para ocuparme específicamente de las prácticas de cuidado alrededor de la conservación y promoción de la diversidad de semillas nativas, prestando menos atención a las prácticas agronómicas.

## Metodología

Una investigación con métodos mixtos tuvo lugar en el transcurso de 12 meses, entre 2018-2019, y fue complementada por investigación preliminar en diciembre de 2017. Los métodos incluyeron entrevistas semiestructuradas y abiertas, encuestas por hogar, análisis textual y observación participante continua para interrogar por los sistemas de sustento, los patrones de acceso a los recursos y de tenencia de tierra. Participaron 60 hogares (n=60) en encuestas diseñadas para reunir información sobre agrobiodiversidad en los hogares y acceder a voces que no siempre están presentes en las reuniones comunitarias. Los hogares seleccionados fueron estratificados espacialmente a través de los cuatro sectores de riego del Triángulo para capturar respuestas de hogares localizados a distancias variadas de los canales de riego. Para hacerlo, las encuestas fueron completadas por participantes con acceso diferenciado al agua y sistemas de cultivo diferentes. Adicionalmente, los participantes de las encuestas fueron elegidos para ilustrar variaciones en edad, género, etnicidad y uso primario de la

tierra. La identificación de encuestas por hogar y la estratificación espacial ocurrió a través de viajes regulares a lo largo del área del Triángulo del Tolima, yendo de puerta en puerta a los hogares rurales. Para los usuarios de tierra que no viven en zonas rurales, las encuestas fueron administradas en los pueblos o en los centros de población de Natagaima y Coyaima. Las encuestas registraron tenencia de la tierra, uso de la tierra, acceso al agua tanto para uso doméstico como agrícola, participación en organizaciones ecológicas e indígenas, y también incluyó preguntas abiertas sobre gobernanza ambiental. Los datos de las encuestas, ampliamente utilizados de manera descriptiva en este artículo, fueron analizados usando Qualtrics, un *software* para procesar datos de encuestas.

Evidencia anecdótica fue retomada de entrevistas y notas de campo provenientes de la observación participante. Conduje un total de 42 entrevistas (n=42). Entrevistas con 23 productores locales y cuatro con antiguos y actuales gobernadores de los resguardos indígenas ofrecieron información sobre las prácticas presentes y pasadas de uso de la tierra, así como varios significados locales de la agrobiodiversidad. 15 entrevistas adicionales posibilitaron un rico contexto sobre la región; las entrevistas se dividieron entre oficiales del gobierno (4), activistas ambientales locales (7), un empleado de un molino local de algodón (1) y académicos de agronomía y planeación ambiental (3) con lazos de larga data en el área de investigación. Todas las entrevistas fueron grabadas y transcritas. La observación participante incluyó visitas a fincas, reuniones de los resguardos y organizaciones indígenas, grupos de ahorro de base y organizaciones locales sin ánimo de lucro que promovían la sostenibilidad ambiental, conversaciones con residentes municipales, protestas de los productores sobre el acceso al agua de riego, y talleres patrocinados por el gobierno

sobre adaptación al cambio climático. Participé en cinco ceremonias informales de intercambio de semillas o trueques. Tanto la transcripción de entrevistas como las notas de campo fueron analizadas codificando temas transversales en Atlas.ti, un *software* para procesamiento y análisis de datos cualitativos (Schreier, 2014).

## Resultados y discusión

### *Conflicto y desconexión*

Las comunidades del sur del Tolima experimentaron repetidos periodos de conflicto armado a lo largo de los últimos 80 años, lo cual llevó a una desconexión mutua y con el paisaje. El conflicto interno de La Violencia (1948-1965) desencadenó una migración masiva desde lo rural a lo urbano en el sur del Tolima. Miles de familias del Tolima huyeron más que todo de zonas rurales, muchas de las cuales han vivido desde entonces en los pueblos de Natagaima y Coyaima (Legrand, 1988). En los años que siguieron a La Violencia, los primeros frentes de las FARC se movilaron a las áreas montañosas que rodean el sitio de estudio. Los frentes 21 y 25 de las FARC ocuparon Natagaima y Coyaima a finales de los 1960, de nuevo en los 1990, y hasta el 2001 (CNMH, 2017). Los frentes de las FARC limitaban los viajes de los ciudadanos, ocupaban las tierras de los propietarios más grandes, imponían toques de queda y reglas sociales, y les demandaban a los propietarios una «vacuna» o pagos regulares similares a los impuestos. Dos entrevistados contaban que a uno las FARC le habían secuestrado y asesinado al padre y al otro el abuelo, ambos grandes propietarios en la época. Un frente de las FARC se apoderó

de la tierra de otro de los entrevistados. Muchos otros reportaron violencia durante la ocupación de las AUC entre 2001 y 2005, durante la cual muchos residentes fueron desplazados y muchas muertes reportadas (CNMH, 2017; *El Tiempo*, 10 de junio de 2003). El esposo de una de las entrevistadas fue asesinado por los paramilitares durante ese periodo. Al viajar a través de las áreas rurales, los participantes de la investigación con frecuencia señalaban sitios de violencia en el paisaje. Aunado a experiencias más recientes de violencia, individuos y comunidades pijao también cargan memorias colectivas de desplazamiento. Las comunidades pijao estuvieron limitadas a vivir en los grandes resguardos en los primeros años de la colonización española. A finales del siglo XIX, sin embargo, el gobierno colombiano disolvió los resguardos y los convirtió en grandes haciendas agrícolas de élite. Los temores de constante despojo o desplazamiento permanecieron como un trasfondo durante conversaciones sobre el acceso a los recursos entre muchos de los residentes del Tolima.

Además de cortar relaciones interpersonales, el conflicto interrumpió las relaciones humano-ambientales. Entrevistas y observación participante revelaron que el conflicto impedía con frecuencia el acceso de las familias a las huertas de subsistencia, un importante componente de la soberanía alimentaria de la familia y lugares de prácticas culturales significativas. Acompañé a una mujer indígena cabeza de hogar, que tenía cerca de 70 años, del pueblo a su huerta de 0.25 hectáreas. Para llegar, recorrimos en moto caminos rurales durante 20 minutos, cruzamos el río Magdalena en un pequeño bote motorizado y después caminamos 30 minutos. Su huerta suplía de granos y vegetales a tres generaciones de su familia que estaban en su casa, así como las comidas que ella cocinaba y vendía en el pasillo del mercado local dos veces a la semana. En el camino a su campo, pasamos

un tubo de riego marcado como «AUC», el nombre del grupo paramilitar que ocupó el área a comienzos de los 2000 (figura 2). Ella comentaba que los ciudadanos que tenían tierra en ese lado del río fueron desconectados de sus campos durante los años de ocupación paramilitar y eran entonces incapaces de producir tanta comida para sus familias.

Los residentes contaban historias de cómo eras de intensa violencia interferían con el esfuerzo comunal de establecer huertas agrobiodiversas. Por ejemplo, a comienzos de los 2000, una líder social facilitaba encuentros de mujeres campesinas e indígenas para promover huertas caseras y llamó al grupo Manos de Mujer. Las mujeres se enseñaban entre sí cómo guardar las semillas y cultivar huertas agrícolamente diversas, trabajando hacia un incremento de su soberanía alimentaria y nutrición para sus familias. Los encuentros, que se centraban en las semillas, también servían para fortalecer conexiones entre mujeres en un área marcada por historias de violencia doméstica adicionalmente al conflicto armado. Una guardiana de semillas activa desde los primeros encuentros recordaba la llegada de los paramilitares durante un encuentro más grande, que amenazaron a la facilitadora del grupo y les recordaron a los presentes que las reuniones de más de un par de personas estaban estrictamente prohibidas bajo su mando. La mujer notó que las reuniones sobre las huertas eran menos frecuentes y que la asistencia cayó en los meses que siguieron a la amenaza, pero ella señaló a varias mujeres de ese tiempo que continuaron cultivando huertas altamente agrobiodiversas.

Las memorias y las amenazas de la violencia fueron escritas en los espacios agrícolas de la región y en las relaciones sociales. Las ocupaciones de tierra en manos de actores armados, el cierre de rutas de viaje tanto por tierra como por agua, despojos, desplazamientos forzados, robos y asesinatos

rompieron las relaciones entre humanos y humano-ambientales. Aún durante algunos de los años más violentos, las prácticas alrededor de las semillas y el mantenimiento de huertas y terrenos diversos fueron caminos para mantener conexiones y cohesión. Mientras que la soberanía alimentaria era ciertamente una preocupación central para familias que luchaban para ganar suficientes ingresos o acceder a su tierra, las prácticas de agrobiodiversidad significaron más que acceso a alimentos. La agrobiodiversidad llegó para simbolizar un ordenamiento de la sociedad en el que el acceso a la tierra, la comida y la cohesión comunitaria fueran protegidos.

Figura 2

Un tubo de riego en el río Magdalena marcado por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el grupo paramilitar que ocupó el área a comienzos de los 2000



Fotografía: Megan Dwyer Baumann, octubre de 2018.

*Respuestas y oportunidades de gobernanza ambiental*

Los cimientos para desviar el río para el proyecto de riego tuvieron lugar en 2006, justo después del final de la ocupación paramilitar. A finales de 2014, los cuatro principales canales del Triángulo del Tolima revestidos en concreto fueron llenados de agua. Aun así, a finales de 2020, el megaproyecto permanecía incompleto, con la construcción suspendida desde 2014 debido a insuficiente financiación gubernamental. La suspensión del proyecto está acompañada por una falta de regulación del gobierno para el uso del agua. El gobierno colombiano, en una investigación de 2019 llevada a cabo por la Contraloría del Tolima, la entidad gubernamental encargada del seguimiento fiscal del gasto público, reportó una falta de responsabilidad del gobierno sobre el megaproyecto tras la reestructuración de las agencias del Estado en 2015 (Cortolima, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, y Contraloría del Tolima, 2019). Localmente, el grupo de usuarios potenciales del agua, Utritol, no tiene autoridad oficial para administrar los canales. A pesar de la falta de gobernanza administrativa, el uso no autorizado del agua a lo largo de 56 km de canales es extendido.

El acceso informal y desigual al agua ha creado respuestas de gobernanza ambiental, hecho posible por la llegada del agua en 2014; tanto los inversionistas de agronegocios como los productores locales arrendaron campos a lo largo de los canales principales para cultivar arroz, tomando agua de los canales a través de bombas de motor eléctrico (figura 3). Los residentes reportan que los precios de arriendo de la tierra se han duplicado, de 500 mil a un millón de pesos colombianos por semestre (aproximadamente de 166 a 333 dólares).<sup>1</sup> Datos del gobierno muestran un incremento de 363% en la producción de arroz entre 2015 y finales de 2017 (cuadro 2). Datos de

entrevistas corroboran el cambio, en la medida en que los propietarios de tierra reportaron conversiones de cultivos en los campos vecinos o su propia inversión en producción de arroz en años recientes. Dos cultivadores de arroz en distritos arroceros que colindan por el norte han arrendado recientemente 20 ha y más de 100 ha, respectivamente, para arroz dentro del Triángulo del Tolima. Dos miembros de un resguardo pijao tenían campos de arroz: una mujer que arrendaba tres hectáreas por fuera de la tierra del resguardo y un productor joven, hombre, que tenía más de 20 ha de arroz repartidas en varios campos. Entrevistas con otros tres productores campesinos mostraron que muchos dueños de tierra, pequeños y medianos, han cambiado un porcentaje de su tierra a arroz desde 2015. Todos los productores fueron alentados por la falta de gobernanza de tierra y uso del agua, lo que se tradujo en bajos costos de producción dado el arriendo económico de la tierra y el agua gratis para riego de los canales.

La explosión de producción de arroz incitó discusiones acaloradas a lo largo de la región sobre la gobernanza de los recursos del agua y la tierra. Entre varias de las visiones sobre cómo administrar el agua de riego y sobre qué sistemas de cultivo deberían ser usados, la producción de arroz paddy y sistemas diversificados y agrodiversos de producción emergieron como propuestas destacadas para organizar el uso de los recursos. Para algunos de los productores locales del Tolima el cultivo de arroz sirvió para apoderar sistemas agroindustriales de producción que eran mecanizados, intensivos en agua, dependientes en insumos sintéticos y orientados a la exportación. En contraste, las prácticas de agrobiodiversidad fueron promovidas por su uso de insumos naturales como el compost, su eficiencia hídrica dada la siembra de cultivos resistentes a la sequía y por sus cosechas diversificadas que contribuyen tanto a las mesas de las familias como a los mercados locales.

Las discusiones públicas sobre las visiones enfrentadas fueron altamente polémicas. A finales del año 2018, la estación local de radio entrevistó a un activista ambiental y residente local que insistía, «este distrito no *es para arroz. Es para cultivar pancoger para nuestras familias*» (énfasis en el original). Semanas más tarde, la organización de usuarios potenciales de agua Utritól, ampliamente solidaria de los sistemas de uso de tierra diversificados, envió un memorando a la agencia del gobierno encargada de la manutención de la infraestructura del canal. La Utritól referenció y se opuso a un cuerpo de presión recientemente formado por «una proporción minoritaria de cultivadores de arroz, que... [no representan] legítimamente los intereses de los 7.542 potenciales beneficiarios del Distrito de Riego». Este debate entró en conversaciones diarias. Una mujer productora con un sistema diversificado de ganado y frutales me dijo: «Desde que empezaron a construir el Triángulo del Sur, siempre nos dijeron que eso no era para arroz, era para productos de pancoger». Como esta mujer, que para ganar dinero manejaba un taxi y administraba una pequeña finca para el consumo de la casa y manejaba pequeñas ventas de maíz, muchos pequeños productores eran dependientes de su producción diversificada para complementar las compras de alimentos en el mercado. Ellos temían no poder pagar más sus tierras y ser sacados de ellas o ser excluidos de acceso al agua. En mayo de 2019, en un esfuerzo por apaciguar las tensiones sociales sobre el arroz, la Contraloría facilitó una reunión entre productores de arroz y sus opositores. Un propietario que recientemente empezó a arrendar sus tierras en Coyaima para cultivo de arroz, se puso de pie y declaró: «Si es legal o ilegal, la estamos disfrutando [el agua]». En ausencia de una regulación administrativa formal sobre los usos del agua y la tierra, la producción de arroz ha dejado una fuerte huella tanto en el paisaje como en las relaciones comunitarias.

Si bien con frecuencia no se expresa explícitamente, la resistencia comunitaria a la producción de arroz generalmente referenciaba de manera implícita historias de conflicto y desconexión, preocupaciones exacerbadas con la suspensión del megaproyecto. En los años de ocupación paramilitar, algunos productores fueron alienados de sus parcelas, cuando los paramilitares cerraron sus rutas de transporte. Miedos de despojo estaban especialmente presentes en las conversaciones con individuos que sostienen fuertemente su identidad indígena. Aunque las comunidades pijao han vivido en la región por cientos de años, sólo desde la Constitución de 1991 muchos han logrado autogobernanza en una tierra de resguardo adjudicada. Otras organizaciones pijao están en el proceso de solicitarle tierras al gobierno. Un activista ambiental indígena explicaba que la reciente intensificación de la producción de arroz y el relacionado incremento en el arriendo representan una amenaza a la tenencia de la tierra y, últimamente, a su modo de vida.

Las prácticas de agrobiodiversidad son centrales a las identidades campesinas y pijao, sus sistemas de producción y relaciones intercomunitarias. Tras décadas de conflicto que alteraron las conexiones humano-ambientales y que contribuyeron a las dificultades económicas de la región, los residentes pijao y campesinos de larga data tenían la esperanza de que la llegada del agua de riego les ofreciera también oportunidades para un renovado sentido de lugar (Aistara, 2019) y apoyo para defender sus prácticas culturales. Dada la disponibilidad de agua de riego, muchos habían imaginado un mejor acceso a alimentos a través de una producción incrementada de cultivos pancoger y nuevas oportunidades económicas. En otras palabras, creían que el agua de riego podría quizá crear un nuevo ordenamiento socioambiental. Para muchos residentes, los sistemas de producción en monocultivo de arroz paddy no se ajustan en esa visión de lugar. Es más, la

suspensión de la construcción del proyecto y la gobernanza administrativa abrieron un espacio de oportunidad para presionar por una regulación sobre uso de la tierra y el agua que se alinearía con los valores de aprovisionamiento de comida, uso de tierra en manos de productores locales y conexiones humano-ambientales de cuidado-plenas.

Cuadro 2  
Datos de arroz en Coyaima, Tolima, 2014-2018

<i>Año</i>	<i>Semestre</i>	<i>Área sembrada (ha)</i>	<i>Área cosechada (ha)</i>	<i>Incremento porcentual en área sembrada (ha) con relación al promedio 2006-2014 (304.79 ha)</i>	<i>Producción total en el municipio (t)</i>	<i>Incremento porcentual en la producción (t) con relación al promedio 2006-2014 (1813.30 t)</i>	<i>Producción (t/ha)</i>	<i>Incremento porcentual en la producción (t/ha) con relación al promedio 2006-2014 (5.8 t/ha)</i>
2014	2014a	332	332	9%	2 386	32%	7.18	24%
2014	2014b	318	318	4%	2 111	16%	6.63	14%
2015	2015a	385	382	26%	2 615	44%	6.84	18%
2015	2015b	330	329	8%	2 116	17%	6.44	11%
2016	2016a	925	925	203%	7 009	287%	7.58	31%
2016	2016b	1 031	1 031	238%	7 499	314%	7.27	25%
2017	2017a	884	883	190%	6 620	265%	7.49	29%
2017	2017b	1 124	1 124	269%	8 390	363%	7.46	29%
2018	2018a	920	920	202%	6 889	280%	7.49	29%
2014	2014b	318	318	4%	2 111	16%	6.63	14%

Fuente: datos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Se observan cambios en la producción de arroz en Coyaima, Tolima, desde que los canales principales fueron llenados al final de 2014. El semestre 2017b muestra un incremento de 269% en área sembrada de arroz en relación con el promedio de hectáreas antes del riego. Ese mismo semestre muestra un incremento de 363% en la producción de arroz en relación con la producción promedio antes de que los canales fueran llenados con agua.

Figura 3

Bombas de motor para arroz paddy sacando agua del canal para irrigar campos de arroz



Fotografía: Megan Dwyer Baumann, septiembre de 2018.

### *Prácticas materiales de cuidado en las relaciones de agrobiodiversidad*

En el sur del Tolima, las prácticas de cuidado de la agrobiodiversidad, sobre todo realizadas por las mujeres, fueron encontradas en tres importantes

espacios relacionales e informales: *a)* el trueque (intercambio de semillas), *b)* la huerta casera y *c)* la cocina. Las mujeres participaban de forma regular en los trueques y con frecuencia los facilitaban, mientras que tanto la huerta como la cocina eran espacios tradicionalmente pensados como de mujeres. De manera significativa, los resultados sugieren que dentro de estos tres espacios las prácticas de cuidado de la agrobiodiversidad tenían un papel importante en la gobernanza a través de (re)conectar los lazos sociales, mejorar el acceso alimentario de la familia y fortalecer el sustento.

*Trueques: agrobiodiversidad (re)conectando las relaciones sociales*

En el contexto de esta investigación la palabra trueque se refiere a los intercambios informales de semillas que constituyen el fundamento de la red informal de semillas de la región.<sup>5</sup> Al menos 60% de los encuestados (40) de la región listaron el trueque como la fuente de semillas de maíz para toda su producción, mientras 87% de los entrevistados (56) adquirirían semillas para sus huertas de trueques. Los trueques pueden ser ceremonias ritualizadas que involucran el intercambio de semillas y conocimiento, regalar semillas o trueques informales. Tanto los hombres como las mujeres involucrados en trueques cotidianos también toman parte en rituales más formales de intercambio de semillas. Los trueques son especialmente importantes en las áreas más rurales del sur del Tolima.

Los trueques contribuyen a la cohesión social y la confianza inter e intracomunitaria. Por ejemplo, debido a las lluvias prematuras a comienzos de 2019, el antiguo gobernador de un resguardo indígena perdió todo su cultivo

<sup>5</sup> En Colombia, generalmente, un trueque es cualquier intercambio de bienes que no involucra dinero.

de semillas. Una tarde en junio de 2019, justo antes de que fuera el tiempo de sembrar maíz, él se detuvo en la casa de una respetada guardiana de semillas y le solicitó 5 kg de semilla de maíz criollo. La mujer y su familia cultivaban hasta cinco variedades de maíz criollo y la calidad de su semilla era respetable. La mañana siguiente, ella, su familia y yo cosechamos y procesamos la colorida semilla (figura 4) y la amarramos en una bolsa plástica para el hombre. Cuando el gobernador llegó a pagar por la semilla, ella rechazó el dinero. En cambio, le pidió que le dibujara un diseño actualizado de la finca de su familia para que pudieran después usarla para planeación de uso de la tierra. Era una tarea que tenía atrasada y que consideraba central para las prácticas de su familia de rotación de cultivos y producción de subsistencia. El trueque entre la guardiana de semillas y el gobernador del resguardo, ambos líderes comunitarios, funcionó para fortalecer confianza entre dos comunidades vecinas y para asegurar acceso mutuo a alimentos.

Figura 4

Cosecha de variedades tradicionales de maíz



Fuente: fotografía de la autora, junio de 2019.

Trueques más rituales suceden por lo general cuando las comunidades se reúnen desde diferentes veredas (una unidad administrativa más pequeña que el municipio) o departamentos. En octubre de 2018, comunidades indígenas del semiárido sur del Tolima recibieron campesinos del departamento del Cauca, un área que también ha sobrevivido intensos periodos de conflicto armado. Los visitantes residían en una región más fría, con más bosque y altitud, donde la falta de lluvia nunca fue un problema. Cada comunidad organizó su mandala de semillas y tomó un momento antes del trueque para presentarles sus ofrendas al grupo (figuras 5 y 6). Oyendo cómo las comunidades del Tolima estaban orgullosas de sus variedades de maíz resistentes a la sequía, los campesinos invitados comentaron que ellos no podrían imaginar cultivar comida en un área que recibiera tan poca lluvia. Las comunidades indígenas estaban igualmente maravilladas por los cultivos de clima frío traídos por las familias visitantes y empezaron a hablar sobre adaptar las semillas al calor del Tolima. Construir confianza y empatía tanto inter como intracomunitarias fue particularmente importante en medio de las tensiones sociales que rodeaban el uso de los recursos a partir del megaproyecto de riego. Los productores del Tolima fueron animados por familias similarmente comprometidas con la producción diversificada y las prácticas agrícolas que conservan los recursos del agua y el suelo. Además, los diálogos intercomunitarios sobre valores, ambientes y semillas reconectaron a las comunidades del Cauca y Tolima, alienadas en décadas pasadas debido al cierre de rutas de tránsito en manos de actores armados.

Figura 5

Mandala de semillas de los residentes del sur del Tolima



Mandala de semillas del ecosistema del bosque tropical seco:  
maíz, ají, melón, patilla, calabacín y esquejes.

Fotografía: Megan Dwyer Braumann, septiembre de 2018.

Figura 6

Mandala de semillas de los residentes del Cauca



Mandala de semillas y ofrendas de comida de un clima más frío:  
paquetes de semillas marcados, yuca, limones, aguacates, zanahorias, piña,  
bananos, plátanos, mandarinas y naranjas.

Fotografía: Megan Dwyer Braumann, septiembre de 2018.

Los trueques son una práctica importante de cuidado de la agrobiodiversidad. Éstos no sólo son los medios principales para adquirir variedades de semillas nativas para muchos pequeños agricultores, sino que también funcionan como prácticas de cuidado en su interés por promover la cohesión social y la interdependencia comunitaria. Las semillas eran los objetos conectivos a través de los cuales las comunidades encontraban un piso común. Intercambios de conocimiento o prácticas de cultivo siempre acompañaban los intercambios de semillas, creando «paisajes de cuidado» (Graddy-Lovelace, 2020), en los que los productores colaboraban para desarrollar habilidades de producción específicas para el lugar, incluyendo clima, suelo y cultura particular de su área. Además, en la medida en que los participantes discutían patrones de precipitación, recetas de compost o estrategias de cultivo intercalado, estaban aprendiendo nuevas maneras de adaptar las semillas o descubriendo técnicas culinarias que no conocían. Los productores sabían con frecuencia cuáles familias cultivaban ciertas variedades y repetidas veces compartían material de siembra, fomentando un enfoque más relacional de producción agrícola. Al compartir semillas y técnicas de cultivo, las relaciones humano-ambientales eran fortalecidas.

### *Huertas: agrobiodiversidad conectada con la alimentación*

La agrobiodiversidad forma la base de la soberanía alimentaria de muchas familias en la región de estudio. Con frecuencia, la agrobiodiversidad se reflejaba en pequeñas parcelas o huertas caseras para producir pancoger. La huerta está tradicionalmente generalizada como un espacio de mujer, ubicada cerca de la casa y la cocina para permitirle realizar simultáneamente las tareas del hogar, del cuidado de los niños y de producción, mientras

que los hombres han tradicionalmente (pero no en exclusiva) manejado los cultivos del campo y el ganado. De los 60 hogares entrevistados a lo largo de las dos comunidades, 85% de ellos tenía huertas. Los cultivos que aparecían con más frecuencia listados como parte de las huertas incluían el cachaco (una variedad de plátano), maíz, limones, yuca, frijoles y árboles frutales, específicamente mangos y papayas (cuadro 3). Otros cultivos comúnmente cultivados son tomates, calabacín, aloe, ají, guanábana, patilla y hierbas culinarias y medicinales. Cuando se referían a sus huertas, los encuestados mencionaban especies de árboles nativos, ilustrando el valor de la agrobiodiversidad de esos sistemas más allá de los cultivos de comida. Los árboles más comúnmente listados incluían los totumos o calabaza (*Crescentia cujete*), iguá (*Pseudosamanea guachapele*), matarratón (*Gliricidia sepium*), palma real (*Attalea colenda*) y la planta de fique (*Furcraea andina*), las cuales son procesadas por sus cualidades medicinales o para forraje de ganado, o eran transformadas en piezas artesanales.

Como otros académicos han mostrado, las huertas caseras proveen importantes complementos nutricionales a la comida comprada (Powell *et al.*, 2017). Las semillas intercambiadas y después cultivadas en las huertas nutren cuerpos en una región con una de las tasas más severas de malnutrición en Colombia. Los esfuerzos comunitarios de Manos de Mujer y de todas las mujeres que mantienen sus huertas es un trabajo de cuidado, son labores desarrolladas para la salud de la familia (Jarosz, 2011). El predominio de las huertas en los hogares rurales promueve un paisaje agrícola donde las familias residentes tienen acceso alimentario suficiente y asequible, así como a una rica diversidad de nutrientes.

Cuadro 3  
Cultivos de pancoger cultivados con más frecuencia  
por los encuestados y sus usos culinarios

<i>Nombre local del cultivo</i>	<i>Encuestados que tenían el cultivo en su huerta (muestra: 60 hogares)</i>	<i>Usos: culinarios u otros (alimentar ganado, etcétera)</i>
Cachaco (variedad de plátano)	81%	Hervidos en guisos o consumidos solos como almidón cocido. Cáscara y pulpa usadas como base para comida de pollos.
Maíz	78%	Consumido fresco, seco y conservado para ser cocinado. Usado como base para guisos, para hacer chicha y masato y para los tradicionales insulsos, envueltos, tamales, mazamorra, arepas y bizcochos.
Limón	71%	Añadido como vinagreta para las ensaladas. Con él se hacen jugos y limonadas.
Yuca	70%	Almidón básico usado en guisos, hervido y consumido solo, frito. El almidón de yuca se usa para hornear. Usado como base para comida de pollos.
Frijol	68%	Platos de frijoles. Consumidos frescos o secos y guardados para consumo futuro.
Papaya	60%	Consumida como fruta o jugo.
Mango	51%	Consumida como fruta o jugo.
Plátano u otra variedad	21%	Almidón básico. Sea dulce o firme. Cocinado solo o en guisos, freído en sartén o frito.
Ají	21%	Con él se hace salsa para poner en carnes, empanadas, guisos y otros platos.

*Cocinas: agrobiodiversidad que fortalece el sustento*

Finalmente, los resultados muestran la importancia de las prácticas materiales de cuidado de la agrobiodiversidad en las cocinas. Las encuestas y entrevistas demostraron que la agrobiodiversidad en maíces y platos resultantes que se hacen en las cocinas son fundamentales para el sustento de las mujeres. Ocho hogares entrevistados reportaron la hechura y fermentación de la chicha y galletas saladas de maíz y queso llamadas bizcochos como la principal fuente de ingreso, todos productos preparados por mujeres. Otras seis mujeres entrevistadas preparan y venden de manera regular comidas tradicionales. Todas dependían exclusivamente de variedades no comerciales de maíz, cultivadas en sus tierras o compradas a los vecinos (véase cuadro 4). Tres entrevistadas más preparaban la chicha para vender semanalmente (figura 7) y la tercera, que se retiró de manejar un bar de chicha a tiempo completo, la preparaba para eventos especiales. Otra mujer horneaba bizcochos semanalmente (figura 8), vendiéndolos en los mercados locales y una vez por mes en un mercado en Bogotá. La sexta mujer dependía de las variedades nativas de maíz para las comidas que vendía en su negocio de comidas preparadas y en su puesto semanal en el pasillo del mercado. Ella era conocida por sus tamales, insulsos, masato y, cuando el maíz estaba recién cosechado, envueltos.

La producción de comidas tradicionales basadas en variedades nativas (criollas) de cultivo ha sido histórica y actualmente esencial para la seguridad socioeconómica de las mujeres y sus familias. Las seis mujeres mencionadas eran madres solteras o viudas. Los ingresos de la comida que vendían constituían el ingreso primario de sus familias. Una mujer contaba cómo su madre empezó vendiendo chicha y le enseñó a hacerla cuando en décadas

pasadas su familia fue desplazada durante La Violencia de su finca rural al pueblo. Como otro ejemplo, las mujeres constituían la mayoría de las participantes en los grupos de ahorro comunitarios. Una de las actividades más comunes de generación de ingresos para estos grupos era la preparación y venta de comidas tradicionales en eventos municipales, añadiendo de ese modo valor a sus inversiones y reforzando su seguridad financiera.

Diferentes investigaciones han vinculado por mucho tiempo a las mujeres con su papel activo de conservación de la agrobiodiversidad a través de huertas y otras actividades de sustento (Chambers y Momsen; Trina *et al.*, 2003). Yo amplío esa teoría al sugerir que el trabajo de las mujeres en las cocinas y su cultivo de diversas variedades de maíz en campos y huertas son prácticas de cuidado de la agrobiodiversidad. A través de prácticas agrobiodiversas, las mujeres del Tolima han hecho frente a las dificultades —algunas inducidas por el conflicto, como el desplazamiento, la pérdida de sus parejas, y la cabeza de hogar— en una región con pocas oportunidades de empleo en general. De manera significativa, los ingresos estables para las mujeres tienen un efecto positivo de ola en la familia (Bezner, 2014). Los modos de vida basados en la agrobiodiversidad han mejorado el acceso alimentario de las familias, reforzado prácticas alimentarias culturales y proveído importantes fuentes de ingreso.

En particular, las prácticas de cuidado de la agrobiodiversidad señaladas son llevadas a cabo principalmente por las mujeres en cocinas y huertas, que son espacios socialmente adscritos como de mujeres. Algunos académicos han señalado las funciones únicas que las mujeres tienen en la conservación de la agrobiodiversidad (Carney y Eliud, 2006). Las relaciones comunitarias de género en el contexto del sur del Tolima configuran la participación en las prácticas materiales de cuidado anteriormente mencionadas,

influyendo los espacios, actores y formas de participación. Mientras que las redes de mujeres como Manos de Mujer y otras lideresas locales son altamente valoradas entre ciertas facciones de la comunidad, su participación en prácticas agrobiodiversas de cuidado no necesariamente socava las relaciones de género patriarcales que dieron lugar a la formación de las labores *generizadas* de cuidado. A pesar de esto, de manera importante sugiero que el trabajo de cuidado de la agrobiodiversidad que emerge de los espacios de mujeres forma una base no sólo para conservar la diversidad de las semillas, sino también para reimaginar la gobernanza de los recursos para personas de todos los géneros.

Figura 7

Patio de chicha



Chicha hirviendo a fuego lento en el patio de una mujer para venderle semanalmente a los vecinos.

Fotografía: Megan Dwyer Baumann, mayo de 2019.

## Cuadro 4

## Variedades de maíz en el sur del Tolima: características y usos

<i>Variedad de maíz, nombre local</i>	<i>Características</i>	<i>Mercado/ consumo</i>	<i>Usos Culinarios</i>
Guacamayo	Granos blancos, suaves, grandes y firmes. Resistente a la sequía	Consumo casero y venta en mercados	Usado para la chicha
Clavo, blanco o bavario	Grano amarillo pálido o blanco, más pequeño que el guacamayo. Valorado por su alto rendimiento y facilidad para desgranar	Consumo casero y venta en mercados	Usado para el masato, envueltos, insulsos, mazamorra y chicha. También se consume fresco
Bavario amarillo	Tusa anaranjada, redonda, grande y firme. Resistente a la sequía	Consumo casero	Usado para arepas, guisos y sopas. Tradicionalmente se procesa para elaborar la chúcarula, un tipo de bebida
Bavario colorado	La tusa mide aproximadamente 15 cm. Grano amarillo-anaranjado, redondo, grande y firme. Resistente a la sequía	Venta en mercados	Tradicionalmente es procesado para elaborar la chúcarula, un tipo de bebida

<i>Variedad de maíz, nombre local</i>	<i>Características</i>	<i>Mercado/ consumo</i>	<i>Usos Culinarios</i>
Chúcula	La tusa mide aproximadamente 10 cm. Grano amarillo, suave, grande y blando. Se siembra en asociación con otros cultivos. Resistente a la sequía	Consumo casero, la cáscara se usa como forraje	Se consume recién cosechada y se procesa como chúcula

Fuente: Grupo Política y Derecho Ambiental, Universidad Nacional de Colombia, dirigido por Catalina Toro Pérez. Traducción por la autora.

Figura 8

Mujer haciendo bizcochos para vender semanalmente



Fotografía: Megan Dwyer Baumann, junio de 2019.

*Agrobiodiversidad como un marco simbólico de gobernanza:  
la promoción de un orden social que prioriza conexiones  
de cuidado humano-ambiental*

A través de las prácticas de cuidado de la agrobiodiversidad vista en trueques, huertas y cocinas, la agrobiodiversidad formaba un marco simbólico para la gobernanza ambiental de la nueva tierra con riego del sur del Tolima. Las prácticas de cuidado de la agrobiodiversidad constituían una visión alternativa del uso de los recursos, diferente a la visión de la producción intensiva de mercancías, como lo ejemplifica el *boom* del arroz. Las prácticas diarias y materiales de cuidado de la agrobiodiversidad simbolizaban conexiones con la tierra, cohesión social, tradiciones y culturas y acceso a alimentos diversificados. Tras el Triángulo del Tolima, la agrobiodiversidad como un marco simbólico para la gobernanza se intensificó. Se volvió un símbolo de una conexión humano-ambiental en contra de la desconexión percibida traída por la expansión de la producción intensificada de monocultivos de arroz.

En un resguardo, teniendo en cuenta los valores de la agrobiodiversidad relacional, se organizaron reglas de gobernanza reales para el uso del agua y la tierra. Aunque su tierra adjudicada bordeaba uno de los canales principales, los miembros del resguardo no usaron el agua de riego y en su lugar sembraron cultivos resistentes a la sequía. De las 54 hectáreas de resguardo, los miembros le dedicaron seis al pastoreo de ganado, siete a reforestación, y entre las familias se dividieron las 41 hectáreas para pancoger, todo cosechado y compartido comunitariamente. Un miembro del resguardo intercaló 10 cultivos a través de la hectárea que le correspondía. Una estricta rotación de cultivos gobierna el uso de la tierra en un esfuerzo

por mantener la fertilidad del suelo, con rotaciones de frijoles, maíz, papaya y yuca, coordinadas por la comunidad. Las parcelas con variedades de plátano, en especial el plátano local cachaco, fueron intercaladas con cultivos de cítricos, y los cultivos de mango estaban cerca. El resguardo prohibió el uso de semillas transgénicas en su tierra. Así, la comunidad comparte el trabajo de cultivar y conservar las variedades nativas de semillas. Los ricamente diversos cultivos dentro del resguardo sirvieron como un ejemplo sobre cómo la gobernanza ambiental, conducida por la agrobiodiversidad, puede funcionar dentro del paisaje para crear comunidades con un acceso más consistente a alimentos y menos dependencia de insumos sintéticos y agua de riego.

A partir de 2016, como respuesta a la recién llegada agua de riego y su gobernanza administrativa indefinida, el resguardo votó por prohibir el monocultivo de variedades mercantiles, específicamente arroz y algodón, en sus 41 hectáreas de tierra comunitaria. Dada la suspensión de la construcción del canal y la falta de canales secundarios y terciarios, el resguardo no tiene acceso a agua para producción. Más aún, el resguardo entendía la intensificación de la producción de arroz como una práctica amenazante para su compromiso con la agricultura comunitaria diversificada para la subsistencia de las familias y el movimiento indígena para reclamar tierras del gobierno. Como resultado, el resguardo les prohibió a sus miembros arrendar tierra afuera del resguardo para los mencionados cultivos mercantiles. Sin embargo, en 2017, un miembro le arrendó su tierra a un inversionista agroindustrial para producir arroz. El resguardo inmediatamente revocó los derechos de participación y voto de esta persona, sancionándolo por arrendar la tierra. En una entrevista, el gobernador del resguardo observó: «Eso sirvió de ejemplo para que... es que ninguno

ahorita se le pasa por la mente cultivar arroz, todos nos concentramos en lo ancestral, al cachaco, al maíz, al frijol». Debido a las sanciones de 2017, este miembro terminó el contrato de arrendamiento. Desde entonces, ni arroz ni algodón han sido sembrados en tierras comunitarias o en tierras de los miembros del resguardo. Las sanciones del gobierno y la rotación de cultivos contribuyeron a la preservación cultural, la fertilidad del suelo y a acuerdos más estables en torno a la tenencia de tierra.

En espacios más públicos, la agrobiodiversidad fue promocionada como un marco simbólico discursivo para la gobernanza ambiental más amplia en el área de influencia del Triángulo del Tolima. Grupos de productores movilizaron la agrobiodiversidad como un símbolo de acceso a los recursos, de manutención de las tradiciones culturales y de acceso a alimentos. Los habitantes entendían la gobernanza como un ordenamiento ideológico de las relaciones humano-ambientales y también como productora de un poder regulador. Estas personas buscaron ideas sobre cómo traducir en reglas su deseo por relaciones humano-ambientales más cuidadosas y sostenibles en la forma en que la gobernanza de riego ocurre en distritos cercanos. Por ejemplo, en el cercano distrito de riego de Usocoeillo, la asociación de usuarios del agua reguló las decisiones de cultivo, limitando el número de hectáreas de arroz cultivado con miras a balancear el suministro del agua. Los miembros de la comunidad del Triángulo del Tolima querían estructuras administrativas similares que protegerían los recursos del suelo y la tierra de las prácticas del cultivo de arroz, intensivas en nutrientes y agua.

Los agrónomos estaban de acuerdo con las protestas de los residentes contra el cultivo de arroz. En mayo de 2019, una reunión en Coyaima organizada por la Contraloría del Departamento del Tolima y expertos

agrícolas regionales de Agrosavia contó con la presencia más de 40 personas, incluyendo de 10 a 15 productores de arroz a mediano o a grande escala, más de 20 pequeños productores locales y otros grupos interesados. Un agrónomo principal de Agrosavia insistía: «Cultivar arroz como lo estamos haciendo no es una buena idea para el suelo». Los productores pequeños presentes reafirmaron la necesidad de tener un mayor acceso a los alimentos para las familias locales. Otro científico del gobierno estuvo de acuerdo: «Debemos mantener el pancoger en el corazón de cualquier plan de uso de la tierra para el Triángulo». A pesar de existir acuerdo entre los productores pequeños y los científicos, la falta de regulaciones exigibles de gobernanza o de un cuerpo de gobierno que ejecute las leyes ha significado tensiones continuas en torno al uso de la tierra.

La ausencia de gobernanza administrativa sobre el agua de riego y la suspensión del proyecto continúan, así como las tensiones entre la producción de arroz y los sistemas agrobiodiversos de producción. En mayo de 2020, las autoridades indígenas pijao de la región, grupos locales ambientales y otros grupos interesados organizaron una campaña con un mensaje de radio y audio para disuadir a los residentes locales de arrendar sus tierras a los productores de arroz:

El proyecto del Triángulo del Tolima sería el sueño que anhelamos para construir nuestros proyectos productivos y mejorar nuestras condiciones de vida, pero compañías multinacionales, sectores políticos y los propietarios han puesto sus ojos en él. La implementación de grandes monocultivos, además del impacto que le traen a un territorio ya golpeado por la crisis climática, podría una vez más robarnos nuestra tierra... No arriende su tierra... Si arrienda y permite así el abuso del agua, las semillas y las corrientes,

también está dañándose a usted y a su familia. Cuando usted arrienda, el dinero que gana es limitado, pero el daño a la propiedad es enorme. Déjenos recuperar el *trabajo comunitario*, déjenos sembrar comida real que nutra a nuestra comunidad (énfasis propio).<sup>6</sup>

Estos mensajes alimentan lo que ha sido una campaña de años en contra del sistema agroindustrial de producción, visto por muchos residentes minifundistas como un sistema que daña los recursos, amenaza la tenencia de tierra y desplaza la producción de pancoger. Las prácticas relacionales y cuidadosas de la agrobiodiversidad, el «trabajo comunitario», ejemplificado en espacios de trueques, huertas y cocinas son importantes en el contexto del posconflicto, y se volvieron un marco simbólico para una visión alternativa a las prácticas agrícolas intensivas que con frecuencia resultan de proyectos de desarrollo de riego a gran escala.

## Conclusiones

Esta investigación le aporta a la literatura sobre agrobiodiversidad en cuanto argumenta que, en vez de un conjunto de relaciones para ser gobernadas, la agrobiodiversidad puede ser movilizada como una visión de gobernanza. Con la suspensión del megaproyecto de riego en el Triángulo del Tolima y la ausencia de gobernanza administrativa, y en vista de una intensificación de la agricultura del estilo de la revolución verde, la agrobiodiversidad como un marco simbólico para organizar las relaciones

<sup>6</sup> Circulado en audios de WhatsApp.

socioambientales se ha intensificado. Su función simbólica promueve conexiones humano-ambientales, rehaciendo las relaciones que fueron cortadas durante el conflicto. Como se incentiva, y en algunos ejemplos se practica, la agrobiodiversidad se convierte en el marco de una visión de la gobernanza basada en el cuidado o un orden socioambiental que enfatiza el acceso a la tierra y al agua de riego para los pequeños productores, la cohesión social, la importancia de sistemas agrícolas tradicionales de cultivo, el acceso familiar a la comida y el compromiso con la conservación a largo plazo de los recursos del suelo y el agua. Este aporte expande el trabajo en agrobiodiversidad como más que un instrumento o medida de conservación. Esta investigación sugiere que la agrobiodiversidad puede desempeñar un papel simbólico significativo como visión de conexión en paisajes de posconflicto y como visión alternativa a planes tradicionales de desarrollo basados en la intensificación de la agricultura de exportación que con frecuencia acompañan los proyectos de riego. Las prácticas de cuidado de la agrobiodiversidad se vuelven una propuesta para un acceso equitativo al agua y la tierra para producción agrícola que nutre y beneficia directamente a los residentes locales.

La investigación hace dos contribuciones primarias a los estudios de agrobiodiversidad. En primer lugar, en línea con la literatura sobre los aspectos bioculturales de la agrobiodiversidad y la importancia de los contextos relacionales, esta investigación contribuye al pensamiento actual sobre las interacciones entre gobernanza ambiental y agrobiodiversidad. La literatura en agrobiodiversidad y gobernanza se ha enfocado casi exclusivamente en la gobernanza como el manejo activo o conservación de la agrobiodiversidad, sea dicho manejo *in situ* llevado a cabo por los productores o *ex situ* por semillas institucionalizadas o bancos genéticos. Así,

los productores en las comunidades del Tolima se organizan en torno a la agrobiodiversidad no como un conjunto de relaciones que ellos deben gobernar, sino como el símbolo de la gobernanza que desean implementar y, en el caso del resguardo o en fincas individuales, ya están haciéndolo realidad. Tratar la agrobiodiversidad como un marco simbólico de gobernanza ambiental abre nuevas preguntas de investigación sobre las posibilidades de un paisaje organizado, socializado y gobernado por las relaciones socioambientales de la agrobiodiversidad.

Segundo, esta investigación trae la literatura sobre agrobiodiversidad relacional en diálogo con la ética feminista del cuidado. Recurriendo a planteamientos de la ética del cuidado sobre el potencial para inspirar futuros alternativos de las prácticas materiales de cuidado del trabajo, sugiero que las prácticas de conexión humano-ambiental centradas en la agrobiodiversidad trabajan para restablecer relaciones humano-ambientales que ya han sido interrumpidas anteriormente. Las prácticas de cuidado de la agrobiodiversidad en forma de trueques, huertas y cocinas fortalecen la cohesión social tanto en las relaciones inter como intracomunitarias, fortalecen la soberanía alimentaria y respaldan los modos de vida tradicionales, particularmente para las mujeres. Dichas prácticas de cuidado informan un marco de gobernanza de los recursos que se centra en el sustento de los pequeños agricultores, el acceso equitativo a la tierra, el acceso a los alimentos y el bienestar para las familias, así como el uso sostenible de los recursos. Al integrar las prácticas de cuidado y relacionales que rodean a las semillas y sus significados en marcos para dirigir el desarrollo de estructuras de gobernanza ambiental, este artículo extiende la investigación reciente sobre agrobiodiversidad entendida como una serie de potencialidades y relacionalidades emergentes. Sugiero que futuras conexiones entre la agrobiodiversidad

y la ética feminista del cuidado pueden ser un espacio productivo en el cual examinar con más detalle los significados de las semillas, su papel en hacer lugar y su importancia en áreas de posconflicto.

La investigación presentada tiene una aplicabilidad más amplia en relación con la investigación y la política pública. Primero, la función simbólica de la agrobiodiversidad genera energía e ímpetu en torno a los movimientos solidarios que buscan relaciones y gobernanza humano-ambientales más justas. La información empírica aquí presentada muestra cómo una serie de prácticas se vuelven un símbolo alrededor del cual los residentes imaginan futuros equitativos. Otros conceptos han mostrado una similar fuerza simbólica en generar esfuerzos de solidaridad para futuros agrícolas y alimentarios más justos, incluyendo la agroecología y la soberanía alimentaria. Un compromiso más profundo con la ética del cuidado y las prácticas materiales de gobernanza ambiental pueden ofrecer perspectivas novedosas tanto conceptualmente como en impulsar estos y otros movimientos que abogan por un cambio sociopolítico.

Finalmente, poner en funcionamiento la agrobiodiversidad como una serie de prácticas humano-ambientales, relacionales y de cuidado implica hacer ajustes en la política pública en el nivel de la ley local, nacional e internacional. Primero, dadas las altas tasas de pobreza, desempleo, malnutrición y concentración de tierras en el área de estudio, así como el contexto del posacuerdo de paz en Colombia y los cambios en la gobernanza ambiental, un apoyo social y político continuado a las interacciones de la agrobiodiversidad podrían ser recomendadas. En el Plan de Desarrollo 2016-2030 de Coyaima, la primera línea sobre cuál es su visión dice: «Para el año 2030, [el municipio] será uno... que habrá superado el conflicto, la pobreza y la malnutrición». Los valores de la agricultura relacional pueden proveer una dirección para la gobernanza

local con miras a priorizar el bienestar relacional y nutricional de una región cuyas relaciones humano-ambientales han sido interrumpidas por el conflicto y reconfiguradas por una nueva infraestructura de agua.

Estos resultados pueden también informar la política pública colombiana que guía el desarrollo rural y el uso de las semillas. Esta investigación desafía las iniciativas de desarrollo al soportar prácticas de cuidado conducidas por la comunidad, incluyendo la producción alimentaria de la familia, sistemas tradicionales de cultivo y tradiciones culinarias, por nombrar algunos ejemplos. Adicionalmente, esta investigación resalta la función esencial de las prácticas socioambientales de cuidado en la reparación de comunidades en posconflicto, que pueden replantear el desarrollo en este proceso para garantizar el bienestar de los residentes y los recursos naturales.

Finalmente, en un nivel internacional, una comprensión relacional de la agrobiodiversidad y específicamente su potencial de informar estructuras de gobernanza equitativas, puede replantear la forma en que se entiende la conservación de semillas. El Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura prioriza la «conservación» de los recursos genéticos *in situ*. La agrobiodiversidad como un conjunto de prácticas que promueven el cuidado proyecta una comprensión más extensa del trabajo con frecuencia *generizado*, de la cultura, los aspectos ambientales y las conexiones interpersonales que producen los paisajes agrícolas.

## Referencias

Abizaid, C., Coomes, O.T. y Perrault-Archambault, M. (2016). «Seed sharing in Amazonian indigenous rain forest communities: a social network analysis in

- three Achuar villages, Peru». *Human Ecology*, 44(5), pp. 577-594. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10745-016-9852-7>
- Abizaid, C., Panduro, L.Á.C. y Egusquiza, S.G. (2020). «Pobreza y medios de subsistencia en la amazonía peruana en tiempos de la covid-19». *Journal of Latin American Geography*, 19(3), pp. 202-214. DOI: <https://doi.org/10.1353/lag.2020.0080>
- Acevedo-Osorio, Á. (2013). «La agroecología como respuesta a las potencialidades y retos de la agricultura indígena y campesina en el distrito de riego el Triángulo del Sur del Tolima. Bogotá». *Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura*. Recuperado de <http://www.fao.org/agroecology/database/detail/es/c/443194/>
- Aistara, G.A. (2019). «Seeding relations: placemaking through ecological, social, and political networks as a basis for agrobiodiversity governance». En Zimmerman, K. y de Haan, S. (eds.), *Agrobiodiversity: integrating knowledge for a sustainable future* (pp. 265-283). Massachusetts: MIT Press.
- Aistara, G.A. (2014). «Actually existing tomatoes: politics of memory, variety, and empire in Latvian struggles over seeds». *Focaal* (69), pp. 12-27. DOI: <https://doi.org/10.3167/fcl.2014.690102>
- Aistara, G.A. (2011). «Seeds of kin, kin of seeds: the commodification of organic seeds and social relations in Costa Rica and Latvia». *Ethnography*, 12(4), pp. 490-517. DOI: <https://doi.org/10.1177/1466138111400721>
- Almekinders, C.J.M. y Louwaars, N.P. (2002). «The importance of the farmers' seed systems in a functional national seed sector». *Journal of New Seeds*, 4(1-2), pp. 15-33. DOI: [https://doi.org/10.1300/J153v04n01\\_02](https://doi.org/10.1300/J153v04n01_02)
- Bauhardt, C., Harcourt, W., Dombroski, K., Healy, S. y McKinnon, K. (2019). «Care-full community economies». En Harcourt, W. y Bauhardt, C. (eds.), *Feminist political ecology and the economics of care* (pp. 99-115). London: Routledge. DOI: <https://doi.org/10.4324/9781315648743-6>

- Bridge, G. y Perreault, T. (2011). «Environmental governance». En Castree, N., Demeritt, D., Liverman, D. y Rhoads, B. (eds.), *A companion to environmental geography* (pp. 475-495). Estados Unidos: Blackwell Publishing.
- Camacho, J. (2013). «People, place, and plants in the Pacific coast of Colombia». En Nazarea, V.D., Rhoades, R.E. y Andrews-Swann, J. (eds.), *Seeds of resistance, seeds of hope: place and agency in the conservation of biodiversity* (pp. 115-148). Arizona: The University of Arizona Press.
- Carney, J. y Elias, M. (2006). «Revealing gendered landscapes: indigenous female knowledge and agroforestry of African shea». *Canadian Journal of African Studies/Revue Canadienne des Études Africaines*, 40(2), pp. 235-267. DOI: <https://doi.org/10.1080/00083968.2006.10751344>
- Carney, J.A. (2008). «The bitter harvest of Gambian rice policies». *Globalizations*, 5(2), pp. 129-142. DOI: <https://doi.org/10.1080/14747730802057456>
- Carney, J.A. (2009). *Black rice: the African origins of rice cultivation in the Americas*. Cambridge: Harvard University Press.
- Carse, A. (2015). *Beyond the big ditch: politics, ecology, and infrastructure at the Panama Canal*. Massachusetts: The MIT Press. DOI: <https://doi.org/10.7551/mitpress/9780262028110.001.0001>
- Cash, D.W. *et al.* (2006). «Scale and cross-scale dynamics: governance and information in a multilevel world». *Ecology and Society*, 11(2). Recuperado de <http://www.ecologyandsociety.org/vol11/iss2/art8/>
- Centro Nacional de Memoria Histórica (2017). «De los grupos precursores del Bloque Tolima (AUC). Bogotá». Recuperado de <https://centrodememoriahistorica.gov.co/de-los-grupos-precursores-al-bloque-tolima/>
- Chambers, K.J. y Momsen, J.H. (2007). «From the kitchen and the field: gender and maize diversity in the Bajío region of Mexico». *Singapore Journal of Tropical Geography*, 28(1), pp. 39-56. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1467-9493.2006.00275.x>

- Coomes, O.T. (2010). «Of stakes, stems, and cuttings: the importance of local seed systems in traditional Amazonian societies». *The Professional Geographer*, 62(3), pp. 323-334. DOI: <https://doi.org/10.1080/00330124.2010.483628>
- Coomes, O.T. *et al.* (2015). «Farmer seed networks make a limited contribution to agriculture? Four common misconceptions». *Food Policy*, 56, pp. 41-50. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2015.07.008>
- Concejo Municipal de Coyaima (2016). «Acuerdo Nro. 008 de 2016. Coyaima». Recuperado de <http://www.coyaima-tolima.gov.co/Transparencia/Normatividad/Acuerdo%20N%C2%B0%20008%20de%202016.pdf>
- Delêtre, M., McKey, D.B. y Hodkinson, T.R. (2011). «Marriage exchanges, seed exchanges, and the dynamics of manioc diversity». *PNAS*, 108(45), pp. 18249-18254. DOI: <https://doi.org/10.1073/pnas.1106259108>
- Dowler, L. y Ranjbar, A.M. (2018). «Praxis in the city: care and (re)injury in Belfast and Orumiyeh». *Annals of the American Association of Geographers*, 108(2), pp. 434-444. DOI: <https://doi.org/10.1080/24694452.2017.1392843>
- El Tiempo* (10 de junio de 2003). «Tolima: 9,000 familias desplazadas». Recuperado de <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1017273>
- Elliott, K. (2016). «Caring masculinities: theorizing an emerging concept». *Men and Masculinities*, 19(3), pp. 240-259. DOI: <https://doi.org/10.1177/1097184X15576203>
- Fisher, B. y Tronto, J. (1990). «Towards a feminist theory of caring». En Abel, E.K. y Nelson, M.K. (eds.), *Circles of care: work and identity in women's lives* (pp. 35-62). Nueva York: SUNY Press.
- Galluzzi, G., Eyzaguirre, P. y Negri, V. (2010). «Home gardens: neglected hotspots of agro-biodiversity and cultural diversity». *Biodiversity and Conservation*, 19(13), pp. 3635-3654. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10531-010-9919-5>

- Gibson-Graham, J.K. (2005). «Building community economies: women and the politics of place». En Harcourt, W. y Escobar, A. (eds.), *Women and the politics of place* (pp. 130-157). Bloomfield: Kumarian Press.
- Graddy-Lovelace, G. (2020). «Plants: crop diversity pre-breeding technologies as agrarian care co-opted?» *Area*, 52(2), pp. 235-243. DOI: <https://doi.org/10.1111/area.12499>
- Graddy-Lovelace, G. (2017). «Beyond biodiversity conservation: why policy needs social theory, social theory needs justice, and justice needs policy». *Global Environmental Politics*, 17(2), pp. 144-151. DOI: [https://doi.org/10.1162/glep\\_a\\_00405](https://doi.org/10.1162/glep_a_00405)
- Graddy, T.G. (2013). «Regarding biocultural heritage: in situ political ecology of agricultural biodiversity in the Peruvian Andes». *Agriculture and Human Values*, 30(4), pp. 587-604. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10460-013-9428-8>
- Hausermann, H. (2012). «From polygons to politics: everyday practice and environmental governance in Veracruz, Mexico». *Geoforum*, 43(5), pp. 1002-1013. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2012.06.002>
- Hekman, S.J. (1995). *Moral voices, moral selves, Carol Gilligan and feminist moral theory. Women's philosophy review*. Pennsylvania: Penn State University Press.
- Held, V. (2006). *The ethics of care: personal, political, and global*. Oxford: Oxford University Press.
- Hernández, C., Perales, H., Jaffee, D. (2020). «Without food there is no resistance: the impact of the Zapatista conflict on agrobiodiversity and seed sovereignty in Chiapas, Mexico». *Geoforum*, 128, pp. 236-250. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2020.08.016>
- Ingalls, M.L. y Mansfield, D. (2017). «Resilience at the periphery: insurgency, agency and social-ecological change under armed conflict». *Geoforum*, 84, pp. 126-137. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2017.06.012>

- Isakson, S.R. (2009). «*No hay ganancia en la milpa: the agrarian question, food sovereignty, and the on-farm conservation of agrobiodiversity in the Guatemalan highlands*». *The Journal of Peasant Studies*, 36(4), pp. 725-759. DOI: <https://doi.org/10.1080/03066150903353876>
- Jarosz, L. (2011). «Nourishing women: toward a feminist political ecology of community supported agriculture in the United States». *Gender, Place & Culture*, 18(3), pp. 307-326. DOI: <https://doi.org/10.1080/0966369X.2011.565871>
- Jones, A.D. *et al.* (2018). «Farm-level agricultural biodiversity in the Peruvian Andes is associated with greater odds of women achieving a minimally diverse and micronutrient adequate diet». *The Journal of Nutrition*, 148(10), pp. 1625-1637. DOI: <https://doi.org/10.1093/jn/nxyl66>
- Jordan, A. (2020). «Masculinizing care? Gender, ethics of care, and fathers' rights groups». *Men and Masculinities*, 23(1), pp. 20-41. DOI: <https://doi.org/10.1177/1097184X18776364>
- Jordan, J. (2015). *Edible memory: the lure of heirloom tomatoes and other forgotten foods*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Kerr, R.B. (2014). «Lost and found crops: agrobiodiversity, indigenous knowledge, and a feminist political ecology of sorghum and finger millet in northern Malawi». *Annals of the Association of American Geographers*, 104(3), pp. 577-593. DOI: <https://doi.org/10.1080/00045608.2014.892346>
- Kittay, E.F. (2020). *Love's labor: essays on women, equality and dependency*. New York: Routledge.
- Lawson, V. (2007). «Geographies of care and responsibility». *Geographies of Care and Responsibility*, 97(1), pp. 1-11. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1467-8306.2007.00520.x>
- Leclerc, C. y d'Eeckenbrugge, G.C. (2012). «Social organization of crop genetic diversity. The G×E×S Interaction Model». *Diversity* (1), pp. 1-32. DOI: <https://doi.org/10.3390/d4010001>

- Legrand, C. (1988). *Colonización y protesta campesina en Colombia*. Bogotá: Centro Editorial Universidad Nacional de Colombia.
- Lemos, M.C. y Agrawal, A. (2006). «Legitimacy and effectiveness of environmental governance. Concepts and perspectives in environmental governance». *Annual Review of Environment and Resources*, 31, pp. 297-325. DOI: <https://doi.org/10.1146/annurev.energy.31.042605.135621>
- Lyons, K.M. (2020). *Vital decomposition: soil practitioners and life politics*. Durham: Duke University Press.
- Massey, D. (2004). «Geographies of responsibility». *Geografiska Annaler: Series B, Human Geography*, 86(1), pp. 5-18. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.0435-3684.2004.00150.x>
- Meinzen-Dick, R. y Eyzaguirre, P. (2009). «Non-market institutions for agrobiodiversity conservation». En Kontoleon, A., Pascual, U. y Smale, M. (eds.), *Agrobiodiversity conservation and economic development* (pp. 82-91). Nueva York: Routledge.
- Miller, S.C. (2011). «A feminist account of global responsibility». *Social Theory and Practice*, 37(3), pp. 391-412. DOI: <https://doi.org/10.5840/soctheorpract201137324>
- Montenegro de Wit, M. (2016). «Are we losing diversity? Navigating ecological, political, and epistemic dimensions of agrobiodiversity conservation». *Agriculture and Human Values*, 33(3), pp. 625-640. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10460-015-9642-7>
- Montenegro, M. (2018). *Breeding grounds for biodiversity renewing crop genetic resources in an age of industrial food*. Berkeley: University of California Press.
- Moreno, L.M. (2016). «La agroecología como opción política para la paz en Colombia». *Ciencia Política*, 11(21), pp. 57-91. DOI: <https://doi.org/10.15446/cp.v11n21.60291>

- Mullaney, E.G. (2014). «Geopolitical maize: peasant seeds, everyday practices, and food security in Mexico». *Geopolitics*, 19(2), pp. 406-430. DOI: <https://doi.org/10.1080/14650045.2014.920232>
- Nazarea, V.D. (2006). «Local knowledge and memory in biodiversity conservation». *Annual Review of Anthropology*, 35, pp. 317-335. DOI: <https://doi.org/10.1146/annurev.anthro.35.081705.123252>
- Nemoga, G.R. (2018). «Indigenous agrobiodiversity and governance». En Zimmerer, K.S. y de Haan, S. (eds.), *Agrobiodiversity: integrating knowledge for a sustainable future* (pp. 241-263). Cambridge: MIT Press.
- Nemogá, G.R. (2016). «Diversidade biocultural: Inovação em pesquisa para conservação». *Acta Biologica Colombiana*, 21(1), pp. S311-S319. DOI: <https://doi.org/10.15446/abc.v21n1sup.50920>
- Noddings, N. (1986). *Caring: a relational approach to ethics and moral education*. London: University of California Press.
- Pachón-Gantiva, G.A. (2020). «¿Adopción o resistencia? Contrapropuestas agroalimentarias al modelo de desarrollo entre las comunidades del distrito de riego del Triángulo del Tolima». Paper presented at the Latin American Studies Association conference, Guadalajara, México.
- Padmanabhan, M.A. (2007). «The making and unmaking of gendered crops in northern Ghana». *Singapore Journal of Tropical Geography*, 28(1), pp. 57-70. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1467-9493.2006.00276.x>
- Pautasso, M. *et al.* (2013). «Seed exchange networks for agrobiodiversity conservation. A review». *Agronomy for Sustainable Development*, 33, pp. 151-175. DOI: <https://doi.org/10.1007/s13593-012-0089-6>
- Perreault, T. (2008). «Custom and contradiction: rural water governance and the politics of usos y costumbres in Bolivia's irrigators' movement». *Annals of the*

- Association of American Geographers*, 98(4), pp. 834-854. DOI: <https://doi.org/10.1080/00045600802013502>
- Powell, B., Bezner Kerr, R., Young, S.L. y Johns, T. (2017). «The determinants of dietary diversity and nutrition: ethnonutrition knowledge of local people in the East Usambara Mountains, Tanzania». *Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine*, 13(23). DOI: <https://doi.org/10.1186/s13002-017-0150-2>
- Puig de la Bellacasa, M.P. (2017). *Matters of care: speculative ethics in more than human worlds*. Minnesota: University of Minnesota Press.
- Puig de la Bellacasa, M.P. (2010). «Ethical doings in naturecultures». *Ethics, Place and Environment*, 13(2), pp. 151-169. DOI: <https://doi.org/10.1080/13668791003778834>
- Reyes-García, V. *et al.* (2009). «Cultural transmission of ethnobotanical knowledge and skills: an empirical analysis from an Amerindian society». *Evolution and Human Behavior*, 30(4), pp. 274-285. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.evolhumbehav.2009.02.001>
- Ribot, J. y Peluso, N. (2009). «A theory of access». *Rural Sociology*, 68(2), pp. 153-181. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1549-0831.2003.tb00133.x>
- Robbins, P. (2012). *Political ecology: critical introductions to geography*. West Sussex: John Wiley & Sons.
- Sachs, C.E. (1996). *Gendered fields: rural women, agriculture, and environment*. Nashville: Westview Press.
- Schmook, B., Van Vliet, N., Radel, C., Manzón-Che, M. de J. y McCandless, S. (2013). «Persistence of Swidden cultivation in the face of globalization: a case study from communities in Calakmul, Mexico». *Human Ecology*, 41, pp. 93-107. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10745-012-9557-5>
- Schöley, M. y Padmanabhan, M. (2017). «Formal and informal relations to rice seed systems in Kerala, India: agrobiodiversity as a gendered social-ecological

- artifact». *Agriculture and Human Values*, 34, pp. 969-982. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10460-016-9759-3>
- Schreier, M. (2014). «Qualitative content analysis». En Flick, U. (ed.), *The SAGE handbook of qualitative data analysis* (pp. 170-183). London: SAGE Publications. DOI: <https://doi.org/10.4135/9781446282243>
- Sherwood, S., Arce, A. y Paredes, M. (2017). *Food, agriculture and social change: the everyday vitality of Latin America*. Nueva York: Routledge. DOI: <https://doi.org/10.4324/9781315440088>
- Silva Garzón, D. y Gutiérrez Escobar, L. (2020). «*Revolturas*: resisting multinational seed corporations and legal seed regimes through seed-saving practices and activism in Colombia». *The Journal of Peasant Studies*, 47(4), pp. 674-699. DOI: <https://doi.org/10.1080/03066150.2019.1668780>
- Sperling, L. y McGuire, S. (2012). «Fatal gaps in seed security strategy». *Food Security*, 4, pp. 569-579. DOI: <https://doi.org/10.1007/s12571-012-0205-0>
- Suarez, A., Árias-Arévalo, P.A. y Martínez-Mera, E. (2018). «Environmental sustainability in post-conflict countries: insights for rural Colombia». *Environment, Development and Sustainability*, 20, pp. 997-1015. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10668-017-9925-9>
- Tamariz, G. (2020). «Agrobiodiversity conservation with illegal-drug crops: an approach from the prisons in Oaxaca, Mexico». *Geoforum*, 128, pp. 300-311. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2020.10.012>
- Toro Pérez, C. (2009). «La biodiversidad tropical: ¿el retorno a los fundamentos del evolucionismo social? Herencia colonial, ciencia y teorías racialistas en los albores del siglo XXI». *Pensamiento Jurídico*, 0, pp. 151-188. Recuperado de <https://revistas.unal.edu.co/index.php/peju/article/view/36542/38457::pdf>

- Turnhout, E., Waterton, C., Neves, K. y Buizer, M. (2013). «Rethinking biodiversity: from goods and services to living with». *Conservation Letters*, 6(3), pp. 154-161. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1755-263X.2012.00307.x>
- Van Etten, J. y De Bruin, S. (2007). «Regional and local maize seed exchange and replacement in the western highlands of Guatemala». *Plant Genetic Resources*, 5(2), pp. 57-70. DOI: <https://doi.org/10.1017/S147926210767230X>
- Visser, B. *et al.* (2019). «The governance of agrobiodiversity». En Zimmerer, K.S. y De Haan, S. (eds.), *Agrobiodiversity: integrating knowledge for a sustainable future* (pp. 285-305). Cambridge: The MIT Press.
- Whyte, K.P. y Cuomo, C. (2019). «Ethics of caring in environmental ethics: indigenous and feminist philosophies». En Gardiner, S.M. y Thompson, A. (eds.), *Oxford Handbook of Environmental Ethics*. DOI: <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199941339.013.22>
- Williams, F. (2018). «Care: intersections of scales, inequalities and crises». *Current Sociology*, 66(4), pp. 547-561. DOI: <https://doi.org/10.1177/0011392118765206>
- Wrathall, D.J. *et al.* (2020). «The impacts of cocaine-trafficking on conservation governance in Central America». *Global Environmental Change*, 63. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2020.102098>
- Young, I.M. (2008). «Responsibility and global justice: a social connection model». En Paul, E., Miller, F. y Paul, J. (eds.), *Justice and global politics (social philosophy and policy)* (pp. 102-130). Cambridge: Cambridge University Press. DOI: [10.1017/CBO9780511550744.005](https://doi.org/10.1017/CBO9780511550744.005)
- Zimmerer, K. *et al.* (2020). «Indigenous smallholder struggles in Peru: nutrition security, agrobiodiversity, and food sovereignty amid transforming global systems and climate change». *Journal of Latin American Geography*, 19(3), pp. 74-111. DOI: <https://doi.org/10.1353/lag.0.0154>

- Zimmerer, K.S. (2017). «A search for food sovereignty: seeding post-conflict landscapes». *Harvard Review of Latin America*, 26, pp. 32-34.
- Zimmerer, K.S. (2015). «Environmental governance through «speaking like an indigenous state» and respatializing resources: ethical livelihood concepts in Bolivia as versatility or verisimilitude?» *Geoforum*, 64, pp. 314-324. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2013.07.004>
- Zimmerer, K.S. (2010). «Retrospective on nature-society geography: tracing trajectories (1911-2010) and reflecting on translations». *Annals of the Association of American Geographers*, 100(5), pp. 1076-1094. DOI: <https://doi.org/10.1080/0045608.2010.523343>
- Zimmerer, K.S. (2003). «Geographies of seed networks for food plants (potato, ulluco) and approaches to agrobiodiversity conservation in the Andean Countries». *Society & Natural Resources*, 16(7), pp. 583-601. DOI: <https://doi.org/10.1080/08941920309185>
- Zimmerer, K.S. *et al.* (2019a). «The biodiversity of food and agriculture (agrobiodiversity) in the Anthropocene: research advances and conceptual framework». *Anthropocene*, 25. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ancene.2019.100192>
- Zimmerer, K.S. *et al.* (2019b). «Introduction to integrating agrobiodiversity knowledge for a sustainable future». En Zimmerer, K.S. y De Haan, S. (eds.), *Agrobiodiversity: integrating knowledge for a sustainable future* (pp. 1-20). Cambridge: MIT Press.



Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional



## Conflictos por el agua en Morelos: el caso del Proyecto Integral Morelos y la destrucción del sistema hídrico estatal

Josemanuel Luna-Nemecio\*

*Resumen.* El presente estudio aborda el conflicto socioambiental en torno a la defensa del agua que ha originado la destrucción del sistema hídrico del estado de Morelos (SHM) producida por el Proyecto Integral Morelos (PIM). Se realizó un estudio documental cualitativo de corte genético-estructural para identificar las dinámicas generales del proceso de conflictividad socioambiental producidas por el PIM en el estado de Morelos. Los resultados de la investigación mostraron que: 1. El PIM es una amenaza latente para la seguridad hídrica de la población. 2. Se identificó a la Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado (CTCC) construida en la comunidad de Huexca como núcleo de la devastación del SHM. 3. Se presentaron los rasgos del despojo y violencia desplegados por el Estado mexicano, en referencia al PIM. El estudio concluye que dada la inviabilidad hídrica y el talante innecesario del PIM, su funcionamiento es condición de posibilidad para la fractura del SHM.

*Palabras clave:* conflictos socioambientales, devastación ambiental, justicia ambiental, Proyecto Integral Morelos, recursos hídricos.

\* Posdoctorante en la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, México.

**Water conflicts in Morelos:  
the case of the Morelos Integral Project  
and the destruction of the state hydro system**

*Abstract.* This article takes up the socio-environmental conflict around the defense of water, which arises from the destruction of the hydro system in the State of Morelos (SHM) caused by the Morelos Integral Project (PIM). It begins with a qualitative genetic-structural document study in order to identify the general dynamics of the process of socio-environmental conflict produced by the pim in the State of Morelos. The results of the investigation reveal: 1. The PIM is an impending threat for the population's water security. 2. It identified the Combined-Cycle Thermoelectric Plant (CTCC), built in the community of Huexca, as the nucleus of the devastation wrought in the SHM. 3. It outlines the features of the expulsions and violence unleashed by the Mexican State, in reference to the PIM. The study concludes that given the impracticality and redundant nature of the PIM, its functioning could bring about the conditions for a possible rupture of the SHM.

*Keywords:* socio-environmental conflicts, environmental destruction, environmental justice, Morelos Integral Project, hydro resources.

## Introducción<sup>1</sup>

El desarrollo capitalista durante el neoliberalismo se ha caracterizado por impulsar un proceso de reconfiguración del territorio marcado por una lógica y estructura insostenible (Schmidt, 2014). La construcción del espacio urbano construido se ha llevado a cabo mediante la promoción real y especulativa de procesos inmobiliarios, industriales, comerciales y extractivistas (Belloni y Wainer, 2014). La producción de estos espacios del capital (Harvey, 2007) representa una fuerza del capital ambientalmente destructiva y degradante del tejido social que impacta sobre la totalidad metabólica de la relación entre la humanidad y la naturaleza (Toledo, 2008).

Ante este contexto generalizado por la propia inercia de la realización efectiva del gran mercado mundial industrial específicamente capitalista, se debe reconocer que los efectos socioambientales de la subsunción formal y del proceso de trabajo y del consumo bajo el capital en su especificidad neoliberal (Aiscar, 2019; Veraza, 2010) se producen, también, en una escala geográfico-territorial local (Lucero *et al.*, 2007). El estado de Morelos, ubicado en la zona central de México, es una muestra clara de dicho proceso, pues conforme el neoliberalismo se consolidaba en el nivel nacional como política económica hegemónica durante la vuelta de siglo, en dicho territorio se produjeron condiciones preocupantes de devastación socioambiental. Ello

<sup>1</sup> Este trabajo fue realizado como parte de las actividades de posdoctorado en la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, en el marco del proyecto «Conflictos socioambientales de corte hídrico en el estado de Morelos: un análisis territorial sobre la defensa del agua ante el desarrollo urbano-industrial impulsado por el Proyecto Integral Morelos», financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México (Conacyt), dentro del Programa de Estancias Posdoctorales por México 2020.

ha servido de condición de posibilidad para la emergencia y desarrollo de una serie de problemas ambientales y conflictos socioambientales cuyo núcleo está en conservar las riquezas naturales que históricamente han caracterizado al territorio morelense.

El sistema hídrico del estado de Morelos —en adelante SHM—, por enunciar tan sólo un ejemplo de lo recién argumentado, se ha visto impactado negativamente tanto en su dimensión natural como técnica y social por los procesos de urbanización e intentos de industrialización del territorio (Ordóñez, 2001). Los cuatro acuíferos que representan los recursos hídricos subterráneos de la entidad muestran rasgos de abatimiento en su capacidad de recarga (Luna-Nemecio, 2018). Además, la cobertura en la red de suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado ha sido insuficiente para satisfacer las necesidades hídricas de la población, en tanto que la economía y política del agua del estado de Morelos ha servido como un instrumento que promueve la acumulación de capital para industrias productivas y extractivistas, antes que garantizar el acceso generalizado al agua en cantidad y calidad suficientes y necesarias para la vida digna (Luna-Nemecio, 2016).

En este escenario de alto riesgo, vulnerabilidad e incertidumbre, los escenarios de confrontación, lucha y resistencia de grupos sociales por la defensa del territorio y de su riqueza natural, en especial por el agua, han ido ganando presencia y visibilidad ante la promoción de diversos megaproyectos y megainfraestructuras caracterizados por un alto consumo productivo del vital líquido, tal y como es el gasoducto, el acueducto y la Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado (CTCC) que integran el Proyecto Integral Morelos (PIM). De suerte que en el territorio morelense se ha construido un problema mayúsculo: el avance de escenarios de conflictividad

socioambiental por la defensa del agua ante la construcción y entrada en funcionamiento de dichas megainfraestructuras. Lo cual no implica sola y exclusivamente un problema importante de abordar a nivel teórico o metodológico, sino que, de acuerdo con lo que establecen Barreda (2014) y Espinosa (2015), se torna en una oportunidad para desarrollar una crítica heurística total para enfrentar el gran reto que implica reconstruir el complejo rompecabezas de la relación entre la devastación ambiental y los territorios y territorialidades en disputa.

Por lo anterior, el presente artículo aborda el tema del conflicto socioambiental en torno a la defensa del agua que ha originado la devastación ambiental y degradación del tejido social producida por el PIM, específicamente en lo relacionado con el acueducto y la CTCC construida en la comunidad de Huexca. No se pretende ofrecer un análisis etnográfico ni sociológico sobre el proceso de movilización social generado a partir de los conflictos socioambientales de corte hídrico a causa del PIM. Este tema supera el objetivo del presente estudio, el cual consiste en ofrecer un análisis genético estructural acerca de la devastación ambiental y degradación del tejido social que hoy día se han desplegado realmente o como una amenaza latente para la seguridad hídrica de la población, en tanto que significan una destrucción del SHM.

Para poder cumplir con dicho objetivo general, el presente estudio se sustenta en el corpus teórico de la crítica de la economía política (Marx, 2017), puesto que se le reconoce como un mirador indispensable para ofrecer una perspectiva a la relación metabólica entre la sociedad y naturaleza (Foster, 2004). Desde este cuerpo epistemológico y teórico se busca abordar la lógica de la tecnología capitalista nociva que hoy centra el PIM, en tanto que sus megainfraestructuras forman parte de las fuerzas productivas del

capital. La crítica de la economía política y su desarrollo como una teoría crítica del espacio (Lefebvre, 2011; Santos, 1996) permiten, entonces, reconocer el talante cuantitativo y cualitativo de la propia acumulación de capital, misma que durante el neoliberalismo se ha de considerar, según Veraza (2007), como originaria, residual y terminal.

De acuerdo con lo expuesto, el presente estudio se enfocó en las siguientes metas: 1. Presentar las megainfraestructuras de corte extractivista que significan una amenaza ambiental latente y forman parte del PIM. 2. Centrar el análisis del impacto ecológico que produce la CTCC construida en la comunidad de Huexca, Morelos, en tanto que es dicha megainfraestructura y entidad donde se concentran las fuerzas destructivas de corte técnico extractivistas, contaminantes y degradantes del tejido social que nuclea el PIM. 3. Presentar los rasgos generales de la conflictividad socioambiental en el oriente del estado de Morelos provocada por el despojo y la violencia interminable desplegados por el Estado mexicano, en referencia al PIM.

## Metodología

### *Tipo de estudio*

Se realizó un estudio documental cualitativo de corte genético-estructural para identificar las dinámicas generales del proceso de conflictividad socioambiental producidas por la construcción de megainfraestructuras del PIM en el estado de Morelos. El estudio consistió en la búsqueda y sistematización unificada de documentos académicos y noticias de periódicos y medios electrónicos de información para la identificación y recuperación

de datos (Vázquez-Ayala, 2019). Se realizó un análisis genético estructural (Barreda y García-Barrios, s/f) para identificar *a)* la magnitud, riesgo o afectación ambiental resultante de actividades y procesos socioeconómicos y político-administrativos que generan impactos negativos y problemas ambientales; *b)* actores y relaciones de poder presentes en la generación de problemas y posibles conflictos socioambientales; *c)* recursos ambientales afectados o en disputa y el nivel de incidencia de la conflictividad (escala y corografía).

### *Criterios de selección de los documentos*

Se realizó una búsqueda y análisis exhaustivo de artículos, libros y capítulos de libros con apoyo de las bases de datos de Scopus, Web of Sciences, Google Academics, Scielo y Redalyc. Se emplearon palabras clave como «conflicto socioambiental y agua», «conflicto socioambiental y Proyecto Integral Morelos», «termoeléctrica y Morelos», «Proyecto Integral Morelos y contaminación» y «Proyecto Integral Morelos y despojo». Durante la búsqueda y selección de la información académica fue necesario hacer una selección y análisis de noticias publicadas en periódicos locales y de medios digitales relacionados con el tema de estudio.

### *Clasificación y sistematización de la información*

La información y datos obtenidos de la búsqueda e identificación de documentos se clasificaron con base en la metodología propuesta por Barreda y García-Barrios (s/f) para el estudio de conflictos socioambientales (véase cuadro 1).

CUADRO 1

Clasificación de información desde una perspectiva genético-estructural del conflicto socioambiental en defensa del agua frente al PIM

<i>Dimensión</i>	<i>Criterios de identificación</i>	<i>Proceso territorial concreto</i>
Genética	Actividades que generan impactos negativos y problemas ambientales	Agroindustria, industrias extractivistas, gran industria, infraestructura de comunicación y de transporte, desarrollo inmobiliario, turismo, infraestructura energética, infraestructura hidráulica, confinamiento de residuos, vertedero de aguas residuales, servicios prestados o concesionados, escasez natural o artificial de agua.
	Procesos de devastación socioambiental	Saqueo, despojo o privatización directa o indirecta, legal o ilegal del agua; administración o distribución excluyente o degradante en la dotación, distribución y saneamiento del agua: municipalización, tandeo, transvase o tarifación; usos intensivos, excluyentes y dilapidadores de los recursos ambientales.
	Alcance y magnitud del riesgo o afectación resultante	Cantidad del recurso hídrico afectado (cuerpo de agua superficial y subterránea); tipo de contaminación; grado de sobreexplotación; problemas en la conservación de la biota y flora. Cantidad o morfología de la población afectada; problemas en la salud de la población; agudización de niveles de pobreza, marginación; morbilidad; mortalidad.

<i>Dimensión</i>	<i>Criterios de identificación</i>	<i>Proceso territorial concreto</i>
Estructural	Actores en conflicto	Colectivos; comunidades; empresas; grupos sociales; gobierno federal, estatal o municipal; individuos; instituciones.
	Relación política de los actores	Comunidad-comunidad, comunidad-empresa, comunidad-Estado, empresa-Estado, empresa-empresa, Estado-Estado.
	Recursos ambientales afectados o en disputa	Agua, aire, área de conservación, ecosistema, fauna, flora, suelo, tierra de cultivo, vegetación.
	Incidencia de conflictividad (escala y corografía)	Entidad, región socioterritorial, municipios, comunidades afectadas, regiones hidrológicas, cuencas y subcuencas hídricas, acuífero.

Fuente: elaboración propia con base en Barreda y García-Barrios (s/f).

## Análisis de resultados

### *Afectaciones al SHM generados por las megainfraestructuras extractivistas, energéticas e hidráulicas y devastación socioambiental*

El PIM es un megaproyecto impulsado por la inversión multimillonaria del capitalismo español representado por las empresas Abengoa, Elecnor y Enagás en alianza con la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El PIM incluye la construcción de una serie de megainfraestructuras extractivistas; tres de ellas son de corte hidráulico, mientras que otra está orientada a la extracción y distribución de gas natural. En concreto, este megaproyecto que abarca a los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos, está compuesto por:

1. Dos Centrales Termoeléctricas de Ciclo Combinado (264CC Centro 1 y 264CC Centro 2), en la localidad de Huexca en el municipio de Yecapixtla, que buscan dotar de energía eléctrica a los parques industriales que se promocionan en la entidad.

2. Un acueducto de 12 km de longitud que busca extraer un mínimo de 126 litros/segundo de agua del río Cuautla para enfriar las turbinas de la referida CTCC; mismo que hasta el 23 de octubre de 2020 se encontraba en 95% de su construcción, pues en dicha fecha la Guardia Nacional desalojó el Campamento Zapatista en Defensa del Agua del Río Cuautla que desde 2016 representaba la última barrera para conexión del acueducto que abastecería del recurso hídrico a la CTCC.

3. Un gasoducto de 160 km de longitud proveniente de las comunidades de Esperanza-Venta de Carpio y Cempoala-Santa Ana en el estado de Tlaxcala, que busca transportar 9 mil 61 millones de litros de gas natural por día hacia la CTCC.

Desde 2008 en que fue anunciado por el gobierno de Felipe Calderon, el PIM ha representado, en términos territoriales, la privación y uso restrictivo del agua como bien común que históricamente se había venido gestionando comunitariamente por parte de los ejidos pertenecientes a la Asociación de Usuarios de Río Cuautla, Manantiales y Corrientes Tributarias «General Eufemio Zapata Salazar» Asociación Civil (Asurco). Mediante la construcción del acueducto y de la CTCC en la comunidad de Huexca, el PIM ha desplegado diversos procesos legales, ilegales y clandestinos de despojo y control del agua proveniente del río Cuautla y de la red de manantiales del oriente de Morelos, bajo el pretexto de argumentar que dichas megainfraestructuras solamente utilizan agua proveniente de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Cuautla

(PTARC), pero en realidad representa una expropiación y limitación del agua que los ejidatarios de la región requieren para cultivar y, por lo tanto, para subsistir.

La megainfraestructura energética de la CTCC en la comunidad de Huexca representa una amenaza para los recursos hídricos de la región en tanto que genera escenarios de clara devastación ambiental. Por ejemplo, como parte de la infraestructura que se requiere para el funcionamiento de la CTCC se ha intentado construir un acueducto de 12 kilómetros de longitud que busca sobreexplotar el agua del río Cuautla (Radamés, 2017). Ello representa un consumo hídrico del agua de la región que impactaría negativamente a los productores de berro y hortalizas de los usuarios de Asurco, quienes perderían entre 22% y 38% de los recursos hídricos con los que actualmente cuentan para el riego de sus cultivos (Breuer y Oswald, 2020).

La CTCC de Huexca representa un factor de impacto para los recursos hídricos del oriente de Morelos porque para la puesta en marcha del sistema combinado de sus turbinas se utiliza gas natural y los vapores expelidos de una primera combustión de dicho combustible para producir vapor, cuya presión hace girar las turbinas generadoras de energía (Garrido, 2012). De manera secundaria, la entrada en funcionamiento de la CTCC generaría altas concentraciones de dióxido de nitrógeno y óxido de azufre (Prieto *et al.*, 2017), los cuales contribuirían no sólo a la emisión intensiva de gases de efecto invernadero y, con ello, a la complicación de la crisis climática y los efectos colaterales sobre los recursos hídricos de la región (Luna-Nemecio *et al.*, 2020), sino que, también, a la sobreproducción de ozono en la atmósfera, lo que provocaría una reducción en la cobertura vegetal de zonas agrícolas y forestales (Pardos, 2008).

No hay que olvidar que si bien el acueducto y la CTCC que se ha instalado en la comunidad de Huexca representan las megainfraestructuras que impactan negativamente, y de forma directa, sobre los recursos hídricos de la región del oriente del estado de Morelos, existe una tercera megainfraestructura que promueve el PIM y que representa una fuerza productiva ambientalmente destructiva, a saber: el Gasoducto Morelos, que proviene desde Tlaxcala —pasando por zonas de alto riesgo dada la cercanía al volcán Popocatepetl— hacia los municipios de Jantetelco, Jonacatepec, Cuautla y Yecapixtla, y que busca transportar más de 9 mil 61 millones de litros de gas natural diarios para abastecer no sólo a la termoeléctrica, sino también a los parques industriales y a las empresas que se encuentran operando o que se emplazarán en el oriente de Morelos (Ordoñez, 1999)

Los riesgos socioambientales generados en la construcción del gasoducto que abastecería de combustible a la CTCC de Huexca son diversos. En el territorio morelense están representados por el peligro inminente de una eventual erupción del volcán Popocatepetl (Solís y Vargas, 2014), en tanto el gasoducto pasa por zonas consideradas como de alto riesgo, así como porque la propia CTCC se encuentra dentro de las zonas de mayor vulnerabilidad por la actividad volcánica y, sobre todo, por el riesgo de que dichas megainfraestructuras están construidas sobre una zona sísmica (Jaimes, 2017). Además, la construcción del Gasoducto Morelos ha representado el despojo de las tierras y del agua en aquellas comunidades por las que atraviesa (Acuña, 2019). Esto, en sí mismo, representa la cancelación de las condiciones para el desarrollo agrícola de la región, al promover directa e indirectamente la reconfiguración urbana e industrial de los territorios, lo cual genera cambios sustanciales en la economía y la política del agua de la región.

El PIM en su totalidad abre la puerta hacia la destrucción del SHM, ya que tiende a la generación de escenarios de contaminación, saqueo y sobreexplotación de los recursos hídricos. Con la puesta en marcha del acueducto y la CTCC, el PIM representa un factor de alta incidencia en la producción de una escasez tanto en el río Cuautla, como en la red de manantiales, apantles y achololes que continúan siendo una fuente de abastecimiento de agua de riego para los casi 5 mil ejidatarios que continúan cultivando en la región (Acosta, 2020).

Y en este sentido, ante la eventual sobreexplotación de los recursos hídricos de la región y el menoscabo creciente de la capacidad metabólica natural y capacidad regenerativa y productiva del río Cuautla y demás cuerpos de agua superficial y subterránea por el PIM (Luna-Nemecio *et al.*, 2020), se debe considerar que estos campesinos se verían obligados a ocupar sustancias químicas de alta toxicidad, así como semillas genéticamente modificadas que les permitan seguir produciendo en condiciones ambientales adversas, teniendo consecuencias irreparables en la salud de los trabajadores agrícolas y sus familias, así como en la propia conservación de la biodiversidad de la región.

### *La CTCC en Huexca ante la devastación ambiental de Morelos*

La urbanización e industrialización del estado de Morelos ha resultado en una devastación socioambiental, la cual se ha agudizado con la prospección y desarrollo de una serie de megaproyectos presuntamente sustentables que han propiciado el desarrollo de cierto tipo de infraestructuras que acompañan, convalidan y retroalimentan la reconfiguración capitalista del territorio. Muestra de ello es la CTCC que se ha instalado en la

comunidad de Huexca, en el municipio de Yecapixtla, y que hoy día amenaza con sobreexplotar y contaminar los recursos hídricos subterráneos y superficiales del estado de Morelos (Breuer y Oswald, 2020).

La CTCC en Huexca representa una megainfraestructura que ha posibilitado la creación de un escenario de conflictividad socioambiental frente a la devastación latente del territorio (Radamés, 2017). El proyecto energético de la CTCC en la comunidad de Huexca representa un foco rojo para la devastación socioambiental en el estado de Morelos. En primer lugar, se ha de considerar que la infraestructura que se requiere para su funcionamiento necesita de un acueducto de poco más de 10 kilómetros de longitud para extraer más de 500 litros por segundo del caudal del río Cuautla (Armenta, 2016). Aunque presuntamente dicho volumen será obtenido del agua excretada por la PTARC a cargo del Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento de Cuautla (SOAPS), en realidad expertos en ingeniería hidráulica y pobladores de Anenecuilco han denunciado la existencia de diversos puntos de conexión del acueducto a canales del río Cuautla y la perforación de pozos para la extracción de agua subterránea. En segundo lugar, la CTCC representa un factor de impacto socioambiental en tanto que se producen altas concentraciones de dióxido de nitrógeno y ozono (Espinoza y Molina, 2014) que terminarían por provocar una fuente de disminución de la función pulmonar para los habitantes de la comunidad de Huexca.

Los impactos ambientales derivados de la entrada en funcionamiento de la CTCC se complican aún más con la producción residual de «agua muerta» (González, 2020), la cual es excretada por dicha megainfraestructura una vez que es utilizada productivamente como un insumo que sirve para enfriar las turbinas generadoras de energía. Este uso del agua del río Cuautla por la CTCC de Huexca produciría que las aguas vertidas sobre el caudal de dicho

cuerpo superficial de agua, una vez que hayan enfriado las turbinas generadoras de energía eléctrica, tengan un aumento crónico de la temperatura, lo cual representa un riesgo para los organismos acuáticos que han resistido a la contaminación del agua del río Cuautla producida por las empresas instaladas en su cercanía. El agua que la CTCC devolvería al caudal principal del río Cuautla se caracterizaría por la baja concentración de oxígeno, según ha quedado demostrado por investigaciones como las de Hester y Doyle (2014) en referencia a la hipoxia y contaminación térmica generadas por los procesos de refrigeración de las centrales termoeléctricas.

El problema del consumo productivo del agua por parte de la termoeléctrica no sólo queda en la construcción del acueducto que busca extraer agua del cauce del río Cuautla, sino que al interior de la CTCC se están llevando a cabo diversos trabajos que presuponen la perforación de pozos al interior de las instalaciones para poder abastecer de la cantidad de agua a la CTCC, una vez que el caudal de los manantiales y del río Cuautla se ha visto disminuido en los últimos años (Ávalos *et al.*, 2010), por lo que en sí mismos no representan una fuente de agua suficiente para el funcionamiento de la megainfraestructura.

Los peligros derivados de la entrada en operación de la CTCC no se quedan, desafortunadamente, en supuestas especulaciones alarmistas de la comunidad, ambientalistas y de científicos críticos que se han opuesto activamente en contra de este megaproyecto. La realidad hídrica de zonas del país en las cuales se han construido centrales termoeléctricas muestra, precisamente, la inviabilidad ecológica e hídrica de este tipo de megaproyectos. Tal es el caso de la termoeléctrica en Tula, Hidalgo, para cuyo funcionamiento se han perforado diversos pozos de los cuales se extraen importantes volúmenes de agua para su operación directa y para el suministro de energía a los

parques industriales que se han establecido en dicho territorio (Romo-Gómez *et al.*, 2019).

*Rasgos generales de la conflictividad socioambiental ante el despojo y violencia interminable generados por el PIM*

El PIM ha representado la privación y uso restrictivo del agua como bien común que históricamente, desde 1926, se ha gestionado comunitariamente por parte de los ejidos pertenecientes a Asurco (Parral y Guzmán, 2007). Mediante la construcción del acueducto y de la CTCC en la comunidad de Huexca el PIM ha desplegado diversos procesos legales, ilegales y clandestinos para despojar y controlar el agua proveniente del río Cuautla, bajo el pretexto de argumentar que dichas megainfraestructuras solamente utilizarían agua proveniente de PTARC, pero que en realidad representa una expropiación y limitación del agua que los ejidatarios de la región requieren para regar sus cultivos.

El PIM representa una amenaza para los recursos hídricos de la región en tanto que genera escenarios de clara devastación ambiental. Por ejemplo, el acueducto para abastecer la CTCC representa un consumo hídrico del agua de la región que impactaría negativamente a los productores de berro y hortalizas de los usuarios de Asurco en tanto que éstos perderían entre 12% y hasta 38% de los recursos hídricos que actualmente tiene concesionada para ser usada en el riego de sus cultivos (González, 2020).

El núcleo duro de la conflictividad socioambiental, que se ha generado en torno a la defensa del agua frente al consumo productivo de las aguas del oriente de Morelos por el PIM, está en que sus megainfraestructuras han sido identificadas por los ejidatarios afectados directamente por su

potencial operación como un atentado en contra de la soberanía y seguridad hídrica (Solís y Vargas, 2014). El daño ambiental en cuanto tal no se ha consumado sino que, aún, se mantiene latente; a finales de noviembre de 2020 éste se ha vuelto inminente una vez que se retomarán los trabajos para terminar la conexión del acueducto a la CTCC.

El PIM entraña la condición de posibilidad para la degradación del tejido social en aquellas comunidades donde ha buscado emplazar las megainfraestructuras de muerte y devastación ambiental que le integran (Luna-Nemecio, 26 de octubre de 2020). La operación de la CTCC en la comunidad de Huexca representa un riesgo para la salud de la población de dicha comunidad. Más allá de esta potencial afectación que se mantiene como un riesgo latente ante la potencial puesta en marcha de la CTCC, la producción social de la conflictividad ambiental ligada con la defensa del agua en la región oriente del estado de Morelos ya ha sido una condición de posibilidad para la generación de enfermedades en la población que se encuentra en el centro del conflicto; por ejemplo, las largas jornadas de lucha y resistencia, así como las condiciones climáticas adversas (lluvia, frío y calor extremo) han generado problemas respiratorios y digestivos entre quienes se encuentran en el Campamento Zapatista en Defensa de la Tierra y el Agua; además, la propia dinámica de lucha ha complicado que quienes tienen problemas crónicos en su salud (diabetes, cardiopatías, artritis, hipotiroidismo y cáncer) puedan cuidarse por estar procurando que los habitantes de Morelos disfruten de un ambiente sano.

La puesta en marcha de las megainfraestructuras del PIM constituye un factor de desabasto potencial de alimentos y productos básicos para las familias de los ejidatarios que se queden sin los recursos hídricos en la cantidad y calidad necesarias para poder producir los productos agrícolas

dirigidos tanto al autoconsumo como a la comercialización a pequeña escala en los mercados locales de Morelos. Esto no sólo implica la generación de condiciones de hambruna y trastornos alimenticios, ya que la población afectada por el saqueo y contaminación del agua por parte de la CTCC en Huexca no podrá continuar consumiendo los alimentos que históricamente formaban parte de su dieta cotidiana, por lo que se verá obligada a ingerir alimentos industrializados altamente *quimicalizados*; sino que, también, representa un factor de proletarización y descampesinización de la región que pasa por la creación de empleos informales, con condiciones precarias y sin ningún tipo de seguridad laboral, así como por el despojo de los medios de producción (agua y tierra) y de los medios de subsistencia. Con lo anterior se puede ver que en la base de la conflictividad socioambiental de corte hídrico que se desprende del PIM se tiene un proceso de acumulación originaria residual y terminal de capital (Veraza, 2007) que no sólo marca la impronta del despojo hídrico de las comunidades del oriente de Morelos, sino que, también, representa un proceso de concentración del ingreso y la riqueza, así como un correlativo empobrecimiento de los ejidatarios y sus familias que terminaría por configurar escenarios de desigualdad social, marginación y vulnerabilidad social.

La emergencia del conflicto socioambiental en defensa del agua del oriente de Morelos, que ha provocado el avance del PIM, ha evidenciado el menoscabo de la capacidad autogestiva de los ejidatarios que, históricamente, habían logrado desarrollar un mecanismo de gestión social de los recursos hídricos del río Cuautla para poder llevar a cabo sus actividades productivas y de autoconsumo. Las megainfraestructuras del PIM no sólo conforman una fuerza productiva ambientalmente destructiva, sino también un factor de degradación del tejido social porque ha significado una

ruptura al interior de los ejidos que hoy se centran en luchar y resistir ante el avance casi inminente de este megaproyecto, pues las relaciones de poder que se han configurado en torno a este conflicto han terminado por establecer prácticas de negociación mercantiles y coercitivas que, bajo una estructura de cacicazgo, han permitido que los líderes de Asurco se alinearan con los intereses del capital general, en tanto que han terminado por reproducir, en el discurso y la práctica, la misma posición que la CFE, el SOAPS y los gobiernos municipales, estatal y federal, referentes al supuesto carácter sustentable de la CTCC.

## Discusión

El PIM representa el agotamiento potencial y el deterioro latente del SHM, mismos que no sólo han sido puestos en crisis por los diversos procesos de urbanización e intentos de industrialización que de forma voraz y galopante se han extendido en los territorios morelenses durante las últimas décadas, sino que también han sido objeto de una especulación hídrica que, con el establecimiento de la CTCC, del gasoducto y del acueducto que contempla el PIM, apunta hacia un colapso del SHM. El PIM en su totalidad abre la puerta hacia escenarios de contaminación, saqueo y sobreexplotación de los recursos hídricos por la extracción de agua del río Cuautla que constituye un factor que produce una escasez hídrica directamente en el caudal de este cuerpo superficial de agua y en la red de manantiales, apantles y achololes que continúan siendo una fuente de abastecimiento de agua de riego para los casi 5 mil ejidatarios que continúan cultivando en la región.

Es importante no dejar de observar y seguirle la pista a las noticias en relación con la lucha y resistencia que los ejidatarios del oriente de Morelos llevan a cabo para evitar a toda costa que se termine de construir el acueducto y que entre en funcionamiento la CTCC en la comunidad de Huexca, pues los riesgos ambientales y sociales de las megainfraestructuras extractivistas e hidráulicas que amenazan con devastar el territorio de Morelos son de tal medida y complejidad que, de concretarse, llevarían a que la entidad se sumara a la serie de espacios geográficos que, durante el neoliberalismo, se transformaron en verdaderos infiernos ambientales.

Los efectos que históricamente ha causado la urbanización e intentos de industrialización del estado de Morelos han tendido a producir la destrucción del SHM. Aún más, si se considera la proyección y el avance tendencial en la inversión y construcción de megaproyectos en los municipios de Cuautla, Ayala y Yecapixtla bajo la lógica territorial del PIM, se puede observar que los recursos hídricos en la región recibirán una mayor presión, no sólo en lo que respecta a la construcción de los megaproyectos en sí mismos, como la deforestación, pavimentación y pérdida de biodiversidad que ha originado la Ampliación de la Autopista «La Pera-Cuautla», sino también por el proceso de urbanización que estos potencian al reconfigurar el sentido de las relaciones sociales y de producción al proletarizar a la población campesina que es despojada de sus tierras y que es cooptada para trabajar en la construcción y operación del megaproyecto.

La construcción de las megainfraestructuras que componen el PIM propicia las condiciones para el desarrollo de cierto tipo de infraestructura urbana, comercial y de servicios; acompaña, convalida y alimenta la reconfiguración capitalista del territorio (Hernández, 2018). Bajo este contexto, se debe considerar que en el estado de Morelos se ha producido una

gran efervescencia social en contra de la promoción de los diversos megaproyectos que están incluidos en el PIM, cuya complejidad en términos económicos, sociales y ecológicos puede ser sintetizada en los siguientes peligros que la constituyen y que tendencialmente amenazan con concretarse en la región:

a) Acaparamiento y despojo de tierras y de recursos hídricos de las comunidades de los estados de Morelos, Tlaxcala y Puebla por la construcción de megaproyectos energéticos e hidráulicos (Toledo *et al.*, 2008). Esta reconfiguración del territorio crea las condiciones para hacer un uso productivo del agua orientado a la industria automotriz, textil, farmacéutica y agroalimentaria, por lo que se produce una creciente incertidumbre respecto a la seguridad hídrica de la región en tanto que estos procesos productivos se han caracterizado por depredar los recursos hídricos al sobreexplotarlos y contaminarlos.

b) Desarrollo de procesos de urbanización voraz y depredadora del territorio, lo que provoca la depredación de las condiciones biofísicas y sociales del ciclo natural del agua en tanto que se promueve el cambio —legal e ilegal— del uso de suelo y la deforestación y asfaltado del territorio para la construcción de vías de comunicación y transporte que, en un primer momento, son emplazadas como parte de la infraestructura que requieren las industrias que promueve el PIM pero que, en un segundo momento, sirven como un factor de promoción y especulación urbana (Navarro *et al.*, 2017).

c) Descampesinización de las comunidades debido a los despojos de tierra y desplazamientos forzados de familias y comunidades enteras que promueven los procesos de industrialización derivados del PIM; esto creará una incertidumbre respecto a la soberanía alimentaria de la región una vez que las actividades agrícolas quedarán a expensas de los capitales privados

que inviertan en ellas para apuntalar su reconfiguración industrial hacia la exportación, sin mencionar que se perderán los saberes tradicionales de las localidades acerca del cultivo y cuidado de la naturaleza, incluyendo los recursos hídricos (Acosta, 2020).

*d)* Construcción de autopistas y carreteras a partir de inversiones multimillonarias para la generación de corredores urbano-industriales que articularían las regiones urbanas del estado de Morelos, lo que posibilitaría la concreción de corredores urbano-industriales que interconectarían los enclaves productivos y urbanos morelenses con los puertos de Veracruz, Acapulco, Lázaro Cárdenas y Altamira; además de totalizar el territorio morelense en una gran red de ciudades que nucleen el desarrollo urbano de la entidad.

*e)* Desarrollo de comercios y servicios complementarios que acompañan a cada uno de los megaproyectos que promueve el PIM y que contribuyen a la urbanización tendencial del territorio: unidades habitacionales, supermercados, centros comerciales, cantinas, restaurantes, hoteles, casinos, tiendas de conveniencia, gasolineras, etcétera; con lo cual se estaría contribuyendo a la deforestación, pavimentación del territorio y la generación de cantidades mayores de basura.

*f)* Producción social de diversos escenarios de riesgo, vulnerabilidad, injusticia y conflictos de carácter socioambiental, en tanto el PIM —lejos de generar ganancias para los capitales mexicanos y extranjeros que han invertido y especulado con él (y que se vuelven inciertas en tanto la realidad hídrica de la región)— han propiciado la destrucción del tejido comunitario, la violación de derechos humanos y ambientales, la criminalización de la propuesta y el asesinato de activistas sociales frente a la vulnerabilidad socioambiental múltiple y la creciente destrucción del SHM.

Como resultado de la destrucción hídrica en México por los diversos procesos de urbanización e industrialización del territorio, se ha producido una sobreexplotación de los recursos hídricos subterráneos, misma que ha generado que el agua de los acuíferos sea saqueada hasta el punto de incorporar arsénico y fluoruro que se encontraban presentes en los flujos profundos del agua subterránea, por lo que se presentan escenarios de una producción social de enfermedades que afectan a las comunidades (Ortega-Guerrero, 2011; Ortega-Guerrero *et al.*, 2015). Estos eventos muestran lo peligroso que resulta el que se promueva el funcionamiento de megainfraestructuras de alto impacto ambiental e hídrico como la termoeléctrica en Huexca, ya que promueve un consumo productivo y contaminación de agua que tendría grandes consecuencias en el ambiente y salud de la comunidad.

## Conclusiones

La génesis del conflicto socioambiental por el agua del oriente de Morelos en torno al PIM se encuentra en una serie de actividades extractivistas y de generación de energía a partir del saqueo, sobreexplotación, contaminación y despojo de la riqueza hídrica de la entidad; situación que es acompañada por una agudización en la economía y política de la gestión social del agua en los municipios de Cuautla, Ayala y Yecapixtla, en tanto que en estos territorios es donde se han emplazado las megainfraestructuras del PIM, así como los diversos proyectos de desarrollo agroindustrial, gran industrial e inmobiliario que, en su conjunto, confluyen en un escenario de uso intensivo, excluyente y dilapidador de los recursos hídricos del río

Cuautla y de la red de manantiales y los cuerpos de agua subterránea que forman parte de la dimensión metabólica natural del SHM.

El alcance del impacto que tiene el PIM sobre la riqueza hídrica de Morelos se extiende a la totalidad de recursos hídricos que hoy día fluyen en las aguas del río Cuautla, así como en la capacidad de recarga del acuífero Cuautla-Yautepec. Lo cual se traduciría en una inminente fractura en el equilibrio ecosistémico del lugar, pues implicaría la disminución o desaparición de flora y fauna endémica.

La magnitud de estos efectos alcanzarían a crear escenarios de riesgo y vulnerabilidad económica, socioambiental y de salud, en los 4 mil 973 ejidatarios que pertenecen a los 14 ejidos que se encuentran aguas abajo de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de la Ciudad de Cuautla, así como a los poco más de 2 mil 677 campesinos indígenas que riegan sus parcelas de autoconsumo y de venta de hortalizas; además, se tiene que contabilizar a los más de 587 jornaleros de Guerrero y Oaxaca que migran anualmente a los campos morelenses para trabajar en la cosecha de productos agrícolas.

En términos estructurales, en el conflicto por la defensa del agua ante el PIM participan una diversidad de actores locales y de índole nacional. Por ejemplo, es de reconocerse el papel que han desempeñado el director del SOAPS, los presidentes municipales de Ayala y Cuautla o la propia directiva de Asurco, que asumió un papel activo en la promoción del PIM una vez que en agosto de 2017 firmó un acuerdo con el gobierno del estado de Morelos y la CFE para construir y dar mantenimiento a la infraestructura hidroagrícola de los ejidos de Anenecuilco y Tenextepango a cambio de que estos últimos se retirasen del Campamento Zapatista en Defensa del Agua del Río Cuautla, mismo que fue desalojado a finales de noviembre de

2020 por la Guardia Nacional, lo que causó un estado de sitio en la comunidad de Huexca.

La relación política de los actores que en el nivel estatal participan en la generación del conflicto socioambiental para defender el agua y el territorio ante el avance del PIM está representada por la Comisión Estatal del Agua y los gobernadores estatales Marco Antonio Adame, Graco Ramírez y Cuauhtémoc Blanco, pues en las respectivas administraciones se ha llevado a cabo una promoción activa de la construcción de las megainfraestructuras que integran al PIM, así como la criminalización y represión por medio del uso de la fuerza pública de la protesta social que se ha movilizó en la entidad en contra de la termoeléctrica.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la CFE aparecen como los actores que, en el nivel federal, han promovido el avance del PIM. Por lo tanto, son estas instituciones las que han establecido un claro contubernio con representantes de las empresas transnacionales de Abengoa, Elecnor y Enagás, para lograr convertir al estado de Morelos en un bastión de la producción de energía eléctrica, además de apuntalar el proceso de urbanización e industrialización de la región. En efecto, el consumo industrial, según la Comisión Federal de Mejora Regulatoria de la Secretaría de Economía, representa 80% de la demanda total de gas natural de la entidad, siendo las empresas Saint Gobain, Continental, Burlington, Nissan y Bridgestone las que directamente se verían beneficiadas en lo inmediato por la entrada en funcionamiento de la termoeléctrica de Huexca; además, se tiene que considerar como parte de los proyectos que buscan, de nueva cuenta, volver a Morelos un polo de desarrollo industrial de la región centro de México, esto incluye la construcción de nuevos parques industriales en los municipios de Yecapixtla, Yautepec, Tetela del Volcán y Xochitepec.

Por todo lo anterior se puede establecer que el PIM no sólo resulta hidrológicamente inviable sino, también, todas y cada una de las infraestructuras que promueve resultan ser innecesarias; ni en los municipios de Cuautla, Ayala y Yecapixtla, ni en todo el estado de Morelos, se requiere la cantidad de electricidad que, presuntamente, se generaría con la entrada en funcionamiento de la CTCC. El PIM representa no sólo una superexplotación del agua por medio del sobreconsumo del recurso hídrico, sino que esta cantidad de agua saqueada implicaría un inminente apuntalamiento del proceso de industrialización de los territorios de la región, lo que resultaría en un doble impacto sobre el SHM.

La inviabilidad hídrica y lo innecesario que resulta el PIM marca el carácter inviable e insostenible de la urbanización e industrialización que amenaza por desarrollarse en el estado de Morelos, de ahí que se presenten escenarios de contaminación y de sobreexplotación de los recursos hídricos superficiales y subterráneos y, con ello, se desestructure el metabolismo natural y técnico del SHM.

Ante la creciente incertidumbre que representa la devastación ambiental y destrucción latente del SHM por la reconfiguración urbana e industrial del territorio, se puede establecer que el estado de Morelos *no es viable* para la operación de las megainfraestructuras extractivistas y energéticas de corte hídrico del PIM. La sobreexplotación, saqueo, despojo y contaminación de los recursos hídricos de la entidad impactarían negativa e, incluso, catastróficamente por la extracción de agua por medio del acueducto, pozos y demás tomas clandestinas que se instalen para abastecer de agua a la CTCC.

Dada la inviabilidad hídrica y el talante innecesario del PIM se tiene que dar cuenta del peligro y riesgo inminente que representa dicho megaproyecto de muerte. De lo contrario, se estarían generando condiciones de

vulnerabilidad para la vocación agrícola y campesina de la región, así como se impactaría negativamente sobre el SHM, en primer lugar, por el propio PIM, y, en segundo lugar, por todos los procesos de industrialización producidos posteriormente a la entrada en funcionamiento de la CTCC.

Después de la argumentación y presentación de los resultados expuestos con anterioridad, este estudio arriba a su principal conclusión: dada la inviabilidad hídrica y el talante innecesario de las megainfraestructuras del PIM, se tiene que impedir a toda costa que éstas entren en funcionamiento; de lo contrario, se estarían generando las condiciones para una destrucción del SHM.

Este estudio logró presentar la articulación dialéctica entre la devastación ambiental y degradación del tejido social que produce al PIM. Se mostró una radiografía general de las generación de condiciones de posibilidad objetivas para el estallido de un conflicto socioambiental que ha puesto sobre el terreno la lucha y resistencia de las comunidades del oriente de Morelos por defender el agua. La presente investigación logró identificar la magnitud, riesgo o afectación ambiental resultante de actividades y procesos socioeconómicos y político-administrativos impulsados por el PIM, mostrando la serie de impactos negativos y problemas ambientales, así como los actores y relaciones de poder presentes en la generación del conflicto socioambiental en Morelos.

La propia dinámica y vigencia del conflicto por la defensa del agua en el oriente de Morelos a raíz del PIM representa uno de los límites del presente estudio; una segunda limitante está en el enfoque general que caracteriza la mirada genético-estructural de esta investigación, pues tal no alcanza a reconocer las particularidades sociológicas y micropolíticas del conflicto por el agua en Morelos.

Como tareas pendientes a desarrollar en futuras investigaciones está el poder realizar un análisis etnográfico o de corte sociológico que dé cuenta de las particularidades del proceso de movilización social surgido a partir del conflicto socioambiental de corte hídrico generado por el PIM. Otro trabajo que se puede desarrollar tendría que mostrar un estudio territorial que permita identificar la articulación del PIM con los procesos generales de urbanización e industrialización del estado de Morelos y del sistema central de ciudades de México, lo que permitiría reconocer la posible creación de corredores de devastación e injusticia socioambientales.

## Referencias

- Acosta, E. (2020). «Saberes ancestrales y gestión comunitaria del agua frente a su apropiación y la imposición de megaproyectos en el estado de Puebla». *Argumentos, Estudios Críticos de la Sociedad* (93), pp. 59-81. DOI: <https://doi.org/10.24275/uamxoc-dcsh/argumentos/202093-03>
- Acuña, V. J. K. (2019). «Acumulación por medio del despojo territorial, caso Perú y México». *Iberoamérica* (1), pp. 127-148. Recuperado de <https://elibrary.ru/item.asp?id=37181627>
- Aiscar, F.L. (2019). «De la explotación en Marx a la superexplotación de la fuerza de trabajo en América Latina». *Revista Sociedad* (38), pp. 4-13. Recuperado de <https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/revistasociedad/article/view/3559>
- Armenta, T.G. (2016). «Enfoque territorial de construcción de paz en Morelos, México». *Revista de Paz y Conflictos*, 9(2), pp. 199-220. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5891430>

- Ávalos, C., Aguilar, G. y Palerm, J. (2010). *Gestión técnica y social del uso del agua en Morelos: caso del río Cuautla*. México: Universidad Autónoma Chapingo.
- Barreda, A. (2014). *Crisis del sistema central de ciudades de México. Necesidad de un nuevo proyecto de investigación*. México: Universidad Nacional Autónoma de México/Itaca.
- Barreda, A. y García-Barrios, R. (coords.) (en prensa). *Afectación del sistema hídrico nacional por el Estado mexicano*. México: Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias/Universidad Nacional Autónoma de México/Itaca.
- Breuer, A. y Oswald Spring, U. (2020). «The 2030 agenda as agenda setting event for water governance? Evidence from the Cuautla River basin in Morelos and Mexico». *Water*, 12(2), p. 314. DOI: <https://doi.org/10.3390/w12020314>
- Belloni, P. y Wainer, A. (2014). «El rol del capital extranjero y su inserción en la América del Sur posneoliberal». *Problemas del Desarrollo*, 45(177), pp. 87-112. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0301-7036\(14\)70864-8](https://doi.org/10.1016/S0301-7036(14)70864-8)
- Espinosa Hernández, R. (2015). «Conflictos socioambientales y pobreza: el caso de la zona metropolitana de la Ciudad de México». *Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía*, 24(1), pp. 193-201. DOI: <http://dx.doi.org/10.15446/rcdg.v24n1.41971>
- Espinoza, E.P. y Molina, C.E. (2014). «Contaminación del aire exterior Cuenca-Ecuador, 2009-2013. Posibles efectos en la salud». *Revista de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca*, 32(2), pp. 6-17. Recuperado de <https://publicaciones.ucuenca.edu.ec/ojs/index.php/medicina/article/view/883>
- Foster, J.B. (2004). *La ecología de Marx. Materialismo y naturaleza*. Barcelona: El Viejo Topo.
- Garrido, S.G. (2012). *Fundamentos técnicos de los ciclos combinados: operación y mantenimiento de centrales de ciclo combinado*. Madrid: Díaz de Santos.

- González, L. (2020). *Proyecto Integral Morelos: sus impactos sociales y la demanda de justicia hídrica de los ejidatarios del municipio de Ayala, Morelos*. México: Universidad Autónoma del Estado de Morelos/Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales.
- Harvey, D. (2007). *Espacios del capital. Hacia una geografía crítica*. España: Akal.
- Hernández Lara, O.G. (2018). «Tiempo y espacio como formas antagónicas: la lucha de San Francisco Xochicuautla por el bosque de ñatho». *Revista Telar* (20), pp. 141-160. Recuperado de <http://revistatelar.ct.unt.edu.ar/index.php/revistatelar/article/view/369>
- Hester, E. y Doyle, M. (2011). «Human impacts to river temperature and their effects on biological processes: a quantitative synthesis». *Journal of the American Water Resources Association* (47), pp. 571-587. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1752-1688.2011.00525.x>
- Jaimes, M.A. (2017). «Sismo del 19 de septiembre de 2017 M 7.1, Puebla-Morelos». *Instituto de Ingeniería UNAM*. Recuperado de <http://www.marielenavega.com/wp-content/uploads/2017/09/sismo.pdf>
- Lefebvre H. (2001). *The production of space*. Estados Unidos: Blackwell.
- Lucero, P.I. et al. (2007). «Calidad de vida y espacio: una mirada geográfica desde el territorio local». *Hologramática*, 7(1), pp. 99-125. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5872424>
- Luna-Nemecio, J. (2016). «El metabolismo urbano-rural del agua, actores sociales y gestión de los recursos hídricos público urbanos de la ciudad de Cuautla, Morelos (2006-2013)». *Revista de Geografía ESPACIOS*, 5(10), pp. 43-62. DOI: <https://doi.org/10.25074/07197209.10.695>
- Luna-Nemecio, J. (2018). «El colapso del agua en México ante el calentamiento global. Análisis crítico en torno a la disponibilidad hídrica en Morelos». *Trabajadores. Revista de análisis y debate de la clase trabajadora* (126), pp. 17-29.

- Luna-Nemecio, J., Bolongaro, A. y Torres, V. (2020). «La crisis hídrica en la región de la subcuenca del río Cuautla por los efectos del cambio climático». *Revista de Geografía ESPACIOS*, 9(18), pp. 70-89. DOI: <https://doi.org/10.25074/07197209.18.1229>
- Luna-Nemecio, J. (26 de octubre de 2020). «Megaproyectos de muerte: la Termoeléctrica en Huexca ante la devastación ambiental de Morelos». *La Jornada Morelos*. Recuperado de <https://bit.ly/3oBOLrR>
- Marx, K. (2017). *El capital. Crítica de la economía política*. España: Siglo XXI.
- Navarro, M.L., Fini, D. y Castro, D. (2017). «Neoliberalismo y urbanización en la ciudad de Puebla: dinámicas y efectos». *Bajo el Volcán*, 17(26), pp. 67-90. Recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/286/28655577004.pdf>
- Ordoñez, S. (1999). «La nueva industrialización en Morelos en los años ochenta y noventa». *Comercio Exterior*, 49(12), pp. 1113-1120. Recuperado de <http://ru.iiec.unam.mx/id/eprint/128>
- Ordoñez, S. (2001). «Las ventajas competitivas de la nueva industrialización en Morelos». *Comercio Exterior*, 51(7), pp. 610-620. Recuperado de <http://ru.iiec.unam.mx/129/>
- Ortega-Guerrero, M.A. (2011). «Situación del agua subterránea en México: una experiencia científico-legislativa y sus implicaciones». *Revista Punto de Acuerdo*.
- Ortega-Guerrero, M.A., Carrasco-Núñez, G., Barragán-Campos, H. y Ortega, M. (2015). «High incidence of lung cancer and malignant mesothelioma linked to erionite fibre exposure in a rural community in Central Mexico». *Occupational & Environmental Medicine* (72), pp. 216-218. DOI: <https://doi.org/10.1136/oemed-2013-101957>
- Pardos, J.A. (2008). «La contaminación atmosférica y los ecosistemas forestales». *Forest Systems*, 15(4), pp. 55-70. DOI: <https://185.79.129.77/index.php/IA/article/view/2399>

- Parral, Q. y Guzmán, N. (2007). «La disputa por el agua al interior de los ejidos. El caso del ejido de Cuautlixco, Morelos». *Boletín del Archivo Histórico del Agua* (37), pp. 61-67. Recuperado de <https://bit.ly/3lyetdV>
- Prieto Montenegro, F., Benítez Cortes, I., Ramos Sánchez, L. y García Rodríguez, A. (2017). «Determination of the emissions of dioxide of sulphur in the thermo electrical power plant «10 de octubre»». *Monteverdia*, 10(1), pp. 26-35. Recuperado de <https://revistas.reduc.edu.cu/index.php/monteverdia/article/view/1708>
- Radamés Villagómez, R. (2017). «Los guardianes del agua: cosmopolítica y conservación del agua en los Altos de Morelos, México». *Letras Verdes. Revista Latinoamericana de Estudios Socioambientales* (22), pp. 27-45. DOI: <https://doi.org/10.17141/letrasverdes.22.2017.2709>
- Romo-Gómez, C. *et al.* (2019). «Emisiones de GEI del corredor industrial Tula-Apaxco». *Pädi. Boletín Científico de Ciencias Básicas e Ingenierías del ICBI*, 7(13), pp. 12-16. DOI: <https://doi.org/10.29057/icbi.v7i13.3443>
- Santos, M. (1996). *Por una geografía nova: da crítica da geografia a uma geografia crítica*. São Paulo: Editora HUCITEC.
- Schmidt, M. (2014). «Territorio(s), desarrollo (in)sustentable y naturaleza colonizada. Una propuesta de abordaje conceptual». *Pampa. Revista Interuniversitaria de Estudios Territoriales* (10), pp. 101-130. Recuperado de <https://bit.ly/2JPZp4y>
- Solís, J.C.F. y Vargas, S.C. (2014). «La defensa de los pueblos del Popocatépetl ante el despojo del Proyecto Integral Morelos». En *Territorios en disputa. Despojo capitalista, luchas en defensa de los bienes comunes naturales y alternativas emancipatorias para América Latina*. Ciudad de México: Bajo Tierra Ediciones/Gizella Garciarena Hugyecsz, pp. 303-319.
- Toledo, V.M. (2008). «Metabolismos rurales: hacia una teoría económico-ecológica de la apropiación de la naturaleza». *Revibec: Revista de la Red Iberoamericana de Economía Ecológica*, 7, pp. 1-26.

- Vázquez Ayala, D.R. (2020). «Nuevos paradigmas educativos, económicos y sociales para la sostenibilidad». *Ecociencia International Journal*, 2(3), pp. 14-21.  
DOI: <https://doi.org/10.35766/jc20232>
- Veraza Urtuzuástegui, J. (2007). *Economía y política del agua. El agua que te vendo primero te la robé*. México: Itaca.
- Veraza Urtuzuástegui, J. (2010). «Crisis económica y crisis de la forma neoliberal de civilización (o de la subordinación real del consumo bajo el capital específicamente neoliberal)». *Argumentos*, 23(63), pp. 123-157. Recuperado de <https://bit.ly/3mM0cSP>



Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons  
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional



## Violencia paramilitar en sectores económicos clave en Honduras: el brazo violento del «desarrollo»

Jasmin Hristov\*

Karen Spring\*\*

*Resumen.* Catalogado como uno de los países con mayor incidencia homicida y feminicida en el mundo, Honduras ha sido expuesto como un foco de violencia perpetrada por los cárteles de la droga y las pandillas. No obstante, reducir el problema de la violencia a la criminalidad es inexacto porque se centra en los síntomas, en detrimento de las causas fundamentales, además de que se incentiva una mayor injerencia del Ejército y la Policía, organismos responsables de graves violaciones de derechos humanos. En el fondo, subyace la violencia política, es decir, la violencia y represión contra los defensores de la tierra, el medio ambiente y los derechos humanos, quienes buscan alternativas a los proyectos agroindustriales, mineros e infraestructurales. En la última década, actores estatales y no estatales, como los paramilitares, han perpetrado una violencia al servicio del capital. La violencia paramilitar es funcional a la acumulación de capital a gran escala en la agroindustria, turismo, minería y energía; también abona a la imposición de reformas neoliberales en la gestión territorial, la educación y la salud. La violencia paramilitar al servicio de corporaciones locales y extranjeras ha tenido lugar en un entorno militarizado que despliega una violencia estatal que reprime y criminaliza a los movimientos sociales. Honduras destaca como uno de los cuatro países de América Latina con mayores niveles de violencia y criminalización, fenómenos correlacionados.

*Palabras clave:* capitalismo, neoliberalismo, violencia, paramilitares, Honduras.

\* Estadounidense. Profesora asistente en el Departamento de Sociología y Antropología y en el Instituto Guelph de Estudios del Desarrollo.

\*\* Canadiense. Activista e investigadora de los derechos humanos y coordinadora de la Red de Solidaridad con Honduras (HSN).

Traducción del inglés al español por Paula Jiménez Argumosa.

## Paramilitary violence in key economic sectors in Honduras: the violent arm of «development»

*Abstract.* Classified as one of the countries with the highest incidence of homicide and femicide in the world, Honduras has been revealed as a flashpoint for violence perpetrated by the drug cartels and gangs. However, to reduce the problem of violence to simply «criminality» is inexact because it focuses upon the symptoms, to the detriment of the core causes, and which drives increasing involvement in the Armed Forces and the Police, bodies that are responsible for grave violations of human rights. At its core lies a foundation of political violence —that is, the violence and repression against the defenders of the earth, environment, and human rights— those who search for alternatives to agro-industrial, mining and infrastructure projects. Over the past decade, state and non-state actors, such as paramilitaries, have perpetrated violence in the service of capital. Paramilitary violence is functional for the large-scale accumulation of capital in agro-industry, tourism, mining and energy; it also drives the imposition of neoliberal reforms in land management, education and health. Paramilitary violence in the service of local and international corporations has occurred within a militarized context that extends state violence to repress and criminalize social movements. Honduras stands out as one of the four countries in Latin America with the highest levels of violence and criminalization, interrelated phenomena.

*Keywords:* capitalism, neoliberalism, violence, paramilitaries, Honduras.

## Introducción

Honduras ha sido clasificado en repetidas ocasiones entre los diez países con mayores tasas de homicidio del mundo durante la última década, así como el país con una de las tasas de feminicidios más altas del mundo. Tradicionalmente, académicos, analistas y líderes políticos han atribuido esta violencia a las pandillas o maras y al crimen organizado, en específico al narcotráfico (Cantor y Rodríguez, 2015; Moncada, 2013). Sin embargo, detrás de los cárteles de la droga y las pandillas se esconde un tipo de violencia diferente. Global Witness ha denominado reiteradamente a Honduras como el país más mortífero per cápita para los defensores de la tierra y el medio ambiente (Orsi y DiLorenzo, 2018; Defensores en Línea, 2016). Es uno de los países con la expresión más aguda de una tendencia global caracterizada por la violencia y la represión contra defensores de la tierra y el medio ambiente en el marco de proyectos agroindustriales y de minería e infraestructura en expansión (Hristov, 2020). Además, ha sido descrito por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como «uno de los países más hostiles y peligrosos para los defensores de derechos humanos» (Human Rights Watch, 2018).

Detrás de la reputación de que el peligro de Honduras son las pandillas existe una realidad invisibilizada; el país enfrenta una ola de violencia política sin precedentes, que apunta a movimientos, organizaciones e individuos que buscan una alternativa al modelo mercantil que puede describirse como neoliberalismo con esteroides: «La gente fuera de Honduras cree que Honduras es un país peligroso debido a las pandillas (...) Que este es el principal problema del país, pero no saben que la imposición de

un modelo que nos empobrece y nos despoja de nuestras tierras, y que es violento en sí mismo, es más problemático».<sup>1</sup> Claramente, reducir toda la violencia a la actividad criminal no sólo es inexacto, sino que también daña profundamente cualquier esfuerzo que busque abordar las causas. Debido a que los discursos dominantes son incapaces de definir cualquier otro tipo de violencia que no sea criminal, el enfoque se ha centrado en tratar los síntomas (en oposición a las causas fundamentales), y el remedio ha consistido en fortalecer la seguridad invirtiendo fondos en el Ejército y aparatos de la policía del Estado —los mismos organismos responsables de graves violaciones de derechos humanos.

Entonces, ¿quiénes son los perpetradores de la violencia política en Honduras? Tanto actores estatales como no estatales se involucran en la violencia al servicio del capital. Durante los últimos 10 años, el país ha exhibido una proliferación de la violencia paramilitar junto con la violencia dirigida por el Estado. La violencia paramilitar en este caso ha sido ejercida por una variedad de actores: guardias de seguridad privada, militares en activo, exmilitares u otro personal de seguridad del Estado que participa en acciones que exceden sus obligaciones legales, sicarios (pistoleros a sueldo), pandilleros y grupos armados al estilo paramilitar. Si bien la violencia paramilitar definitivamente tiene lugar en Honduras, a diferencia de países como Colombia y México, los grupos paramilitares todavía se encuentran en las primeras etapas de formación.

En este artículo presentamos dos argumentos principales: 1. La violencia paramilitar ha sido instrumento para la expansión y consolidación de operaciones capitalistas a gran escala en los sectores de la agroindustria, el

<sup>1</sup> Entrevista personal con miembros del Movimiento Independiente Indígena Lenca de la Paz (Milpah), Honduras, 20 de octubre de 2018, realizada por Jasmin Hristov.

turismo, la minería y la energía, así como la imposición de reformas neoliberales en la gestión territorial, la educación y los sectores de la salud; todos contra la resistencia de las poblaciones afectadas. 2. La violencia paramilitar al servicio de corporaciones locales y extranjeras casi siempre ha tenido lugar en un entorno altamente militarizado, caracterizado por la violencia estatal, la represión y la criminalización de los movimientos sociales, donde colaboran actores estatales y no estatales directamente o al menos facilitan las operaciones. De hecho, existe una correlación entre los altos niveles de violencia y de criminalización, y Honduras es uno de los cuatro países de América Latina que ocupan el primer lugar en ambos.

### Contexto económico y político

La historia de Honduras, como la de muchos de sus vecinos latinoamericanos, se ha caracterizado por profundas desigualdades raciales y de clase, un proceso continuo de despojo de tierras y violencia empleada por quienes tienen poder económico y político contra la mayoría social —trabajadores y pobres—, con el propósito de mantener el control sobre los recursos y la mano de obra, y eliminar o reprimir la disidencia. En 1960, la implementación y expansión de las protecciones sociales, así como la distribución de tierras a comunidades empobrecidas de las zonas rurales, se vieron como una forma de «evitar el contagio revolucionario» en Honduras, particularmente con la victoria de la Revolución cubana en 1959 (FIAN, 2017). Por ejemplo, una ley firmada en 1961 promovió la conquista de la frontera agrícola, como las tierras estatales en el Valle del Aguán, por campesinos y trabajadores sin tierra, y se promovió la creación de empresas campesinas cooperativas.

En las décadas de 1970 y 1980 la política exterior del gobierno de Estados Unidos hacia Centroamérica cambió a medida que crecía la preocupación por el aumento de la influencia de la Unión Soviética, en el contexto global de la Guerra Fría y a medida que los conflictos armados amenazaban el *statu quo* y el poder de Estados Unidos en Nicaragua, Guatemala y El Salvador. Durante la década de 1980 Estados Unidos buscó una solución militar a la amenaza de la izquierda de Nicaragua, Guatemala y El Salvador, por lo que convirtió a Honduras en una base regional de actores armados estatales y no estatales para llevar a cabo tácticas de contrainsurgencia y esfuerzos de desestabilización contra las fuerzas revolucionarias en estos países vecinos (Conadeh, 2002).

Fue en este clima autoritario cuando el enfoque previo de sostenibilidad alimentaria y redistribución de la tierra, que caracterizó las décadas de 1960 y 1970, llegó a su fin. La mitad de la década de 1980 marcó el inicio de las reformas neoliberales en Honduras bajo el gobierno de José Azcona (Loperena, 2017). Como en otras partes de América Latina, el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) ofrecieron una reestructuración de la deuda condicionada a la implementación de políticas neoliberales agresivas orientadas a la apertura de territorios, recursos y mano de obra, al capital global. La receta del BM para Honduras tenía un claro énfasis en un «marco macroeconómico estable» que garantizaría «certeza para la inversión privada» (Banco Mundial, 2001).

Las consecuencias para la mayoría social han sido devastadoras. En la actualidad, Honduras es el segundo país más desigual de América Latina, después de Colombia, y el sexto país más desigual del mundo, según el BM (*World Politics Review*, 2017), con un coeficiente de Gini de 50.4 (Banco Mundial, 2018). Desde el golpe de Estado de 2009, la pobreza y la desigualdad han

ido aumentando: 20% más enriquecido incrementó sus ingresos en más de 8%, mientras que 20% más empobrecido sufrió una disminución de 7.4%. Según estadísticas conservadoras del Instituto Nacional de Estadística de Honduras, en 2017, 64% de la población vivía en la pobreza y 40% en la extrema pobreza (Mejía, 2017), pero otros, como el periodista Bartolo Fuentes, sostienen que las cifras son incluso superiores.<sup>2</sup>

Como ha demostrado la historia, los oprimidos no son víctimas pasivas y Honduras no es una excepción. Más de 30 años de despojo, asaltos al tejido asociativo de las comunidades y erosión de los programas sociales han producido numerosos movimientos sociales desde abajo con una clara agenda antineoliberal que ha presentado un desafío permanente a las élites y sus aliados capitalistas extranjeros al resistir y luchar contra la legislación y las políticas económicas favorables al mercado, que los condenan al hambre y a la muerte. Es aquí donde la violencia ha servido como instrumento indispensable para los grupos económica y políticamente dominantes.

### Violencia procapitalista

No toda la violencia colectiva en Honduras se puede explicar a través de las actividades de las organizaciones criminales y las pandillas. Los militares estatales, la policía y otros miembros de su aparato coercitivo, así como los actores armados no estatales, se involucran en la violencia procapitalista —un tipo de violencia que es funcional para el capital al crear, reproducir o restaurar las condiciones para la acumulación de capital. El concepto

<sup>2</sup> Entrevista personal con el periodista Bartolo Fuentes, Honduras, 20 de octubre de 2018, realizada por Jasmin Hristov.

de violencia procapitalista desarrollado por Hristov (2020) invita a conceptualizar una nueva forma de violencia —no en términos de los actores que la ejercen, sino en términos de sus implicaciones estructurales— en función de su relación con las estructuras de clase. Una de las razones por las cuales la violencia procapitalista es de naturaleza estructural es que interactúa con las estructuras legales, en particular la legislación económica y de seguridad. Este aspecto es muy pertinente para el caso de Honduras. Como se demostrará en este artículo, el uso sistemático de la violencia contra periodistas, estudiantes, campesinos, indígenas, organizaciones de mujeres y otros sectores de la sociedad civil no puede explicarse como producto de la criminalidad, abuso de poder o coincidencias accidentales entre las actividades de los actores armados y los intereses capitalistas. La violencia procapitalista se utiliza cuando personas y colectivos se manifiestan contra la reestructuración económica neoliberal discutida previamente. La violencia llevada a cabo, no sólo por actores estatales sino también no estatales, sirve para hacer cumplir leyes y políticas económicas neoliberales que facilitan la acumulación del capital, frente a la resistencia de la población adversamente afectada. Al mismo tiempo, la legislación en materia de seguridad legitima la violencia dirigida a neutralizar los obstáculos que surgen de los agravios de los movimientos sociales desde abajo y criminalizar a quienes obstaculizan los avances del capital.

### **Violencia paramilitar como un tipo de violencia procapitalista**

La violencia procapitalista se presenta en diferentes modalidades: producto del tipo de actor (estatal/no estatal) y si la violencia contraviene la

legislación existente. Debido a que académicos y funcionarios del Estado suelen clasificar la violencia según el tipo de actor armado, los casos de violencia procapitalista en Honduras y otros países de América Latina terminan categorizados simplemente como violencia criminal relacionada con actividades de pandillas u organizaciones del narcotráfico. Por lo tanto, es crucial reconocer las diferentes modalidades: 1. Estatal legal. 2. Estatal ilegal. 3. No estatal legal. 4. No estatal ilegal.

La primera modalidad se lleva a cabo por actores estatales dentro de los parámetros de sus deberes legalmente prescritos; por ejemplo, «contener» (es decir, reprimir) las protestas para mantener el orden y la seguridad, o desalojar a los campesinos con relación al cumplimiento de una orden judicial. La segunda modalidad es efectuada por actores estatales que participan en acciones fuera de su servicio; por ejemplo, ejecuciones extrajudiciales, violaciones y torturas. La tercera es la de actores armados no estatales que realizan operaciones que no contravienen la legislación existente; por ejemplo, personal de seguridad privada que dispara para proteger a su cliente en un ataque. La cuarta ocurre cuando los actores armados no estatales se involucran en actividades que *a)* están fuera de sus obligaciones habituales (como parte de un trabajo asalariado), pero que no violan directamente ninguna ley, como el personal de seguridad privada que acompaña a la policía estatal en casos de desalojo, o para participar en registros y detenciones arbitrarias de personas; y *b)* son contrarios a la ley como asesinatos, amenazas, violaciones, torturas, desplazamientos forzados y secuestros. En esta modalidad (4b) pueden existir actores que se encuentran empleados formalmente, como guardias de seguridad privada que durante o fuera del horario de su trabajo formal realizan violencia ilegal, o actores que sólo trabajan en la realización de actos de violencia ilegal,

es decir, *sicarios* a tiempo completo. Categorizamos dos modalidades de violencia procapitalista, 2 y 4, como violencia paramilitar —esto es, actores estatales que participan en violencia fuera de su servicio legalmente prescrito y actores armados no estatales que participan en violencia más allá de la definición formal de su trabajo (si lo hay) e infligen daño a civiles de manera ilegal.

En Honduras, tanto la violencia estatal como paramilitar sustentan estructuras de poder institucionalizadas. Así, actos de violencia, como la represión violenta de las protestas estudiantiles o la violencia sexual vivida por mujeres lideresas comunitarias contra la minería, contrastan con la violencia de pandillas que surge de la guerra con pandillas rivales, extorsión y control social no orientado a reproducir relaciones institucionalizadas de acumulación del capital.

Los actores estatales (militares) o no estatales (personal de seguridad privada) utilizan la violencia descrita en todas las modalidades, junto con un grupo armado de civiles reclutados localmente o residentes integrados en las comunidades locales que emplean la violencia descrita en la modalidad 4. Estos reclutas locales o bandas (grupos delictivos organizados localmente a pequeña escala) cuentan con una cultura y unos conocimientos locales y pueden aportar información esencial que ayude a identificar a los agentes clave que representan una amenaza para los intereses capitalistas. Las bandas no sólo ejercen violencia, sino que también generan terror psicológico, que es particularmente efectivo cuando los grupos o comunidades en resistencia están extremadamente unidos y no se ven afectados por la violencia estatal.

## Militarización y criminalización: dos condiciones esenciales para la violencia paramilitar

La violencia paramilitar en Honduras ha sido llevada a cabo por personal de seguridad privada, militares en activo o exmilitares u otro personal de seguridad del Estado, sicarios (pistoleros contratados), pandilleros, bandas de narcotraficantes y grupos de civiles armados al estilo paramilitar. Es importante señalar que la proliferación de la violencia paramilitar en el país ha concordado con un resurgimiento de las prácticas de contrain-surgencia, desde la Guerra Fría, y justificadas bajo el mantra de la guerra contra las drogas. En 2009, Estados Unidos creó la Iniciativa de Seguridad Regional Centroamericana (CARSI, por sus siglas en inglés), que surgió de la Iniciativa Mérida entre México y Estados Unidos. CARSI recibió un presupuesto de 496 millones de dólares entre 2008 y 2013; el programa fue diseñado para incluir la participación de contratistas privados de seguridad, la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), así como las fuerzas militares de Estados Unidos y Colombia, para combatir las organizaciones criminales y el narcotráfico. En 2011, el Pentágono aumentó su gasto en contrataciones en Honduras a 53.8 millones de dólares (Paley, 2014). El Plan Colombia, así como las organizaciones paramilitares colombianas, han servido como modelo para el diseño de reformas policiales y de militarización en Honduras, que han fortalecido el poder de las fuerzas de seguridad del Estado, han aumentado la militarización y han facilitado la «cooperación» entre la seguridad pública y privada.

Este fortalecimiento del aparato coercitivo del Estado a través de una mayor militarización y la proliferación de asociaciones de seguridad público-privadas ha ido acompañado de una legislación de seguridad orientada

a la flexibilización del uso del «estado de emergencia» y la criminalización de la protesta social y el activismo por el derecho a la tierra y protección del medio ambiente. Un ejemplo de ello son las reformas del artículo 335 del Código Penal, realizadas en el 2017, que ampliaron la definición de lo que constituye el delito de terrorismo. La CIDH y otras entidades han expresado su preocupación por la ambigüedad de los delitos definidos en la reforma, que permiten interpretaciones muy dispares y sanciones sobre conductas que no corresponden a la gravedad y naturaleza del delito de terrorismo (OEA, 2017) y, en consecuencia, perjudican el trabajo de defensores de derechos humanos, periodistas y movimientos sociales. La criminalización de la disidencia se manifiesta en detenciones arbitrarias durante manifestaciones o acciones de recuperación de tierras, detenciones como parte de procesos judiciales, prolongación de procesos judiciales en los que se restringe enormemente la acción y libertad de movimientos de las víctimas, y estigmatizaciones mediáticas en las que los principales medios de comunicación retratan a movimientos sociales, activistas y quienes los defienden como criminales o terroristas (OCMAL, 2016).

Breves discusiones sobre los grupos paramilitares en el contexto hondureño comenzaron a aflorar en los medios de comunicación en 2009, dos meses después del golpe, en relación con la reclutación de alrededor de 130 exmiembros de la organización paramilitar más grande de Colombia, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con el propósito de trabajar para empresarios y terratenientes hondureños en el Valle del Aguán y sofocar las protestas nacionales contra el golpe (*El Tiempo*, 2009; *BBC*, 2009). Sin embargo, posteriormente, las menciones a los grupos paramilitares disminuyeron a pesar de que continuó la violencia paramilitar.

## Violencia paramilitar sin grupos paramilitares: presencia en los sectores económicos clave

### *Violencia paramilitar en los agronegocios*

La proliferación de actores armados no estatales en casos de disputas y conflictos territoriales se puede observar en los sectores de la agroindustria, la minería, la construcción de represas hidroeléctricas y el turismo. Según una base de datos del Monitor de Derechos Humanos y Violencia Política de Honduras,<sup>3</sup> entre 2009 y 2019, cerca de 40% de todos los casos agrarios involucró agresiones por parte de actores armados no estatales que resultaron en diversas formas de violaciones de derechos humanos, entre ellas asesinatos.

Dentro del sector agroindustrial, en particular las plantaciones de palma de aceite en el Valle del Bajo Aguán, se trata de una de las regiones más fértiles de América Latina y también la más mortífera para los defensores de la tierra y el medio ambiente. Entre los 1970 y mediados de los 1990, las tierras del Valle del Aguán pertenecieron a cooperativas campesinas, hasta que la Ley de Modernización Agraria de 1992 revocó las prohibiciones de la venta de tierras de propiedad colectiva (Carasik, 2017). Esto, junto con otros factores, permitió la rápida toma de tierras de cooperativas por un par de grandes empresas, entre ellas Corporación Dinant —propiedad de Miguel Facusse, conocido antes de su muerte como el hombre más rico

<sup>3</sup> Esta base de datos se encuentra en la web [violenciahonduras.org](http://violenciahonduras.org). Es producto de un proyecto de colaboración entre Jasmin Hristov (UBC) y Dina Meza de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos en Honduras (Asopodehu), financiado por el Consejo Canadiense de Ciencias Sociales y Humanidades.

de Honduras y uno de los partidarios del golpe de Estado contra Zelaya. Desde 2000 se han formado numerosos movimientos campesinos con el objetivo de disputar la legalidad de estas controvertidas ventas de tierras cooperativas. Gradualmente, representantes de la mayoría de tales movimientos se unieron para coordinarse bajo la Plataforma Agraria del Valle del Bajo Aguán. Dicha organización ha estado exigiendo al gobierno una investigación adecuada sobre las circunstancias en las que se llevaron a cabo las ventas de tierras en la década de 1990, la nulidad de los acuerdos de compra y una reforma agraria nacional integral y justa. Dada la falta de respuesta del gobierno a esos llamamientos, los campesinos se han involucrado en acciones directas en forma de ocupaciones para la recuperación de tierras en disputa.

El Valle del Bajo Aguán fue la ubicación del Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM) financiado por Estados Unidos que participó en el entrenamiento de los Contras nicaragüenses<sup>4</sup> y el Ejército salvadoreño desde 1950 hasta 1980. En la actualidad, el Valle del Aguán sigue siendo un sitio altamente militarizado, donde los Batallones 14 y 15 de las Fuerzas Armadas han establecido una presencia permanente como parte de la Operación Xatruch II y III (Bird, 2013). El operativo militar-policial de estilo contrainsurgente ha desplegado más de 8 mil efectivos desde 2011, con el objetivo de combatir la violencia relacionada con los conflictos territoriales en la zona. Según un portavoz del operativo, «esta es una fuerza pacificadora (...) Somos una fuerza que escuchará a ambas partes, para ayudarlas a llegar a un acuerdo de convivencia pacífica apoyado por nosotros de acuerdo con nuestras responsabilidades bajo la ley» (Ramsey, 2012). Sin embargo, el personal

<sup>4</sup> Grupos armados de la derecha financiados por Estados Unidos, que se oponían al gobierno sandinista en Nicaragua y estaban activos desde finales de 1970 hasta 1990.

del operativo en realidad protege exclusivamente a los grandes propietarios a costa de los pequeños agricultores. Las fuerzas de Xatruch protegen las plantaciones de palma de aceite junto con la pertinente seguridad privada, desalojan por la fuerza a los campesinos, intimidan a los residentes locales y acosan sexualmente a las mujeres, sin ofrecer protección a las víctimas de la violencia.<sup>5</sup> Según testimonios locales, las fuerzas de Xatruch cosechan el fruto de la palma en la finca Paso Aguán, lo que parece ser un pago en especie de Corporación Dinant, financiada por el BM (Bird, 2016).

El Bajo Aguán también alberga un número alarmante de ejecuciones extrajudiciales y otras formas de violaciones de derechos humanos contra miembros de movimientos campesinos locales involucrados en disputas y ocupaciones de tierras. Ha habido más de 150 casos de ejecuciones extrajudiciales de activistas o sus familiares en defensa de la tierra<sup>6</sup> (Defensores en Línea, 2016). Además, asesinatos, palizas, torturas, detenciones ilegales, intimidación, destrucción de viviendas, cultivos y ganado, y otras formas de agresión han tenido lugar en el contexto de desalojos violentos forzosos, así como el ataque a activistas y sus familias en el interior de sus hogares o en espacios públicos.

En este entorno altamente militarizado, los actores más comunes que participan en la violencia paramilitar han sido los guardias de seguridad privada y las bandas criminales locales. Según las observaciones de 2013 del grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el uso de mercenarios, en el Valle del Aguán hay una «presunta participación

<sup>5</sup> Entrevista personal con miembros del movimiento campesino Plataforma Agraria, Honduras, 31 de marzo de 2018, realizada por Jasmin Hristov.

<sup>6</sup> Entrevista personal con voceros del movimiento campesino Plataforma Agraria, Honduras, 31 de marzo de 2018, realizada por Jasmin Hristov.

de empresas de seguridad privada, contratadas por terratenientes, en violaciones generalizadas de derechos humanos que incluyen asesinatos, desapariciones, desalojos forzosos y violencia sexual» (Human Rights Watch, 2014). El 15 de noviembre de 2010, cinco integrantes del Movimiento Campesino del Aguán (MCA) —Raúl Castillo, José Luis Saucedo, Ciriaco Monoz, Teodoro Acosta e Ignacio Reyes García— fueron masacrados por fuerzas de seguridad privada de la empresa Orión, contratada por Corporación Dinant. Dinant admitió públicamente que sus guardias de seguridad privada habían llevado a cabo la masacre (Bird, 2013; Human Rights Watch, 2014).

Al participar en acciones que normalmente están restringidas a las fuerzas de seguridad del Estado (es decir, detenciones, interrogatorios y desalojos), así como en acciones que son ilegales, como asesinatos, golpizas y tortura, los guardias de seguridad privada desempeñan un papel muy importante en el mantenimiento de una clima de miedo entre los residentes locales. Un miembro del Movimiento Campesino Refundación Gregorio Chávez, con sede en la comunidad de Panamá, municipio de Tocoa, da un ejemplo de ello:

Al otro día la guardia de corporación Dinant paró a un niño de 12 años y lo tiró al suelo y le quitó una maletilla que andaba, que anda comprando un fresco, iba a dejárselo al papá, el papá lo había mandado en la mañana a traer un fresco y ya iba con el fresco cuando lo paró la guardia de corporación Dinant y lo tiró y lo esculcó, y le esculcó la maleta. «¿Qué llevas aquí, no le llevas alguna arma a tu papá?» «No», le decía el niño temblando, «no, no, aquí está la maleta, mire ve, busque, no llevo armas, yo lo que llevo es un fresco, que le llevo a mi papi», estas son las cosas.<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Entrevista personal con miembros del Movimiento Campesino Refundación Gregorio Chávez, Honduras, 1 de abril de 2018, realizada por Jasmin Hristov.

Por supuesto, estos no son casos específicos de la región del Aguán, sino patrones encontrados en todo el país. El 2 de abril de 2020, Iris Argentina Álvarez fue asesinada por guardias de seguridad privada de la empresa Crae's, empleada por el Ingenio Azucarero La Grecia en Marcovia, Departamento de Choluteca, durante un desalojo violento de familias de la cooperativa Cerro Escondido que se habían asentado en la tierra hace más de un año para cultivar alimentos (Iniciativa Mesoamericana, 2020).

No sólo las luchas de los movimientos rurales (así como de otros sectores sociales, como se mostrará más adelante) se enfrentan a la violencia, sino que las propias víctimas a menudo enfrentan cargos penales como usurpación de tierras, posesión ilegal de armas, alteración del orden público y terrorismo. En 2011, el jefe de la policía que trabajaba junto a las operaciones militares de Xatruch declaró que grupos armados extranjeros de Venezuela y Nicaragua se habían infiltrado en el Bajo Aguán para capacitar a los campesinos locales con el fin de desestabilizar el país (*La Prensa*, 2011). En la misma línea, el coronel Germán Alfaro, que dirige Xatruch III, afirmó que las «bandas criminales» armadas con fusiles AK-47 recibieron 7 mil 500 de los grupos campesinos para apoderarse de las plantaciones de palma de aceite y ponerlas a disposición de los campesinos. No se ha presentado evidencia de ello (Human Rights Watch, 2014). Actualmente, la usurpación de tierras es uno de los delitos más comunes de los que se acusa a personas pobres de las zonas rurales. Asimismo, hay al menos 6 mil 200 trabajadores rurales o pequeños agricultores en Honduras que enfrentan cargos de usurpación de tierras (WOLA, 2019). A partir de 2018, esos casos son gestionados por los Tribunales de Jurisdicción Nacional especiales, entidades creadas en 2010 para delitos de alto impacto cometidos por grupos delictivos organizados como el narcotráfico, el terrorismo y el lavado de dinero.

*Violencia paramilitar en la minería*

Otro sector con una marcada presencia de actores armados no estatales ha sido la minería. Hoy existen 54 concesiones mineras que infringen la propiedad colectiva de grupos indígenas como los pech, tolupanes, misquitos, chortis, lencas, garífunas y tawahkas (*Telesur*, 2019). Entre 2002 y 2015 fueron asesinados 129 activistas comunitarios antimineros (OCMAL, 2016). Un patrón común en los conflictos mineros es la creación de bandas o «comités informales de seguridad/vigilantes» compuestos por residentes locales a favor de la empresa minera, vinculados a los cárteles de la droga. Uno de los ejemplos destacados proviene del Comité Municipal en Defensa de Bienes Comunes y Naturales del Municipio de Tocoa, Departamento de Colón, conformado en respuesta al daño ambiental causado por la extracción de mineral de hierro en la región. A partir del 1 de agosto de 2018, por más de 88 días, pobladores de comunidades a lo largo del río Guapinol realizaron un campamento de resistencia ambientalista organizado por el Comité, exigiendo el cese de las operaciones mineras de la empresa Inversiones Los Pinares, propiedad de Lenir Pérez y su esposa Ana Facusse —hija del terrateniente Miguel Facusse. Este último cuenta con permiso para operar en un área que antes formaba parte del Parque Nacional Carlos Escaleras. El parque nacional contiene la fuente de 10 ríos de los que dependen 14 comunidades para su supervivencia diaria. Como ya se argumentó, la legislación económica durante los últimos 30 años ha estado fuertemente sesgada a favor del capital. En 2013, la élite hondureña contó con la expedición del Decreto núm. 252-2013 por el Congreso Nacional mediante el cual disminuyó el área del parque nacional por la tala de 217 hectáreas de la zona núcleo (Olson, 2020), lo que permitió otorgar

concesiones de tierras que solían estar bajo protección ambiental (Ofra-neh, 2018) y eventualmente otorgarle a Inversiones Los Pinares el permiso para una mina a cielo abierto. Desde 2014, la empresa ha enfrentado una resistencia local constante y ocho personas han sido asesinadas en este conflicto (Olson, 2020).

El 27 de octubre de 2018, aproximadamente un centenar de manifes-tantes desarmados en el campamento fueron atacados violentamente por mil 500 efectivos de la Policía Nacional y la Policía Militar con gases la-crimógenos. El campamento fue incendiado, muchos de sus integrantes fueron golpeados, algunos recibieron disparos de bala, y varios de los pe-riodistas presentes fueron heridos por parte de las fuerzas de seguridad y sus equipos fueron destruidos (*El Tiempo*, 2018). El 29 de octubre de 2018, cuando algunos de los manifestantes desarmados intentaron regresar al campamento encontraron a 20 civiles fuertemente armados (que no ves-tían con uniformes de guardias de seguridad privada) en compañía de miembros de la policía y el Ejército. Los civiles armados comenzaron a disparar contra los manifestantes e hirieron a varias personas, entre ellas Alex Bonilla, quien murió en el hospital poco después. Los hombres ar-mados también incendiaron la casa de Irma Serrano, reconocida líder co-munitaria (*Defensores en Línea*, 2018).

Los hombres armados son parte de dos bandas locales conocidas y te-midas por miembros de la comunidad local y activistas contra la minería. Las pandillas se involucran en actividades delictivas como el sicariato (ase-sinato a sueldo) y el tráfico de drogas con el gran y poderoso cartel de dro-gas Los Cachiros y sus socios comerciales, incluidas las autoridades muni-cipales electas. Estas autoridades municipales se han negado a respetar los referéndums comunitarios que declaran al municipio de Tocoa libre de

todas las actividades mineras y se cree que tienen intereses económicos en la mina.<sup>8</sup> Algunos miembros de una de las bandas son empleados asalariados del municipio. El alineamiento de los intereses del gobierno local y las temidas bandas criminales que trabajan junto a guardias de seguridad privada uniformados, contratados por Inversiones Los Pinares, acentúa el terror y el miedo que sufren los opositores a la mina.

Al igual que la criminalización de los defensores de la tierra y el medio ambiente en el sector de la agroindustria, las personas involucradas en luchas contra la minería y sometidas a violencia estatal y no estatal, enfrentan persecución por ley. En el caso de Guapinol, el secretario de Estado Ebal Díaz acusó a los defensores de estar infiltrados por fuerzas ideológicas financiadas desde el exterior con el objetivo de entorpecer la inversión en Honduras (Ofraneh, 2018). La empresa Inversiones Los Pinares emitió un comunicado alegando que se trata de «falsos ambientalistas», «criminales armados que, financiados por fuentes desconocidas, fueron enviados desde fuera del Aguán para sabotear la construcción de una mina que de otro modo sería responsable, no contaminante y generadora de empleo» (Olson, 2020). Así, 32 de los individuos que habían participado en el campamento en defensa de la tierra y el medio ambiente fueron acusados de usurpación, asociación ilícita, incendio provocado y secuestro y siete de ellos fueron encarcelados en una prisión de máxima seguridad, a pesar de que el Comité de Defensa de los Bienes Públicos y Ambientales recibió el Premio Letelier-Moffitt de Derechos Humanos del Instituto de Estudios de Política de Washington en 2019, en reconocimiento a su trabajo de protección de las fuentes de agua de la contaminación por parte de las empresas mineras (Instituto de Estudios

<sup>8</sup> Entrevista personal con miembros del Comité de Defensa de los Bienes Públicos y Comunes, Honduras, 23 de junio de 2020, realizada por Karen Spring.

de Política, 2019). A partir de 2020, siete siguen en detención preventiva y las 32 personas están siendo procesadas como miembros de un grupo criminal organizado.

### *Violencia paramilitar en el sector energético*

La violencia paramilitar también se ha dirigido a los movimientos sociales que se oponen a los proyectos neoliberales en el sector energético, en concreto en torno a la construcción de represas hidroeléctricas. Uno de los casos emblemáticos es la resistencia indígena a la represa hidroeléctrica Agua Zarca por parte del Consejo Popular Indígena de Honduras (Copinh) en la región de Río Blanco, en el departamento de Intibucá. El Copinh fue cofundado por la activista feminista indígena asesinada, ganadora del Premio Ambiental Goldman, Berta Isabel Cáceres Flores. En 2011, el Copinh comenzó a apoyar a las comunidades lenca de Río Blanco que se oponían a la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca en el río Gualcarque. La empresa hondureña Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) había recibido financiación de varias instituciones financieras internacionales, incluido el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para construir la presa en un terreno del cual los residentes locales tienen un título de propiedad comunitaria desde 1911 (Bird, 2013a). El principal propietario de DESA es la poderosa familia hondureña Atala Zablah, que tiene familiares y fuertes lazos comerciales con dos grandes bancos hondureños: Ficohsa y BAC Honduras. Las comunidades se oponen a la represa porque el río Gualcarque es sagrado para el pueblo lenca y su construcción cortaría el suministro de agua, alimentos y medicinas para estas comunidades pobres y relativamente aisladas (BBC, 2018).

En diciembre de 2015, agentes de investigación de la Policía Nacional Civil detuvieron a García Mejía, quien confesó que DESA lo había contratado para silenciar a miembros del Copinh y afirmó que Berta Cáceres era la primera en la lista de personas a eliminar. Mejía fue liberado cuatro días después de que ejecutivos de DESA usaran su influencia sobre la fiscalía y pagaran a un representante legal para defenderlo (*Criterio*, 2019). Después de su liberación, García Mejía comenzó a trabajar como guardia de seguridad en DESA.

Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en su domicilio de La Esperanza a los 44 años de edad (GAIPE, 2017). Después de meses de protestas nacionales e internacionales, las personas vinculadas a DESA finalmente fueron arrestadas. En 2018, siete hombres fueron condenados por el asesinato de Cáceres, entre ellos dos oficiales de DESA, Sergio Rodríguez y Douglas Bustillo, y el mayor Mariano Díaz, oficial de inteligencia militar del 15° Batallón de las Fuerzas Armadas de Honduras. El tribunal determinó que los tres estaban involucrados en la planificación del asesinato y la contratación de los sicarios que también fueron declarados culpables de asesinato. El sicario principal, Henry Javier Hernández, era un exmilitar de las fuerzas especiales destinado en la región del Bajo Aguán y estudió con el mayor Mariano Díaz, también condenado por el asesinato de Cáceres. Antes de su arresto Hernández había trabajado para dos empresas de seguridad privada después de dejar el Ejército, incluyendo una empresa que trabaja con empresas de Walmart en Honduras y otra con Corporación Dinant en el Valle del Aguán.

El 2 de mayo de 2018, Roberto David Castillo, presidente ejecutivo de DESA y oficial de inteligencia militar entrenado en Estados Unidos, fue arrestado por estar involucrado en el asesinato de Cáceres (*BBC*, 2018). Según uno de los miembros del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE)

que investiga el caso, existía una «estructura criminal compuesta por ejecutivos y empleados de la empresa, agentes estatales y bandas criminales que utilizaron violencia, amenazas e intimidación» para atacar al Copinh y a Cáceres (citado por Malkin, 2017). En el nivel comunitario, DESA colaboró con familias y personas que se beneficiaron económicamente de la presencia de la empresa en Río Blanco y personas temidas por la población local por sus actividades delictivas y reputación de asesinos (Copinh, 2019a; Bird, 2013a). Esto se demostró en extracciones telefónicas presentadas como prueba de caso contra los asesinos de Cáceres. En un mensaje, el ejecutivo de DESA, Castillo, hace referencia al sicario local de Río Blanco, García Mejía, llamándolo «la mejor seguridad en el sitio de la represa» (DPLF *et al.*, 2019).

Desde el asesinato de Cáceres, los miembros del Copinh en Río Blanco han seguido enfrentándose a la violencia. El 10 de diciembre de 2017 desapareció Elvin Saúl Madrid, miembro del Copinh de 18 años. Al día siguiente, el cuerpo de Madrid fue encontrado cerca de las casas de los familiares del sicario Olvin García Mejía. En marzo de 2019 fue asesinado Olban Adonay Gómez, hijo del líder comunitario Mauro Gómez (Copinh, 2019). Poco después del asesinato de Berta, Nelson García, miembro del Copinh, recibió un disparo de camino a su casa después de haber acompañado a una comunidad en Río Chiquito en el departamento de Santa Bárbara, que enfrentaba un desalojo violento. En julio de 2016, el cuerpo de la defensora de derechos humanos y lideresa comunitaria Lesbia Yaneth Urquía Urquía fue encontrado cerca del basurero municipal de Marcala, departamento de La Paz. Lesbia había desaparecido un día antes alrededor de las cinco de la tarde. Fue miembro del Copinh y estuvo involucrada en la oposición a la construcción de la represa hidroeléctrica Aurora I en el municipio de San José, departamento de La Paz.

Del mismo modo, en la comunidad de San Isidro del Volcán, Departamento de La Paz, integrantes del movimiento indígena Milpah que se opusieron a la construcción de una represa hidroeléctrica en el río Chinacla relatan cómo enfrentan los intentos constantes del Estado de imputar a los campesinos por delitos penales: «En el 2015, nos pusieron un operativo militar de 30 militares, 20 de la Policía Nacional y 20 del Ejército del batallón de Marcal y nueve civiles de la comunidad, donde a nosotros nos pedían la droga, a un niño mío le hicieron tres disparos tipos de éstos en punto de las cuatro de la mañana».<sup>9</sup>

### *Violencia paramilitar en el sector de turismo*

A lo largo de la costa caribeña del norte de Honduras hay aproximadamente 46 comunidades garífunas afroindígenas. Muchos poseen títulos ancestrales colectivos sobre la tierra en la que viven y que cultivan. Desde el surgimiento del neoliberalismo, el Estado hondureño ha rechazado sistemáticamente los derechos territoriales indígenas y ha introducido nuevas legislaciones para despojar sistemáticamente a los garífunas de sus tierras.

El turismo residencial, como en el caso de Indura Beach and Golf Development a lo largo de la costa norte, se ha presentado como una industria ecológica sostenible que puede beneficiar a las comunidades locales. En realidad, el desarrollo del turismo en la costa norte ha supuesto el desalojo forzoso de varias comunidades de sus tierras, entre ellas Barra Vieja, Armenia y Castilla. Las políticas y planes de desarrollo turístico han encontrado una fuerte resistencia por parte de la Organización Fraternal

<sup>9</sup> Entrevista personal con miembros de Milpah, Honduras, 20 de octubre de 2018, realizada por Jasmin Hristov.

Negra Hondureña (Ofraneh). La organización trabaja con las comunidades garífunas para reclamar tierras ancestrales, desafiando judicialmente el robo de tierras y apoyando proyectos de recuperación de tierras (Gibler, 2017).

Miriam Miranda, coordinadora general de Ofraneh, ha sido víctima de innumerables «amenazas de muerte, criminalización, persecución, acoso e intimidación» durante sus años de activismo (Spring y Russell, 2017). En diciembre de 2011, el gobierno indígena garífuna de Cristales y Río Negro (es decir, la Bahía de Trujillo) presentó una demanda contra el desarrollador de turismo canadiense, Randy Jorgensen, propietario de Life Vision Development (Schertow, 2012) por la adquisición ilegal de sus tierras y fue «acusado de incautación y posesión ilegal de territorios garífunas» (Soto, 2016). En 2015, el juez de un tribunal de Trujillo determinó que no había suficientes pruebas contra Jorgensen, pero le dio al fiscal especial para los pueblos indígenas y los garífunas cinco años para presentar más pruebas. Dos semanas después de la comparecencia de Jorgensen ante el tribunal, Vidal Leiva, miembro de Ofraneh y presidente del Comité de Defensa de la Tierra de Cristales y Río Negro, recibió disparos frente a su casa en Trujillo (Cuffe, 2015). Después del ataque, Leiva informó que los tres hombres armados fueron contratados para matarlo, por su participación en la defensa de la tierra garífuna (Cuffe, 2015). En octubre de 2016, en la Bahía de Trujillo, la policía hondureña, acompañada de un grupo de sicarios, quemó las casas de varias familias garífunas en la comunidad de Guadalupe (Ofraneh, 2016). El terreno en el que vivían estaba destinado al desarrollo del megaturismo y a proyectos de comunidades cerradas para turistas extranjeros, por Jorgensen y Patrick Forseth de Carivida (Ofraneh, 2016; Spring y Russell, 2017).

La violencia llevada a cabo por actores estatales y no estatales ha ido acompañada de la criminalización de líderes comunitarios garífunas que se oponen a los proyectos turísticos. Dado que la costa norte y el mar Caribe son rutas estratégicas de tránsito para el tráfico mundial de drogas, una de las narrativas dominantes difundidas en los medios de comunicación es sobre los esfuerzos de seguridad nacional para combatir la guerra mundial contra las drogas. Los miembros de la comunidad garífuna son acusados con frecuencia de estar involucrados en el tráfico de drogas.

*Violencia Paramilitar contra estudiantes, periodistas, abogados y defensores de derechos humanos*

En Honduras, los periodistas y abogados de medios alternativos/independientes que exponen las violaciones de derechos humanos por parte del Estado y las luchas de los movimientos sociales, enfrentan un alto riesgo de sufrir violencia. Entre 2009 y 2013, fueron asesinados 74 abogados y 25 periodistas (Holanda, 2014). La mayoría de los casos permanece impune. La siguiente cita de un miembro de la Plataforma Agraria demuestra el peligro que enfrentan los abogados al defender los derechos de los más desfavorecidos:

Pues en el 1997 se pone la primera demanda en contra de la familia Facussé y la familia Morales, pero los abogados, siempre sobornados, iban abandonando los casos; o sea, según iba avanzando los terratenientes llamaban a los abogados y si no querían los remataban, entonces tenían que aceptar. Así se fue dando desde 1997. En el 2006 ya teníamos el abogado número siete, y en ese momento hicimos una toma de la finca. Igual el abogado sabía que tenía

la legalidad, pero también fue sobornado (...) Ahí de Tocoa, se llama Rico. El último abogado que sí se demostró y ganó fue el abogado Antonio Trejo, en 2012, en el caso de la Cooperativa San Isidro, en el caso de la Cooperativa Trinidad y Despertar. Pero el 22 de septiembre lo asesinaron.<sup>10</sup>

Entre 2001 y 2018 fueron asesinados 84 periodistas en Honduras (García, 2019).

El movimiento estudiantil hondureño también se ha visto muy afectado por la represión estatal y la violencia no estatal desde el golpe de 2009. La acción colectiva de estudiantes secundarios y universitarios que protestan contra las políticas de austeridad y la privatización de la educación pública ha sido brutalmente reprimida por la policía estatal y el Ejército; los estudiantes han sido golpeados, encarcelados y asesinados. Según el Observatorio de Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), 21 mil estudiantes han sido asesinados en Honduras entre 2011 y 2018 (C-Libre, 2018). Aquí se pueden encontrar tres modalidades principales de violencia paramilitar. La primera es cuando los agentes estatales incurren en acciones que exceden las sancionadas por la ley. Estos incluyen allanamientos de hogares, recolección de información personal, fotografías y seguimiento sin una orden judicial, así como tortura y finalmente asesinato. Estos actores pueden estar uniformados o no, utilizar vehículos sin matrícula y con frecuencia tienen la cara enmascarada. Los siguientes son algunos ejemplos que ilustran dicha modalidad. En septiembre de 2018, durante una marcha de un amplio colectivo de movimientos sociales en el Día de la Independencia Nacional, un adolescente

<sup>10</sup> Entrevista personal con miembros del movimiento campesino Plataforma Agraria, 1 de abril de 2018, realizada por Jasmin Hristov.

de 15 años fue arrojado en la parte trasera de una camioneta patrulla policial, fue torturado y logró escapar de lo que describió como un intento de asesinato:

Nos dijeron que nos iban a llevar a un callejón sin salida y nos iban a matar. Me golpearon un par de veces con la pistola en la cabeza, sentí salir sangre. Luego me metieron el arma en la boca y dijeron que si oían nuestras voces dispararían. Había gente en la calle mirando y tratando de grabar esto en video con sus teléfonos celulares, así que comenzaron a disparar balas reales a los pies de las personas para hacerlas escapar.<sup>11</sup>

El joven finalmente recibió tratamiento hospitalario por las graves lesiones que sufrió en la cabeza y continúa sufriendo impedimentos físicos y psicológicos.

En otro trágico caso, el 30 de agosto de 2018, tres hombres armados con armas de alto calibre, uniformados de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), secuestraron en una camioneta a dos estudiantes del Instituto Técnico de Honduras de una residencia en Tegucigalpa. Al día siguiente, Mario Enrique Suárez Gómez, de 19 años, y Gerson Daniel Meza Medina, de 18, fueron encontrados muertos en la carretera, con marcas de tortura y numerosos disparos (*La Prensa*, 2018). A uno de ellos le rompieron las manos y las piernas, le quitaron los ojos y le cortaron la nariz (Meza, 2018). Los dos jóvenes habían participado en al menos 12 protestas en los últimos meses, exigiendo el subsidio de transporte público para estudiantes que el gobierno les había quitado en reformas anteriores (*C-Libre*, 2018).

<sup>11</sup> Entrevista personal con Francisco (seudónimo), estudiante de secundaria, Honduras, 21 de octubre de 2018, realizada por Jasmin Hristov.

También estuvieron involucrados en una protesta contra el gobierno pocas horas antes de su secuestro (Meza, 2018). ATIC negó la participación de su personal en el incidente, afirmando que los logotipos del uniforme que llevaban los perpetradores no coincidían con los del uniforme de ATIC (*La Prensa*, 2018). Sin embargo, un examen exhaustivo de una gran variedad de imágenes del personal de ATIC en las escenas del crimen revela una mayor variación en sus uniformes. Además, la forma en la que los hombres armados sacaron a los dos estudiantes y los acompañaron hasta la camioneta sugiere que el primero tenía entrenamiento militar. Las autoridades estatales han atribuido los asesinatos a miembros de bandas criminales que se hacen pasar por agentes estatales, mientras que la cobertura de los principales medios de comunicación se ha centrado en la violencia de las pandillas en el vecindario de las víctimas y en uno de los arrestos anteriores de uno de los estudiantes por cargos de drogas. En otro incidente en el contexto de semanas de protestas de estudiantes universitarios en Tegucigalpa, un civil armado disparó ocho tiros desde un vehículo privado contra estudiantes que protestaban en la vía pública frente a la universidad (*El Tiempo*, 2019). A pesar de que el incidente fue filmado por cámaras de seguridad cercanas, nadie ha sido acusado. El ataque ocurrió en un contexto de represión, detenciones y desalojos violentos de estudiantes que protestaban dentro y en la calle frente de la universidad.

La segunda modalidad de violencia paramilitar contra estudiantes es en forma de seguridad privada. Las amenazas de muerte por parte de guardias de seguridad privada contra estudiantes involucrados en algún tipo de acción colectiva son comunes en la UNAH. En un caso conocido de julio de 2017, estudiantes de la UNAH fueron brutalmente agredidos por una unidad de seguridad privada de la empresa Spartan, mientras ocupaban

una parte de las instalaciones de la universidad, incluidos algunos que se encontraban en huelga de hambre. Además de los guardias de seguridad privada empleados permanentemente por la universidad, Spartan fue contratado por separado por la administración universitaria para desalojar violentamente a los estudiantes. Los agresores golpearon brutalmente a los estudiantes y utilizaron gases lacrimógenos (Rodríguez, 2017).

La última modalidad de violencia paramilitar es la empleada por individuos que pueden ser miembros de pandillas o simplemente sicarios. Un estudiante activista compartió la historia de cómo miembros de la Mara Salvatrucha, una de las pandillas más notorias de Centroamérica, fueron a su casa y lo amenazaron con matarlo si continuaba participando en las protestas estudiantiles.<sup>12</sup>

### Grupos paramilitares emergentes

Como hemos demostrado, gran parte de la violencia contra las comunidades rurales involucradas en disputas por la tierra y luchas ambientalistas, así como contra estudiantes, abogados y activistas de derechos humanos en general, es llevada a cabo por asociaciones de actores estatales y no estatales que no pertenecen a grupos específicos autoidentificados. Sin embargo, también está en marcha un proceso de formación de estructuras paramilitares más identificables. Es posible caracterizar esta formación de grupos paramilitares como en etapa embrionaria, en comparación con otros países como México y Colombia.

<sup>12</sup> Entrevista personal con Eugenio (seudónimo), estudiante de la UNAH, Honduras, 2 de abril de 2018, realizada por Jasmin Hristov.

Los siguientes tres ejemplos son de la región del Bajo Aguán y las organizaciones mencionadas son/fueron parte de la Plataforma Agraria. El primer caso, de la comunidad de Panamá, demuestra cómo la colaboración entre guardias de seguridad privada, batallones militares y civiles armados ha dado lugar a una unidad paramilitar. Tal grupo armado está liderado por un individuo que fue guardia de seguridad de Dinant y luego formó parte, durante un tiempo, del Movimiento Campesino Refundación Gregorio Chávez. Una plantación de palma aceitera llamada Paso Aguán, oficialmente propiedad de Dinant, ha sido disputada por el Movimiento Campesino Refundación Gregorio Chávez. Desde 2014 la plantación se utiliza como base para el Batallón Xatruch. Seis individuos de la cercana comunidad de Panamá, afiliados a dicho movimiento, han sido asesinados en la propiedad Paso Aguán, que ahora se conoce entre la comunidad como el «cementerio clandestino». En abril de 2018, los militares y guardias de seguridad privada de Dinant se retiraron oficialmente de la propiedad. En su lugar, un grupo armado liderado por Santos Torres, que según testimonios de campesinos de la Plataforma Agraria era un exguardia de seguridad privada de Dinant, y que también fue miembro del Movimiento Campesino Refundación Gregorio Chávez, estableció el control de una zona considerable de la plantación. Desde septiembre de 2018, este grupo armado ilegal de aproximadamente 20-30 hombres que portan armas AK-47 y AR-15 y visten chalecos antibalas, ha llevado a cabo numerosos actos de violencia contra integrantes del Movimiento, como el 16 de enero de 2019 cuando uno de los líderes del Movimiento, Jorge Mejía, recibió disparos en un intento de asesinato.<sup>13</sup> La comunidad ha denunciado todos los casos

<sup>13</sup> Entrevista personal con uno de los voceros de la Plataforma Agraria, Honduras, en enero de 2019, realizada por Jasmin Hristov.

a la policía y a la Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguán (Umviba). En varias ocasiones, Santos Torres fue detenido y poco después liberado. También ha sido visto tomando café con los policías que supuestamente fueron asignados para proteger a los miembros de la comunidad que son beneficiarios de medidas de protección otorgadas por el mecanismo de protección. Según líderes de Movimiento Campesino Refundación Gregorio Chávez,<sup>14</sup> el grupo armado opera de acuerdo con los militares y Dinant, con el propósito de aterrorizar a la comunidad y así disuadirlos de emprender acciones de recuperación de tierras o dar la impresión de que la violencia fue causada por conflictos internos de la comunidad, es decir, «campesinos contra campesinos».<sup>15</sup>

De manera similar, un grupo paramilitar conocido como La Confianza surgió en la comunidad de La Confianza en el Bajo Aguán, en 2016. Liderado por el exmilitar Celio Rodríguez, el grupo está compuesto por algunos exmiembros de una cooperativa campesina que se escindió del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA). Rodríguez se ha encargado de entrenar y suministrar al grupo uniformes y armas. Los miembros de ese grupo paramilitar han estado persistentemente amenazando, intimidando e intentando asesinar a líderes clave de la Plataforma Agraria. En ese contexto, el grupo asiste a reuniones comunitarias para proponer la venta de la tierra de propiedad colectiva de los campesinos. Según testimonios locales, miembros del grupo se han reunido en numerosas ocasiones con Oscar Nájera, diputado del Congreso Nacional por el Partido Nacional de derecha. Nájera es un conocido socio comercial del cártel de la droga Los

<sup>14</sup> Entrevista personal con miembros del Movimiento Campesino Refundación Gregorio Chávez, Honduras, 21 de octubre de 2019.

<sup>15</sup> Dinant niega cualquier relación con el grupo armado que actualmente controla la propiedad.

Cachiros que anteriormente se encontraba en Tocoa, Colón. Uno de los integrantes del grupo, Osvin Nahum Caballero, quien tiene 11 cargos de homicidio, fue detenido en 2018. Es responsable, junto con Celio Rodríguez, del asesinato de José Ángel Flores, expresidente del MUCA y Silmer George, miembro del MUCA en 2016.

En noviembre de 2019 surgió otro grupo paramilitar de manera similar. Varios miembros de la Cooperativa San Esteban, parte de la organización campesina MARCA, a los que se unieron algunos sicarios formando un grupo paramilitar de 50 hombres fuertemente armados, se apoderaron de la finca de la Cooperativa San Esteban y obligaron al resto de las familias que son miembros de la cooperativa a salir. Actualmente emplean esta estrategia para amenazar a familias de otras cooperativas cercanas como Despertar y La Trinidad (*Criterio*, 2019a).

## Reflexiones sobre las tendencias de la violencia y las unidades paramilitares

Como se puede observar, en Honduras la violencia paramilitar es procapitalista y política y se lleva a cabo por actores estatales y no estatales, a menudo a través de la cooperación entre ambos. Las características organizativas de la violencia van desde la pequeña escala (individuos contratados para atacar a miembros de movimientos sociales) hasta grandes grupos que incluyen batallones militares y guardias de seguridad privada. También varían entre asociaciones ambiguas y temporales, agentes de seguridad del Estado, actores no estatales y grupos propiamente formados que se identifican como tales. Los factores que han facilitado la proliferación de la violencia paramilitar son: el

aumento de la militarización, el uso generalizado de la seguridad privada y su cooperación con las fuerzas de seguridad del Estado, y la creación de grupos interinstitucionales (compuestos por policías y militares). Esto último crea condiciones propicias para la participación de la policía y el Ejército en violaciones de derechos humanos, así como la participación de actores no estatales.

Los siguientes patrones pueden observarse en todas las diferentes modalidades de violencia paramilitar. Primero, independientemente de la modalidad a través de la cual se efectúa, la violencia paramilitar trabaja en coalición con la legislación para lograr los objetivos económicos de los capitalistas, así como los establecidos por instituciones internacionales como el BM. Por lo tanto, la violencia paramilitar en este país sirve para sostener las estructuras de poder institucionalizadas, no sólo los intereses privados de los capitalistas individuales.

En segundo lugar, en todos los casos de violencia paramilitar existe un proceso paralelo de criminalización de las víctimas. Ello debe entenderse como parte integral de los requisitos previos o condiciones favorables para el surgimiento del paramilitarismo. En los casos rurales y urbanos se observa la misma tendencia en la que no sólo se registran a las víctimas de la violencia política simplemente como producto del delito, sino que también se utilizan las acusaciones o cargos existentes en su contra para insinuar su participación previa en actividades ilegales que luego presumiblemente podrían utilizarse para explicar su muerte. Así, el proceso de criminalización de miembros de los movimientos sociales que se oponen al régimen y su modelo económico allana el camino para eventualmente normalizar su «desaparición» y reforzar la impunidad. Por ejemplo, los estudiantes activistas son acusados falsamente y cuando son víctimas de

ejecuciones extrajudiciales, como el caso del joven secuestrado por ATIC, su muerte se explica con relación a los cargos anteriores.

Más importante aún, cuando los campesinos, los garífunas y los estudiantes son elevados a la categoría de narcotraficantes mientras que los perpetradores de la violencia paramilitar se reducen a criminales, las dos fuerzas opuestas —los movimientos desde abajo y el instrumento violento utilizado por las élites para silenciarlos— se fusionan en la categoría de criminales, invisibilizando por completo las motivaciones procapitalistas y políticas de la violencia de un lado contra el otro. La individualización de los problemas estructurales y el desvío de la responsabilidad de la violencia de los verdaderos perpetradores y hacia las propias víctimas es una característica recurrente en las cuentas de los medios de comunicación hegemónicos, así como en los discursos de los oficiales gubernamentales y corporativos. Esto es lo que dijo Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (Codeh), cuando se le pidió que comentara acerca del secuestro y posterior asesinato de los dos estudiantes por parte de ATIC: «No es ATIC. Cualquiera puede ponerse un uniforme. (...) Se sabe que uno de los chicos estaba en el proceso de decidir si se unía o no a la Mara, así que eso puede que tenga algo que ver».<sup>16</sup> De igual manera, Roger Pineda, portavoz de Corporación Dinant, argumentó que la violencia en el Bajo Aguán no es política, sino que principalmente tiene que ver con conflictos internos entre campesinos, desbordes de dinero por ventas agrícolas o algunas actividades ilegales.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Entrevista personal con Hugo Maldonado, Codeh, Honduras, 22 de octubre de 2018, realizada por Jasmin Hristov.

<sup>17</sup> Entrevista personal con Roger Pineda, Corporación Dinant, Honduras, 30 de agosto de 2018, realizada por Jasmin Hristov.

Esto lleva al siguiente problema, que es la fragmentación de las comunidades rurales por medio de la infiltración militar y empresarial. Hemos visto que en los tres casos de grupos paramilitares de aparición reciente en una región con intensos conflictos territoriales como el Bajo Aguán, los miembros de esos grupos armados han venido de las propias comunidades bajo la coordinación de militares en activo o exmilitares. Dichos grupos armados locales o actores no estatales a menudo son personas ya temidas por las comunidades locales debido a su participación en el tráfico de drogas y el sicariato. Además de reclutar individuos locales para los grupos paramilitares emergentes, esta estrategia tiene tres propósitos más: 1. Crea un clima de miedo, sospecha y desconfianza entre las comunidades, que conduce a la ruptura de la unidad y posteriormente al debilitamiento del movimiento. 2. Justifica una mayor militarización con el argumento de que algunos campesinos están armados. 3. Refuerza los discursos dominantes de que la violencia se debe al tipo de conflicto interno «campesinos contra campesinos», eximiendo así al Estado y los capitalistas de cualquier responsabilidad.

En conclusión, en Honduras se está presentando el desarrollo y la sofisticación de la violencia paramilitar. Diferentes actores con poder político y económico emplean, cada vez más, el uso de la violencia para defender sus intereses. Tal fenómeno no se puede reducir a un problema de corrupción (por la coalición entre actores estatales y criminales) o a un contexto dominado por «señores de la guerra» como producto de un Estado débil, sino que se debe a la estructura legal que rige y sostiene este tipo de violencia. El Estado crea leyes acordes a las necesidades de los verdaderos criminales, que a base de fuerza establecen su dominación. Cuando la población pobre trata de recurrir a leyes que les pueden beneficiar, el sistema de justicia no les ampara y les pone obstáculos. Si queremos eliminar la violencia es necesario

mirar más allá de los que llevan los fusiles y hacia los que diseñan las leyes y medidas económicas, que son los instrumentos del saqueo legalizado que siempre dependerá del uso de la violencia.

## Referencias

- Acker, A. (1988). *Honduras: the making of a banana republic*. Boston: South End Press.
- Akram-Lodhi, H. A. (2007). «Land, markets and neoliberal enclosure: an agrarian political economy perspective». *Third World Quarterly*, 28(8), pp. 1437-1456.
- Barahona, M. (2005). *Honduras en el siglo XX: una síntesis histórica*. Tegucigalpa: Editorial Guaymuras.
- Barra, R. (22 de marzo de 2018). «Civic council of popular and indigenous organizations of Honduras: 25 years of struggle and revolution». Recuperado de <http://copinhenglish.blogspot.com/2018/03/civic-council-of-popular-and-indigenous.html>
- Bird, A. (2013). «Petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentada por Rights Action y MUCA». *Rights Action*.
- Bird, A. (3 de octubre de 2013a). «The Agua Zarca dam and Lenca communities in Honduras: transnational investment leads to violence against and criminalization of indigenous communities». *Rights Action*. Recuperado de [http://rightsaction.org/sites/default/files/Rpt\\_131001\\_RioBlanco\\_Final.pdf](http://rightsaction.org/sites/default/files/Rpt_131001_RioBlanco_Final.pdf)
- Bird, A. (8 de julio de 2016). «Down where the death squads live: the «new» police in Honduras». *Counterpunch*. Recuperado de <https://www.counterpunch.org/2016/07/08/down-where-the-death-squads-live-the-new-police-in-honduras/>

- Boyer, J. (2010). «Food security, food sovereignty, and local challenges for transnational agrarian movements: the Honduras case». *The Journal of Peasant Studies*, 37(2), pp. 319-351. DOI: 10.1080/03066151003594997
- British Broadcasting Corporation (BBC) (9 de octubre de 2009). «¿Paramilitares colombianos en Honduras?» Recuperado de [https://www.bbc.com/mundo/america\\_latina/2009/10/091009\\_honduras\\_denuncia\\_paramilitares\\_mr](https://www.bbc.com/mundo/america_latina/2009/10/091009_honduras_denuncia_paramilitares_mr)
- British Broadcasting Corporation (BBC) (30 de noviembre de 2018). «Berta Cáceres: seven convicted of murdering anti-dam activist». Recuperado de <https://www.bbc.com/news/world-latin-america-46394993>
- Cantor, D.J. y Rodríguez, N. (2015). *Los nuevos desplazados: crimen y desplazamiento en América Latina*. London: Institute on Latin American Studies.
- Carasik, L. (2017). «Investing in murder: Honduran farmers sue World Bank's lending arm for fueling land conflict». *World Policy Journal*, 34(2), pp. 24-30. DOI: 10.1215/07402775-4191566
- Clark, C. (25 de junio de 2018). «Honduras: Indigenous Garifuna use radio to fight for their land». *Mongabay*. Recuperado de <https://news.mongabay.com/2018/06/honduras-indigenous-garifuna-use-radio-to-fight-for-their-land/>
- C-Libre (1 de septiembre de 2018). «Secuestran y ejecutan a dos estudiantes que participaron en acciones de protesta pública». Recuperado de <http://www.clibrehonduras.com/index.php/alertas/asesinato/898-secuestran-y-ejecutan-a-dos-estudiantes-que-participaron-en-acciones-de-protesta-publica>
- Comisión Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) (2002). *Los hechos hablan por sí mismos: Informe preliminar sobre los desaparecidos en Honduras 1980-1993*. Tegucigalpa: Guaymuras.
- Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) (5 de julio de 2019). «Sicarios contratados por David Castillo para asesinar a

- Berta Cáceres aparece muerto». Recuperado de <https://copinh.org/2019/07/sicario-contratado-por-castillo-para-asesinar-berta-aparece-muerto/>
- Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) (16 de julio de 2019). «Alerta urgente: Ataque en contra de la comunidad de Río Blanco. Destruyen toda la cosecha de alimentos de la comunidad». Recuperado de <https://copinh.org/2019/07/alerta-urgente-ataque-en-rio-blanco/>
- Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) (s/f). «Who we are». Recuperado de <http://copinhenglish.blogspot.com/p/who-we-are.html>
- Criterio* (6 de julio de 2019). «Sicario contratado para asesinar a Berta Cáceres aparece muerto». *Criterio.hn*. Recuperado de <https://criterio.hn/sicario-contratado-para-asesinar-a-berta-caceres-aparece-muerto/>
- Criterio* (17 de noviembre de 2019a). «Campesinos denuncian que surge nuevo grupo armado en el Aguán». *Criterio.hn*. Recuperado de <https://criterio.hn/campesinos-denuncian-que-surge-nuevo-grupo-armado-en-el-aguan/>
- Cuffe, S. (6 de diciembre de 2015). «The struggle continues: Garifuna land defender shot in Honduras». *Intercontinental Cry*. Recuperado de <https://intercontinentalcry.org/garifuna-land-defender-shot-honduras/>
- Defensores en Línea* (6 de abril de 2016). «Honduras con el mayor número de asesinatos en el mundo, perpetrados contra defensores y defensoras del ambiente». *Defensores en Línea*. Recuperado de <https://www.defensoresenlinea.com/honduras-con-el-mayor-numero-de-asesinatos-en-el-mundo-perpetrados-contra-defensores-y-defensoras-del-ambiente/>
- Defensores en Línea* (31 de octubre de 2018). «Violent eviction of the encampment for life in Guapinol». *Defensores en Línea*. Recuperado de <https://defensoresenlinea.com/urgent-action-violent- eviction-of-the-encampment-for-life-in-guapinol/>

- Due Process Law Foundation (DPLF), Guatemala Human Rights Commission (GHRC), International Platform Against Impunity, Robert F. Kennedy Human Rights y School of the Americas Watch (SOAW) (2019). *Violence, corruption & impunity in the Honduran energy industry: a profile of Roberto David Castillo Mejía*. Recuperado de <https://soaw.org/wp-content/uploads/2019/08/Violence-Corruption-Impunity-A-Profile-of-Roberto-David-Castillo.pdf>
- Edelman, M. y León, A. (2013). «Cycles of land grabbing in Central America: an argument for history and a case study in the Bajo Aguán, Honduras». *Third World Quarterly*, 34(9), pp. 1697–1722. DOI: 10.1080/01436597.2013.843848
- El Tiempo* (12 de septiembre de 2009). «Estarían reclutando ex-paramilitares para que viajen como mercenarios a Honduras». *El Tiempo*. Recuperado de <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-6086547>
- El Tiempo* (11 de octubre de 2016). «Elzia Paz: «Copinh merece un premio por mentir»». *El Tiempo*. Recuperado de <https://tiempo.hn/copinh-merece-premio-por-mentir/>
- El Tiempo* (29 de agosto de 2019). «Video: conductor dispara contra estudiantes de la UNAH durante protestas». *El Tiempo*. Recuperado de <https://tiempo.hn/video-conductor-dispara-contra-estudiantes-de-la-unah-durante-protestas/>
- Emanuelsson, D. (18 de diciembre de 2017). «Surge un supuesto grupo paramilitar y cuyo primer blanco militar es Manuel Zelaya». Recuperado de <https://www.alainet.org/es/articulo/189919>
- Escalera-Flexhaug, S. (11 de agosto de 2014). «Canada's controversial engagement in Honduras». *Council on Hemispheric Affairs*. Recuperado de <http://www.coho.org>
- FIAN Honduras (8 de septiembre de 2017). «La reforma agraria de Honduras 1962». Recuperado de <http://www.fian.hn/fianhonduras/la-reforma-agraria-de-honduras-1962/>

- García, B. (26 de noviembre de 2019). «Estado sin respuestas: quienes matan a los periodistas en Honduras». *Pasos de Animal Grande*. Recuperado de <http://www.pasosdeanimalgrande.com/index.php/en/amenazas-a-la-libertad-de-expresion/item/2625-estado-sin-respuestas-quienes-matan-a-los-periodistas-en-honduras>
- Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) (2017). «Represa de violencia: el plan que asesinó a Berta Cáceres». Recuperado de <https://gaipe.net/wp-content/uploads/2017/10/Represa-de-Violencia-ES-FINAL-.pdf>
- Gilber, J. (15 de junio de 2017). «Under the gun: an investigation into the murder of Berta Cáceres». *Sierra Club*. Recuperado de <https://www.sierraclub.org/sierra/2017-4-july-august/feature/under-gun-investigation-murder-ber-c-ceres>
- Gordon, T. y Weber, J. (2016). *Blood of extraction: Canadian imperialism in Latin America*. Halifax: Fernwood Publishing.
- Gynther, B. (7 de agosto de 2013). «The murder of Tomas Garcia by the Honduran military». *Upside Down World*. Recuperado de <http://upside-downworld.org/archives/honduras/the-murder-of-tomas-garcia-by-the-honduran-military/>
- Gynther, B. (19 de marzo de 2014). «Honduras: who should really be on trial for the Rio Blanco sam?» *Upside Down World*. Recuperado de <http://upside-downworld.org/archives/honduras/honduras-who-should-really-be-on-trial-for-the-rio-blanco-dam/>
- Holland, L. (6 de mayo de 2014). «The lower aguán in Honduras and the deadly battle over land rights». *The Carnegie Council for Ethics in International Affairs*. Recuperado de [https://www.carnegiecouncil.org/publications/ethics\\_online/0093](https://www.carnegiecouncil.org/publications/ethics_online/0093)
- Hristov, J. (2020). «Pro-capitalist violence and globalization: lessons from Latin America». En Hosseini, S.A.H., Goodman, J., Motta, S.C. y Gills, B.K. (eds.),

- The routledge handbook of critical globalization studies* (pp. 194-208). London: Routledge.
- Human Rights Watch (HRW) (12 de febrero de 2014). «There are no investigations here: impunity for killings and other abuses in Bajo Aguán, Honduras». Recuperado de <https://www.hrw.org/report/2014/02/12/there-are-no-investigations-here/impunity-killings-and-other-abuses-bajo-aguan>
- Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (3 de abril de 2020). «Defender killed by security agents in violent, illegal eviction: Iris Argentina Álvarez». Recuperado de <https://im-defensoras.org/2020/04/whrdalert-honduras-defender-killed-by-security-agents-in-violent-illegal- eviction/>
- Institute for Policy Studies (2019). «Celebrating environmental defenders at the letelier-moffitt human rights awards». *Institute for Policy Studies*. Recuperado de <https://ips-dc.org/celebrating-environmental-defenders-at-the-letelier-moffitt-human-rights-awards/>
- Organization of American States (OAS) (23 de febrero de 2017). «Joint press release: the Inter-American Commission on Human Rights, its special rapporteurship for freedom of expression and the office of the United Nations High Commissioner for Human Rights in Honduras express concern over adopted reforms in the Honduran penal code, retrogressive for human rights and freedom of expression». Recuperado de <https://www.oas.org/en/iachr/expression/showarticle.asp?artID=1054&lID=1>
- Jubileo* (17 de julio de 2014). «Alerta: secuestran a la compañera Miriam Miranda y otros miembros de Ofraneh». *Jubileo Sur América*. Recuperado de <https://jubileosuramericas.net/alerta-secuestran-a-la-companera-miriam-miranda-y-otros-miembros-de-ofraneh/>

- Jubileo* (29 de enero de 2016). «Inter-American Court of Human Rights condemns the State of Honduras for violation of the collective rights of the Garifuna people». *Jubileo Sur Americas*. Recuperado de <https://jubileosuramericas.net/inter-american-court-of-human-rights-condemns-the-state-of-honduras-for-violation-of-the-collective-rights-of-the-garifuna-people/>
- La Prensa* (17 de agosto de 2011). «Policia hondureña denuncian «infiltrados» de Nicaragua y Venezuela en zona de conflicto». *La Prensa*. Recuperado de <https://www.laprensa.com.ni/2011/08/17/internacionales/70170-policia-hondurena-denuncia-infiltrados-de-nicaragua-y-venezuela-en-zona-de-conflicto>
- La Prensa* (31 de agosto de 2018). «Hombres vestidos de agentes de la ATIC mataron a estudiantes». *La Prensa*. Recuperado de <https://www.laprensa.hn/sucesos/1212208-410/hombres-vestidos-agentes-atic-mataron-estudiantes>
- Loperena, C.A. (2016). «Conservation by racialized dispossession: the making of an eco-destination on Honduras's North Coast». *Geoforum*, (69), pp. 184-193. DOI: 10.1016/j.geoforum.2015.07.004
- Loperena, C.A. (2017). «Honduras is open for business: extractivist tourism as sustainable development in the wake of a disaster?» *Journal of Sustainable Tourism*, 25(5), pp. 618-633. DOI: 10.1080/09669582.2016.1231808
- Karol, C. (2018). *Las revoluciones de Berta: conversaciones con Claudio Korol*. Argentina: Ediciones América Libre.
- Kerssen, T. M. (2013). *Grabbing power: The new struggles for land, food and femocracy in northern Honduras*. Oakland: Food First Books.
- Kneen, J. (2019). «Aura minerals & Honduran government criminalizing 19 Azacualpa community defenders». *MiningWatch Canada*. Recuperado de <https://miningwatch.ca/blog/2019/3/4/aura-minerals-honduran-government-criminalizing-19-azacualpa-community-defenders>

- Malkin, E. (28 de octubre de 2017). «Who ordered killing of Honduran activist? Evidence of a broad plot is found». *New York Times*. Recuperado de <https://www.nytimes.com/2017/10/28/world/americas/honduras-berta-caceres-des.html>
- McSweeney, K. y Pearson, Z. (2014). «Prying native people from native lands: narco business in Honduras». *NACLA Report on the Americas*, 46(4), pp. 7-12.
- McVicar, J. (5 de mayo de 2018). «Pajules under attack: hydroelectric company bypasses resistance by military force». *Upside Down World*. Recuperado de <http://upside-downworld.org/archives/honduras/pajulies-attack-hydroelectric-company-bypasses-resistance-military-force/>
- Mejía, R. (28 de octubre de 2017). «Más de 60 por ciento de los hondureños viven en la pobreza según el INE». *Tiempo digital*. Recuperado de <https://tiempo.hn/60-por-ciento-la-pobreza-ine/>
- Meza, V. (11 de septiembre de 2018). «Honduran government covers up murder of two student protesters by state agents». *Left Voice*. Recuperado de <https://www.leftvoice.org/honduran-government-covers-up-murder-of-two-student-protesters-by>
- Minority Rights Group International (19 de junio de 2015). «Honduras: Afro-Hondurans». *World Directory of Minorities and Indigenous Peoples*. Recuperado de <https://minorityrights.org/minorities/afro-hondurans/>
- Moncada, E. (2013). «The politics of urban violence: challenges to development in the Global South». *Studies in Comparative International Development*, 48(3), pp. 217-239. DOI: 10.1007/s12116-013-9133-z
- Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL). (2016). «Minería, violencia y criminalización en América Latina. Dinámicas y tendencias». *Informe OCMAL-CENSAT 2016*. Recuperado de <https://www.ocmal.org/mineria-violencia-y-criminalizacion-ocmal/>

- Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y Negros de Honduras (ODHPINH) (15 de septiembre de 2014). *Presentation to the United Nations Universal Periodic Review (UPR)*. Recuperado de <https://uprdoc.ohchr.org/uprweb/downloadfile.aspx?filename=1724&file=EnglishTranslation>
- Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) (13 de octubre de 2016). «El rey del porno canadiense, Randy Jorgensen, amenaza con desalojar comunidad Garifuna de Guadalupe en su territorio ancestral». Recuperado de <https://ofraneh.wordpress.com/2016/10/13/el-rey-del-porno-canadiense-randy-jorgensen-amenaza-con-desalojar-comunidad-garifuna-de-guadalupe-de-su-territorio-ancestral/>
- Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) (28 de octubre de 2018). «Guapinol: desalojo violento y destrucción de áreas protegidas». Recuperado de <https://ofraneh.wordpress.com/2018/10/28/guapinol-desalojo-violento-y-destruccion-de-areas-protegida/>
- Olsen, J. (24 de marzo de 2020). «Honduras's deadly water wars». *The Nation*. Recuperado de <https://www.thenation.com/article/world/honduras-mine-conflict/>
- Orsi, P. y DiLorenzo, S. (24 de julio de 2018). «More than 200 land activists slain last year, watchdog finds». *AP News*. Recuperado de <https://www.apnews.com/f222e2937f5d46a38933c57a95699fda>
- Palacios, M. (14 de junio de 2014). «Empleado de Minerales Victoria acepta que cometió abusos contra defensores de DD. HH». *Honduprensa*. Recuperado de <https://honduprensa.wordpress.com/2014/06/17/empleado-de-minerales-victoria-acepta-que-cometio-abusos-contra-defensores-de-ddhh/>
- Paley, D. (2014). *Drug war capitalism*. Oakland: AK Press.
- Paz, L. (14 de agosto de 2019). «Colón: comunidad Garífuna de Vallecito, amenazada y en zozobra «por hombres armados»». *El Tiempo*. Recuperado de

- <https://tiempo.hn/colon-comunidad-garifuna-de-vallecito-amenazada-y-en-zozobra-por-hombres-armados/>
- Radio Progreso (18 de noviembre de 2016). «Minería, cáncer que sigue afectando a comunidad Nueva Esperanza». *Radio Progreso*. Recuperado de <https://wp.radioprogreso.hn/mineria-cancer-que-sigue-afectando-a-comunidad-nueva-esperanza/>
- Ramsey, G. (31 de agosto de 2012). «Task force takes over security in Honduras' troubled Colon province». Recuperado de <https://www.insightcrime.org/news-brief/task-force-takes-over-security-in-honduras-troubled-colon-province/>
- Rodríguez, S. (17 de julio de 2017). «Ataques en la UNAH revive la década de los 80». *Defensores en Línea*. Recuperado de <https://www.defensoresenlinea.com/ataques-en-la-unah-revive-la-decada-de-los-80/>
- Ryan, R. (27 de marzo de 2008). «The last rebels of the Caribbean: Garifuna fighting for their lives in Honduras». *Upside Down World*. Recuperado de <http://upside-down-world.org/archives/honduras/the-last-rebels-of-the-caribbean-garifuna-fighting-for-their-lives-in-honduras/>
- Schertow, J. (11 de enero de 2012). «Honduras: Garifuna communities take legal action against Canada's 'porn king'». *Intercontinental Cry*. Recuperado de <https://intercontinentalcry.org/honduras-garifuna-communities-take-legal-action-against-canadas-porn-king/>
- Soto García, J. (21 de noviembre de 2016). «Garifunas arrested for occupying their own land». Recuperado de <https://grassrootsonline.org/blog/garifunas-arrested-for-occupying-their-own-land/>
- Spring, K. y Russell, G. (17 de noviembre de 2017). «'Canadian tourism mafia' file trumped-up charges against Garfina leader Miriam Miranda in Honduras' corrupted legal system». Recuperado de <https://theviolenceofdevelopment.org/>

com/canadian-tourism-mafia-file-trumped-charges-garifuna-leader-miriam-miranda-honduras-corrupted-legal-system/

*Telesur* (4 de noviembre de 2019). «Concesiones mineras amenazan tierras indígenas de Honduras». *Telesur*. Recuperado de <https://www.telesurtv.net/news/honduras-concesiones-mineras-amenazan-tierras-indigenas-20191104-0018.html>

United Nations High Commissioner for Refugees (22 de mayo de 2018). «UNHCR alarmed by sharp rise in forced displacement in North of Central America». Recuperado de <http://www.unhcr.org/news/briefing/2018/5/5b03d89c4/unhcr-alarmed-sharp-rise-forced-displacement-north-central-america.html>

Washington Office on Latin America (WOLA) (2019). «Human rights protections in Honduras: evaluating state capacity to protect and promote human rights». Recuperado de <https://www.wola.org/cam/>

World Bank (2001). *Honduras. Poverty reduction strategy paper and joint assessment*. Washington, D.C.: World Bank.

World Bank (2018). «Data: Gini Index (World Bank estimate)». Recuperado de <https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?end=2015&locations=AR-BO-BR-CL-CO-CR-CU-EC-SV-GT-HN-MX-NI-PA-PY-PE-DO-UY-VE&start=2015&view=bar>

World Politics Review (6 de enero de 2017). «Why Honduras remains Latin America's most unequal country». *World Politics Review*. Recuperado de <https://www.worldpoliticsreview.com/insights/20856/why-honduras-remains-latin-america-s-most-unequal-country>



Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional



## Las cuatro tesis centrales del neodesarrollismo. Una crítica a sus supuestos

Ricardo Vega Ruiz\*

*Resumen.* La teoría neodesarrollista ha pretendido iluminar una senda para que los países latinoamericanos logren alcanzar el desarrollo. Este artículo expone las cuatro tesis centrales de esta escuela de pensamiento: *a)* las posibilidades vigentes de que América Latina se encamine hacia el desarrollo, *b)* la necesidad de fomentar la industrialización exportadora, *c)* la importancia de la intervención estatal en el proceso de desarrollo, y *d)* la urgencia de fomentar una burguesía fuerte e independiente de los poderes y fuerzas externas. Luego de la exposición de estas cuatro tesis, se avanzan algunos apuntes críticos a los tres principales supuestos que subyacen en la teoría del nuevo desarrollo.

*Palabras clave:* nuevo desarrollo, convergencia, *catching-up*, Estado neodesarrollista, burguesía nacional.

\* Mexicano. Candidato a doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctorante en Estudios del Desarrollo por la Universidad Autónoma de Zacatecas y docente en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

## The four central theses of neo-developmentalism.

### A critique of its premises

*Abstract.* Neo-developmental theory has attempted to show a path through which Latin American countries might achieve development. This article lays out the four central theses of this school of thought: *a)* the current possibilities that Latin America is moving toward development, *b)* the need to drive export-oriented industrialization, *c)* the importance of state intervention in the development process, and *d)* the urgent need to create a strong middle class, acting independently of external powers and forces. Following an examination of these four theses, a few critical notes are offered regarding the three principal assumptions that underlie the theory of this new development.

*Keywords:* new development, convergence, catching-up, neo-developmental State, national middle class.

## Introducción

En su obra *El desarrollo económico: un mito*, el gran pensador brasileño Celso Furtado afirmaba que los mitos funcionan como lámparas que echan luz sobre el campo de percepción del científico social, pero que como cualquier otra, esta lámpara aclara ciertas áreas y problemas al tiempo que deja en la penumbra tantos otros sin que el científico se percate de ello, pues las discriminaciones valorativas que realiza aparecen a su espíritu como un reflejo de la realidad objetiva (Furtado, 1974). Para el pensador brasileño, la idea de desarrollo había pasado a desempeñar este papel en el siglo XX.

Es conveniente recordar la advertencia de Furtado ahora que ha resurgido una nueva escuela de pensamiento que ha decidido autonombrarse «neodesarrollista» y que se postula como uno entre otros posibles modelos alternativos de desarrollo en América Latina (véase Veltmeyer y Bowles, 2019; Katz, 2019). No ha tenido, al menos por ahora, el alcance intelectual y político de los desarrollistas fundadores de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Sin embargo, ha comenzado a propagarse y sumar adeptos en la academia latinoamericana, sobre todo desde 2010, cuando se publicó y difundió ampliamente un documento elaborado por los propios neodesarrollistas titulado «Diez tesis sobre el nuevo desarrollismo» (Bresser-Pereira *et al.*, 2010).<sup>1</sup>

<sup>1</sup> El documento —que fuera traducido a nueve idiomas para que los economistas que quisieran se sumaran a él— fue suscrito por más de 80 reconocidos economistas que participaron originalmente en una reunión celebrada en São Paulo en mayo de 2010, entre los que se encontraban Luiz Carlos Bresser-Pereira, Aldo Ferrer, Robert Boyer, Osvaldo Sunkel, Paul Davidson, Adam Przeworski, James Galbraith, Jan Kregel, Gabriel Palma, José Antonio Ocampo, Ha-Joon Chang, Amit Bhaduri, Roberto Frenkel, Thomas Palley, Dietrich Rueschmeyer, Fred Block,

Las «Diez tesis» fueron el resultado de un encuentro apoyado por el *think tank* brasileño Fundación Getulio Vargas y puede ser considerado el manifiesto programático en política económica de la vanguardia de esta corriente cuya expresión más concreta estuvo en el gobierno brasileño de Luiz Inácio Lula da Silva (García y De Sa, 2019). Este documento también marca la consolidación de la influencia a escala continental de este grupo intelectual que desde los últimos años del siglo XX comenzó su gestación con la fundación de redes, organismos y centros intelectuales e institucionales que han nucleado a sus miembros y han servido como plataforma y caja de resonancia para sus ideas.<sup>2</sup>

Sin embargo, el nuevo desarrollismo como cuerpo teórico no goza del completo consenso en el interior de sus propias filas. El decálogo neodesarrollista de 2010 no es, en estricto sentido, una exposición de los fundamentos de esta escuela de pensamiento, pues no todos los neodesarrollistas lo suscribieron. Incluso más que una síntesis de un cuerpo intelectual, el documento en cuestión se inclina hacia la proyección y recomendación de políticas estatales. Por ello, dada la cantidad de pensadores adscritos

Robert Wade, Luciano Coutinho, Alice Amsden, Pascale Petit, Jomo K.S., Mercedes Marcó del Pont y Antonio Mora Plaza, entre muchos otros.

<sup>2</sup> En 1998 la Red Eurolatinoamericana de Estudios sobre el Desarrollo Económico Celso Furtado fue constituida por un conjunto de instituciones en ciencias económicas latinoamericanas y europeas. Esta Red está patrocinada por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) y por la Financiadora de Estudios y Proyectos, y no pocos de sus miembros también formarían parte de la discusión y suscribirían, años después, el documento «Diez tesis sobre el nuevo desarrollismo». También hay que incluir al Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para el Desarrollo (creado en 2005). En Chile pueden ser mencionados la Corporación para Estudios de Latinoamérica (Cieplan) y el Instituto Fernando Henrique Cardoso (IFHC). Y en Argentina los intelectuales que se adhieren al neodesarrollismo tuvieron un fuerte peso académico y en las altas esferas de la burocracia estatal bajo los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

a él y la variedad de enfoques que plantean, resulta un gran reto agrupar todos los planteamientos del neodesarrollismo.

No obstante, existe cierta coherencia en temas y problemas esenciales, que más allá de las diferencias entre sus miembros, permite afirmar que la lámpara con la que alumbran los neodesarrollistas les ha permitido consensar cuatro tesis centrales: 1. En las condiciones del capitalismo contemporáneo es posible que los países antes llamados subdesarrollados, dependientes y periféricos, y que hoy los neodesarrollistas denominan como «países con ingresos medios», crezcan hasta alcanzar la convergencia con los países desarrollados. 2. Para ello se requiere retomar el proyecto industrializador superando las limitaciones de la industrialización por sustitución de importaciones (ISI) y avanzar a la sustitución de exportaciones. 3. También se necesita construir un nuevo Estado, o al menos permitir una mayor intervención estatal, que logre un equilibrio con el mercado. 4. Finalmente, se precisa la consolidación de burguesías nacionalistas autónomas con la fuerza suficiente para resistir la ofensiva neoliberal. A continuación, se sintetiza la argumentación que los neodesarrollistas realizan para defender estas cuatro tesis.

## Metodología

Este estudio utilizó el análisis cualitativo de publicaciones especializadas sobre los planteamientos de la escuela de pensamiento conocida como nuevo desarrollismo. A partir de la revisión de sus principales exponentes, se elabora una síntesis de lo que podría ser considerado el consenso neodesarrollista expresado en cuatro argumentos centrales: *a)* convergencia, *b)* sustitución de exportaciones, *c)* nuevo Estado y *d)* burguesías nacionalistas. El análisis

de estos argumentos, desde una perspectiva metodológica y epistemológica, es la base sobre la que se elaboró la crítica al consenso neodesarrollista y que se concentró en las debilidades de tres de sus principales supuestos: *a)* su metodología comparativa ahistórica, *b)* su concepción voluntarista y tecnicista del desarrollo, y *c)* su dependencia cultural como escuela de pensamiento.

### Las nuevas oportunidades de convergencia en el capitalismo global

«Patear la escalera» es una expresión de Ha-Joon Chang (2002) que los neodesarrollistas gustan citar ampliamente para nombrar la estrategia con la cual los países desarrollados buscan imponer determinadas políticas a escala internacional con el objetivo de que los demás países no puedan ascender hacia el desarrollo. Ya desde la primera revolución industrial, Gran Bretaña intentó, por la vía del fomento a la apertura comercial, obstruir la convergencia de sus vecinos europeos, pero esta estrategia de «patear la escalera» no es exclusiva de la potencia hegemónica del siglo XIX, por el contrario, es una constante en la historia moderna. Los llamados a la inevitabilidad del globalismo y el neoliberalismo, que desde finales del siglo XX hacen los países ricos y sus organismos multilaterales, son parte de esta vieja estrategia que busca aprisionar y restringir el desarrollo. No obstante, aseguran los nuevos desarrollistas, en la actualidad está siendo superada por un conjunto de naciones que han logrado poner en pie la escalera para encaminarse hacia el desarrollo.

En su libro *Globalización y competencia* (2010), una obra ampliamente citada y difundida por la corriente neodesarrollista, Luiz Carlos Bresser-Pereira

(exministro del neoliberal presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso) afirma que la globalización como proceso histórico trajo consigo dos nuevas ideologías. La primera es el neoliberalismo, cuya tesis central descansa en la autorregulación de los mercados y la promoción de un amplio programa de reformas y políticas económicas tales como la desregulación económica, la flexibilización laboral, la liberalización comercial y financiera, el descenso del gasto social, entre otras. La otra ideología que permeó en esta nueva etapa del capitalismo es el «globalismo» que exalta a la globalización y plantea su inevitabilidad, al mismo tiempo que proclama la ineficacia e irrelevancia de los Estados nación frente a los mercados (Bresser-Pereira, 2010).

De esta forma Bresser-Pereira propone distinguir entre globalización y globalismo. La primera es un «fenómeno histórico real» que ha implicado la apertura comercial y financiera. Pero la segunda es una ideología que plantea que estos dos tipos de apertura son inevitables, necesarios y favorables para todos los países por igual. Mas, aseguran éste y otros neodesarrollistas, ambas aperturas tienen efectos diferentes, según los países que las apliquen. Así, por ejemplo, la apertura financiera, o globalización financiera, sólo ha sido una traba más para que los países con ingresos medios alcancen el desarrollo. Esto se debe a que dicha apertura frena las posibilidades de que los países en cuestión contrarresten el problema del llamado mal holandés y la consecuente tendencia a la sobrevaluación de su tipo de cambio. Además, afirman que el capitalismo financiero no es sino una distorsión del capitalismo, la nueva forma de patear la escalera de los países ricos para aumentar los retornos de sus activos financieros.

Pero si esto sucede cuando los países con ingresos medios deciden llevar adelante la apertura financiera, para los neodesarrollistas las condiciones cambian cuando éstos eligen aprovechar la otra cara de la globalización: la

apertura comercial. La liberalización comercial se puede constituir en una verdadera oportunidad para que los países con ingresos medios «pongan en pie la escalera» y se encaminen hacia la convergencia con los países desarrollados. Pues si bien los países ricos han utilizado la difusión de la estrategia de neutralizar a sus competidores con base en la ley de las ventajas comparativas del comercio internacional y la apertura comercial irrestricta, un conjunto de países con ingresos medios ha alcanzado la industrialización desafiando las armas ideológicas del neoliberalismo y el globalismo, limitando la apertura financiera y aprovechando las ventajas que les brinda una apertura comercial controlada por el Estado. Aunque hay variaciones, en general los neodesarrollistas consideran que Japón, Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia, China, India y Vietnam están embarcados en ese proceso. La experiencia de estas naciones es central en tanto que muestra que la estrategia de «patear la escalera», a través de la apertura comercial, parece que en la actualidad ha perdido eficacia, pues ahora son los países ricos los que llevan adelante medidas proteccionistas ante la pujante competencia económica de los países asiáticos. Este proceso de «competencia exitosa por parte de los países con ingresos medios» o *convergencia*, como lo denominan los neodesarrollistas, es fundamental y supuestamente habría modificado la estructura de poder global en el capitalismo contemporáneo (Suárez, 2013).

Para los nuevos desarrollistas, la «competencia exitosa por parte de los países con ingresos medios» ha dado lugar al surgimiento de un nuevo «orden mundial multipolar», esto es, los poderes emergentes influyen en el sistema en su conjunto, como en los demás países (incluyendo a los desarrollados). Así, el orden mundial del siglo XXI es radicalmente diferente al del pasado (Berthomieu *et al.*, 2005). Se habría pasado del orden bipolar

posterior a la Segunda Guerra Mundial, y del orden unipolar que imperó en el mundo luego de la implosión de la Unión Soviética, a un orden multipolar que dio inicio luego de la crisis financiera internacional de 2008-2009, del estancamiento crónico de Japón y de la crisis de la deuda europea. Este orden multipolar significa que el poder se encuentra en muchas manos y en muchos lugares, los actores son múltiples, diversos y con diferentes grados y tipos de poder. A esto lo llaman «el surgimiento del resto» (Araníbar y Rodríguez, 2013:24).

En este sentido, al interior de las filas neodesarrollistas existe cierto consenso sobre la afirmación de que la globalización ha significado una oportunidad de convergencia para los países en desarrollo, por lo que más allá de las lecturas ideológicas que se han hecho desde las más diversas posiciones políticas y académicas sobre ella, finalmente parece que en esta nueva etapa del capitalismo «la globalización se está convirtiendo en un proceso de redistribución del ingreso y la riqueza en beneficio de los países de crecimiento más rápido» (Bresser-Pereira, 2010:60).

### *The catching-up*: de la sustitución de importaciones al fomento exportador

Para los neodesarrollistas la experiencia de algunos países asiáticos constituye la prueba irrefutable de que la convergencia (también conocida como *catching-up* o *catch-up* en el argot neodesarrollista) en el capitalismo global no es sólo una utopía, sino una posibilidad real. Y aseguran que también lo es para los países latinoamericanos, siempre y cuando sigan las enseñanzas de sus pares asiáticos que se encaminan a la convergencia. Dado que los

neodesarrollistas buscan sistematizar esas enseñanzas en su teoría, el camino para Latinoamérica es claro: hay que seguir los postulados del neodesarrollismo para arribar a la convergencia.

Ahora bien, ¿cómo es que un conjunto de países logró pasar de una posición de subdesarrollo y subordinación por parte de las potencias mundiales a otra donde se empiezan a erigir en «competidores» y en «rivales» de los países desarrollados? La respuesta que da la corriente neodesarrollista a este interrogante constituye un consenso entre sus afiliados. Ellos explican que el hecho de que ciertos países de ingresos medios, principalmente ubicados en Asia, se hayan encaminado hacia la senda del desarrollo se debe a que lograron extraer ventajas de las oportunidades creadas por el capitalismo global. Pues si bien siguió estando presente la división internacional del trabajo que establece una frontera entre los países ricos, centrados en tareas con mayor valor agregado per cápita (que requieren mano de obra más calificada), y los países en vías de desarrollo, centrados en tareas estandarizadas con bajo valor agregado y con abundante mano de obra barata, poco a poco, esa línea divisoria, presente y operante en el inicio de la nueva etapa del capitalismo global, se resquebraja, ya que tanto la mano de obra barata como la capacidad de importar tecnología a un costo relativamente bajo funcionan como pistones que impulsan el crecimiento a través de exportaciones hacia los países ricos (Bresser-Pereira, 2010).

Los países asiáticos que son presentados como paradigma iniciaron su industrialización desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y su particular proceso de industrialización se caracterizó por una fuerte presencia del Estado y por una política asentada primero en la sustitución de importaciones, la cual permitió un proceso de rápido crecimiento económico, que

posteriormente derivó en una apertura comercial selectiva, reduciendo de manera gradual la protección tarifaria para la industria nacional, y con políticas cambiarias proactivas (mantener deliberadamente el tipo de cambio en niveles competitivos), con el objetivo de avanzar en la industrialización con base en las exportaciones. Aunque algunos neodesarrollistas señalan que en ciertos casos la industrialización sustitutiva y el fomento a las exportaciones se dio de forma simultánea y no en fases (Sicsú *et al.*, 2007), lo relevante que extraen de estas experiencias es que utilizaron a la industrialización (la sustitución importadora y el fomento exportador) como arma para trepar «la escalera» del desarrollo.

Así pues, los países que han logrado la convergencia pasaron por un proceso similar al que vivieron ciertas naciones de América Latina, el cual se conoció como desarrollismo, en donde la sustitución de importaciones dirigida por el Estado fue central. Sólo que en los países asiáticos la sustitución de importaciones fue simplemente una fase más en un proceso de industrialización más amplio, ya que éste se extendió hasta el fomento a las exportaciones. Los intelectuales del nuevo desarrollismo aseguran que este paso hacia adelante en las exportaciones fue fundamental y explicaría la diferencia en el grado de desarrollo que existe en la actualidad entre los países de ambas regiones: los asiáticos en plena convergencia y los latinoamericanos aún en el subdesarrollo (Bresser-Pereira, 2007).

Para los neodesarrollistas, los fenómenos que llevaron a la crisis del desarrollismo clásico latinoamericano son variados. Pero sin duda, el que destaca en las argumentaciones sobre la causa última del abandono del proceso de industrialización es la relación que se estableció entre un pujante sector industrial ligado al mercado interno que sustituía lo que antes se importaba y el crónico estancamiento del sector industrial exportador.

El crecimiento de las importaciones de bienes intermedios y bienes de capital necesario para continuar y avanzar con la industrialización sustitutiva, al no poderse cubrir con las exportaciones, presionó hacia el aumento del déficit de la balanza comercial. Este creciente déficit fue cubierto desde mediados de los 1970 con moneda internacional (préstamos internacionales), lo que finalmente derivó en la crisis de la deuda externa por la que atravesaron ciertos países en la década de 1980 y que puso fin a la experiencia industrializadora. Un argentino adherente al neodesarrollismo, Leonardo Grottola, señala que el objetivo del desarrollo se vio obstaculizado por «la demora en el pasaje, acorde con la experiencia asiática, de la industrialización sustitutiva a la de orientación exportadora, que contribuyó a legitimar la también contraproducente opción posterior por la apertura comercial indiscriminada» (Grottola, 2010:8).

Como lo fue para los desarrollistas del siglo XX, para los nuevos desarrollistas la industrialización sigue siendo la vía principal para colarse al desarrollo, aunque los últimos pretenden enmendar los errores de sus predecesores que no repararon en la centralidad de las exportaciones. Según esta perspectiva, las condiciones actuales para detonar el proceso industrializador en nuestro continente son más favorables que en el pasado. En primer lugar, porque el proceso de industrialización ya no comienza de cero; el punto de partida para ciertos países latinoamericanos no es el mismo que el de mediados del siglo XX. Argentina, Brasil, México, Chile y Colombia han dejado atrás la «etapa infantil» del proceso industrializador, y lograron, hasta cierto punto y con sus especificidades para cada caso, dejar en pie una estructura nacional madura (Bresser-Pereira, 2010). En segundo lugar, a diferencia de lo acontecido con el desarrollismo del siglo pasado, los procesos de apertura comercial que ha implicado el capitalismo global posibilitan el

avance hacia las exportaciones industriales que quedaron rezagadas en el siglo pasado: «Contrariamente a los argumentos de sus críticos, la globalización claramente ofrece una oportunidad para que estos países converjan, ya que genera mayores posibilidades de exportación e inversión» (Bresser-Pereira, 2010:259). Finalmente, la ruta hacia un proceso de industrialización con miras a la convergencia ya ha sido trazada por los países asiáticos y, a diferencia del pasado, ahora América Latina no camina a ciegas.

Por ello, para los nuevos desarrollistas, el paso que actualmente aparece como una necesidad para que Latinoamérica alcance el anhelado desarrollo es el de fomentar las exportaciones. En palabras de Bresser-Pereira, uno de los más reconocidos exponentes del neodesarrollismo:

A diferencia del nacional-desarrollismo, que adoptó el pesimismo exportador de la teoría económica del desarrollo, el nuevo desarrollismo no quiere basar su crecimiento en la exportación de productos primarios de bajo valor agregado, sino que apuesta a que los países en desarrollo exporten bienes manufacturados o productos primarios de alto valor agregado (2007:117).

Por ello el programa del nuevo desarrollismo enfatiza que debe existir una clara vocación industrializadora, como la de antaño, mas ahora la protección a la industria no puede ser generalizada e indiscriminada, sino selectiva; es decir, dirigida sólo hacia aquellos sectores industriales o empresas que demuestren eficacia y cuyo crecimiento y consolidación permita colocarse en los mercados mundiales de medio y alto valor agregado en expansión.

Los neodesarrollistas reconocen que existieron algunos planteamientos de los viejos desarrollistas que apuntaban a la necesidad de la integración comercial regional para avanzar en la industrialización, esto es, la necesidad

de las exportaciones a los países vecinos. Sin embargo, su visión va más allá de ese planteamiento, pues para ellos esa integración comercial regional puede «ofrecer a las economías de la región una oportunidad de especialización industrial, que les permitiría reducir la subutilización del capital y la ineficiencia de los procesos de producción» (Berthomieu *et al.*, 2005:15). Pero tal integración sólo es un paso intermedio hacia el objetivo final: la proyección industrial de las exportaciones en los mercados mundiales:

De este modo, el proceso de integración, que era inicialmente concebido como una extensión regional del mercado doméstico para favorecer la industrialización por sustitución de importaciones (ISI), debería hoy en día, en el espíritu de los nuevos análisis, facilitar la diversificación de las exportaciones y promover un proceso de aprendizaje en previsión de un esfuerzo ulterior para penetrar terceros mercados (Berthomieu *et al.*, 2005:16).

La apuesta es por una industrialización que tome en cuenta a los mercados nacionales como espacio de realización, pero que tenga la mira hacia los mercados internacionales en crecimiento, pues no se debe perder de vista que la única vía, a decir de los neodesarrollistas, para realizar el *catching-up*, está en el capitalismo global (Sicsú *et al.*, 2007).

### Hacia un Estado neodesarrollista

No es suficiente decir que la diferencia que existe en los grados de desarrollo entre los países asiáticos y los latinoamericanos está en el avance divergente de sus exportaciones industriales, pues ello apenas señala una

manifestación de esta diferencia, pero no las causas que la explican. Los neodesarrollistas hurgan a mayor profundidad para encontrar tales causas. A la pregunta de ¿por qué América Latina no ha podido desarrollar su industria de exportación?, la respuesta que suelen dar está centrada en dos factores: 1. La tendencia a la apreciación del tipo de cambio. 2. La debilidad de las burguesías nacionales para poner en pie y consolidar una estrategia de desarrollo nacional.

En este subapartado abordaremos el primer factor, ya que el control sobre el tipo de cambio marca las líneas que debe de asumir la intervención del Estado, según el planteamiento neodesarrollista. En el siguiente subapartado profundizaremos en el problema de las burguesías nacionales.

Dejando a un lado la supuesta miopía mercadointernista de los gobiernos del siglo XX y antiguos desarrollistas, lo que sistemáticamente ha impedido, a decir de los neodesarrollistas, que los países con ingresos medios, como los de América Latina, no puedan avanzar en la industrialización hasta llegar a las exportaciones, está en la constante apreciación del tipo de cambio. En otras palabras, la dificultad medular para transitar de una industria centrada en mercados nacionales a otra que gravita en las exportaciones radica en la «tendencia estructural a la sobrevaluación del tipo de cambio» (Bresser-Pereira, 2010:162).

En términos generales podemos decir, siguiendo a los neodesarrollistas, que una apreciación de la moneda nacional (sobrevaluación del tipo de cambio) provoca el encarecimiento de los bienes transables (exportaciones) para las monedas extranjeras, lo que se traduce en una reducción de su demanda, que a su vez genera una caída en las expectativas de ganancia en los sectores exportadores y, finalmente, el estancamiento o derrumbe de las inversiones en tales sectores, impidiendo el consiguiente proceso de

convergencia. Los dos fenómenos que traccionan la tendencia estructural de la sobrevaluación del tipo de cambio son el crecimiento con ahorro externo y la llamada «enfermedad holandesa» (Bresser-Pereira, 2007:116).

Respecto al crecimiento con ahorro externo, los neodesarrollistas señalan que existe una atracción estructural que los países de ingresos medios ejercen sobre los capitales internacionales debido a la política de altas tasas de beneficio e interés que ofrecen. Los neoliberales y hasta los viejos desarrollistas consideraban que el proceso de crecimiento económico necesita de la entrada de capitales externos para financiar las inversiones. No obstante, los neodesarrollistas señalan que, en vez de financiar las inversiones necesarias para la industrialización o el crecimiento económico, el ahorro externo termina elevando el nivel de consumo interno, debido a que cuanto mayor es el tipo de cambio mayores son también los salarios de los trabajadores y de la clase media profesional. Como contrapartida bajarán los beneficios de los capitalistas, ya sea por el aumento salarial o por la caída de las exportaciones y las inversiones de los capitalistas nacionales; en pocas palabras, los beneficios caen cuando se aprecia el tipo de cambio y caen las exportaciones, profundizando esta tendencia el aumento generalizado de los salarios. Este proceso prolonga la demanda de capitales externos para inversiones productivas que nunca se realizan, de tal forma que se sustituye el ahorro interno por el externo, lo que genera la sobrevaluación del tipo de cambio o incluso una crisis en la balanza de pagos y la consecuente pérdida de viabilidad del sector exportador y el freno al proceso de convergencia (Bresser-Pereira, 2010).

El otro elemento que explica la tendencia a la sobrevaluación del tipo de cambio es el mal o enfermedad holandesa. Para los nuevos desarrollistas, el mal holandés es una «falla del mercado» que se deriva de la existencia de

recursos naturales baratos y abundantes para producir *commodities*. Este fenómeno tiende a generar rentas ricardianas (abaratamiento de los costos y precios con respecto a los que prevalecen en el mercado mundial) que se traducen en una productividad más alta con respecto al sector equivalente de los demás países. Ello tiene un impacto negativo sobre los demás sectores de la economía nacional en cuestión, incluso de aquellos que emplean tecnología de punta, debido a que este sector privilegiado genera un tipo de cambio elevado. Las rentas ricardianas favorecen la explotación de esos recursos con un tipo de cambio más apreciado que el que sería viable para la competitividad de las industrias de exportación, lo que trae como consecuencia que los únicos bienes que el país puede producir son los que causan la sobrevaluación del tipo de cambio, cercenando el desarrollo de las demás industrias exportadoras (Bresser-Pereira, 2010).

Los dos fenómenos que se desarrollan por separado y de forma independiente, en el mediano y largo plazo, convergen y dan vida a la «tendencia estructural a la sobrevaluación del tipo de cambio»:

Mientras que el mal holandés deja de empujar el tipo de cambio cuando este alcanza el equilibrio corriente, los efectos de los flujos entrantes de capital resultantes de la política de crecimiento con ahorro externo sobre la apreciación de la moneda por encima de ese equilibrio son continuos. El tipo de cambio se aprecia gradualmente en tanto el capital entrante financia el déficit de la cuenta corriente y aumenta la deuda externa. Si no se detiene este ingreso de capital, tarde o temprano se producirá una crisis de la balanza de pagos. La crisis tendrá lugar más rápido cuando más intenso sea el proceso de apreciación y menor su neutralización por parte del gobierno local (Bresser-Pereira, 2010:165). Es en este diagnóstico, que señala la tendencia estructural del tipo

de cambio como el principal freno al proceso de convergencia, donde los neodesarrollistas colocan su teoría del Estado en el proceso de desarrollo. Por supuesto, diferentes pensadores neodesarrollistas han elaborado toda una batería de recomendaciones sobre el tipo de intervención del Estado y las diferentes políticas económicas que se deberían de seguir; sin embargo, la intervención fundamental y la política económica central del Estado neodesarrollista consiste en hacerle frente a la atracción del ahorro externo y al mal holandés.

La neutralización del fenómeno de crecimiento mediante ahorro externo requiere que el Estado genere las condiciones adecuadas para que se constituya un sistema financiero capaz de cubrir las necesidades de inversión. Bajo ninguna circunstancia, dicen los neodesarrollistas, el Estado debe de perder la capacidad de generar ahorro público para financiar las inversiones requeridas (Bresser-Pereira, 2007). Para garantizar que las necesidades de inversión se cubran con el ahorro adecuado es necesario que el Estado mantenga las tasas de interés internas en niveles bajos, imponga controles al ingreso de capitales y que mantenga, si no un equilibrio fiscal, por lo menos un déficit público pequeño que sostenga la tasa de inversión a niveles adecuados con el objetivo de fomentar la industrialización exportadora de medio y alto valor agregado (Bresser-Pereira, 2007).

Por otra parte, afirman los neodesarrollistas, la neutralización del mal holandés implica necesariamente el control estatal del tipo de cambio, previniendo su apreciación y manteniéndolo en niveles «competitivos», esto es, subvaluado. El Estado dispone de dos mecanismos. El primero está centrado en la aplicación de una política de impuestos a las ventas y exportaciones de los bienes que motivan el mal holandés, a través de la cual las rentas ricardianas que antes se diseminaban sin control por la estructura social

continúan en el país, pero bajo la forma de ingresos del Estado (el impuesto deberá ser igual a la diferencia entre el tipo de cambio de equilibrio corriente y el tipo de cambio de equilibrio industrial) (Bresser-Pereira, 2010). El segundo mecanismo se debe aplicar de forma simultánea para garantizar la neutralización del mal y consiste en la creación de un fondo internacional con dichos impuestos, y ese fondo detendría el flujo de ingresos impositivos que aprecian el tipo de cambio.

Así pues, la industrialización exportadora que enarbolan los neodesarrollistas como la oportunidad histórica para que América Latina por fin trepe la escalera del desarrollo necesita de un Estado que se atribuya un papel diferente respecto al que ha venido asumiendo desde la ofensiva neoliberal (Araníbar y Rodríguez, 2013). Pues mientras que «la ortodoxia convencional [neoliberalismo] reconoce las fallas del mercado, pero afirma que las fallas del Estado al intentar corregirlas son peores, el nuevo desarrollismo rechaza esta visión pesimista sobre la capacidad de acción colectiva y quiere un Estado fuerte, no a expensas del mercado, sino para fortalecerlo» (Bresser-Pereira, 2007:120).

Pero como ya vimos, la intervención que defienden los neodesarrollistas también es diferente de la que se dio en el siglo pasado bajo la influencia de los cepalinos clásicos. En definitiva, no están pensando en un Estado que asume directamente tareas de producción de bienes y servicios a través de empresas bajo monopolio estatal, tampoco piensan en un Estado que lleva adelante una protección extensiva de la estructura nacional y una regulación férrea del proceso económico (Buhse *et al.*, 2013). Más que eso, el papel más importante del Estado para los neodesarrollistas es el de propulsar las exportaciones industriales a través de una política macroeconómica integral que frene la tendencia estructural a la sobrevaluación del tipo de cambio.

## La necesidad de burguesías nacionalistas

Además del comportamiento estructural del tipo de cambio, los intelectuales del nuevo desarrollo aseguran que la segunda causa que explica la imposibilidad del tránsito hacia la industrialización exportadora está en el perfil y características de las burguesías de los países latinoamericanos que han hecho de ella un sujeto histórico débil y dependiente. A su parecer,

en Latinoamérica, las burguesías no tienen la autonomía que demostraron en Europa y en Estados Unidos para llevar a cabo sus revoluciones nacionales, ni la autonomía de que disponen hoy en los países asiáticos dinámicos. Son burguesías ambiguas, contradictorias, nacional-dependientes: en ciertos momentos se identifican con el interés nacional; en otros, no (Bresser-Pereira, 2010:21).

A lo largo de su historia, América Latina ha ensayado procesos de fortalecimiento de sus élites nacionales y de sus burguesías, mas no se ha logrado hacer de estos sectores sociales sujetos independientes y autónomos respecto de los centros. La experiencia histórica más sobresaliente de estos ensayos se encuentra en el intento desarrollista latinoamericano de mediados del siglo XX que fue teorizado por la Cepal y que implicó un acuerdo interclasista al interior de los países de la región que reconoció la importancia de llevar adelante un proceso de industrialización para salir de la condición de subordinación internacional y encaminarse hacia el desarrollo. A decir de los neodesarrollistas, se partía de que «los países periféricos debían superar el obstáculo adicional de hacerle frente a su propia «dependencia», es decir, a la sumisión de las élites locales a las de los países centrales, interesadas

únicamente en su propio desarrollo» (Bresser-Pereira, 2010:97). El acuerdo interclasista sobre el que se asentó la estrategia de desarrollo de la ISI reconocía la necesidad de consolidar un Estado-nacional que apuntalara la independencia de las clases implicadas en el acuerdo.

La alianza implícita en esta estrategia se fraguó entre, fundamentalmente, industriales, primario-exportadores, burocracia estatal y trabajadores, con la idea de que los nuevos empresarios se convirtieran en parte de una burguesía nacional en asociación con los funcionarios del gobierno y los trabajadores. Como se sabe, los resultados fueron alentadores, al menos en el sentido de que trajeron un periodo de crecimiento económico sin parangón en la historia continental. No obstante, las características de las burguesías nacionales imposibilitaron la expansión del proceso de industrialización hacia la diversificación de las exportaciones, fundamentalmente, afirman los neodesarrollistas, por la incapacidad de la burguesía industrial de direccionar el proceso y por su dependencia respecto a fuerzas externas. La crisis de la deuda externa en que derivó finalmente la ISI y la ofensiva neoliberal, no sólo significó el fin de este intento desarrollista, sino también el fracaso del intento de anteponer los intereses nacionales de las burguesías latinoamericanas (Bresser-Pereira, 2010).

En contrapartida, continúan los neodesarrollistas, los países asiáticos vivieron un proceso radicalmente diferente en su camino a la convergencia durante el siglo XX, debido a las características de sus élites y burguesías. Pues aun con la acometida de los organismos multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y del gobierno estadounidense, enmarcados en la ofensiva mundial del neoliberalismo, la estrategia de desarrollo asiática asentada en un acuerdo interclasista con una burguesía industrial sólida, madura, y capaz de direccionar el proceso, dio muestras

de ser por demás eficiente; ya que, si bien se establecieron diversos compromisos entre dichos organismos y los gobiernos de los países asiáticos, éstos quedaron subordinados a la estrategia general de desarrollo nacional de los respectivos países, por lo que las clases dominantes asiáticas siguieron ejerciendo su función de dirección interna con respecto al proceso de convergencia (Bresser-Pereira, 2011). A diferencia de esta experiencia, en Latinoamérica no se concretó la maduración objetiva y subjetiva necesaria de las élites y burguesías nacionales:

Desde alrededor de 1990, como resultado de su propia fragilidad nacional y en respuesta a la creciente presión ideológica del norte —la ola neoliberal—, Latinoamérica volvió a caer en la condición de cuasi-colonia, y sus élites aceptaron una estrategia importada —la ortodoxia convencional— que neutraliza el desarrollo económico en lugar de promoverlo (Bresser-Pereira, 2010:79).

En suma, para el nuevo desarrollismo la consolidación de élites y burguesías nacionales es, en última instancia, condición *sine qua non* para que los procesos de convergencia, también llamados *catching-up*, sean exitosos (Sicsú *et al.*, 2007).

### Las oscuridades del mito neodesarrollista

Los nuevos desarrollistas han echado luz sobre una senda que promete llevar a Latinoamérica al tan anhelado y postergado nivel económico de los países centrales. Dicen haber descubierto el eslabón perdido del desarrollo,

ese que separaba a los países atrasados de los desarrollados, en las naciones asiáticas que han logrado propulsar la industrialización exportadora a través de una intervención estatal y una burguesía fuerte y nacionalista. Con sus cuatro tesis centrales han traído de vuelta el mito del desarrollo. Cada una de estas tesis contiene considerables vacíos, insuficiencias y limitaciones que merecen un trabajo aparte. Sin embargo, no es en esas tesis donde está la principal limitación de sus planteamientos, sino en sus supuestos: esas zonas que, como decía Celso Furtado, todo mito deja en la penumbra. En este apartado de cierre apuntaré tres críticas en torno a los tres principales supuestos de la escuela neodesarrollista.

La primera tiene que ver con la metodología comparativa, casi ahistórica, que utilizan los neodesarrollistas. Centran su análisis en la comparación de casos, el de los «países ricos» junto con el de los asiáticos frente a los latinoamericanos. De tal comparación extraen las tesis centrales que constituyen su propuesta teórica y práctica. Al dejar fuera de su análisis la larga duración y borrar de un plumazo la estructura económica internacional del capitalismo, es decir, al omitir las desigualdades cualitativas entre países, las diferencias entre naciones terminan siendo apenas de grado, y no de cualidad. Así, la divergencia entre países ya no se explica por la existencia de estructuras sociales e históricas cualitativamente diferentes, sino por el grado de avance en el camino hacia la convergencia. Por ello han abandonado la clásica denominación de subdesarrollo y dependencia, y se refieren ahora a «países pobres», «de ingresos medios» y «ricos». La carencia de un abordaje histórico de largo plazo en el estudio comparativo borra las especificidades de los países analizados, lo que inevitablemente deriva en la formulación de una ilusoria receta para el desarrollo aplicable en todo espacio y todo tiempo.

La segunda crítica apunta al planteamiento voluntarista y tecnicista del neodesarrollismo, pues éste concibe a los países como agentes omnipotentes, olvidando las estructuras en que se insertan. Desde ese punto de partida, la condición de «sociedades de ingresos medios» en la que se encuentra buena parte de Latinoamérica no obedece a factores estructurales, sino al comportamiento de ciertas variables macroeconómicas: el mal holandés y el crecimiento con ahorro externo. Una vez que ha sido revelada la maligna dinámica de las variables en cuestión y descubierta la eficiente y racional administración de las mismas, los agentes tienen la capacidad de modificar su tendencia para pasar a ser «países ricos». Esta concepción permea su planteamiento sobre las clases sociales, al pensarlas como agentes sin asiento estructural, y también su idea del Estado, al que tienen por instrumento en manos del gobierno que debe tecnificarse para atender el problema. Países, variables macroeconómicas, clases sociales, Estado, etcétera, son elementos sin relaciones de determinación o jerarquía, están en el mismo plano y pueden actuar de forma autónoma. Los pasos estructurales e históricos con los que se reproduce el capitalismo globalizado y que son los condicionantes de la acción y el comportamiento de países y clases sociales quedan en la completa oscuridad.

La tercera zona en penumbras tiene que ver con la idea de desarrollo y los nuevos desarrollistas como grupo intelectual. La novedad de los nuevos desarrollistas, con la que se han venido a presentar como la alternativa latinoamericana, parte del supuesto de que el desarrollo es igual a la copia y calca de los países ricos. Concebir el desarrollo como un traslado de las experiencias de los países «exitosos» a los «de ingresos medios», pone de manifiesto un alto grado de dependencia cultural de esta escuela de pensamiento. Pues si de lo que se trata es de imitar con mayor precisión un

camino recorrido, la preocupación intelectual fundamental pasa a estar centrada en localizar las particularidades de las experiencias de los países exitosos y plantear la forma de traslado a otros territorios. A esto han apostado los neodesarrollistas y por ello carecen de una perspectiva enraizada en sus circunstancias históricas, pues ni siquiera hacen el intento de abordar los problemas cardinales de sus sociedades desde una perspectiva creativa y latinoamericanista, desde una perspectiva propia. Esto no es un problema trivial sobre la falta de creatividad, como si la creatividad fuera una virtud en sí. El problema cardinal pasa porque el desarrollo de la intelectualidad latinoamericana se ha dado históricamente en condiciones de dependencia. No sólo las estructuras económicas de los países latinoamericanos han estado insertadas en un capitalismo global que las subordina a los centros, las propias estructuras culturales de nuestros países permanecen bajo la misma condición. Además del traslado acrítico de tecnologías, formas de producción y patrones de consumo, la expresión prístina de continuidad estructural de la dependencia cultural de América Latina se encuentra en las formulaciones de sus intelectuales que sin captar las determinaciones estructurales en las que producen conocimiento, terminan por ser intelectuales de imitación, replicadores de ideas originadas en los centros del sistema que poco tienen que ver con las realidades que habitan.

## Referencias

Araníbar, A. y Rodríguez, B. (2013). *América Latina. ¿Del neoliberalismo al neodesarrollismo?* Buenos Aires: Siglo XXI.

- Berthomieu, C., Ehrhart, C. y Hernández-Bielma, L. (2005). «El neoestructuralismo como renovación del paradigma estructuralista de la economía del desarrollo». *Problemas del Desarrollo*, 36(143).
- Bresser-Pereira, L.C. (2007). «Estado y mercado en el nuevo desarrollismo». *Nueva Sociedad*.
- Bresser-Pereira, L.C. (2010). *Globalización y competencia: apuntes para una macroeconomía estructuralista del desarrollo*. Argentina: Siglo XXI/Instituto Di Tella.
- Bresser-Pereira, L.C. (2011). «From the national-bourgeoisie to the dependency interpretation of Latin America». *Latin American Perspectives*, 38(3).
- Bresser-Pereira, L.C., Ferrer, A. et al. (2010). *Diez tesis sobre el nuevo desarrollo*. Proyecto Crecimiento con Estabilidad Financiera y el Nuevo Desarrollo, mayo 2010. Recuperado de [http://www.tentheseonnewdevelopmentalism.org/theses\\_spanish.asp](http://www.tentheseonnewdevelopmentalism.org/theses_spanish.asp)
- Buhse, A. y Dias Pereira, J.M. (2013). «O novo-desenvolvimentismo: uma construção inacabada». Recuperado de [http://www.apec.unesc.net/VII\\_EEC/ sessoes\\_tematicas/%C3%8Irea%201%20Des.%20Amb/O%20novo-desenvolvimentismo%20uma%20constru%C3%A7%C3%A3o%20inacabada.pdf](http://www.apec.unesc.net/VII_EEC/sessoes_tematicas/%C3%8Irea%201%20Des.%20Amb/O%20novo-desenvolvimentismo%20uma%20constru%C3%A7%C3%A3o%20inacabada.pdf)
- Chang, H.J. (2002). *Kicking away the ladder*. Londres: Anthem Press.
- Furtado, C. (1974). *El desarrollo económico: un mito*. México, Siglo XXI.
- García, A. y De Sa, M.B. (2019). «Brasil en el nuevo orden mundial». En *Guía esencial para estudios críticos de desarrollo*. La Paz: Plural.
- Grottola, L. (2010). «Neodesarrollismo y Rol del Estado». Trabajo preparado para el V Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (Alacip). Buenos Aires, 28 a 30 de julio de 2010.
- Katz, C. (2019). «Socialismo y desarrollo: una perspectiva latinoamericana». En *Guía Esencial para Estudios Críticos de Desarrollo*. La Paz: Plural.

Sicsú, J., De Paula, L.F. y Michel, R. (2007). «Por que novo-desenvolvimentismo?»  
*Revista de Economía Política*.

Suárez Dávila, F. (2013). *Creecer o no crecer. Del estancamiento estabilizador al nuevo desarrollo*. México: Taurus.

Veltmeyer, H. y Bowles, P. (2019), «Estudios críticos del desarrollo: una introducción». En *Guía Esencial para Estudios Críticos de Desarrollo*. La Paz: Plural.



Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons  
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional



## Mutaciones en la economía política mundial: pandemia, capitalización y estatalismo

Humberto Márquez Covarrubias\*

*Resumen.* La crisis derivada de la pandemia de covid-19 no se ha generalizado del todo en el campo económico. Evidentemente, existen grandes ganadores, destacadamente las grandes corporaciones tecnológicas y farmacéuticas, así como una amplia y extensa gama de perdedores, como los sectores de energía, el transporte y los pequeños negocios, pero sobre todo los trabajadores. Sin embargo, es posible advertir que hay ganadores dentro de las actividades perdedoras, como es el caso de las grandes corporaciones petroleras internacionales, que pese a experimentar un fuerte revés, eventualmente pueden salir airosas y tomar beneficio de la situación de quiebra de empresas que son sus competidores, pero que tienen una densidad de capital más pequeña, menores recursos tecnológicos y menor participación en el mercado. Los grandes beneficiarios de la crisis de la pandemia podrán sacar partido de la catástrofe humanitaria y hacer uso de su amplio margen de liquidez y de sus abultados márgenes de ganancia para realizar inversiones estratégicas que les permitan absorber a sus competidores y lograr consolidar una posición más concentrada de capital y un dominio geoestratégico que los prepara convenientemente para el futuro inmediato, cuando la «nueva normalidad» reencauce a los capitales sobrevivientes de la devastación y se recompongan los ciclos de inversión, los planes de negocio y las grandes obras de infraestructura. Con ello, se pergeña una economía mundial más concentrada en grandes poderes económico-políticos representados por gigantes corporaciones, mayores contenidos tecnológicos e interconexiones más globalizadas.

*Palabras clave:* capitalismo, pandemia, crisis, tecnología, concentración.

## Mutations in the global political economy: pandemic, capitalization and statism

*Abstract.* The crisis arising from the covid-19 pandemic has not spread throughout the entire economic sphere. Evidentially, there are large winners, particularly the huge technological and pharmaceutical corporations, as well as a wide and extensive field of losers, such as in the energy and transport sectors, small businesses, and above all, the workers. However, it is possible to see that there are winners within the business of losing, as is the case of the large international oil companies, which —despite having experienced a significant setback— eventually find themselves successful and enjoying the insolvency of their competitors, but with a smaller capital density, fewer technological resources, and smaller percentage of the market. The great beneficiaries of the pandemic crisis were able to take a share of the humanitarian catastrophe and make use of their large liquidity margins and their fat profit margins to make strategic investments that allow them to absorb their competitors and consolidate a position of greater capital concentration and a geostrategic dominance that conveniently prepares them for the immediate future, when the «new normal» redirects the capital that survived the devastation and rebuilds investment circuits, business plans and large infrastructure works. Thus, is formed a global economy that sees ever-greater concentration of the large economic-political powers represented by gigantic corporations, improved technological conditions, and increasingly globalized interconnections.

*Keywords:* capitalism, pandemic, crisis, technology, concentration.

## Crisis poliédrica

La pandemia desencadenada por el coronavirus SARS-CoV-2 se convirtió en un colosal detonador o acelerador de una serie de procesos preexistentes que daban curso a una simbiosis entre la crisis del capitalismo y los procesos de reestructuración. Significa una fuga hacia adelante en la estrategia de concentración de capital y poder, de manera que durante la cuarentena, que se ha prolongado más del término convencional para una emergencia sanitaria, se ha logrado mucho más de lo que las «libres fuerzas del mercado» podrían haber realizado en un tiempo transicional mucho mayor y con costos políticos más fuertes. De una sola vez se interconectó a todo el globo terráqueo, a partir de un fenómeno globalizador, abarcador y totalizante, con el que se puso en una misma sintonía al conjunto de la humanidad y comenzó la implementación de un proceso de depuración de capitales, trabajos y formas de convivencia para implantar la égida de capitales reconcentrados, poderes estatales fortalecidos, tecnologías convergentes y nuevas normas de socialización bajo extendidas premisas disciplinarias.

En contraste con la supuesta tendencia hacia la *desglobalización*, la pandemia y su crisis remarcan un proceso concentrador, monocorde, sobredeterminante, donde el orbe se reconvierte en un teatro de operaciones de capitales de amplio espectro, que usan tecnologías digitales interconectadas y articulan novísimas tecnologías en pos de la automatización y el acrecentamiento de la productividad, sobre un marco que estrecha los vectores espacio-temporales, de manera más acusada que en los años anteriores, con la pretensión de abrir una nueva era aun dentro de los márgenes del desarrollo capitalista, con todas sus contradicciones.

Así como en un futuro posible se ha advertido que una sociedad colectivizada será imposible en un solo país, por lo pronto se constata en el presente que el capitalismo es imposible, de igual forma, aunque con otra lógica, en un solo país. El teatro de operaciones del capitalismo es global y fenómenos como la crisis sanitaria tienen enormes repercusiones en el funcionamiento de la economía mundial y en las normas de convivencia social.

Las explicaciones sobre las causas de la pandemia de covid-19 son diversas. Van desde las epidemiológicas que suponen la gestación de microbiológicos y el desdoblamiento de nuevas cepas que ponen en predicamento la vida humana de manera fatal y externa. Pasan por las teorías de la conspiración que refieren el diseño de laboratorio de virus en guerras biológicas de cuarta generación. Hasta las más complejas que intercalan las mutaciones socioambientales, las virosis y pandemias que aluden a los desequilibrios metabólicos entre la sociedad humana y la naturaleza impelidos por la lógica de valorización del capital, que trastocan la reproducción de las especies y el orden microbiológico, en un entorno global donde privan tensiones geopolíticas y enfrentamientos entre las grandes potencias por la hegemonía mundial. La crisis de gran calado civilizatorio incluye entre sus aristas más peliagudas el cambio climático, y en ese marco de comprensión el surgimiento de las pandemias tiene una explicación fundada en la episteme moderna capitalista que objetiva cualesquiera manifestaciones de vida en el planeta en una forma engullida en la trama del capital, como parte de su composición y desarrollo.

Entre las causas impulsoras de la propagación de estos virus se encuentra la destrucción de los ecosistemas. El desarrollo industrial no sólo arrasa la tierra y provoca la deforestación, sino que libera nuevos agentes patógenos, porque los animales salvajes que los portan son desplazados y los

microorganismos pasan de una especie a otra, lo cual entraña una deriva genética compleja. La agricultura industrial a gran escala puede detonar la mutación de un virus a formas que puedan dar ese salto entre especies. El virus alojado en los organismos humanos puede propagarse con más facilidad debido a la alta concentración de personas en las ciudades, los centros de trabajo, los centros comerciales, las escuelas y otros espacios de interacción colectiva.

Una clave de interpretación de las mutaciones del capitalismo aceleradas por la pandemia es la de descifrar los efectos inmediatos y duraderos, los sectores afectados y favorecidos por las medidas adoptadas en la gestión de la pandemia y la forma política concomitante en que se afronta este complejo problema. La complejidad de la crisis sanitaria, económica y social se desgrana en hechos como la destrucción de capital, valor y trabajo; la acelerada concentración de capital; el señorío de la renta tecnológica; la recreación de la forma de Estado de excepción, como «nueva normalidad» con sus dispositivos de vigilancia, disciplina, control y gestión del espacio público y privado; y la preponderancia de las plataformas operativas de capital digital.

### Capitalismo necrófilo

El capitalismo es un sistema mórbido, que enferma y mata de muchas maneras a la población trabajadora y en general a los pobres. No obstante, la pandemia de covid-19 tiene como rasgo distintivo que no es una enfermedad típica de la pobreza, sino que está afectando a los países centrales y periféricos, a los ricos y a los pobres.

Todos los días se registran muertes prevenibles, sea por hambre o falta de agua potable, pero también por enfermedades ocasionadas por contaminación, malnutrición, accidentes de trabajo, violencia criminal, entre otras causas. Por ejemplo, la diarrea representa la principal causa de morbilidad, propia de lugares donde carecen de agua potable; o el hambre, que causa la muerte unas diez veces más que el covid-19. Paradójicamente, el capitalismo global produce 50% más de los alimentos necesarios para nutrir al conjunto de la humanidad, pero las relaciones mercantiles establecen diques en su distribución, puesto que rige el criterio de la ganancia y no el de satisfacción de necesidades humanas.

Las epidemias han sido una constante en las sociedades humanas. Sin traer a colación las que se han sucedido en el pasado, en el mundo actual se ha propagado el ébola, malaria, sarampión, zika, síndrome respiratorio agudo grave (SARS), cólera, meningitis, fiebre amarilla, síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS), gripe aviar, entre otras. Un rasgo característico es que son enfermedades enclavadas en los países periféricos y subdesarrollados, que dentro de la división internacional del trabajo operan como proveedores de materias primas y fuerza de trabajo barata en el mercado mundial, precisamente donde las condiciones de vida son muy precarias, vulnerables, y no importan gran cosa a los centros de decisión mundial.

En sus propios términos epidemiológicos, la pandemia de covid-19 tiene una cierta letalidad de no más de 4%. Para efectos comparativos, se puede considerar que mientras que el covid-19 mata, aproximadamente, a 1 de cada 150 personas contagiadas, en tiempos antiguos, la plaga que azotó a la Atenas de Pericles (429-425 a. n. e.), mató a 1 de cada 4 contagiados; en términos literarios, si lo que ocurre en nuestros días es una tragedia, aquello parecía el apocalipsis.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce un amplio rango de letalidad de entre 0.1% y más de 25%, según el país, pero en la sociedad contemporánea esta versión del coronavirus no es la principal causa de morbilidad. Hay enfermedades epidémicas o pandémicas, virales y no virales, con una fuerte carga de morbilidad que están encubiertas, porque son las que padecen los pobres del mundo, mayormente los asentados en el capitalismo periférico, pero también cada vez más en el mundo central desarrollado, donde se expanden las desigualdades sociales.

Es una problemática compleja, de amplio espectro, que tiene un contenido de carácter biomédico y una manifestación en la esfera de la salud pública, lo cual reclama indudablemente respuestas científicas fundadas en criterios socioepidemiológicos. Dentro de la heterogeneidad social, política y cultural del mundo, se han ensayado distintas respuestas: desde los ámbitos de Oriente hasta Occidente, pasando por la variada configuración política de los Estados nacionales, con formaciones políticas estatistas o parasocialistas, hasta las plenamente capitalistas, donde la salud es una mercancía más que se compra y vende en el mercado.

La expectativa es que la situación pandémica será prolongada y que vendrán nuevas y más terribles pandemias. Ya se anuncia, por lo pronto, la gestación de nuevas cepas del coronavirus, supuestamente más contagiosas.

## Grandes tendencias

### *Depresión económica*

Derivada de la morbilidad y letalidad del virus SARS-CoV-2, la OMS decretó la pandemia global, y en consonancia los organismos internacionales y los Estados adoptaron medidas para contener su propagación como el confinamiento y el cierre de actividades. Como resultado, luego del colapso financiero mundial de 2008, el capitalismo se precipita en una nueva crisis global con epicentro en las economías más desarrolladas —China, Estados Unidos y Europa— y con una gran propagación en las zonas periféricas.

Los organismos internacionales consideran que es la peor recesión económica desde los años del *crack* de los 1930. El Fondo Monetario Internacional (FMI) calcula que el PIB mundial decrecerá en 3% en 2020, el Banco Mundial (BM) calcula una caída de 5.2% y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) anticipa un declive de 6%. De presentarse un rebrote mayor o una mutación que agrave la salud mundial, el escenario podría ser peor. Como una señal del desplome económico mundial, la movilidad de capitales e inversión extranjera directa (IED) se derrumbó. Durante la pandemia el flujo de IED disminuyó 40% en 2020 respecto de 2019, y entre 45 y 50% para 2021, según la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo (CNUCD).

La dislocación de la oferta y la demanda a nivel global afecta a las corporaciones multinacionales, máxime al sector industrial, como la manufactura y el sector extractivo, que soportan sus operaciones en redes globales de capital provistas por múltiples cadenas de suministro para ramas como la automotriz, el petróleo, la minería, entre otras. Entre las 100 corporaciones

multinacionales más grandes se implementaron programas de ajuste a la baja respecto a las ganancias proyectadas en 2020. Sin embargo, el efecto fue diferenciado, pues mientras que las industrias automotriz, minera y petrolera resultaron severamente afectadas, las grandes corporaciones farmacéuticas y tecnológicas también hicieron ajustes, pero en sentido contrario, dado que captaron fabulosas ganancias extraordinarias e incrementaron notablemente sus valores accionarios.

No obstante, los signos de recesión estaban presentes con antelación a la pandemia, como se deduce del declive relativo del uso de la capacidad productiva a nivel global. Más allá de la idea comúnmente aceptada de que la contingencia sanitaria ha procreado la actual crisis del capitalismo, ésta ha fungido como un detonador o precursor que desencadena un proceso de ajuste y reestructuración de la economía mundial, y lejos está de ser un quiebre definitivo del capitalismo o una superación de su modelo de gestión neoliberal, sino que es un mecanismo potente que está encauzando una nueva oleada de centralización y concentración del capital, de gran amplitud y profundidad, que destruye a su paso capitales improductivos, obsoletos o inadaptados a las nuevas circunstancias, y que genera entonces condiciones renovadas para encauzar las palancas de la acumulación hacia sectores emergentes o latentes apuntalados por las transmutaciones socioeconómicas adheridas a la gestión de la pandemia. Esto significa una fuga hacia adelante del capitalismo, que muestra un supuesto rostro digital y verde, pero que encubre formas renovadas de acumulación por superexplotación, despojo y rentabilización tecnológica.

Merced a la volatilidad económica y la disminución del financiamiento para proyectos de largo plazo, fueron pospuestos o cancelados acuerdos empresariales que contrajeron uno de los procesos característicos del gran

capital, las fusiones y adquisiciones en la esfera internacional, con una caída estimada en cuando menos la mitad de los acuerdos previstos para inicios de 2020.<sup>1</sup>

Las corporaciones ubicadas en el casillero donde están bajo amenaza de sucumbir tuvieron que acudir a la bancarrota para reestructurarse o morir. Un movimiento estratégico de los capitales en predicamento es recurrir a la solicitud de bancarrota, sea para sobrevivir a las turbulencias económicas a través de una reestructuración o sea para preparar el cierre definitivo.<sup>2</sup>

Las empresas insignia del capitalismo expansionista, las energéticas, han estado en jaque durante la turbulencia pandémica. Las compañías productoras de gas y petróleo no convencional enfrentan el desplome de los precios y la demanda, al igual que las grandes petroleras internacionales, que han adoptado medidas de ajuste como el despido de trabajadores y la disminución de dividendos.<sup>3</sup> Sin embargo, la situación económica mundial, caracterizada por el desplome de los precios de *commodities* como el petróleo y los números rojos de las corporaciones petroleras, no significa que éstas vayan a desaparecer del mercado global. Para sobrevivir, Chevron, ExxonMobil y BP

<sup>1</sup> Resulta ilustrativo que en los sectores de energías fósiles y de transportes se hayan cancelado la mayoría de los proyectos de fusión y alianza, mientras que en las energías renovables ocurrieron menos desistimientos. Por ello se dio marcha atrás en la adquisición de Deliveroo (Reino Unido) por Amazon (Estados Unidos) y de la Embraer (empresa estatal de aeronáutica de Brasil) por Boeing (Estados Unidos).

<sup>2</sup> Al amparo del capítulo 11 de la ley de quiebras estadounidense se acogieron 722 empresas de diversos géneros, como cadenas de comercio minorista y productores de gas y petróleo *shale* que sucumben por la caída de la demanda y la guerra de precios entre Rusia y Arabia Saudita.

<sup>3</sup> Al respecto, Royal Dutch Shell, la tercera más grande del mundo, resintió un derrumbe de las ganancias estimado en 46% para el primer trimestre de 2020 y redujo el pago de dividendos a sus accionistas en 66%. La británica BP anunció el despido de 10 mil trabajadores (15% de su plantilla laboral) en varias partes del mundo en 2020. Por su parte, ExxonMobil registró una pérdida de 610 millones de dólares en el primer trimestre de 2020, y así sucesivamente.

estarán obligadas a emprender programas de reestructuración y ajuste, como la drástica contracción presupuestal, con tal de salvaguardar lo que para ellos es vital, los dividendos de los accionistas y las altas remuneraciones de sus directivos.

### *Deuda global*

Luego de la peor recesión en casi un siglo, la economía mundial se encuentra inundada en deudas. El impacto económico de la pandemia de covid-19 ha cobrado la factura a las arcas públicas, las cajas empresariales y los bolsillos de los trabajadores, instancias que por diversos motivos buscan acceder al crédito para mantenerse a flote o sobrevivir en medio de la crisis.

En la crisis pandémica, la deuda global alcanza un récord histórico. Se estima que para 2000 la deuda global —que incluye la sumatoria de las deudas de los gobiernos, las empresas y las familias— superó 355% al PIB global; en ese año el monto alcanzó los 281 billones de dólares, una cantidad récord. La acumulación de deuda durante la pandemia superó con creces la registrada en la crisis financiera mundial de 2008 y 2009. En corto, la deuda aumentó 24 billones respecto del año previo y frente a la década anterior representó más de una cuarta parte del aumento (88 billones), según el Instituto Internacional de Finanzas (IIF, por sus siglas en inglés). La deuda subió 35 puntos porcentuales del PIB en 2020, cuando en 2008 se había incrementado en 10 puntos y en 2009 en 15 puntos. Es ilustrativo que la deuda de los gobiernos explique la mitad del fabuloso incremento deudor, con más de 12 billones de dólares en 2020, lo cual representa 105% del PIB mundial y superara 88% de un año antes. Dicha remontada deudora es motivada por el desplome de los ingresos derivados del estancamiento de la

actividad económica y del incremento del gasto gubernamental orientado a contrarrestar los efectos de la pandemia.

Previsiblemente, algunas de las medidas fiscales aplicadas en la pandemia disminuirán en 2021, si acaso se configura el escenario pospandémico, pero continuarán problemas estructurales, como los déficits presupuestarios y el incremento de la deuda pública, que puede escalar, según las estimaciones, 10 billones de dólares adicionales. Se prevé que los programas de vacunación atenuarán la razón deuda/PIB. Sin embargo, el desabasto de vacunas aunado a los obstáculos para acceder a los mercados financieros, puede agravar el deterioro fiscal en los países periféricos. Las economías desarrolladas registran el incremento mayor de la deuda, sobre todo Europa, donde la razón deuda/PIB del sector no financiero aumentó más de 50 puntos en Francia, España y Grecia. Entre las «economías emergentes», China registró el mayor incremento, y le siguen Turquía, Corea del Sur y Emiratos Árabes Unidos.

A fin de prevenir la quiebra masiva de empresas privadas y la escasez de dinero, además de mantener niveles de empleo y el consumo masivo, los gobiernos han implementado diversos planes. En las economías desarrolladas se han aplicado programas como la difusión del crédito a las empresas mediante garantías de la banca pública a los empresarios; también se ha otorgado financiamiento público que permita el recortar de horas de trabajo debido a la caída de la producción; amén de la moratoria de deuda crediticia, más allá de la deuda hipotecaria. Sin embargo, en un escenario como el actual, donde prevalecen tipos de interés a niveles bajos, la política de garantías crediticias puede generar vida artificial a empresas inviables, que sólo estarían acumulando deudas como bola de nieve.

La respuesta estratégica para superar la crisis pandémica puede ser más intrincada que la implementada en la reciente crisis de 2008-2009, cuyas

secuelas aún no habían sido superadas. Inevitablemente, los programas de rescate y ayuda para afrontar la crisis repercuten en la profundización del déficit presupuestal. La pretensión de subsanar los déficits y la deuda pueden encontrar una traba en las inminentes presiones políticas y sociales derivadas de los estragos socioeconómicos pospandémicos. Por lo que los gobiernos pueden estar comprometiendo su capacidad para seguir afrontando las secuelas pospandémicas y los conflictos larvados en futuras crisis. A su vez, los gobiernos pueden estar menguando su capacidad para actuar en programas globales que pretenden acometer problemas como la mitigación del cambio climático y las catástrofes ambientales. Aunque los tipos de interés se ubican en niveles históricamente bajos y los bancos centrales no tienen objeciones para revertir los estímulos monetarios, los cambios en las cotizaciones internacionales de las materias primas pueden trastocar el escenario económico mundial que ralentice la recuperación y profundice la crisis económica.

### *Concentración superlativa de capital y riqueza*

El proceso de concentración de capital y riqueza acusado durante la crisis de la pandemia, en buena medida una crisis de diseño o inducida por los Estados para catapultar capitales de la cuarta ola tecnológica y depurar sectores capitalistas obsoletos o poco competitivos, podrá conducir hacia una nueva oleada de acumulación al mando de capitales con alto contenido tecnológico y afianzar el poder de los grandes magnates capitalistas, pero también puede conducir hacia la hipertrofia del gran capital y del sistema en su conjunto, exacerbando las contradicciones entre, por una parte, la hiperconcentración de capital y riqueza, y, por otra parte, la acumulación de miseria y devastación ambiental.

Sintomáticamente, la pandemia ha significado un proceso de gran concentración de capital en el sector de la tecnología digital, especialmente para las grandes empresas tecnológicas como Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google y Microsoft (FAANGM). No obstante que varias de las denominadas empresas tecnológicas (*big tech*) reportaban una disminución relativa en su trayectoria de crecimiento, en época de crisis varias corporaciones se consolidan. Por lo general, las crisis económicas de alcance mundial suponen pérdidas generalizadas para los capitales, no obstante también hay sectores beneficiarios, como ocurre con las corporaciones digitales durante el colapso de la pandemia, que logran incrementar sus ingresos y consecuentemente las ganancias. Indiscutiblemente, las empresas agrupadas en las siglas FAANGM disponen de múltiples recursos para sobrepasar las adversidades y aprovechar las oportunidades que les permita crecer y ubicarse como uno de los segmentos del capital que se declare vencedor en la pandemia y dar un paso hacia adelante en la etapa por venir de la «nueva normalidad».

La tendencia hacia la concentración mayúscula de capital significa una articulación y unificación en torno a grandes capitales, capitales monopolistas internacionales. Los grandes capitales —representados por personajes como Jeff Bezos de Amazon y Eric Yuan de Zoom, que según la nomenclatura que caracteriza a las élites como 1%, forman parte del exclusivo 1% del 1%, la *crème de la crème*— redoblan la tónica del despojo y la explotación, y en consecuencia prohíjan una mayor porción global de sobrepoblación que se traduce en millones de personas consideradas superfluas o sobrantes, sin cabida en este mundo tecnologizado, y a la postre se convierten en parias, en un proletariado nómada, sin rumbo, forzado a emigrar por el despojo, la violencia, el hambre, el acaparamiento de tierras, las catástrofes naturales,

etcétera. Expedientes del desahucio capitalista se registran en África, Siria, América Latina y el Caribe. El proletariado nómada arriba a un lugar para volver a ser expulsado. Son nómadas doblemente repelidos. Pero el sistema no se detiene, la maquinaria social de generación de riqueza no tiene reposo, sigue engendrando deslumbrantes productos tecnológicos, sofisticados equipos de guerra, nuevos mecanismos de entretenimiento y enajenación, intrincados mecanismos de consumos de masas. Pero no todos son convidados a la fiesta.

El capitalismo cibernético entroniza a los directores ejecutivos (CEO, por sus siglas en inglés) de las grandes corporaciones anglosajonas. Un pro-hombre de esta mitología corporativa es Bezos, CEO y fundador de Amazon, el hombre reputado como el más adinerado de Estados Unidos. Acorde a la ideología del sueño americano, del hombre que se hace a sí mismo y del valor de un individuo según su fortuna personal, este magnate del capitalismo tecnocrático percibe 8 millones 959 mil 140 dólares por hora, en tanto que un trabajador con salario mínimo apenas recibe 7.25 dólares por hora en Estados Unidos. Durante la pandemia, dicho personaje ganaba cuatro veces más que lo que percibía en 2019, según J.P. Morgan.

Durante la pandemia, modulada por el confinamiento y las actividades laborales y educativas en casa, ha destacado Zoom Video Communications, empresa estadounidense fundada en 2011 por el chino Eric Yuan. Antes de la pandemia era una empresa sin mayor trascendencia, pero conforme sus servicios se expandieron de manera exponencial, se estima que en un trimestre de la pandemia tuvo ingresos de más de 1 mil millones de dólares (Computerworld, 31 de agosto de 2021).

El patrón sociotécnico adoptado por este tipo de corporaciones avanzó hacia la automatización de los procesos, lo cual no sólo permite la sustitución

de fuerza de trabajo, sino que apuntala la obtención de mayores ganancias y de acumulación de riqueza para los propietarios y directivos.

A estas alturas, la pirámide de riqueza ya se hizo mucho más pronunciada y modificó su perfil a favor de las actividades de alta tecnología y comunicación (los famosos amos digitales de la información GAFAM), y también de las extractivas que brindan el soporte material (litio, coltán) a la burbuja tecnológica y al proceso de valorización global de las industrias más dinámicas (energética, automotriz, transporte, etcétera).

### *Metamorfosis en las estructuras de poder*

La preponderancia de la geopolítica como escenario de disputa y espacio global de despliegue de los intereses del capital y el poder político concomitante, no sólo encuentra en la diplomacia y la política internacional sus instrumentos, sino también en la guerra, la militarización y la securitización.

El capital no tiene límites autoimpuestos y todo lo transgrede. Amén de que el conflicto económico-político y veladamente militar entre Estados Unidos y China en pos de ocupar el papel de hegemon mundial es uno de los grandes motores propulsores de la expansión capitalista y de la subsunción de todo lo humano y lo natural, pero también de la configuración de un frágil equilibrio en el orden planetario. No obstante que la escenificación de las guerras tal y como se conocieron en el siglo pasado ya no se espera que se realicen en el siglo que corre, puesto que no estarán centradas, necesariamente, en el componente militar en tanto expresión del poder de los Estados nacionales, sino que son y serán más complejas y abarcarán un espectro amplio que incluye la organización y las relaciones que sustentan

la reproducción de la vida. Por supuesto que en ese entramado el poderío militar hace acto de presenco como una amenaza latente de intervención y como una fuerza estratégica de avanzada geopolítica.

Aún dentro de la pandemia y sus múltiples estragos, los grandes capitales corporativos y sus Estados, como poderes unidos, no dejan de planear y extender los brazos operativos de la guerra, militar y comercial. La disputa ocurre simultáneamente dentro de su propio país y en las áreas estratégicas del globo terráqueo con el cometido de preservar sus emplazamientos estratégicos, afinazar la hegemonía y cerrar el paso a potencias antagónicas. Resulta ilustrativo el acoso a Venezuela, orquestado por Estados Unidos y la complicidad de Colombia que en plena pandemia realizan un operativo paramilitar de intervención, además de otros despliegues en regiones de Asia, África y Medio Oriente, o la contención militar de migrantes centroamericanos en la frontera sur de México con la complicidad del gobierno mexicano. La pandemia no ofrece tregua y la incertidumbre y el miedo son caldo de cultivo para las ofensivas geopolíticas.

La escalada militar previa a la pandemia adquiere un nuevo rostro, pues con la emergencia sanitaria la política de securitización se militariza dentro y fuera de los Estados nacionales. Tomando como pretexto la estrategia de contención del virus se refuerza la contención de las fronteras a la entrada de inmigrantes indeseados y dentro de los países se declaran toques de queda, estados de sitio y diversas restricciones a la libre movilidad y uso de espacios públicos y privados. Con la videovigilancia y la vigilancia policial y militar, los Estados utilizan instrumentos convencionales, pero también nuevos dispositivos de alta tecnología que refuerzan la modalidad del biocontrol (ejemplo de ello son las medidas restrictivas y la vigilancia de Israel en la Franja de Gaza, pero también los muros virtuales y militarizados que

divien países desarrollados de los mundos periféricos, como entre Estados Unidos y México, puerta de entrada sucontinental y extracontinental). La vía pública ha venido modificando su paisaje y la dotación de equipamiento e infraestructura con el pretexto de contener la propagación de contagios, lo cual no se está logrando, pero sí se está avanzando en las medidas de vigilancia, disciplina y control de las grandes masas poblacionales.

El sistema de poder también está mutando mediante su tecnologización y un control más férreo del territorio y las masas sociales. El miedo, la desinformación, la inmovilización y la desorganización de las clases sociales es un buen caldo de cultivo para afianzar los poderes punitivos, policiales y militares. Los cambios en la vida cotidiana, en las reglas de comportamiento, en el uso del espacio público y en la preponderancia de las fuerzas del orden reconfiguran la realidad, su estructura material y las formas de percepción que le son consustanciales. Por lo pronto, parece que avanzan y llegan a un punto sin retorno, o cuando menos incontestable.

### *Transición energética*

Bajo los designios de un presunto capitalismo verde, del Protocolo de Kioto (1997) al Acuerdo de París (2016) se adoptó una agenda internacional para implementar la transición de la matriz energética y calcular sus efectos. La deliberación está entre la disposición de energía primaria (fósil, limpia, renovable) y secundaria (derivado del petróleo, carbón y electricidad). Además de formas útiles de energía (fuerza motriz, calor de proceso, cocción de alimentos, iluminación, refrigeración, aire acondicionado, etcétera). El potencial cambio en el modo fosilizado de acumulación entraña nuevos y ampliados espacios de valorización.

Los grandes capitales están compitiendo por la disponibilidad de fuentes de energía y las tecnologías asociadas, en función de los costos de extracción, distribución y producción, al igual que su difusión en el consumo y su engarce con la vida cotidiana. Además de los costos económicos, se consideran los ambientales. En el horizonte de las siguientes décadas se implementarán estrategias y políticas de consumo de energía que mezclarán las fuentes fósiles y las renovables.

Teniendo en perspectiva el problema del cambio climático, algunos países plantean desfosilizar y descarbonizar la matriz energética, para que el petróleo y sus derivados, el carbón, coque, gas natural y otros fósiles sean sustituidos a fin de abatir la emisión de gases de efecto invernadero. Bajo esa tentativa se marca la tendencia hacia electrificar la matriz energética, pero con el soporte de energías limpias y renovables (eólicas, solares, geotérmicas).

El ejemplo es Noruega, país con riqueza en hidrocarburos, que cubre casi la mitad de su consumo energético con electricidad mediante fuentes renovables. A nivel mundial, la electricidad cubre apenas la quinta parte de la energía final, pero dos terceras partes de ello generado con fuentes fósiles. Tan sólo el consumo de crudo y petrolíferos, gas natural y carbón, ocasiona 34 mil millones de toneladas de CO<sub>2</sub> al año.

En el marco de la creciente electrificación es ineludible la incorporación de las energías renovables eólica y fotovoltaica. Esta es una tendencia que se irá imponiendo, no sólo por la pandemia, sino por la necesaria superación del cambio climático y la expectativa de una rentabilización reverdecida.

*Giro digital: plataforma operativa del capitalismo mundial*

Estamos en la égida de las tecnociencias y su reclamo por la renta tecnológica. Ello significa el señorío del capital con alta densidad técnica que domina al ser humano y a la naturaleza. El prototipo de última generación vienen de la mano del giro digital, que funge como la plataforma operativa del capitalismo mundial. No sólo se trata de la proliferación de planes de negocios que operan mediante plataformas digitales (taxi, restaurantes, ventas, turismo, escuelas) sino de la automatización del trabajo, la comunicación entre máquinas a través de la inteligencia artificial y el internet de las cosas con su brazo robótico.

Con la declaratoria universal de la pandemia y la aplicación de medidas restrictivas en los diversos países, se implementaron grandes cambios en la organización socioeconómica. En el mundo del trabajo, desde un punto de vista epidemiológico, para eludir el contacto humano en lugares donde se concentra gente, se diferenció entre el trabajo «esencial» y el «no esencial». Por lo mismo se abrió un espacio ampliado al trabajo en casa y al trabajo supeditado a plataformas digitales. En tanto se abrió la brecha entre el trabajo remunerado y el no remunerado, toda vez que este último creció ante la propagación del desempleo. Así, se generó una gran camada de desempleados, de sectores laborales no competitivos o improductivos. En algunos casos, los gobiernos implementaron programas de apoyo a trabajadores desempleados o de bajos ingresos, pero en otros los dejaron al garete.

Por sus implicaciones geopolíticas y económicas, la nueva tecnología de quinta generación, la llamada 5G —un entramado de tecnología móvil con capacidad de navegación a más de 100 Mbps, lo cual superaría la velocidad promedio de 20 Mbps de la 4G, aunado a un tiempo de latencia o retardo de

4 milisegundos (actualmente es de 60)—, además de permitir la conexión de millones de dispositivos en torno al internet de las cosas (IoT), configura uno de los principales espacios en la disputa por la hegemonía mundial. La 5G está propiciando un influjo disruptivo —como en su momento lo fuera el descubrimiento de la electricidad— en la economía y sociedad contemporánea, en tanto es la plataforma de lanzamiento de una oleada masiva de automatización del trabajo y de los mecanismos de vigilancia (*surveillance*) de una amplia gama de actividades humanas, productivas e improductivas: la producción manufacturera, cirugías remotas, desarrollo de vehículos autónomos y quehaceres del hogar. Se trata de procesadores de instrucciones complejas y remotas que podrán implementarse en una milésima de segundo.

Las redes operadas por la tecnología 5G significan un espacio formidable para el capital: se proyecta que en los próximos cinco años habrá mil 500 millones de usuarios y para 2030 las economías más desarrolladas tendrán una alta cobertura: Estados Unidos (50%), Corea del Sur (59%), Japón (48%) y China (29%). En contraste, América Latina apenas alcanzará una cobertura de 8%. En 2030, el valor global de esta industria será de dos trillones de dólares, según McKinsey Global Institute.

Este espacio ya es arena de disputa. Como en muchas áreas, China está a la cabeza, con Huawei, el gigante tecnológico proestatal, por lo que el gobierno de Estados Unidos, cuando recientemente estaba en manos de Donald Trump, estipulaba que se trataba de «una carrera que Estados Unidos debe ganar». El tablero geotecnológico tiene dos bandos: en una esquina, Estados Unidos y sus aliados (Reino Unido, Australia, Canadá, Corea del Sur y Japón), y en la otra esquina, China y sus aliados (Rusia y algunos países latinoamericanos o socios comerciales).

*Estatalidad y estructuras de poder*

La estatalidad reacuerpada por la crisis pandémica supone una concentración de poder político de la mano de los grandes intereses corporativos del capitalismo de la cuarta ola industrial. Esta crisis pandémica, una suerte de profundización de la crisis civilizatoria largamente larvada por las pautas tardocapitalistas, no podrá ser atenuada sin la intervención activa de los Estados, para disminuir la depresión económica y la parálisis social. El llamado de los gestores del capital es a implementar, de nueva cuenta, programas de rescate, como la promoción de la actividad económica mediante créditos, exenciones y subsidios a las empresas; además de aumentar el gasto público para expandir la infraestructura y los programas de asistencia social para incentivar el consumo. Algunos analistas suponen que esta nueva intervención en tiempos pandémicos será tanto como una suerte de refundación del capitalismo o una pretendida *suspensión* de las leyes del capitalismo (Varoufakis, 20 de septiembre de 2020; Stiglitz, 2 de febrero de 2020). Entre los primeros están quienes quieren contrarrestar el crecimiento de los políticos populistas, a quienes ven como amenaza a la «democracia», y entre los segundos quienes quisieran abrogar el sistema o al menos su programa neoliberal.

En un mundo fascinado por la virtualidad y digitalidad pareciera que la vida se desmaterializa, pero todo el mundo social es de por sí material, en tanto articulado por relaciones sociales e interconectado por las mercancías que son productos del trabajo humano. Ello no obsta para que todo el mundo material esté representado por la ideología, la ideología de las clases dominantes, y la fenomenología de la pandemia y sus secuelas no son la excepción. La ideología desempeña un papel preponderante, pues las noticias, los

informes, la opinión pública, el sentido común, la visión que las poblaciones en general se hacen de las cosas que pasan y de su lugar en el mundo corresponden a la ideología dominante, a las grandes decisiones que toman los centros de poder global. Es decir, la Casa Blanca de Washington, los financistas de Wall Street, el complejo industrial-militar, la City de Londres, además de grupos de poder como el grupo Bilderberg o el Club de París, sin excluir, guardadas las proporciones, a los grupos de poder en los países periféricos.

La creación de opinión pública desde los grandes centros de poder es preponderante, pues facilita el proceso de alienación y permite que los sujetos sociales sean dominados subjetivamente: repiten lo que los poderes quieren que digan. Día a día se inoculan las ideas del poder, se repiten incesantemente hasta que penetran en el sentido común popular. Un ejemplo de ello es la idea reiterada de que el origen de la pandemia proviene de China, a la sazón enemigo comercial, por lo que la fuente del mal es un virus «chino».

## Precarización laboral

La gran concentración de capital y riqueza va de la mano de una mayúscula tecnologización, que refuerza el poder del capital y torna, aún más, a la vida (ser humano y naturaleza) como elementos prescindibles, insusmos desechables para la lógica de acumulación. La vida humana, el trabajo vivo, los trabajadores de carne y hueso, van perdiendo relevancia como fuerza productiva, en tanto que la vida natural, el entorno natural donde se despliega la vida humana, se torna un espacio residual, una barrera para el progreso o, en su caso, un objeto que puede ser intervenido, destruido,

extinguido. Ante la devastación de la naturaleza y la degradación de la humanidad, siempre habrá una respuesta tecnológica que los sustituya: los humanos pueden ser suplidos por robots e inteligencia artificial, la naturaleza por nuevos materiales y mundos virtuales.

La combinación de las dos tendencias exacerbadas por la crisis pandémica, la alta concentración de capital y la tecnologización rampante, tienen un alcance abarcador e integrador del mundo, pero también generan un margen reducido de gestión del propio orden sistémico capitalista. Por una parte, su lógica es totalizadora, pero por otra no logra tener una capacidad incluyente sino al contrario. El sistema capitalista se está depurando, no está en hibernación, por lo que una gran cantidad de empresas que se vieron obligadas a cerrar por la pandemia no podrán reabrir y continuar su funcionamiento como si nada hubiera pasado, de la misma forma que gran parte de los trabajadores despedidos no serán recontratados. La pérdida de una enorme cantidad de empleos formales será un fenómeno irreversible, a la vez que las empresas tuvieron la ocasión de hacer recortes al personal, muchos de los cuales o ya estaban planeados para abatir costos laborales o han sido exigencias para reestructurar deudas, pero la pandemia adelantó ese ajuste que se venían planeando. Es otra expresión de ese salto hacia adelante, que capitaliza los desafíos de la crisis y los convierte en oportunidades expansivas.

La gran masa de la población humana trabajadora, los pobres del mundo, representa 85% de la población mundial. Asimismo, se puede considerar ese vasto y heterogéneo campo laboral denominado informal, que contiene a la mayoría de los trabajadores en la actualidad, alrededor de 65%. Las nuevas condiciones sociotécnicas impulsadas por la crisis pandémica torna doblemente excluidos y prescindibles a los trabajadores precarizados, desempleados e informales. La vorágine del desempleo parece ser una fuerza

incontenible y permanente. Amén de que, según la OMS y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la intensidad del trabajo y las largas jornadas laborales matan a alrededor de 750 mil personas al año. La mortificación del trabajo se expresa en cuadros patológicos como el sedentarismo, estrés y ansiedad crónica, que derivan en enfermedades cardiovasculares, hipertensión y falta de sueño.

### *Reflujo de la conflictividad social*

En la etapa previa a la declaratoria universal de la pandemia, el capitalismo estaba envuelto en convulsiones debido a una oleada generalizada de protestas en distintos países, con diversas demandas y formas de organización, pero cuyo factor común eran los estragos sociales de la forma salvaje del capitalismo, que algunos llaman neoliberal. No obstante, las manifestaciones que recorrían el mundo no tenían un proyecto político claro que las condujera o coordinara, mucho menos que planteara reivindicaciones de transformación social sustantiva.<sup>4</sup>

Los gobiernos reaccionan con medidas de aislamiento, distancia entre personas, cuarentenas, toques de queda, militarización de la vida cotidiana. Estas medidas ayudaron a disipar la conflictividad social latente, a repositonar el poder del Estado y a abrir los espacios de valorización para determinados capitales en ascenso de las áreas farmacéutica y digital.

<sup>4</sup> En México, por ejemplo, el presidente López Obrador expresó que la pandemia le había caído como «anillo al dedo», refiriéndose a que se limpiaban las calles de protestas, que estaban en ascenso, y que se reconcentraba la atención en su persona mediante las conferencias diarias y se hacían ajustes draconianos a la esfera pública.

## Ganadores y perdedores

El sistema capitalista ya estaba en crisis desde finales de 2019, en sus dimensiones productiva y bursátil. La pandemia como crisis sanitaria se sobrepone, subsume la crisis existente y aniquila la oleada de protestas. Las crisis siempre han abierto enormes oportunidades para los grandes negocios y ésta no ha sido la excepción. Las crisis devienen en ingentes procesos de destrucción de capital, fuentes de trabajo e infraestructura obsoleta. El mundo empresarial anuncia quiebras, cierres temporales o definitivos: una debacle de empresas pequeñas y medianas de distintos giros industriales y comerciales. Los efectos son desiguales y en una primera aproximación se puede detectar a sectores ganadores y perdedores.

### *Grandes perdedores*

Uno de los sectores más afectados ha sido la industria petrolera, que se cuenta entre los principales motores de la economía capitalista global. A comienzos de 2020, el mercado petrolero internacional padecía una sobreoferta que desplomó las cotizaciones internacionales. La adopción del confinamiento como medida de contención de la pandemia de covid-19 generó estragos en la demanda mundial del crudo, sobre todo en el gran centro consumidor global desde 2017, China, a la vez epicentro detonador de la pandemia. El confinamiento global derivó en la paralización de la producción y distribución de bienes y servicios, de la movilidad de personas de manera completa o parcial, con la consecuente caída en la demanda de combustibles fósiles, gasolinas y otros derivados e insumos para múltiples industrias, como la aeronáutica que basa su operación en grandes cantidades de combustibles. No

deja de ser paradójico que la caída del consumo por la parálisis pandémica haya ocasionado un declive en la emisión de CO<sub>2</sub>, meta incumplida por todos los acuerdos internacionales en tiempos normales.

Ante el desencuentro entre sobreproducción y caída de la demanda, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en mancuerna con otros países exportadores (OPEP+) acordaron reducir la oferta para propiciar la estabilización de los precios y atenuar los efectos contraproducentes de la crisis en curso. Los esfuerzos coordinados no fueron suficientes. El 20 de abril de 2020 los contratos de futuro de la mezcla West Texas Intermediate (WTI) tomaron un inaudito precio negativo de -37.63 dólares el barril, que representa una caída del precio de 308%, y sería la primera vez en la historia que se expresara en una cotización negativa (Solís, 20 de abril de 2020).

La caída de la demanda acrecienta la sobreoferta y los *stocks* de petróleo se acumulan, lo cual deriva en problemas no previstos, como el incremento en los costos de almacenamiento y logística. El panorama es deprimente: bajos precios, baja demanda, sobreoferta y nuevos costos.

Las grandes empresas petroleras del mundo (Sinopec, Shell, Petrochina, BP, ExxonMobil, Total y Chevron) han estado en el centro de la acumulación mundial fosilizada y sujetas a los vaivenes de las cotizaciones internacionales. La pandemia de covid-19 ha sido un momento restrictivo para el sector, debido a la parálisis de actividades consumidoras de combustibles como la industria, el transporte y los servicios. Tan sólo con la irrupción de la pandemia, en el primer semestre de 2020, los registros contables marcaron números rojos por bajos ingresos y pérdidas netas. Salvo Chevron, las demás tuvieron pérdidas. Las deudas atosigan a compañías como Extraction Oil & Gas, Whiting Petroleum, Chesapeake Energy y otras 16 empresas estadounidenses las

cuales acumularon más de 10.5 mmd en deuda. No podría ser de otra forma, si la cancelación de actividades económicas y sociales contrajo la demanda de petróleo a una cifra inferior a los 6.4 millones de barriles diarios en la primera mitad de 2020 (OPEC, 17 de junio de 2020).

Los países productores de petróleo miembros y no alineados de la OPEP acordaron una reducción de la producción mundial de petróleo para estabilizar los precios internacionales. Derivado de la «Declaración de Cooperación» de abril de 2020 se contrajo la producción en 9.2 millones de barriles diarios desde mayo (OPEC, 17 de junio de 2020). Esta medida repercutió en un aumento de los precios de 42.5% de la canasta de referencia de la OPEP, además de que se incrementó 31.7% los precios de futuros de la mezcla ICD WTI (70.8%) con 28.53 dólares por barril (OPEC, 17 de junio de 2020). No obstante, la reducción de la producción y el repunte de los precios no significó una bonanza automática; muchas petroleras están en grandes problemas para salir adelante en el año de la pandemia.

La OPEP estima una caída en la demanda de petróleo para el segundo semestre del año de menos de 6-4 millones de barriles diarios. Todo dependerá del levantamiento de las medidas de confinamiento y la reactivación de la actividad industrial y otras actividades económicas.

Al interior de la industria petrolera mundial se ha desencadenado una competencia entre las grandes compañías y dentro de sus grupos directivos y accionistas. Han tenido que emprender estrategias para eludir la bancarrota, tales como ajustar la estructura productiva para compensar pérdidas y evitar el cierre de plantas, desinversiones, reducción de gastos, despidos e incluso reducción de dividendos a los accionistas. Este escenario ha acelerado la proposición de la transición energética, lo cual ha generado especulaciones sobre un futuro sustentable bajo el patrón energético de bajo carbono.

No obstante, los grandes capitales corporativos han recurrido desde antes al discurso de la economía verde y el desarrollo sustentable como cortinas de humo (*greenwashing*) que funcionan como distractor político y mediático, pero en la realidad siguen aferrados a extraer hasta la última gota del «oro negro».

Tentativamente, con el «regreso a la normalidad», luego de que se levante el confinamiento pandémico, es previsible que la demanda de energéticos se recupere y con ello se levanten los mercados mundiales de energéticos y de las grandes corporaciones. Sin embargo, una lección que arroja la pandemia de covid-19 y su crisis multidimensional es el estrago del patrón energético actual centrado en el consumo masivo de combustibles fósiles y en los consecuentes límites ambientales y sociales asociados a la degradación humana y la destrucción de la naturaleza. Las grandes corporaciones energéticas tendrán que buscar nuevas fuentes y formas de producción de energéticos, si es que pretenden subsistir.

Ante la anunciada debacle del petróleo como gran negocio, en sustitución están entrando las llamadas energías limpias, pero esto no significa, en lo inmediato, la quiebra de las grandes industrias petroleras, pero sí su paulatina extinción. Aunado al hecho de que el uso de combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas natural) está asociado a la contaminación y degradación del planeta y de la humanidad misma.

### *Trabajadores precarios en las redes digitales*

El trabajo supeditado al capitalismo digitalizado ha germinado la forma de un falso trabajo autónomo y la subcontratación (una especie de artesanado del siglo XXI): el trabajador es dueño de sus medios de producción,

pero depende de una plataforma digital para ofrecer sus servicios y tiene que reportar una renta tecnológica a la corporación, bajo la forma de un porcentaje o comisión por venta de servicio.

En los inicios del capitalismo, el capitalista contrataba a artesanos dispersos para producir (los artesanos eran dueños de sus medios de producción), después concentró el trabajo en las fábricas y se obligó a los artesanos a contratarse como trabajadores asalariados bajo la dirección del empresario, quien es dueño de los medios de producción. En el capitalismo contemporáneo, con la subcontratación de la producción, el gran industrial desconcentra la producción de las grandes fábricas, relocaliza la producción en distintos talleres dispersos (maquila) donde hay empresarios dueños de sus medios. Más recientemente, con el giro digital, las grandes multinacionales operan plataformas digitales de coordinación del trabajo social donde subcontratan directamente a una multiplicidad de trabajadores, quienes son dueños de sus medios de producción y reportan una renta tecnológica, es decir, se hacen cargo de cubrir los costos de producción y de pagar una comisión a la plataforma, que puede ser de alrededor de 40% los ingresos, asimismo de cubrir su propio salario.

### *Socialización de las deudas: los trabajadores pagan*

Los Estados contrajeron deuda para afrontar la crisis económica generalizada debido a la paralización de las actividades económicas por la pandemia. Los créditos los suscriben con los organismos financieros internacionales como el FMI y el BM, los brazos ejecutivos de los grandes bancos privados, de los megacapitales que manejan las finanzas globales. Bajo la arquitectura de las altas finanzas, la gran mayoría de la humanidad tiene

una deuda, así sea de modo indirecto, con esta estructura de poder, aún sin saberlo. La deuda la pagan, al final de cuentas, los trabajadores del mundo y los beneficios recaen en los grandes banqueros.

Con todo, los grandes perdedores son los trabajadores, quienes viven de su propio trabajo, no del trabajo ajeno: los obreros industriales, los obreros agrícolas, el pequeño campesino, las trabajadoras domésticas, el asalariado de los servicios, los subocupados. En última instancia, el trabajo social combinado generará el excedente económico, el plusvalor, de donde se financian los Estados y se acopian los recursos para sufragar las deudas contraídas a nombre de las naciones.

### *Los ganadores: señorío de la renta tecnológica*

El sector tecnológico de vanguardia encabezado por las empresas tecnológicas (*big tech*) y las grandes farmacéuticas (*big pharma*) es, resueltamente, el gran ganador de la pandemia. Las grandes empresas tecnológicas de la información con sede en Estados Unidos, que aglutina a las omnipresentes FAANGM, son las empresas beneficiarias de la pandemia de covid-19. Al respecto, pueden considerarse dos indicadores: *a)* el incremento del capital ficticio del sector digital mediante el alza notable del valor de las acciones de estas corporaciones, como el índice S&P 500; y *b)* el incremento de las ganancias de las empresas digitales por la expansión de sus operaciones a nivel mundial en tiempos de la pandemia.

Los capitales de la esfera digital se han montado en una enorme ola expansiva de alcance global que les permite dominar el ciberespacio, concentrar capitales y diversificar sus operaciones. Derivado del proceso previo de concentración de capitales, antes de la pandemia, entre 2017 y 2019, se había

verificado una contracción del número de empresas tecnológicas y, al mismo tiempo, se había incrementado el volumen de su comercio internacional. La concentración de capitales digitales antes y durante la pandemia ha sido posible merced a las estrategias típicas de los grandes capitales, como la compra del cúmulo de empresas emergentes (*start-ups*), sobre todo de pequeñas empresas provistas, sin embargo, de un alto componente tecnológico, que es determinante en este sector, además de contar con expectativas de crecimiento. Debido a esta estrategia, las grandes empresas no sólo absorben a las pequeñas que tienen potencial comercial, sino que se apropian del circuito de investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) que las ha gestado. Otra estrategia corporativa es diseñar un proceso de integración vertical para posibilitar la expansión de sus contenidos mediante las plataformas a su disposición y poder penetrar nuevos mercados donde vender sus productos y servicios. De esta manera, además de ofrecer sus productos insignia, empresas como Apple y Alphabet amplían su espectro de inversión para producir películas y series, videojuegos y servicios de transmisión (CNUCD, 2021).

En el primer trimestre de 2020 las FAANGM registraron ingresos y ganancias muy positivos. La pandemia y las medidas sanitarias propiciaron el incremento del consumo de los productos y servicios que estas corporaciones venden. El «distanciamiento social» y la reclusión han favorecido el uso de dispositivos inteligentes y la amplificación de las telecomunicaciones. Súbitamente, la proliferación de programas y aplicaciones digitales impusieron un régimen de vida virtual en el hogar, el trabajo, la educación y la recreación. Gran parte de las actividades laborales y académicas ahora se realizan por vía remota. Además, ha cobrado un gran auge la compra en línea de los más variados productos y servicios, la mayoría de los cuales son abastecidos por las FAANGM.

Paradójicamente, mientras las oleadas pandémicas se traducen en la propagación del patógeno y se imponen medidas restrictivas, se generan oleadas tecnológicas que permiten el incremento del consumo de productos digitales que han impulsado de manera exorbitante las ventas de Amazon, Apple, Microsoft, Facebook y Google. Los resultados altamente positivos de estas corporaciones abren una enorme brecha entre las empresas digitales y las empresas energéticas, turísticas y demás, que quedaron atadas a la dinámica de acumulación prepandémica.

Las grandes farmacéuticas globales también son las grandes beneficiarias de las pandemias, porque les permiten movilizar grandes cantidades de vacunas, medicamentos y tratamientos, con el soporte del financiamiento público y un programa de compras anticipadas de vacunas aún en fase de prueba o con el banderazo de salida con el estatus de vacuna de emergencia.

La parafernalia de las nuevas tecnologías llamadas digitales que congregan a la informática y las telecomunicaciones, permite que el internet sea la red de redes comunicacionales y el uso generalizado de dispositivos para comunicarse a distancia, desde casa o el lugar de trabajo. El protagonismo lo cobran las empresas ligadas a los dispositivos que modulan el trabajo en casa y el comercio electrónico, al igual que las farmacéuticas, que están acopiando ganancias estratosféricas.

Las grandes corporaciones que han resultado beneficiadas por la pandemia reflejan resultados más que positivos en su expresión de capital ficticio (valor bursátil de sus acciones) y ganancias empresariales por la expansión de sus operaciones y ampliación inconmensurable de sus mercados.

Uno de los grandes efectos de la pandemia ha sido el salto hacia delante de las grandes corporaciones tecnológicas que súbitamente se han

colocado en el epicentro de la acumulación mundial capitalista. En términos bursátiles, las grandes corporaciones tecnológicas estadounidenses incrementaron su valor de mercado: el índice S&P 500, que agrupa a las 500 principales empresas de Estados Unidos, indicaba que más de 20% de la capitalización estaba en cinco corporaciones: Microsoft, Apple, Amazon, Facebook y Alphabet (Ugalde, 7 de mayo de 2020). Al parecer, Silicon Valley está engullendo a Wall Street.

Las sucesivas oleadas de la pandemia de covid-19, que presenta rebrotes o la aparición de nuevas cepas con mayor capacidad de propagación, además de ser una emergencia sanitaria más extensa de lo previsto, se traduce en una oportunidad colosal para acopiar ingresos, ganancias, rentas y capitalización de las grandes corporaciones. En un momento donde se desvalorizan capitales, estas empresas privilegiadas de la órbita digital logran concentrar capitales y afianzar su posición dominante, que previamente ya era central, para convertirse en omnipresentes, sobre todo en millones de usuarios desplegados por el mundo que recurren a esos medios para comunicarse, entretenerse, trabajar y hacer compras.

### *Comercio electrónico*

La emergencia sanitaria global abrió un espacio de negocios fabuloso para el negocio del comercio electrónico (*e-commerce*). La clausura de la mayoría de las actividades por la emergencia sanitaria significó, en contraste, la apertura de un gran espacio de actuación para las ventas en línea, que ya dominaba Amazon.<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Según la lista de Forbes, Jeff Bezos, dueño de Amazon, empresa líder del comercio electrónico a nivel mundial, es el hombre más rico del orbe. Los resultados contables fueron

En el mundo emergente y expansivo del comercio electrónico, catapultado por la emergencia pandémica, destaca la empresa Amazon, que se ha convertido en la insignia de este tipo de negocios. Esta corporación amasó un volumen inconmensurable de ventas en el mercado minorista, aprovechando el confinamiento de familias que recurrían a este tipo de servicios para hacer sus compras. El flujo de ingresos de la empresa también se acrecentó con la venta de servicios digitales mediante el procesamiento y almacenamiento en la nube (Amazon Web Services). Para ello fue necesario aumentar los niveles de inversión para garantizar los gastos operativos y aumentar la masa salarial —pese a disponer de servicios automatizados, requiere gran participación de trabajadores para movilizar las mercancías y los servicios logísticos—, todo lo cual redundó en mayores ingresos, los cuales se estiman fueron de 26.4% en el primer trimestre de 2020. Otras grandes corporaciones del mundo digital, como Microsoft, Alphabet y Facebook, también incrementaron notablemente los montos de venta merced a la diversificación de sus servicios digitales, como el entretenimiento, las videoconferencias, videollamadas y el almacenamiento en la nube.

Un sinnúmero de competidores minoristas fue obligado a cerrar y en consecuencia terminaron por ser rápidamente desplazados del mercado, al no contar con herramientas tecnológicas para distribuir sus productos en las nuevas condiciones. Adicionalmente, esta plataforma amplificó un

más que positivos: las ventas netas pasaron de 35.8 mil millones de dólares (mmd) a 46 mmd en tan sólo el primer trimestre de 2020, es decir, aumentaron 28.4%, la tasa más grande en los últimos cuatro años. La diversificación de los servicios, como el procesamiento y almacenamiento en la nube de Amazon Web Services, también redundó en ingresos por 10.3 mmd. No obstante, como era de esperarse, la expansión de las operaciones de esta corporación requiere mayor inversión, lo que también se traduce en la generación de nuevos empleos y algunos costos para implementar medidas sanitarias en sus instalaciones.

ámbito de operación que le confería un poder monopólico debido a que otras empresas se vieron obligadas a recurrir a su servicio digital para vender sus mercancías, en consecuencia, transfirieron una jugosa renta tecnológica al monopolio comercial. Entre los clientes principales están dos grandes actores de la pandemia: la OMS y Netflix.

Empero, esta plataforma digital es objeto de críticas por los beneficios que le reporta el régimen fiscal laxo. A su vez, los trabajadores manifiestan su inconformidad por las insuficientes políticas sanitarias de la empresa, que se suman a tensiones anteriores por la política antisindical de la empresa que ha suscitado huelgas y paros durante la pandemia.

### *Telefonía inteligente y computadoras*

Los teléfonos inteligentes, las computadoras y el internet operan como dispositivos de coordinación social. Por su uso múltiple y portabilidad, los teléfonos inteligentes logran configurar un mercado de consumo ampliado. Mediante las aplicaciones informáticas (*app*) para dispositivos móviles, los desarrolladores de plataformas diseñan eficaces mecanismos de coordinación para la producción y venta de mercancías, la difusión de servicios de intercomunicación, entretenimiento y otras actividades del mundo virtual y digital.

En tiempos de pandemia, Apple ha superado el valor de mercado de dos billones de dólares. Es la primera empresa estadounidense que alcanza esta cifra debido a que sus acciones crecieron 1.2%, hasta 467.78 dólares por título. El primer billón lo alcanzó en agosto de 2018, antes de la pandemia y luego de 42 años de operaciones, pero sólo requirió 21 semanas para doblar ese valor, precisamente en tiempo de pandemia, cuando la economía mundial se ha contraído más rápido que nunca. El espectacular crecimiento en el valor

accionario obedece a la sobredemanda de artículos de esa empresa, sobre todo de los iPhone, toda vez que se impuso el régimen del trabajo en casa para millones de usuarios. También se han incrementado las ventas de computadoras Mac y relojes Apple. En conjunto, el volumen de ventas llegó a 260 mmd en 2020 frente a 216 mmd del año previo.

### *Carta de navegación digital*

Alphabet, casa matriz de Google, incrementó sus ganancias netas en 2020, durante la pandemia, en 40.2 mmd, lo que representó un incremento de 17.2%. La demanda de servicios digitales provistos por esta corporación se incrementó por el confinamiento y el aumento del comercio digital en línea. Los ingresos aumentaron hasta 182.5 mmd, un incremento de 12.7%, sobre todo los derivados de publicidad (+11%) y los servicios de la nube en Google Cloud (43%). El motor de búsquedas de Google también incrementó sus ventas en 17% y las ventas de YouTube aumentaron 46%. Otros segmentos en auge son sus servicios *on-line* como Google Classroom que duplicó sus usuarios tan sólo en marzo y Google Meet estaba añadiendo 3 millones de personas por día. Producto del crecimiento, las acciones también aumentaron su valor bursátil en 8%.

La estrategia corporativa de Google ha sido ampliar su presencia en el mercado, acrecentar el valor, incrementar los ingresos, ganancias y rentas tecnológicas. Los resultados han sido positivos si se consideran los servicios de Google, que engloba el buscador y anuncios digitales, además de YouTube, Chrome y Android, los cuales han reportado incrementos en los ingresos por 54 mil 606 millones de dólares, un alza de 11%, pero también ha registrado pérdidas en Google Cloud por 5 mil 607 millones de dólares, que

representan 20%, pero no obstante el descalabro, esta es la carta para competirle a Amazon Web Services y Microsoft en servicios en la nube y servidores remotos, un segmento con tendencia de alto crecimiento y ganancias promisorias para los ganadores. Muestra de ello es la alianza empresarial entre Google y Ford para ofrecer servicios en línea en los vehículos.

Al tiempo que la empresa apuesta por la tecnología de inteligencia artificial en su estrategia de crecimiento, Google ha estado bajo la mira en Europa y Estados Unidos por la presunción de abuso de su posición dominante en el uso de datos de comportamiento digital de usuarios y competidores.

### *La socialización digital*

Las relaciones sociales interpersonales han sido suplantadas y amplificadas por las redes sociales digitales. En ese espectro reina Facebook, empresa creada en 2004, y partícipe del comienzo de la web 2.0, que contempla los sistemas de gestores de contenido (*content management system*, CMS), y se ha situado a la cabeza de esa reconversión al ubicarse como la plataforma digital interpersonal más usada a nivel mundial.

El término redes sociales digitales, que algunos llaman simplemente redes sociales, se refiere al espacio digital donde los usuarios interactúan mediante la publicación de información personal y profesional, la cual puede ser consultada por terceras personas, sean o no conocidos. Este formato ha desencadenado una forma de histeria de la vinculación digital entre los individuos atados a una pantalla, pero más aún ha inflado los ingresos, las ganancias y los valores accionarios de la empresa.<sup>6</sup> Los resultados positivos devienen

<sup>6</sup> Los usuarios activos se incrementaron en 12% para llegar a 2 mil 800 millones. Los ingresos de la empresa, sobre todo compuestos por ventas de publicidad, aumentaron a 28 mil 70 millones

del incremento de usuarios<sup>7</sup> y del incremento concomitante de la inversión publicitaria de las empresas que buscan capitalizar la temporada de compras de festividades o azuzadas por campañas de mercadeo y reforzadas por el consumo digital bajo el confinamiento pandémico.

Los resultados corporativos más que positivos estimulan la participación de la empresa en el comercio electrónico mediante sus empresas subsidiarias Instagram Shopping y Facebook Marketplace, que buscan capitalizar la tendencia creciente durante la pandemia a realizar las compras mediante el uso de las redes digitales. Asimismo, esta red digital ha lanzado al mercado diversos productos de comercio electrónico, tales como Facebook Pay y Facebook Shops, que tienen la función de implementar aplicaciones de compra dentro del conjunto de aplicaciones de la propia empresa, entre las cuales destacan Instagram y WhatsApp.

La red de Facebook no ha estado exenta de polémica, entre otras razones, porque por sus conductos se difunde todo tipo de información, incluyendo las *fake news*. Por ejemplo, sobre la pandemia circula información falsa que toma la forma de infodemia, una pandemia de desinformación o confusión que desorienta a los usuarios y tergiversa la comprensión de la realidad.

La empresa Facebook enfrenta algunas investigaciones antimonopolio en Estados Unidos por la adquisición de estas dos últimas empresas, además

de dólares en el cuarto trimestre de 2020, superior a los 21 mil 80 millones del año previo. Las ganancias alcanzaron 11 mil 220 millones de dólares, monto superior a los 7 mil 350 millones de dólares del año anterior (*El Economista*, 27 de enero de 2021).

<sup>7</sup> Desde que se iniciaron las medidas de aislamiento social por la pandemia ocasionada por SARS-CoV-2, se incrementó el uso de las redes sociales digitales 72% para acceder, desde el confinamiento, a contenidos de entretenimiento y enseñanza, según un estudio de Global Web Index. Las redes más utilizadas han sido YouTube (74%), Facebook (66%), Instagram (58%), Twitter (51%) y Pinterest (44%).

de que ha sido cuestionada por difundir información falsa sobre las elecciones estadounidenses y la confabulación entre un sector de usuarios que organizaron el asalto al Capitolio, luego de la derrota electoral de Donald Trump.

Sin embargo, los ingresos de esta empresa han venido menguando, si se compara su trayectoria desde que comenzó a cotizar en las bolsas. Ha resentido la disminución de gastos publicitarios de empresas que cerraron y que aportaban más de la mitad de ingresos a Facebook por publicidad. Con todo, el tráfico de mensajería ha aumentado 50% por la incesante actividad de casi 3 mil millones de usuarios del conjunto de redes que forman parte de su dominio: Facebook, Messenger, Instagram y WhatsApp. Para ampliar su cobertura, está ofertando videollamadas que han incrementado notablemente su uso.

Los cambios en la relación capital trabajo están inmersos en las redes sociales digitales. En las redes sociales digitales está proliferando la figura del *influencers* o líderes de opinión que dota de contenidos a las redes desde noticias, comentarios, cocina, deporte, entretenimiento, etcétera. Asimismo, se han generado patrones de consumo compulsivo que cambian los vínculos entre oferta y demanda, además de que garantizan ingresos por publicidad.<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Entre los usuarios más compulsivos está el grupo etario de entre 16 y 23 años, un sector de jóvenes conocido, por la jerga digital, como la «generación Z», que incrementó su consumo digital en 84%, seguido de los llamados «millennials», jóvenes adultos entre 24 y 37 años, con un crecimiento de 74% en el uso de redes; en tanto que la llamada «generación X», entre 38 y 56 años, junto a los llamados «baby boomers», entre 57 y 64 años, aumentaron 68% el consumo de redes digitales (Marciales, 29 de agosto de 2020).

*Entretenimiento sin salir de casa*

En tiempos de la pandemia se generalizó el uso del *streaming*, es decir, la transmisión en directo de programas de entretenimiento con contenidos de películas y series modulados por algoritmos, que a su vez incentivan determinados patrones de consumo. La empresa que más ha destacado en este giro es Netflix, que se consolidó como un modelo ejemplar ascendente de negocios alojado en las plataformas digitales.<sup>9</sup> El confinamiento en casa y el incremento de servicios de entretenimiento por la pandemia le aportó 39 millones de suscriptores el año pasado, 30% de su cartera de clientes, la mayoría ubicada fuera de Estados Unidos, donde se ubica su sede corporativa.

En 2020, Netflix reportó ingresos por 25 mil millones de dólares y 2.8 mil millones de dólares de ganancias (Sherman, 20 de enero de 2021). Los resultados operativos en términos de crecimiento y de ganancia son de los más altos entre las FAANGM. Para arrojar dichos resultados tuvo que contratar deuda, pero el margen de ganancias le permitirá autofinanciarse y usar el exceso de efectivo para recomprar acciones, las cuales se han cotizada al alza.

La pujanza de las plataformas de entretenimiento ha desplazado del mercado, paulatinamente, a la competencia otrora representada por los medios de comunicación audiovisual analógicos o convencionales, como las televisiones en formato abierto y de paga, pero también han sucumbido las cadenas de salas de cine y de renta de películas, además de que se han visto seriamente afectados los teatros y otras formas de espectáculos

<sup>9</sup> La propiedad de la corporación la detentan Capital Group Companies, BlackRock, The Vanguard Group, Morgan Stanley y Reed Hastings. Cuenta con 3 mil 200 empleados y más de 200 millones de clientes.

presenciales. No obstante, el masivo mercado de consumo de entretenimiento vía digital está sujeto a una creciente competencia y las audiencias son disputadas por otras plataformas proveedoras de servicios de *streaming*, la mayoría estadounidenses, como HBO Go, Amazon Prime, Disney Plus, Viacom, YouTube y Mubi, o competidores regionales como Claro Video, Cinépolis Klic, entre otros.

Los cambios han cimbrado a la producción, distribución y consumo de la industria cinematográfica y televisiva a nivel mundial y se ha implantado la égida de las plataformas denominadas en jerga digital como *over-the-top*, proveedoras de contenidos bajo demanda vía *streaming*. No obstante, con la implementación de la tecnología de 5G, que sustituirá a la actual 4G, se prevén más cambios en el consumo de medios de entretenimiento, el uso de plataformas y videojuegos. Toda vez que la velocidad de la conexión permitirá, por ejemplo, que las plataformas de *over-the-top* suministren servicios con realidad virtual y realidad aumentada. La disputa por el ciberespacio y las tecnologías de internet está a la orden del día entre las principales potencias capitalistas del orbe, encabezadas por Estados Unidos y China, que quieren controlar no sólo los avances tecnológicos sino los crecientes mercados de consumo.

### *Moneda digital y criptomoneda*

La transición gradual de la forma de moneda metálica y de papel a la moneda electrónica o digital cuenta con dos grandes proyectos diferenciados, las criptomonedas y la moneda electrónica regulada. Aunque también debe incluirse las diversas modalidades de transferencias y pagos electrónicos que ya operan en los circuitos financieros convencionales. No

obstante, debe advertirse que si bien está transmutando el soporte físico de la moneda, se preserva la función del dinero como mercancía, medio de pago, capital, tesoro y dinero mundial.

La banca electrónica es un mecanismo de servicios bancarios a través de internet, donde pueden ser entidades con sucursales físicas o que operan a distancia (BancaNet). La banca electrónica funge como plataforma de transferencia digital para el comercio o envío de dinero. En el mercado mundial están muy extendidas las operaciones a través de transferencias electrónicas, transferencias interbancarias o pagos a terceros (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, SPEI). En la pandemia, el incremento desorbitado del comercio electrónico también alentó el uso de los pagos electrónicos en la esfera del comercio digital que amplió su espectro de manera inconmensurable.

El envío de dinero electrónico mediante tecnología financiera (*finance technology* [*Fintech*]) opera entre empresas que usan tecnologías de información y comunicación, como páginas de internet, redes sociales y aplicaciones de teléfonos celulares para ofrecer productos y servicios financieros. Con esos dispositivos abaten costos de operación y pueden disminuir costos de servicios y son más eficientes que la banca tradicional. Actualmente operan alrededor de 158 *Fintech* en el país y se pueden hacer transferencias por Cloud Transfer, Paga Phone o Bitso.

La moneda digital no es lo mismo que la criptomoneda. La moneda digital más avanzada es la china y amenaza la hegemonía del dólar. Varios países cuentan con proyectos avanzados para el uso de moneda digital o Moneda Electrónica del Banco Central (CBDC, por sus siglas en inglés) que permitiría transacciones instantáneas y transferencias de propiedad sin fronteras. China es la primera gran economía mundial que lanza su moneda digital

soberana al mercado, el yuan digital o e-CNY, bajo la regulación del banco central, el Banco Popular de China. Ya antes lo había hecho Venezuela, con el Petro. La moneda electrónica es un «instrumento de pago digital, denominado en la unidad de cuenta nacional, que es un pasivo directo del banco central, como el dinero» (Casterns, citado por Gómez, 12 de abril de 2021). Es un medio de pago que sustituirá a las monedas y billetes, pero realiza funciones similares. Será una moneda regulada que parte del banco central, pasa a la intermediación de la banca comercial y llega a los usuarios. Podrá almacenarse en una cartera digital en el teléfono celular y usarse para pagar transacciones entre particulares, pero estará sujeto a regulación y, presumiblemente, se podrá evitar el lavado de dinero (Gómez, 12 de abril de 2021).

La moneda digital ahorra los costos de producción del papel moneda y metálico, los costos de operación en retiro de efectivo, el almacenamiento de monedas y billetes, y el uso de instalaciones bancarias, además de que se eluden los pagos anónimos de transacciones ilícitas y puede evitarse la falsificación de la moneda. Si bien se alentarán los pagos electrónicos, también se reforzarán los dispositivos de cibervigilancia y geolocalización, como parte de lo que se ha llamado el «capitalismo de vigilancia».

En cambio, las criptomonedas, que usan la tecnología de cadena de bloque (*blockchain*), operan de manera descentralizada, sin regulación del banco central y presagian marasmos especulativos de pronóstico reservado. El uso de criptomonedas, a partir de la invención del bitc in en 2008, es un medio de pago que ha subrayado, en tiempo de la pandemia, el cambio gradual del uso de moneda met lica por la moneda digital. Bahamas fue el primer pa s en implementar la primera criptomoneda estatal del mundo y El Salvador adopt  el bitc in como moneda nacional, con todos los riesgos que esto significa.

*Grandes farmacéuticas: son capitalistas y persiguen el dinero*

El gran modelo de negocios durante la gestión de la pandemia a nivel mundial ha sido el de la industria médico-farmacéutica. Las grandes farmacéuticas, como toda industria capitalista, sigue el rastro del dinero. A nivel mundial, el dinero público ha financiado desde la investigación básica hasta la investigación clínica para el desarrollo de medicamentos, vacunas y tratamientos. En el caso de las vacunas de covid-19, los gobiernos del mundo hicieron compras adelantadas que contribuyeron al desarrollo de vacunas.

Antes de covid-19, los analistas financieros asumían que una cura «única» para las enfermedades no representa un «modelo de negocio sostenible», a diferencia de tratamientos de enfermedades crónicas que suponen un flujo de ingresos continuo (Kim, 10 de abril de 2018). En la práctica se corrobora que en el sector farmacéutico la inversión se concentra en los tratamientos de enfermedades crónicas y mucho menos en la medicina preventiva y las vacunas, una estrategia condescendiente con las expectativas de ganancia, pero contraria al interés general de la salud pública.<sup>10</sup> Al parecer, ha sido más rentable mantener enfermos a los pacientes crónicos que curarlos o desatender la salud pública en aras de la salud corporativa.

La industria de las vacunas funcionaba, antes de 2020, con una estructura oligopólica, donde cuatro grandes actores (GlaxoSmithKline, Sanofi, Merck y Pfizer) controlaban 85% del mercado. El modelo de negocios prevaleciente en la industria farmacéutica, donde rige la alta concentración de capital,

<sup>10</sup> Se estima que tan sólo en 2019 un segmento del mercado mundial de vacunas representó 47 mil millones de dólares, cantidad que equivale a la venta de sólo cuatro medicamentos de «tratamiento»: Humira (usado para tratar la artritis reumatoide), Keytruda (tratamiento del cáncer), Revlimid (mieloma múltiple) y Opdivo (cáncer).

la minimización del riesgo y la consecución de la máxima ganancia posible, explica que las versiones anteriores del coronavirus (Sars-1 y Mers) no merecieron el desarrollo de vacunas. Sólo se hicieron experimentos con animales en fases de pruebas sin humanos, pero conforme el virus se extinguió, la investigación se difuminó.

Las vacunas contra el covid-19 parten de una base endeble, porque las vacunas para coronavirus anteriores no fueron desarrolladas, pero una vez que han sido producidas suponen una plataforma muy sólida para desarrollar otras vacunas posteriormente. El desconocimiento sobre el covid-19 obedece a que las grandes farmacéuticas habían hecho cálculos donde el riesgo de inversión no significaba una rentabilidad suficiente para desarrollar vacunas para los coronavirus anteriores. No obstante, la actual versión del coronavirus prefigura grandes ganancias para los grandes productores, aunado a que se han minimizado los riesgos de inversión.

Una interpretación geopolítica sobre la concentración de esfuerzos para desarrollar una vacuna contra el covid-19 lo antes posible es que significa una amenaza real al funcionamiento de la economía global y a la población de los países desarrollados. A diferencia de las pandemias y virus anteriores como el Ébola y el Zika, que afectaban a África Occidental y a América Latina y el Caribe, respectivamente, pero no al centro neurálgico del sistema capitalista.<sup>11</sup> Según el FMI, con el despliegue de covid-19, la producción de la economía mundial puede caer -4.4% del PIB y la producción perdida sería de aproximadamente 28 billones de dólares (Elliot, 13 de octubre de 2020).

<sup>11</sup> La vacuna contra el ébola, financiada en gran parte con ayuda de la OMS, fue finalmente aprobada en 2019, seis años después del inicio de la epidemia en África occidental. El virus del Zika se encuentra actualmente en ensayos clínicos, pero no se espera ninguna vacuna en el mercado a corto plazo.

La frenética carrera por el desarrollo de las vacunas contra el covid-19 supone una sensible modificación en el modelo de negocios del sector farmacéutico, sobre todo porque los riesgos de la inversión han sido suprimidos y las ganancias extraordinarias son inminentes. Por una parte, se adelantaron enormes recursos de investigación y desarrollo (I+D) y subsidios directos y, por otra parte, los gobiernos desembolsaron fabulosas cantidades de dinero público para realizar compras anticipadas de medicamentos que minimizaran riesgos de mercado por ventas futuras, lo que no excluye la posibilidad de ventas a sobreprecio merced a las compras de pánico. La cuantiosa suma de dinero público, que se incorporaron a bolsas de inversión público-privada, representaron el mayor caudal de dinero adelantado para la consecución de un cúmulo de ganancias sin precedentes, las cuales serán apropiadas por las grandes corporaciones privadas.

La idea de que la ciencia abstracta y la innovación del capital privado encarnados en la *big pharma* son el agente primordial que está haciendo ingentes esfuerzos para salvar a la humanidad en peligro encubre la enorme canalización de subsidios públicos —a menudo soportado por deudas, mayores impuestos y ajustes fiscales— que soporta el desarrollo de la vacuna.

En la multipublicidad de las farmacéuticas, que se apropian del trabajo colectivo, también se pasa por alto el hecho de que las universidades están aportando sus científicos y su conocimiento acumulado por cientos de años. Los investigadores universitarios han desarrollado los procedimientos de investigación clínica y el sistema de revisión por pares para publicar los resultados en revistas académicas. A su vez, las universidades contribuyen a verificar y difundir los avances científicos. Este cúmulo de generación de conocimiento es un patrimonio común financiado mayormente con recursos públicos y puede ser concebido como parte de los «bienes comunes». No

obstante, la economía convencional los considera como una «externalidad», es decir, un subsidio que permanece oculto, por lo cual no figura en las cuentas de las grandes corporaciones.

El entramado infraestructural que ha soportado el desarrollo de las vacunas ha sido articulado también gracias al papel de las universidades financiadas con fondos públicos, e integra a institutos públicos. Significa un mecanismo de transferencia de conocimientos y recursos públicos a entidades privadas, como son los grandes laboratorios privados. Este aparato está permitiendo que las grandes farmacéuticas desarrollen vacunas eficaces contra éste y otros virus.

### *Vacunas para salvar al capitalismo de sí mismo*

El programa de vacunación no sólo significa la inyección de una sustancia biológica a los individuos para salvar sus vidas frente a una amenaza pandémica, sino que también significa una inyección de recursos extraordinarios que representa una recarga al capitalismo de las grandes corporaciones. Supone una solución tecnológica de corto plazo a una crisis largamente larvada. Su prescripción augura una supervivencia al sistema, que sin embargo continúa degradando a la humanidad y a la naturaleza.

En la etapa del desarrollo de vacunas, máxime en un ámbito esquizofrénico propagado por las noticias falsas y las gestiones contradictorias de los gobiernos, se crean las condiciones para que el valor de las acciones de las industrias farmacéuticas, en manos de los grandes inversionistas, tienda a incrementarse. Los mercados de valores del mundo donde cotizan capitales farmacéuticos y tecnológicos registran un periodo de auge. El anuncio del lanzamiento de las vacunas, aun en fase de uso de emergencia, supuso

la pronta recuperación del valor para los accionistas al cierre de 2020 y, en consecuencia, los fondos especulativos reportaban sus mayores ganancias en más de una década, por 63.5 mil millones en 2020 (Herbst, 24 de enero de 2020).

La inyección de ingentes recursos públicos —licencias, préstamos gubernamentales, regulaciones suspendidas— responde a un gran propósito: sustentar a las grandes corporaciones. En el capitalismo global las corporaciones más depredadoras, tóxicas, irresponsables y nocivas han subsistido merced al financiamiento público. No tienen ningún reparo en despedir a sus trabajadores, estafar a sus clientes, beneficiarse de las crisis y obtener beneficios de los pobres.

En definitiva, las vacunas covid-19 son necesarias para salvar al capitalismo de sí mismo y las vidas de los pobladores de las economías desarrolladas.

El SARS-CoV-2 no ha sido ni será el primer caso, sino que la expectativa epidemiológica es que sean más recurrentes las enfermedades e infecciones por causas zoonóticas —transferencia de animales a humanos. Por lo pronto, la vacunación mundial permite a los gobiernos eludir las causas subyacentes de este coronavirus, y no existe claridad si eventualmente debilitaría el sistema de defensas inmunológico de los organismos humanos ante otro patógeno de procedencia semejante. En todo caso, la carrera por el desarrollo de vacunas no se agotará.

Para el surgimiento de una vacuna se requiere un largo periodo, de 10 a 15 años, para salir al mercado, si se quiere seguir todos los protocolos de seguridad biomédica. No obstante, la situación de emergencia ha propiciado que las vacunas se generen en el menor tiempo posible, inclusive saltándose etapas, o sembrando dudas sobre su efectividad. La preponderancia de algunas marcas comerciales ha recreado el fetichismo tecnológico,

donde las vacunas se presentan como si fueran panaceas o sustancias que solucionarían en definitiva la pandemia, aun cuando subyacen problemas severos en el estado de salud pública mundial.

Las grandes farmacéuticas están muy cuestionadas, no tanto por los negacionistas y los antivacunas, que han proliferado como un sector extravagante en medio de la pandemia, sino por el papel que las corporaciones han desempeñado siguiendo sus intereses empresariales, porque no sólo producen medicamentos y vacunas sino que también producen armas químicas y bacteriológicas. Es decir, los laboratorios generan cosas útiles para sustentar la vida y para propiciar la muerte. Diversos productos de laboratorio, como el napalm, el agente naranja, los gases tóxicos, el ántrax, entre otros, han sido utilizados como armas biológicas o bioterroristas para matar a millones de personas en el mundo. Además de que se producen medicamentos con un perfil yatrogénico, es decir, se lanzan al mercado medicamentos que son inútiles, innecesarios o son placebos que se venden como sustancias efectivas para recuperar o conservar la salud engañando a los consumidores.<sup>12</sup> Por si fuera poco, las corporaciones farmacéuticas actúan como otras empresas especulativas que negocian grandes subvenciones públicas para supuestamente emprender nuevos desarrollos farmacológicos, pero canalizan grandes cantidades de recursos a la esfera bursátil para especular, hacer recompras de acciones, elevar el valor accionario e incrementar los ingresos de los accionistas y directivos. La especulación también tiene que ver con la forma en que controlan las patentes, cuando bajo argucias legales postergan

<sup>12</sup> Según un estudio francés, la «Guía de los medicamentos útiles, inútiles o peligrosos», 50% de los medicamentos disponibles en el mercado son inútiles, innecesarios, placebos vendidos como efectivos que engañan al consumidor, 20% son mal tolerados por los consumidores y 5% son peligrosos.

la vigencia sobre sus productos sin hacer verdaderas mejoras biomédicas, todo en aras de perpetuar el acceso a ganancias extraordinarias.

Los intereses geopolíticos están a la orden del día y las vacunas no escapan a su órbita de influencia. Mientras que los medios de comunicación y los divulgadores científicos de Occidente exaltan a las vacunas de los grandes laboratorios afiliados al bloque euroestadounidense (Pfizer, AstraZeneca y Moderna), demonizan a las vacunas del bloque sinoruso (Sinovac, Spuntik V) y prácticamente no hablan de la cubana (Soberna). Evidentemente, hay una guerra comercial, como ocurre con otras marcas y mercancías, según sea su origen y afiliación político-ideológica. Aunque la pandemia ha sido un fenómeno global, no se hizo ningún esfuerzo mancomunado de colaboración científica y farmacéutica para producir vacunas y abastecer a toda la humanidad, pues eso no va en la lógica mercantil de las corporaciones y sería un mal ejemplo para el capitalismo.

En la puja por acceder a las vacunas se han lanzado algunas iniciativas, como Covax o un *pool* o grupo de patentes, propuestas por la OMS. La iniciativa Covax, de la ONU, resultó notoriamente insuficiente para dotar de vacunas a los países más pobres.

En definitiva, la consigna es que se requiere inmunizar a la población, y para garantizar la máxima vacunación posible, se requiere comprar lotes de biológicos a las grandes farmacéuticas, que actúan en el terreno comercial, como monopolios internacionales. Inobjetablemente, el desarrollo de las vacunas salvará muchas vidas en esta pandemia mundial, y ese sólo efecto favorable parecería no tener ningún precio; sin embargo, la realidad es que los programas de vacunación operan bajo el control corporativo y tienen un alto costo financiero, además del costo social. A la postre, los costos visibles y encubiertos serán pagados por la sociedad en su conjunto, sobre todo por los

trabajadores y los sectores populares. Tan sólo el modelo de negocios de las corporaciones farmacéuticas supone que la maximización de ganancias y la minimización de riesgos pase la factura del costo financiero a los gobiernos nacionales quienes, a su vez, la trasladarán a los contribuyentes y trabajadores para sufragar el costo de las vacunas, las deudas o déficits fiscales. En tanto que el costo social será mucho mayor y será resentido directamente por las clases trabajadoras y sus familias que resienten los estragos directos de la depresión económica, el desempleo, la precarización laboral, la inflación, entre otras expresiones asociadas a la crisis pandémica de amplio espectro.

En el plano epidemiológico, y dada la fractura del metabolismo sociedad-naturaleza, de persistir las causas radicales de la pandemia y la zoonosis, y de continuar reproduciendo las mismas condiciones incontroladas del desarrollo capitalista y su industria agrícola-ganadera, y la estructura de poder articulada por el complejo que eslabona los sectores médico, industrial, farmacéutico y financiero, previsiblemente la humanidad continuará expuesta a más patógenos zoonóticos y a formas de gestión de la salud pública desde las plataformas corporativas. Amén de que la emergencia sanitaria ha sido funcional para sabotear o postergar otras expresiones de la crisis civilizatoria, como la ambiental derivada de la acumulación fosilizada y la devastación de los bienes naturales bajo la lógica mercantil. No es extraño que las corporaciones europeas y estadounidenses presionen para desregular el ambiente y debilitar los acuerdos internacionales para descarbonizar la producción, como tampoco lo es el hecho de ignorar los efectos nocivos, tóxicos y devastadores de la fractura metabólica entre sociedad y naturaleza, que están en la base de la propagación de la pandemia y sus secuelas.

## Referencias

- Agencias (27 de enero de 2021). «Facebook gana 11 mil millones de dólares en la pandemia». *El Economista*. Recuperado de <https://www.economista.com.mx/mercados/Facebook-gana-11000-mdd-en-la-pandemia-20210127-0120.html>
- Casterns, A., citado en Gómez, E. (12 de abril de 2021). «La moneda digital de China». *El Financiero*. Recuperado de <https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/eugenio-gomez/2021/04/13/la-moneda-digital-de-china/>
- Computerworld* (31 de agosto de 2021). «Zoom factura por primera vez mil millones de dólares en un trimestre». *Computerworld*. Recuperado de <https://www.computerworld.es/negocio/zoom-factura-por-primera-vez-mil-millones-de-dolares-en-un-trimestre>
- Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (CNUCD) (2021). *Las leyes, políticas y normativas de defensa de la competencia en la era digital*. Ginebra: CNUCD. Recuperado de [https://unctad.org/system/files/official-document/ciclpd57\\_es.pdf](https://unctad.org/system/files/official-document/ciclpd57_es.pdf)
- Elliott, L. (13 de octubre de 2020). «IMF estimates global Covid cost at \$28tn in lost output». *The Guardian*. Recuperado de <https://www.theguardian.com/business/2020/oct/13/imf-covid-cost-world-economic-outlook>
- Gómez, E. (12 de abril de 2021). «La moneda digital de China». *El Financiero*. Recuperado de <https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/eugenio-gomez/2021/04/13/la-moneda-digital-de-china/>
- Herbst, S. (24 de enero de 2021). «Top hedge funds earn \$63.5 billion in 2020, highest in a decade: LCH data». *Reuters*. Recuperado de <https://www.reuters.com/article/us-hedgefunds-returns-idUSKBN29U00R>
- Kim, T. (10 de abril de 2018). «Goldman Sachs asks in biotech research report: «Is curing patients a sustainable business model?»». CNBC. Recuperado de

- <https://www.cnbc.com/2018/04/11/goldman-asks-is-curing-patients-a-sustainable-business-model.html>
- Marciales, L. (29 de agosto de 2020). «YouTube, Facebook e Instagram son las plataformas más utilizadas durante la pandemia». *La República*. Recuperado de <https://www.larepublica.co/internet-economy/youtube-facebook-e-instagram-son-las-plataformas-mas-utilizadas-durante-la-pandemia-3052470>
- Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) (17 de junio de 2020). «OPEC Monthly Oil Market Report». Recuperado de [https://www.opec.org/opec\\_web/static\\_files\\_project/media/downloads/publications/OPEC\\_MOMR\\_June\\_2020.pdf](https://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/OPEC_MOMR_June_2020.pdf)
- Sherman, N. (20 de enero de 2021). «Netflix: ¿continuará en 2021 con el mismo éxito que tuvo durante la pandemia de coronavirus?» *BBC News*. Recuperado de <https://www.bbc.com/mundo/noticias-55728597>
- Solís, A. (20 de abril de 2020). «Mezcla mexicana cierra en el peor nivel de su historia». *Forbes*. Recuperado de <https://www.forbes.com.mx/negocios-mezcla-petroleo-histori/>
- Stiglitz, J. (2 de febrero de 2020). «Un nuevo contrato social para acabar con la desigualdad». *EFE*. Recuperado de [www.efecom/efe/america/economia/joseph-stiglitz-reclama-un-nuevo-contrato-social-para-acabar-con-la-desigualdad/20000011-4164110](http://www.efecom/efe/america/economia/joseph-stiglitz-reclama-un-nuevo-contrato-social-para-acabar-con-la-desigualdad/20000011-4164110)
- The Goldman Sachs Group (10 de abril de 2018). *The Genome Revolution*. Recuperado de <https://www.gspublishing.com/content/research/en/reports/2019/09/04/048b0db6-996b-4b76-86f5-0871641076fb.pdf>
- Ugalde, R. (7 de mayo de 2020). «Las 5 «Big Tech» representan el 20% de Wall Street». *Mundo Contact*. Recuperado de <https://mundocontact.com/las-5-big-tech-representan-el-20-de-wall-street/>



Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional

## Colaboradores

*Francisco Javier Caballero Anguiano*, mexicano, es doctor en Estudios del Desarrollo por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ha sido consultor en cambio climático para la Agencia Alemana de Cooperación Internacional; y en gestión tecnológica y planeación por objetivos para otros organismos. Fue director del Centro de Estudios Económicos y director adjunto de planeación de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).

*Raúl Delgado Wise*, mexicano, es docente investigador de la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, así como miembro emérito del Sistema Nacional de Investigadores de México y coordinador general del proceso de reforma de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es autor/editor de 31 libros y más de 200 capítulos de libros y artículos arbitrados. Dirige la revista *Migración y desarrollo*. Cabe destacar que es presidente y fundador de la Red Internacional de Migración y Desarrollo, codirector de la Red de Estudios Críticos del Desarrollo y titular de la Cátedra UNESCO sobre Migración, Desarrollo y Derechos Humanos.

*Megan Dwyer Baumann*, estadounidense, es doctora en Geografía por la Pennsylvania State University, actualmente ostenta el cargo de *graduate research fellow*. Publicó el artículo «Agrobiodiversity's caring material practices as a

symbolic frame for environmental governance in Colombia's southern Tolima» en la revista *Geoforum*, el cual fue traducido al español para integrarse en este número.

*Jasmin Hristov*, estadounidense, es profesora asistente en el Departamento de Sociología y Antropología y en el Instituto Guelph de Estudios del Desarrollo. Antes de unirse a la Universidad de Guelph, fue profesora asistente de Sociología Global en la University of British Columbia Okanagan. Tiene experiencia de investigación en las áreas de desarrollo y conflicto, violencia política, grupos armados no estatales, globalización económica, movimientos agrarios y violencia de género. Es la investigadora principal del proyecto «Land violence, security and development» en Honduras, Guatemala y México, financiado por Social Sciences and Humanities Research Council of Canada (SSHRC). Anteriormente, dirigió dos proyectos financiados por SSHRC sobre violencia, despojo de tierras y violaciones de derechos humanos en América Central y México, donde realizó más de cien entrevistas y varios grupos focales. Es autora de dos libros: *Paramilitarism and neoliberalism: violent systems of capital accumulation in Colombia and beyond* (Pluto Press, 2014) y *Blood and capital: the paramilitarization of Colombia* (Ohio University Press, 2009); así como editora principal en *Paramilitary groups and the State under globalization: political violence, elites, and security* (Routledge, en prensa). Es preciso resaltar que en 2019 recibió el Early Investigator Award de la Asociación Canadiense de Sociología.

*Josémanuel Luna-Nemecio*, mexicano, es doctor en Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México y posdoctorante en la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Sus líneas

de investigación se centran en crítica de la economía política con énfasis en estudios sobre sustentabilidad y conflictos socioambientales. Dentro de sus últimas publicaciones se encuentran los artículos «Sustainability-based on socioformation and complex thought or Sustainable Social Development. Resources», «Environment and Sustainability» y «Cultura organizacional bajo el enfoque socioformativo: proyección de Instituciones de Educación Superior en México» (en coautoría con M.E. Calles-Santoyo); y el libro *Para pensar el desarrollo social sostenible: múltiples enfoques, un mismo objetivo*. Correo-e: josmaluna2@gmail.com

*Humberto Márquez Covarrubias*, mexicano, docente investigador de la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es doctor en Estudios del Desarrollo por la misma universidad. *Director de las revistas Estudios Críticos del Desarrollo y Observatorio del Desarrollo. Investigación, reflexión y análisis*. Forma parte del equipo de coordinadores del Seminario de Pensamiento Crítico y es integrante de la Red Internacional de Migración y Desarrollo y del Sistema Nacional de Investigadores. De manera individual y colectiva ha publicado textos académicos de diversos géneros sobre el capitalismo contemporáneo, la crisis, el desarrollo desigual, el trabajo, el Estado, la violencia, la migración, la universidad pública y la cuestión social, entre otros temas.

*Gerardo Otero*, mexicano, profesor de estudios internacionales en Simon Fraser University, en Vancouver, Canadá. Es presidente de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA, por sus siglas en inglés). En 2021 fue elegido miembro de la Academia II (Ciencias Sociales) de la Royal Society of Canada. Es autor de nueve libros, entre ellos destacan *¿Adiós al campesinado?*

Democracia y formación *política de las clases rurales en México* (Miguel Ángel Porrúa/Universidad Autónoma de Zacatecas, 2004) y *The neoliberal diet: healthy profits, unhealthy people* (University of Texas Press, 2018). Ha publicado más de cien artículos o capítulos académicos sobre economía política de la agricultura y la alimentación, la sociedad civil y el Estado en México y América Latina. Portal: <http://www.sfu.ca/people/otero.html>.

*Karen Spring*, canadiense, maestra en Salud Pública por la Universidad Simon Fraser en Burnaby, Canadá. Activista e investigadora de los derechos humanos y coordinadora de la Red de Solidaridad con Honduras. Su trabajo consiste en educar a los norteamericanos sobre los impactos de la política exterior de Estados Unidos y Canadá en Honduras y la región. En Honduras apoya a las organizaciones comunitarias que defienden sus recursos naturales y su territorio contra la minería, las represas hidroeléctricas, el turismo y otros proyectos de «desarrollo» a gran escala. Es pertinente mencionar que su trabajo se ha centrado en el impacto de la privatización en los servicios del sector público y el papel de la militarización y las políticas de seguridad exterior en los derechos humanos. Ha escrito varios artículos e informes sobre temas de derechos humanos, incluido «Mining in impunity: coerced negotiations and forced displacement by Aura Minerals in Western Honduras» y es presentadora del podcast *Honduras Now* ([hondurasnow.org](http://hondurasnow.org)). Asimismo, ha testificado ante comités parlamentarios canadienses sobre derechos humanos en Honduras y tiene blogs en [aquiabajo.com](http://aquiabajo.com). Por último, ha publicado en *Huffington Post* y, junto con Sandra Cuffe, ha sido coautora de artículos para *Alternet*, *Truthout* y *Upside Down World*.

*Ricardo Vega Ruiz*, mexicano, candidato a doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctorante en Estudios del Desarrollo por la Universidad Autónoma de Zacatecas y profesor en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Sus líneas de investigación son la mercantilización de la naturaleza en los mecanismos de desarrollo limpio y el neodesarrollo y las nuevas formas de despojo y mercantilización en América Latina. Su publicaciones recientes son: «De la acumulación originaria a la acumulación terminal. Desposesión y mercantilización en los proyectos redd+» (2020) y «Mercados de emisiones, cambio climático y la transformación social de la atmósfera» (2020).



## Normas para la recepción de originales

1. *Estudios Críticos del Desarrollo* es una revista semestral de investigación científica arbitrada y publicada por la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo (UAED) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).

2. Los trabajos deberán ser inéditos y sus autores se comprometen a no someterlos simultáneamente a la consideración de otras publicaciones. Deberán ser resultado o avance de investigaciones originales de alto nivel, enmarcados en las Ciencias Sociales y las Humanidades, enfocados en la problemática y las alternativas del desarrollo. Pueden enviarse trabajos en español y en inglés; los cuales serán publicados en esos idiomas. Los autores conceden su autorización para que sus artículos sean difundidos a través de medios impresos y electrónicos por la UAED-UAZ.

3. Los autores deberán remitir los originales en formato compatible con los programas estándares de procesamiento de textos (Word) en tamaño carta, a doble espacio y por una sola cara, con tamaño de letra de 12 puntos en fuente Times New Roman.

4. Considerando que una cuartilla tiene 27 renglones y entre 60 y 64 caracteres con espacios e interlineado doble, los trabajos destinados a las secciones «Artículos» y «Debate» tendrán una extensión de entre 20 y 25 cuartillas; y las colaboraciones para «Reseña» entre 3 y 5.

5. Los trabajos deberán acompañarse de los siguientes datos, con una extensión no mayor de diez líneas: nombre completo del autor o los autores, nacionalidad, máximo nivel de estudios alcanzado, institución, centro de adscripción y línea de investigación, cargo que desempeña, número telefónico, dirección postal, dirección electrónica, dos o tres referencias bibliográficas de las publicaciones recientes o relevantes y otra información de interés académico.

6. Anexo al artículo, deberá enviarse un resumen de 150 palabras (o diez renglones) en el idioma en que esté escrito y cinco palabras clave, que faciliten su inclusión en los índices y bases de datos bibliográficos. *Estudios Críticos del Desarrollo* traducirá, en su caso, el resumen al inglés y utilizará esa síntesis para su difusión en el portal de internet de la UAED.

7. Los cuadros, los mapas y las gráficas deberán presentarse en formato Excel con claridad y precisión; invariablemente deberán incluir la fuente o el origen de procedencia, y en el texto deberá indicarse su colocación exacta.

8. Las notas se presentarán a pie de página y deberán estar escritas a renglón corrido (a un espacio) y numeración corrida (progresiva), e incluirse al pie de la página correspondiente. Las llamadas deberán ser numéricas. Las citas deberán insertarse en el texto abriendo un paréntesis con el apellido del autor, el año de la publicación y la página.

9. Para siglas, acrónimos o abreviaturas, la primera vez que se usen deberá escribirse el nombre completo o desatado; luego, entre paréntesis, la forma que se utilizará con posterioridad. Ejemplos: Banco Mundial (BM), Organización de las Naciones Unidas (ONU), producto interno bruto (PIB).

10. Los textos originales podrán entregarse en la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo o enviarse por correo a la siguiente dirección:

Unidad Académica de Estudios del Desarrollo, campus Universitario II, avenida Preparatoria sin número, fraccionamiento Progreso, 98065, Zacatecas, Zacatecas, México. También podrán enviarse por correo electrónico a la dirección: revista@estudiosdeldesarrollo.net

11. Los originales serán dictaminados por evaluadores anónimos seleccionados entre expertos del tema tratado por el artículo. En razón de lo cual los nombres de los autores u otra forma de identificación sólo deberá figurar en la página inicial.

12. Los dictámenes serán comunicados a los autores en un plazo no mayor a 60 días después de la recepción del artículo. El principio de confidencialidad será la guía.

13. Las colaboraciones aceptadas serán sometidas a un proceso de corrección de estilo y su publicación estará sujeta a la disponibilidad de espacio en cada número. *Estudios Críticos del Desarrollo* se reserva el derecho de realizar los cambios editoriales que considere pertinentes.

14. En ningún caso se devolverán originales.

## Editorial

Cuello de botella en el capital global:  
pandemia, crisis inducida y reconversión capitalista

*Humberto Márquez Covarrubias*

## Artículos

Antinomias de la modernidad capitalista  
en los albores del siglo XXI

*Francisco Javier Caballero Anguiano | Raúl Delgado Wise*

Dieta neoliberal: ¿cuestión cultural o económica?

*Gerardo Otero*

Prácticas materiales de cuidado de la agrobiodiversidad  
como marco simbólico para la gobernanza ambiental  
en el sur de Tolima, Colombia

*Megan Dwyer Baumann*

Conflictos por el agua en Morelos: el caso del Proyecto  
Integral Morelos y la destrucción del sistema hídrico estatal

*Josemanuel Luna-Nemecio*

Violencia paramilitar en sectores económicos clave  
en Honduras: el brazo violento del «desarrollo»

*Jasmin Hristov | Karen Spring*

## Debate

Las cuatro tesis centrales del neodesarrollismo.  
Una crítica a sus supuestos

*Ricardo Vega Ruíz*

Mutaciones en la economía política mundial:  
pandemia, capitalización y estatalismo

*Humberto Márquez Covarrubias*